

Enero/Marzo
2005

5



fundación para el análisis y los estudios sociales

JAVIER RUPÉREZ

La ONU contra el terrorismo

HORACIO VÁZQUEZ-RIAL

Iberoamérica y las izquierdas

PHILIPPE NEMO

Las dos Repúblicas francesas

RICKARD SANDELL

La demografía de nuestros vecinos

JON JUARISTI

Cervantes ante los particularismos españoles

ARCADI ESPADA

Un gobierno obsceno

SANTIAGO GONZÁLEZ

Esto no es plan

ANTXÓN SARASQUETA

El proyecto de la izquierda para España

RAFAEL L. BARDAJÍ

El momento «neocon» en EE.UU.

RAÚL RIVERO

STANLEY G. PAYNE

JOSÉ MARÍA LASSALLE

MIQUEL PORTA PERALES

JAIME GARCÍA-LEGAZ

CUADERNOS de pensamiento político



12 euros

Cuadernos de pensamiento político



fundación para el análisis y los estudios sociales

Guatemala
de pensamiento político

1962

Índice

- 5 **Nota editorial**
- 9 PHILIPPE NEMO
Las dos Repúblicas francesas
- 39 RICKARD SANDELL
La demografía de nuestros vecinos: ¿una preocupación geoestratégica?
- 65 JAVIER RUPÉREZ
Las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo. Primer balance
- 79 JAIME GARCÍA-LEGAZ
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: un error histórico
- 97 HORACIO VÁZQUEZ-RIAL
La imagen de Iberoamérica en las izquierdas europeas
- 109 JON JUARISTI
Cervantes ante los particularismos españoles
- 117 RAFAEL L. BARDAJÍ
El momento neoconservador en los EE.UU.
- 125 ARCADI ESPADA
Un gobierno obscuro
- 135 SANTIAGO GONZÁLEZ
Esto no es plan
- 147 ANTXÓN SARASQUETA
El proyecto de la izquierda para España
- 167 JOSÉ MARÍA LASSALLE
El hilo de la libertad
- 179 MIQUEL PORTA PERALES
La ciutat del bé. Un balanç del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
- 187 STANLEY G. PAYNE
1934: Comienza la Guerra Civil. En torno al libro de Pío Moa
- 193 RAÚL RIVERO
Gritos tras las rejas. Amor punto final

RESEÑAS

- 209 DIEGO VALVERDE VILLENA: **Los dictadores del pensamiento. (Les dictateurs á penser. Et autres donneurs de Leçons).** (Denis Jeambar)
- 211 XAVIER PERICAY: **La lección de un inglés. (Por un futuro imperfecto)** (Valentí Puig)
- 214 JESÚS LAÍNIZ: **¿Derecho de autodeterminación? Sobre el pretendido derecho de secesión del Pueblo Vasco.** (Santiago Abascal Conde)
- 217 JOSÉ MANUEL DE TORRES: **Los nuevos clérigos** (Enrique de Diego)
- 220 MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO: **Terrorismo y democracia tras el 11-M** (Eduarne Uriarte)
- 223 JAVIER ZARZALEJOS: **El islamismo contra el islam. Las claves para entender el terrorismo yihadista.** (Gustavo de Arístegui)

Cuadernos de pensamiento político



fundación para el análisis y los estudios sociales

EDITA:

FAES. FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES

PATRONATO:

Presidente: JOSÉ MARÍA AZNAR

Vicepresidente: ÁNGEL ACEBES

Vocales:

ESPERANZA AGUIRRE	ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS	EUGENIO NASARRE
CARLOS ARAGONÉS	MARCELINO OREJA
JAVIER ARENAS	ANA PALACIO
RAFAEL ARIAS-SALGADO	LOYOLA DE PALACIO
JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO	ANA PASTOR
MIGUEL BOYER	JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA
JAIME IGNACIO DEL BURGO	JOSEP PIQUÉ
PÍO CABANILLAS	MARIANO RAJOY
PILAR DEL CASTILLO	RODRIGO RATO
GABRIEL CISNEROS	CARLOS ROBLES PIQUER
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS	JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
GABRIEL ELORRIAGA	LUISA FERNANDA RUDÍ
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY	JAVIER RUPÉREZ
ANTONIO FONTÁN	SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
MANUEL FRAGA	ALFREDO TÍMERMANS
GERARDO GALEOTE	ISABEL TOCINO
LUIS DE GRANDES	BAUDILIO TOMÉ
JUAN JOSÉ LUCAS	FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
RODOLFO MARTÍN VILLA	JUAN VELARDE
ANA MATO	ALEJO VIDAL-QUADRAS
ABEL MATUTES	CELIA VILLALOBOS
JAIME MAYOR OREJA	EDUARDO ZAPLANA
MERCEDES DE LA MERCED	JAVIER ZARZALEJOS
JORGE MORAGAS	

Secretario general: JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY

Director: JAVIER ZARZALEJOS

Redacción: MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO
JOSÉ MANUEL DE TORRES

PUBLICIDAD, ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPTORES

c/ Juan Bravo, 3-C, 7ª planta. 28006 MADRID

Tel.: 91 576 68 57 • Fax: 91 575 46 95

www.fundacionfaes.es • cuadernos@fundacionfaes.org

Distribución: COMERCIAL ATHENEUM, S.A. Rufino González, 26. 28010 Madrid

Producción, maquetación e impresión: EBCOMP, S.A. • Diseño gráfico: raro

ISSN: 1696-8441 • Depósito Legal: M-45040-2003

Cuadernos de pensamiento político
no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores



ESTA REVISTA ES MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN DE REVISTAS
CULTURALES DE ESPAÑA

NOTA EDITORIAL

La publicación del número 5 de *Cuadernos de Pensamiento Político* de la Fundación FAES coincide en el tiempo con un momento que se presta a hacer balance. A hacerlo para establecer el efecto que han tenido, están teniendo o pueden llegar a tener iniciativas y proyectos políticos ideados y gestionados por la izquierda y por los partidos nacionalistas, y también para contrastarlos con los que, dentro y fuera de España, son patrocinados por la derecha liberal.

El Plan Ibarretxe ha sido el centro de la legislatura que ahora termina en el País Vasco. Un plan cuya sorprendente gestación y cuya aprobación parlamentaria permiten comprobar que lejos de constituir un proyecto para la convivencia en el País Vasco, es realmente un acto de confrontación y de exclusión impulsado por ETA, un paso más en el largo camino que han seguido quienes saben que el Estatuto de Autonomía permite la vida libre y democrática y precisamente por eso pretenden su voladura; otra dura prueba para quienes, por lo mismo, tratan de preservarlo. Como afirma Santiago González en *Esto no es plan*, sus promotores no han logrado obtener el apoyo de ninguno de los sectores o partidos a los que pretendían atraerse, y, sin embargo, continúan reclamando para él la consideración de proyecto común del conjunto de la sociedad vasca, a la que una vez más identifican con el dogma nacionalista.

Un dogma que parece haberse enraizado con fuerza en la sociedad catalana. Más de un año después de la victoria del PSC y de la formación del tripartito, el gobierno catalán no sólo no ha sabido descargarse del peso de la herencia pujolista sino que parece dispuesto a preservarlo y aun a fortalecerlo. Lo que constituye una perversión del proyecto originario de la izquierda, que parece dispuesta a abrazar la retórica y la práctica nacionalistas como medio para paliar su vacío ideológico. Es un escenario decepcionante para quienes esperaban de la derrota electoral de CiU una transformación de las políticas y de la política catalanas. Y

la confirmación de que la pretendida reforma estatutaria no es más que una manera de disfrazar la insolvencia del gobierno tripartito y de dar la impresión de que se encamina hacia alguna parte lo que está parado por la falta de un proyecto, más allá del chantaje al Gobierno de Zapatero que de cuando en cuando escenifica descaradamente ERC. En definitiva, un gobierno que Arcadi Espada define como *obsceno*, apartado de lo que hace de la política una actividad digna y noble. Degeneración que, como afirma Miquel Porta Perales en *La ciutat del bé. Un balanç del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004*, permite que la izquierda «progresista» eleve el estereotipo –que no pregunta ni responde, y que alimenta la autosatisfacción del público– a categoría de pensamiento, además pretendiendo que sea indiscutible.

El caso catalán es una muestra más de lo que parece ser hoy un proyecto compartido por el conjunto de la izquierda, el que explica Antxón Sarasqueta en *El proyecto de la izquierda para España*, fundamentado en la consolidación de su dominio ideológico sobre la opinión pública y en la utilización táctica de cualquier movimiento, organización o idea que contenga alguna propiedad contraria al concepto de España como territorio de libertad personal y de defensa de los valores y los comportamientos que definen a las democracias liberales. Un proyecto en negativo, de demolición; una coalición anti-PP y anti-constitucional, o antisistema, si se prefiere. De cuyo impacto sobre la solidez y la cohesión del sistema político español podemos comenzar a hacernos una idea apenas unos meses después de haberse iniciado la legislatura, inevitablemente sometida a la voluntad y al capricho de quienes han declarado su deseo de hacer desaparecer las instituciones cuyo gobierno ahora ejercen.

Desaparición que lo sería de lo que ya era evidente para Miguel de Cervantes: la existencia de España como concepto político. Porque, como nos recuerda Jon Juaristi en *Cervantes ante los particularismos españoles*, España no es un invento de hace unas horas, y tampoco el mantener una idea de su futuro deseable. El cuarto centenario de la publicación de la primera parte del *Quijote* no es sólo la ocasión para recordar y celebrar una obra maestra universal, sino también para constatar que el preliberalismo cervantino concebía una España unida que sostenía, no estorbaba, la percepción de lo diverso.

Diversidad y pluralidad que contrastan con el apego a lo particular que parece crecer entre nosotros. No sólo particularismo territorial o ideológico, sino particularismo como modo de mirar el mundo: la selección interesada de lo conveniente para hacer de ello un uso particular, y el des-

precio por el resto. Ya sean ideas, textos legales, datos históricos o cualquier otro elemento de la vida social y política, el particularista secciona y mutila la verdad hasta adaptarla para su uso privado. Esa enfermedad del particularismo lleva ahora a muchos a «revisar» nuestra Historia, y especialmente los hechos de la Guerra Civil de 1936-1939, con el ánimo de hallar en ellos el medio para justificar la impugnación de la Transición de los años setenta. Que se trata de un afán particularista y apartado de cualquier intento de perfeccionar nuestro conocimiento de la verdad lo acredita el rechazo que han suscitado las obras de Pío Moa, y las «razones» que lo han justificado. Razones cuya debilidad denuncia Stanley G. Payne en lo que constituye, en realidad, una denuncia de algunos vicios de nuestro sistema universitario y de nuestra «elite» intelectual.

Y no sólo de la española, sino también de la europea y de la iberoamericana, que, como afirma Horacio Vázquez-Rial en *Iberoamérica y las izquierdas*, comparten una deriva hacia el movimiento antiglobalización y populista, muy alejado ya de los objetivos clásicos de la izquierda europea. Pero hondamente arraigada en algunos de los principales Estados europeos, que mediante la quiebra del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el abandono de la Agenda de Lisboa pretenden arrumbar los criterios que permitirían la modernización económica de la Unión Europea y rinden culto a algunos de los tópicos que la han ido llevando a perder el paso de las economías más competitivas y desarrolladas, como lo explica Jaime García-Legaz en *La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: un error histórico*. Y esto pese a la evidencia de que algunos de los gobiernos que promueven esa quiebra y la elaboración de un nuevo pacto según los erróneos criterios del Plan Almunia, se encuentran, teóricamente, alejados de la izquierda.

Se trata, en ocasiones, de una mentalidad «estatalista», paternal, que somete a la sociedad civil al dominio del Estado, independientemente del color del partido que se encuentra en el gobierno. Es, según nos explica Philippe Nemo en *Las dos repúblicas francesas* –artículo que tendrá continuación en el número 6 de *Cuadernos*–, el caso del republicanismo francés desde 1958, y, especialmente, desde 1981, en el que las virtudes del republicanismo liberal, que ha predominado en Francia desde 1789, han sido ocultadas paulatinamente hasta verse reducidas en la actualidad a una presencia casi testimonial, aunque sostenida por pensadores y políticos excepcionales.

Ese tipo de pensamiento inhabilita a la izquierda para entender el valor histórico de la «revolución de la libertad» que supo derrumbar el Muro de Berlín y lo que se escondía tras él, ahora hace quince años. Una revolución

que preservó para Europa y para el mundo *El hilo de la libertad*, extremadamente delicado y fino, pero que permite tejer el lienzo sobre el que se pintan las obras más admirables de la humanidad, según nos explica José María Lassalle. Y la inhabilita también para comprender la relevancia histórica de la vigencia del pensamiento neoconservador en los Estados Unidos y en el resto del mundo, especialmente después de la victoria electoral de G. W. Bush en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. Ese momento neoconservador que describe Rafael L. Bardají, es en realidad un momento para la esperanza, especialmente cuando se proyecta sobre las sociedades islámicas del norte de África y de Oriente Medio, cuyo futuro demográfico más inmediato, descrito con detalle por R. Sandell en *La demografía de nuestros vecinos*, exige con urgencia que se proceda a su promoción económica y social, y que se rechace cualquier intento de preservar y perpetuar las lamentables condiciones existentes en ellas, de las que la izquierda parece ser valedora, quizás sólo porque el impulso para su transformación proviene de Norteamérica. El multilateralismo como medio para encarar la amenaza del terrorismo islamista y para impulsar el desarrollo de las sociedades islámicas no ha rendido hasta ahora la utilidad que se esperaba de él, probablemente porque, como nos recuerda Javier Rupérez en *La ONU contra el terrorismo*, las organizaciones multilaterales son eficientes en la medida en que sus Estados miembros lo desean, y no todos los Estados presentes en la ONU se han mostrado beligerantes contra el terrorismo, contra el totalitarismo, contra la pobreza y contra el subdesarrollo. Sobre todo algunos de los que con más ardor son patrocinados por la izquierda. El caso de la dictadura cubana, antonomásticamente representado por Raúl Rivero, es un ejemplo claro de esta actitud. En *Gritos tras las rejas. Amor punto final*, Luis Alberto de Cuenca ha prologado y seleccionado algunos de los poemas que el escritor cubano hizo llegar desde su celda a José María Aznar.

El número 5 de *Cuadernos de Pensamiento Político* ofrece, además de los estudios mencionados, la reseña de los siguientes libros: *Los dictadores del pensamiento*, de Denis Jeambar, reseñado por Diego Valverde Villena; *Por un futuro imperfecto*, de Valentí Puig, del que da noticia Xavier Pericay; *¿Derecho de autodeterminación? Sobre el pretendido derecho de secesión del Pueblo Vasco*, de Santiago Abascal Conde, a cargo de Jesús Laínz; *Los nuevos clérigos*, de Enrique de Diego, reseñado por José Manuel de Torres; *El islamismo contra el Islam*, de Gustavo de Arístegui, por Francisco Javier Zarzalejos; y *Terrorismo y democracia tras el 11-M*, de Edurne Uriarte, por Miguel Ángel Quintanilla Navarro.

LAS DOS REPÚBLICAS FRANCESAS

Si el pueblo francés siente afinidad por la «República» no es, en su mayoría, por la República jacobina, por la que casi nunca ha estado gobernado. La República con la que se identifican los franceses es el régimen moderado al que se acostumbraron con la Tercera y la Cuarta y la Quinta Repúblicas (como mínimo hasta 1981), regímenes que respetaban el sufragio universal y las libertades individuales, es decir, regímenes de democracia liberal. Ésa es la verdadera historia de la República en Francia.

La noción francesa de «República» es fundamentalmente ambigua. Por una parte, designa una fórmula constitucional clásica: un régimen democrático liberal similar al de otras grandes naciones occidentales, ya sea la república americana o suiza o las monarquías constitucionales española, inglesa, belga, holandesa o escandinavas. Por otra, designa, más allá de la forma constitucional, un proyecto de sociedad esencial; un modelo estatal-socialista que se diferencia considerablemente de las democracias liberales, que es incluso opuesto a ellas. Ese es el sentido que dan en Francia al término «República» tanto los gaullistas como los social-comunistas.

A partir de 1981, la propaganda de izquierdas de los medios de comunicación franceses ha privilegiado sistemáticamente el segundo sentido. Se ha sugerido que la República francesa siempre había sido –o al menos había querido ser– una «democracia social» en las antípodas de los regímenes de los Estados Unidos o de Inglaterra, estigmatizados como «ultra-liberales». Al aumentar sin tregua los impues-

Philippe Nemo es Profesor de la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP-EAP), Director Científico del Centro de Investigación de Filosofía de la Economía.

tos obligatorios y el peso de la función pública, al subordinar cada vez más las iniciativas individuales, ya sean económicas, sociales o intelectuales, al despotismo de una Administración tentacular –hasta el punto de que Francia parece hoy en día el país más «comunista» del mundo occidental–, los socialistas franceses daban a entender que no innovaban, sino que se inscribían en la tradición republicana francesa más antigua y auténtica.

La cuestión reside en averiguar si el estatismo francés de estas últimas décadas se corresponde efectivamente con antiguos atavismos –el absolutismo, la centralización administrativa– con lo que nos podríamos remontar a Napoleón, a los Jacobinos, a Luis XIV y, por qué no, a Philippe le Bel. En este caso sería inútil intentar corregir esta cultura nacional multiseccular. O se trata más bien de un fenómeno reciente, accidental y superficial y, por lo tanto, perfectamente reversible, del que se ha realizado un diagnóstico inexacto con el que queremos romper. El objetivo del presente artículo es saber cuál de estas dos hipótesis es la más correcta basándonos en un análisis histórico profundo.

I. EL «COMETIDO ORIGINAL» DE LA REPÚBLICA EN FRANCIA

Es cierto que el origen de la República francesa no es en absoluto liberal. No es el fruto de la Revolución de 1789, sino de un accidente que ocurrió durante el transcurso de la misma. La Revolución francesa, expresión de las ideas del Siglo de las Luces, data de 1789. La República data del 20 de septiembre de 1792 y toma su forma definitiva con la expulsión de los Girondinos el 2 de junio de 1793. Es decir, tiene su origen en la revuelta del 10 de agosto y las masacres de septiembre, y se identifica con el «Régimen del Terror». Por lo tanto, podemos decir que la Primera República francesa, lejos de prolongar y finalizar la obra constitucional y legislativa de los hombres del 89, acaba de forma contundente con esta obra. Es cierto que la Primera República sobrevivió unos cuantos años con Termidor, el Directorio y el Consulado, pero estos regímenes de transición apenas han dejado huella en la memoria colectiva. De modo que para muchos franceses, durante un siglo como mínimo, el concepto de «República» seguirá relacionado con el régimen de la violencia, de la arbitrarie-

dad y de la expoliación, así como con persecuciones antirreligiosas sin parangón en otros países europeos.

Debido a esta desagradable singularidad, los demócratas liberales franceses siempre tendrán dificultades para indentificarse con la República. Ese fue el drama de Léon Gambetta y de Jules Ferry, por ejemplo¹. Cuando, en los años 1870-1879, quisieron fundar, para sustituir al Segundo Imperio caído en Sedán, una República coherente con los principios demócratas liberales y que fuera más o menos similar a la República americana (que tomaron como referencia), constataron que tenían enfrente tanto a la derecha monárquica como a la izquierda socialista. Sin embargo, si la derecha monárquica no ponía en tela de juicio, y con razón, ni el nombre ni los símbolos de la República, la izquierda radical y socialista hacía suya la tradición republicana jacobina. De modo que, en Francia, liberales y socialistas han sido rivales desde el principio en reivindicar la noción y el término de «República». Unos y otros invocaban una legitimidad revolucionaria. Para unos era la del 89 y para los otros la del 93; un malentendido duradero, porque, al fin y al cabo, ¡todavía no se ha resuelto en 2004!

Hay una cosa clara: si el pueblo francés siente afinidad por la «República» no es, en su mayoría, por la República jacobina, por la que jamás ha estado gobernado (con la excepción de los regímenes enormemente efímeros del Terror de 1793-1794, de la Comuna de París en 1871, los primeros meses del Frente Popular en 1936, los primeros meses de la Liberación gaullo-comunista en 1944 y los tres primeros años de la Unión de la izquierda en 1981, regímenes que han dejado a los franceses recuerdos vergonzantes, desde distintos puntos de vista).

La República con la que se identifican los franceses es el régimen moderado al que se acostumbraron con la Tercera, la Cuarta y la Quinta Repúblicas (como mínimo hasta 1981), regímenes que respetaban el sufragio universal y las libertades individuales, es decir, regímenes de *democracia liberal*. Lo demostraremos repasando la verdadera historia de la República en Francia.

¹ Ver el artículo de Odile Rudelle en un libro al que nos referiremos más de una vez, BERSTEIN y RUDELLE, 1992, 91 *sq.*

II. LA CONSTITUCIÓN DE 1875, OBRA DE LOS ORLEANISTAS

La República se instauró definitivamente por las leyes constitucionales de 1875. Sin embargo, hay que señalar que estas leyes las elaboraron principalmente *orleanistas* partidarios de una democracia liberal similar a las que existían en Inglaterra y Estados Unidos². Los republicanos llamados «oportunistas» las aceptaron de mala gana y otros republicanos fieles a la tradición jacobina las rechazaron durante mucho tiempo.

La Constitución de 1875

Recordemos que los orleanistas gobiernan de facto el país después del Imperio liberal, es decir, después del mandato de Émile Ollivier de 1867. Tras el 4 de septiembre de 1870, sigue en el poder un orleanista, Adolphe Thiers, antiguo primer ministro de Luis Felipe. Pero no tarda en quedarse solo, ya que el republicano Léon Gambetta es eliminado tras las elecciones del 8 de febrero de 1871. Tras la caída de Thiers en 1873, se elige al mariscal Mac Mahon Presidente de la República. Confía el gobierno al duque Albert de Broglie, hijo del duque Victor de Broglie, Primer Ministro de Luis Felipe en 1835-36³. Es cierto que este gobierno también cae el 16 de mayo de 1874 a causa de una conjura de extremistas formada por legitimistas, bonapartistas y republicanos. Sin embargo, el gobierno que se forma entonces, dirigido por el general de Cissey, sigue estando dominado por los orleanistas, los duques de Broglie, Audiffret-Pasquier y Decazes, y se sostiene gracias a un grupo parlamentario cuyos líderes son Léonce de Lavergne, un economista liberal, y Édouard Laboulaye, el célebre teórico del libe-

² Los «orleanistas» eran los adeptos de la Monarquía de Julio, y para ellos el rey era Luis Felipe de Orleans. Este «rey burgués» expulsa al rey tradicionalista Carlos X y está a favor de la economía de mercado y del parlamentarismo, y por lo tanto el orleanismo se erige como una de las grandes tradiciones liberales francesas. Recordemos que las tradiciones liberales anteriores son el movimiento de la Ilustración, los Fisiócratas y la escuela de Turgot, que se prolongan hasta las épocas revolucionaria y napoleónica, con el grupo de los «Ideólogos» y con la «escuela de Coppet» (Benjamin Constant, Mme. de Staël). Los hombres de la tradición orleanista estarán presentes en la clase dirigente de la Segunda República, y, después, en el Segundo Imperio liberal, al igual que a principios y a lo largo de la Tercera República, como veremos. En la Cuarta y la Quinta Repúblicas, todavía tendrán sucesores (que quizás ya habían olvidado sus orígenes) entre los elementos liberales de la derecha parlamentaria.

³ También hay ministros legitimistas, es decir, partidarios del conde de Chambord, nieto de Carlos X, pero son minoría.

ralismo constitucional⁴. Por lo tanto, es este grupo de mentes privilegiadas el que va a elaborar la Constitución republicana de 1875⁵.

No se trata exactamente de una Constitución, sino de un conjunto de tres «leyes constitucionales» (ley sobre el Senado del 24 de febrero de 1875, ley sobre la organización de los poderes públicos del 25 de febrero y ley sobre las relaciones de los poderes públicos del 16 de julio). Las tres leyes fueron aprobadas gracias a la unión de los orleanistas, los republicanos y el «centro izquierda» de Thiers.

Se trató de un compromiso. En realidad, Gambetta convenció a los republicanos para que aceptaran el diseño orleanista. Y resulta evidente si examinamos una a una las instituciones más importantes que se fundaron. En esencia, se trata de instituciones democrático-liberales que pueden inscribirse en el marco de un régimen republicano como el de los EE.UU. o de un régimen de monarquía parlamentaria como el de Inglaterra, pero que no se corresponden en absoluto con las instituciones de la Primera República jacobina⁶.

- *La presidencia de la república* es contraria a las tradiciones jacobinas, que siempre han querido un ejecutivo colegiado. El Presidente de la nueva Tercera República, al igual que el monarca

⁴ Édouard Laboulaye (1811-1883), jurista, catedrático del Collège de France y miembro del Instituto, es el editor de las obras de Benjamin Constant y el principal especialista francés en derecho constitucional americano. Participó en el «tripartito» de Émile Ollivier bajo el Segundo Imperio. Sus obras (*Histoire de la propriété foncière*, 1837; *Recherches sur la condition civile et politique des femmes*, 1843; *Essai sur les lois criminelles des Romains*, 1845; *Paris en Amérique*, 1863; *Histoire politique des États-Unis*, 1863; *Le parti libéral, son programme et son avenir*, 1863; *L'État et ses limites*, 1863; *La liberté antique et la liberté moderne*, 1863; *Questions constitutionnelles*, 1872) contienen la exposición doctrinal y la justificación detallada de las instituciones que va a ayudar a instaurar en 1875. La naturaleza anti-jacobina, liberal y defensora de la economía de mercado de estas instituciones se presenta sin ambigüedades.

⁵ Sabemos que la Cámara de los diputados, compuesta en su mayoría por monárquicos, quería restaurar la monarquía. Pero los monárquicos estaban divididos entre legitimistas y orleanistas. Unos y otros estaban acechados por una fuerte minoría republicana, así como por un puñado de bonapartistas, que se aprovechaban de sus divisiones. En este contexto se aprobó el 30 de enero de 1875, por mayoría (353 contra 352), la famosa «enmienda Wallon», que permite instaurar un marco constitucional republicano que iba a resultar definitivo: «El Senado y la Cámara de los diputados reunidos en Asamblea nacional eligen al Presidente de la República por mayoría absoluta. Su mandato dura siete años; es reelegible». El personaje de Wallon, hoy en día menos conocido que su enmienda, merece que lo ubiquemos ideológicamente. Henri-Alexandre Wallon (1812-1904) fue catedrático de historia en la Sorbona. Era un católico moderado, autor de libros y títulos significativos: *L'Esclavage dans les colonies*, 1847; *La Terreur*, 1873; *Du monothéisme chez les races sémitiques*, 1875; *Saint-Louis et son temps*, 1875; *Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris*, 1880-1882. Fue diputado de la Asamblea legislativa de 1849 a 1850. Será ministro de Instrucción Pública y Cultos de 1875 a 1876. Junto con Laboulaye, conseguirá que se adopte la ley sobre la libertad de la enseñanza superior en 1875. Como vemos, el fundador de la República no era precisamente un jacobino revolucionario.

⁶ Para lo que viene a continuación, me inspiro en MAYEUR, 1973, 33 sq.

constitucional ensalzado por Benjamin Constant, está exento de responsabilidad, elegido por un largo periodo, tiene derecho de gracia, es el jefe del ejército, concluye los tratados, tiene la iniciativa legislativa y puede disolver la Cámara, cuyas sesiones puede prolongar o interrumpir (si no se trata de una sesión legal de cinco meses). Nombra a los ministros.

- El *Senado* se encarga de servir de contrapeso a la Cámara de los diputados, que recuerda demasiado a la pesadilla de las asambleas revolucionarias⁷. Su composición tiene por objetivo representar a una Francia tradicional estable: un tercio se renueva cada tres años; una cuarta parte de los senadores es inamovible. Los senadores deben tener 40 años como mínimo; el sistema electoral es indirecto e implica en particular a notables rurales, «bastión de las ideas conservadoras» (Serge Berstein).
- El Presidente de la República no puede firmar solo las leyes, hace falta la firma de un ministro. Por lo tanto, existe una *responsabilidad colegiada del gobierno* ante las cámaras. Es el parlamentarismo tal y como se practica en Inglaterra y hacia el que se encamina Francia entre principios de la Restauración y finales de la Monarquía de Julio, para retomarlo bajo el Imperio liberal. Evidentemente, nos encontramos en las antípodas de la «dictadura de salvación pública» de los Jacobinos.
- El principio del *derecho de disolución* marca la diferencia con un régimen asambleario (nadie había tenido semejante poder constitucional bajo la Primera República).
- Un detalle poco conocido pero muy importante: el artículo 4 de la ley del 25 de febrero especifica que es el Presidente el que nombra a los consejeros de Estado, mientras que una ley de 1872 (aprobada contra la voluntad de Thiers) establecía que el nombramiento debía votarse en la Asamblea. Por lo tanto, «el nuevo régimen no modificaba la administración ni sus tradiciones, ni su jurisprudencia... la República parlamentaria conservaba el poder de la administración» (Mayeur, 1973, 35) es decir,

⁷ Además, no se habla de una «Asamblea nacional», término que evoca demasiados malos recuerdos, sino de «Cámara de los diputados». Y el Senado republicano recupera con toda naturalidad el lugar de las «cámaras altas» («Cámaras de Pares») que habían existido en todas las monarquías constitucionales francesas, en la Restauración y en la Monarquía de Julio.

una cierta *neutralidad*, una *despolitización* del aparato del Estado, totalmente contraria a la tradición jacobina y revolucionaria, como lo será en los regímenes totalitarios dominados por un Partido⁸.

- También está la cuestión del *sistema de escrutinio*. Los republicanos aspiran al escrutinio de lista (el que se había establecido en 1848 y que había abolido el Imperio⁹). Los «conservadores» prefieren el escrutinio uninominal, que favorece a los notables. Se eligió este último escrutinio.

Por lo tanto, la Constitución de 1875 es, como vemos, *una fórmula esencialmente orleanista*. Es una continuación de lo que se fue construyendo poco a poco desde 1815 bajo los sucesivos regímenes moderados (con la excepción de principios del Segundo Imperio) y dota a Francia de un régimen muy similar al de Inglaterra y los Estados Unidos.

«En esencia, las leyes constitucionales... no sólo incorporan las prácticas que nacieron bajo Thiers y Mac Mahon, sino el bagaje constitucional del liberalismo, 'el derecho común de los pueblos libres', según el ponente Laboulaye». (Mayeur, 1973, 34).

En efecto, si por «constitución» entendemos las reglas que rigen el funcionamiento de los poderes en el seno del Estado y las que fijan los vínculos de estos con la sociedad civil, la Constitución de 1875 no sólo es democrática, sino también liberal. El Estado no ostenta el po-

⁸ Pensemos en las imprecaciones que lanza Lenin en *El Estado y la revolución* contra las Administraciones demasiado independientes del poder del Partido y que, por consiguiente, hay que destruir cuando la revolución proletaria se hace con el poder. Cita a Marx y Engels, quienes precisamente han alabado la Comuna de París por suprimir la autonomía de la Administración. En efecto, bajo la Comuna, la asamblea revolucionaria podía criticar y destituir a los funcionarios en cualquier momento. Está claro que la Francia moderna iba en dirección opuesta. El Consejo de Estado, al que en sus orígenes Napoleón I dotó del poder de anular los actos de la Administración con el fin de forzarla a obedecer la voluntad del ejecutivo, iba a dar un giro a su jurisprudencia y a utilizar su poder de censura para defender las libertades de los funcionarios o de los ciudadanos privados contra la arbitrariedad del poder político. Más tarde, los socialistas y los comunistas sabrán dar la vuelta a estas disposiciones liberales en su propio beneficio, convirtiendo al funcionario en intocable y a la función pública sindicada en un «Estado dentro del Estado» que escapa a todo control democrático. Mientras tanto, no soportan la idea de que un gobierno «popular» no pueda nombrar o revocar a su voluntad a todos los funcionarios y que el derecho administrativo los proteja frente a la voluntad arbitraria de una eventual asamblea revolucionaria similar a las que existieron bajo la Primera República y bajo la Comuna.

⁹ Favorece a las minorías activas: por lo tanto, la extrema-izquierda lo prefiere.

der de violar la propiedad ni el resto de las libertades individuales. Es un Estado limitado. Sus promotores asumen que la sociedad civil se basta por sí misma. No tienen en cuenta lo que los socialistas franceses pretendían que fuera la «República» después de 1871, una especie de «casa común», una gran familia o un poder tutelar que se hace cargo de la vida de los ciudadanos, a los que trataría como menores de edad. Además, la Tercera República aumentará aún más las libertades de la sociedad civil frente al Estado, por ejemplo, a través de la ley de 1881 sobre la prensa o de la de 1901 sobre las asociaciones.

La concentración de los republicanos

Es en esta forma de Estado limitado en la que se concentran los republicanos moderados, es decir, el grupo de parlamentarios liderados por Gambetta y Ferry. Después de haber aprobado la enmienda Wallon, aprueban junto con los orleanistas las tres leyes constitucionales. Sólo los republicanos «intransigentes» rechazan con indignación esta fórmula que traiciona tan obviamente el jacobinismo y todas las tradiciones antiliberales de la Primera República.

Después de aprobar las leyes constitucionales, Mac Mahon sigue gobernando con los orleanistas. Recurre a hombres como Buffet, Dufaure, Léon Say o Agénor Bardoux, miembros de esas «dinastías burguesas» que, de régimen en régimen, se mantienen en el poder desde principios del siglo XIX. En ese sentido, la nueva República será una república primordialmente «burguesa», es decir, liberal¹⁰.

¹⁰ Es la conocida tesis de Emmanuel Beau de Loménie (1954). La demostración se torna aún más convincente, ya que el autor maldice el capitalismo y la democracia liberal. Constata con rabia que desde principios del siglo XIX hasta la Cuarta República, son siempre los burgueses y los demócratas liberales los que gobiernan el país, a pesar de las guerras, las revoluciones y los cambios de régimen. Estos cambios no son más que una fachada. Según el autor, el problema se remonta mucho más atrás, al Directorio. Incluso el poder de Bonaparte cónsul o emperador no ha sido más que una apariencia, son los antepasados de las dinastías burguesas los que, ya desde entonces, han ostentado el verdadero poder económico y social. Sus descendientes están sólidamente asentados en la Tercera y la Cuarta Repúblicas, lo que lamenta Beau de Loménie, pero nos muestra claramente que esas repúblicas no han sido ni socialistas ni estatistas. Ejemplos de estos «burgueses» cuya carrera demuestra la cuasi-continuidad ideológica que existió entre la Monarquía de Julio, la Segunda República, el Imperio Liberal y la Tercera República: *Jules Armand Stanislas Dufaure* (1798-1881), abogado, fue diputado liberal (1834), ministro de Obras Públicas bajo la Monarquía de Julio, en el gabinete Soult (1839-1840). Miembro de la Asamblea constituyente en 1848, es ministro de Interior con Cavaignac (octubre-diciembre 1848) y posteriormente, es reelegido por la Asamblea legislativa. Se retira de la vida política bajo el Imperio. Es ministro varias veces (de Justicia) o presidente del Consejo con Thiers y Mac Mahon; *Léon Say* (1826-1896) es descendiente de una ya extensa

El 16 de mayo de 1877

La situación política no tardará en volverse favorable para los republicanos. En efecto, las querellas religiosas se recrudecen. Mientras que los republicanos son anticlericales, los obispos quieren, en contra del *Risorgimento* italiano, restablecer el poder temporal del Papa. Jules Simon, republicano moderado que se ha convertido en presidente del Consejo, concede a los republicanos algunas medidas anticlericales, lo que provoca que Mac Mahon lo expulse. La Cámara se disuelve. Es lo que llamamos el «golpe de Estado» del 16 de mayo. Se convocan elecciones legislativas inmediatamente.

Y las gana el grupo de republicanos liderados por Gambetta. Pero resulta interesante ver los argumentos que ese partido ha esgrimido ante los electores. Los republicanos se presentaron ante la opinión pública como los «verdaderos conservadores». Adujeron que Mac Mahon, defensor del poder temporal del Papa, llevaría a Francia a la guerra con Italia, esperando que se produjera con Alemania. Por el contrario, se presentaron como los garantes de la paz y, por lo tanto, de la buena marcha y de la prosperidad de la economía. Retoman y hacen suya la famosa frase de Thiers: «La República será conservadora o no será».

Aspiraban a ser reconocidos como moderados, defensores del desarrollo económico en las estructuras liberales que ya existían, y se cuidaron muy bien de invocar el jacobinismo revolucionario, intervencionista en el ámbito doméstico y además promotor de guerras en el exterior.

De hecho, el nuevo gobierno que se forma después de las elecciones incluye a los mismos dirigentes orleanistas, Dufaure, Léon Say, Agénor Bardoux, Jean Casimir-Périer (otro heredero de una «dinastía burguesa»).

Por lo tanto, el 16 de mayo tendrá una consecuencia importante, duradera y para muchos lamentable, que provocará la caída en desuso del derecho de disolución de la Cámara por parte del Presidente de la

«dinastía burguesa». Es nieto del gran economista liberal *Jean-Baptiste Say*, sucesor intelectual de Turgot, uno de los líderes del grupo de los «Ideólogos» en la Revolución, padre del «industrialismo». El hijo de Jean-Baptiste, *Horace Émile Say* (1794-1860), economista como su padre, fue presidente de la Cámara de Comercio de París, fundador del *Journal des Économistes* («Biblia» de los liberales de la época) y del *Journal du Commerce*. Léon Say también será un economista liberal, pero será conocido principalmente por su carrera política: prefecto de la Seine en 1871, ministro de Economía de 1872-1873 y de 1875-1879.

República. De ahora en adelante, cuando un Presidente quiera ejercer ese derecho, pasará por ser un nostálgico del 16 de mayo, es decir, del autoritarismo, del cesarismo, del poder personal y del clericalismo. Ningún Presidente volverá a arriesgarse a ejercerlo. Esta desaparición del derecho de disolución hará de la Tercera República, –y la Cuarta será idéntica en ese sentido–, un régimen exclusivamente parlamentario y por ende, especialmente frágil¹¹.

La llegada al poder de los «oportunistas»

A lo largo de distintas elecciones parciales, los republicanos siguen avanzando hasta cosechar una victoria aplastante en las elecciones al Senado de enero de 1879. Tendrán la mayoría en las dos cámaras y podrán ejercer el poder en solitario. Pero serán los mismos republicanos que ganaron las elecciones después del 16 de mayo, es decir, los «conservadores».

Jules Grévy es elegido Presidente de la República por el congreso reunido en Versalles. Asimismo, se llevan a cabo gestos simbólicos: la *Marsellesa* se declara himno nacional, el 14 de julio fiesta nacional y se concede la amnistía a los comuneros. Pero, aparte de esos actos simbólicos, nada cambia en la estructura orleanista del régimen. Francia se ha instalado por mucho tiempo en la democracia liberal. Lo que toma forma en las nuevas instituciones republicanas es la filosofía li-

¹¹ Debido al 16 de mayo, cada vez que durante la Tercera o Cuarta Repúblicas se perfila un hombre fuerte que intenta superar la división de los partidos y dotar de una cierta eficacia a la maquinaria gubernamental, se le acusa de tirano y de pretender destruir la República. Por lo tanto, la mejor opción es elegir como Presidente de la República a meros comparsas o, cuanto menos, a «diplomáticos» (Jules Grévy, Sadi Carnot, Félix Faure, Émile Loubet, Armand Fallières...). Cuando un presidente quiera escapar de este papel secundario, será fulminado y obligado a dimitir. Casimir-Périer dimitirá al cabo de seis meses. Raymond Poincaré, al que Clémenceau decidió no dejar ningún margen de actuación, tuvo que abandonar el Elíseo y volver a ocupar el cargo de Presidente del Consejo para recuperar su influencia política. Alexandre Millerand también tuvo que dimitir después de la elección del Bloque de izquierdas en 1924. Sin embargo, desde el 16 de mayo, Jules Ferry fue consciente del problema que sufriría la República de forma recurrente. Había declarado que la República sólo podría triunfar si se dotaba de un ejecutivo fuerte. Se realizaron varios intentos en ese sentido, entre los que destaca el de Gaston Doumergue después de las insurrecciones de febrero de 1934, pero ninguna llegó a buen puerto. Este problema envenena la vida política del país. Aunque es cierto que los gobiernos puramente parlamentarios son frágiles en esencia (pueden ser eliminados en cualquier momento por la asamblea, mientras que ésta, aunque no refleje la opinión pública, disfruta de impunidad) y que esa fragilidad constituye un argumento de peso a favor de una revisión de la Constitución *en ese punto*, algunos iban a aprovecharse para reclamar una revisión *íntegra* de la Constitución. Aducirán de forma abusiva la inestabilidad de los gobiernos para favorecer la supresión de la democracia liberal instaurada en 1875 y establecer una Constitución de inspiración jacobina, cesarista o popular. Como veremos, será el caso de De Gaulle en 1958.

beral que estaba fraguándose en la evolución intelectual a lo largo de los tiempos modernos; especialmente en la época de la Ilustración y después por los antijacobinos de la Revolución, y en el siglo XIX por hombres como Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat o incluso, más recientemente, Anatole Prévost-Paradol o Édouard Laboulaye, críticos decididos de los primeros socialistas. Con la Tercera República en ciernes, 1789 triunfa, durante mucho tiempo, sobre 1793.

III. LA «TRADICIÓN REPUBLICANA» (1880-1930)

De 1875 a 1900 vamos a ser testigos de cómo los últimos republicanos reticentes apoyan estas instituciones y, por ende, sus valores democráticos liberales. ¿Por qué motivos?

En primer lugar, en los primeros años, se realizaron algunas enmiendas a la Constitución de Laboulaye que eliminaron sus últimos aspectos «monárquicos». Ahora, los gobiernos los dirige un Presidente del Consejo, magistratura que no estaba prevista en las leyes constitucionales, pero que se incorpora *de facto* a las instituciones republicanas. Se trata de un personaje poderoso pero no menos efímero en esencia, ya que no dispone de ninguna vía constitucional para erigirse en autócrata¹². Además, la revisión constitucional de 1884 acaba con los senadores inamovibles y modifica la composición del Senado en una dirección más democrática. Por último, se realizan varios cambios en el sistema de escrutinio. Estas limpiezas de la Constitución no ponen en tela de juicio la lógica demócrata liberal del régimen, sino al contrario.

Por otro lado, una serie de acontecimientos dramáticos que tuvieron lugar en la Tercera República provocaron o reforzaron el apoyo de los republicanos a las instituciones existentes¹³.

¹² Quizás habría sido mejor que la República hubiera adoptado inmediatamente un régimen presidencialista a la americana, que concilia mejor (sin lograrlo del todo tampoco) las dos exigencias de tener un ejecutivo estable que pueda gestionar eficazmente las políticas a medio y largo plazo y un poder legislativo independiente, que establezca un marco de reglas al que debe ceñirse el poder ejecutivo. De este modo, el Estado americano está dirigido por una mano firme con facultades propias e indiscutibles (ideal «monárquico»), pero al mismo tiempo no puede ampliar abusivamente su poder a la sociedad civil (ideal «demócrata liberal»).

¹³ Me baso en los artículos de Michel Winock y de Serge Bernstein en *Bernstein y Rudelle*, 1992, 142-143 y 149-153.

La crisis boulangista de 1889

El general Boulanger quería «revisar» la Constitución de 1875 (de hecho, rechaza totalmente el modelo demócrata liberal y parlamentario; y sobre esta base reúne para preparar su golpe de Estado a la derecha tradicionalista y, en el otro extremo, a los radicales y a los socialistas). Pero no tardó en descubrirse que Boulanger era un general autoritario cuyo objetivo prioritario era establecer un poder personal. Por eso, a ojos de los republicanos, la consigna «revisar» se identifica inmediatamente con «cesarismo». Es un programa que reaviva los fantasmas de los dos Napoleones. Por lo tanto, toda reivindicación de «revisión» de la Constitución se convierte en un acto sospechoso. Para los defensores del régimen, la salvación de la República reside por el contrario en conservar tal cual las instituciones de 1875, que a partir de ese momento pasan a denominarse «instituciones republicanas», y por encima de todo la preponderancia de la Cámara de los diputados.

El caso Dreyfus

El caso Dreyfus también contribuyó a desacreditar cualquier consigna de «revisión». En efecto, desde el momento en que el bloque de derechas ataca en la práctica y en la teoría a la «república judeo-masónica», oponerse a la tradición republicana y, especialmente al parlamentarismo, puede parecer un apoyo a las ideas de la derecha antidreyfusiana. Al no poder asumir semejante acusación, los radicales se sintieron fuertemente proclives a apoyar, a su vez, la Tercera República, por muy «burguesa» y liberal que fuera¹⁴.

La Primera guerra mundial

Para sorpresa general, la República sabe hacer la guerra y ganarla. Ni el Presidente de la República Poincaré, ni los presidentes sucesivos del consejo Viviani, Briand, Ribot, Painlevé y finalmente el «tigre»

¹⁴ No lo hicieron todos y, por eso, muchos se pasaron bien a la extrema izquierda, bien a la extrema derecha; volveremos a hablar de estos irreductibles.

Clémenceau, tuvieron necesidad, para hacer la guerra, de tocar la Constitución, que demostró su solidez¹⁵. El Parlamento vigiló y debatió durante toda la duración de la guerra. Se lleva a cabo la «unión sagrada» de las fuerzas políticas, que refuerza el régimen tal y como es. Incluso Maurras se quita el sombrero ante la eficacia gubernamental de los que, en teoría, siguen siendo sus adversarios. La victoria de Francia en 1918 tiende a enraizar aún más el régimen republicano en el país.

La revolución bolchevique

En ese mismo momento se produce un nuevo acontecimiento, la Revolución bolchevique, que apunta en la misma dirección. La existencia de un bastión totalitario de izquierdas incita de nuevo a los franceses a no apartarse de las instituciones moderadas de 1875. Este acontecimiento despierta en Francia la desconfianza hacia cualquier tipo de democracia directa. Los bolcheviques se parecen demasiado a los que cortaban cabezas en el régimen del Terror. Ante sus fórmulas dictatoriales, los franceses prefieren una «democracia gobernada». Los radicales que critican el parlamentarismo aduciendo que el pueblo se convertiría en un «soberano cautivo»¹⁶ carecen de apoyo. La experiencia rusa demuestra elocuentemente que seguir el camino del antiparlamentarismo no conducirá al triunfo, sino a la ruina de la República y de la propia soberanía del pueblo que pretenden defender. Los verdaderos republicanos deben renunciar, desde ese punto de vista, a sus proyectos de revisión constitucional.

Después de esta cadena de acontecimientos, se instaura definitivamente en Francia una «tradición republicana». Tradición que se confunde con el sufragio universal, el régimen parlamentario y las libertades individuales fundamentales, incluidas las libertades socio-económicas¹⁷.

¹⁵ Es cierto que, entre 1914 y 1918, los gobiernos instauraron la censura de la prensa y confirieron ciertos poderes discrecionales a los militares, en especial en materia judicial. Sin embargo, la opinión pública entendió que se trataba de medidas excepcionales, justificadas por el estado de guerra, y no una violación del espíritu del régimen.

¹⁶ Expresión que emplea más tarde Michel Tardieu en su obra del mismo título.

¹⁷ Para ilustrarlo, añadamos algunas observaciones sobre los aspectos socioeconómicos de esta «tradición republicana». El programa económico de la República es, en esencia, el de las democracias liberales: respeto de la propiedad y de los contratos, libertad de trabajo, libertad de empresa, impuestos moderados.

La situación del republicanismo hacia 1930

Los republicanos, y una gran mayoría de franceses con ellos, se han dejado seducir y convencer por esta fórmula. No sólo parece que el país ha roto con el reino de la arbitrariedad, ya sea monárquica, cesarista o «roja», sino que también hay cada vez más paz, orden, progreso y prosperidad. Así se explica que una tras otra, las facciones radicales del partido republicano apoyen al régimen y entren a formar parte del gobierno. En 1901, los radicales «derrocadores» de Jules Ferry en 1885 crean el «partido republicano radical y radical-socialis-

La vida socioeconómica está enmarcada por un derecho civil y mercantil que los tribunales se encargan de hacer respetar. Es cierto que existe un debate sobre la libertad del comercio exterior; la Tercera República es muy proteccionista. Pero eso no pone en tela de juicio lo que podría llamarse su liberalismo doméstico. A ese liberalismo económico, los republicanos incorporan disposiciones de orden social. Quieren que los individuos puedan progresar socialmente gracias a becas que se conceden a los buenos alumnos y estudiantes. Pretenden ampliar las bases sociales del Estado organizando la contratación de funcionarios mediante oposiciones abiertas a todos y anónimas. Sin embargo, estas medidas no tienen nada de socialistas, evidentemente. Se asientan sobre el ideal del trabajo y del mérito individual, así como sobre la igualdad estricta ante la ley. Los republicanos también pretenden mejorar el derecho del trabajo. Sin embargo, en este campo establecen las reglas (limitación de la jornada laboral, reglamentación o prohibición del trabajo de mujeres y niños, reglamentación de los accidentes laborales, etc.) que se adoptan en ese mismo momento en las democracias liberales similares (Inglaterra, Holanda, Estados Unidos...). Ese derecho del trabajo no cuestiona la propiedad ni la gestión privada de las empresas. Al contrario, los republicanos del gobierno se oponen sistemáticamente a las medidas expoliadoras propuestas por los socialistas. A principios del siglo XX, muchos de ellos todavía se oponen al impuesto sobre la renta. Y todos ellos al impuesto sobre el patrimonio. Los miembros de los partidos republicanos moderados, los Raymond Poincaré, los Michel Tardieu, los Étienne Flandin, representan estas tendencias, que también se corresponden con la filosofía subyacente del partido radical. Esa es una de las causas de las dificultades recurrentes con las que tropezará ese partido mientras mantenga su alianza con los socialistas, ya sea en el Parlamento o en el gobierno. En la época del Cartel de Izquierdas (1924-1926), ambos partidos apenas estaban de acuerdo sobre las medidas económicas y sociales. El Frente Popular también fracasará por la negativa de los radicales a acompañar a los socialistas y a los comunistas por la vía de las grandes «reformas estructurales», es decir, la comunización de la economía. Daladier llegará a interrumpir brutalmente estas reformas en 1938. En resumen, el régimen republicano reacciona especialmente bien a las aspiraciones de lo que en la época se llamaba las «clases medias», es decir, campesinos, artesanos, comerciantes, profesiones liberales, pequeños y medianos comerciantes, en general los autónomos (en 1930, el conjunto de esas categorías representa todavía la mitad de la población activa, aproximadamente), así como a las de una gran parte de los asalariados tanto del sector público como privado que cree en el mérito y el «ascenso individual». Hemos sostenido la tesis de que al estar estas «clases medias» destinadas a la extinción por la aparición de las economías modernas basadas en la gran empresa, la masa asalariada y el crecimiento del sector público, existiría una especie de fatalismo sociológico e histórico asociado a un retroceso de la ideología republicana tradicional. Las masas de la era industrial moderna concederían menos importancia a las libertades individuales, a la propiedad, a la iniciativa económica y se adherirían espontáneamente a las ideologías social-demócratas, a las medidas de «ascenso colectivo», etc. Esta tesis nos parece muy arbitraria. A partir de ese momento, las poblaciones activas de todos los países industriales modernos están constituidas en su mayoría por asalariados de grandes organizaciones; pero no por ello el socialismo triunfa en todos esos países ni la economía de mercado deja de tener partidarios. Si las actitudes que promueven la libertad, la iniciativa y la responsabilidad individuales son, desde hace dos o tres decenios, incomprendidas y denigradas en Francia por una parte de la opinión pública, no se debe a un determinismo sociológico abstracto, sino a motivos puramente ideológicos que vamos a intentar analizar a continuación.

ta» que, hasta 1940, será uno de los mejores defensores de las instituciones moderadas que crearon sus antiguos adversarios liberales, y terminará incluso encarnándolas. Algunos socialistas individuales que habían roto con el partido, como Briand o Millerand, siguen a los radicales por este camino.

Sin embargo, la República sigue teniendo adversarios. En 1930, son, en esencia, los mismos que en 1875.

Por un lado, una derecha tradicionalista, nostálgica de la sociedad feudal, clerical, agrícola y artesanal, que aspira a la restauración monárquica; desde la creación de la Acción Francesa en 1900 hasta Vichy y también después, se sentirá tentada por las fórmulas autoritarias.

Sin embargo, la República también tiene adversarios igual de decididos en la izquierda. No olvidemos que, a lo largo del proceso de creación de la República entre 1871 y 1879, los socialistas, compartiendo todavía la ideología de la Comuna, habían estado en la oposición revolucionaria violenta. Algunos de ellos habían participado, junto con los radicales y codo con codo con la extrema derecha, en la empresa con la que el general Boulanger había querido acabar con la República en los años 1885-1889. A continuación, el «deslizamiento hacia la derecha» de la clase política republicana les fue dejando, paulatinamente, nuevos espacios que ocupar en la extrema izquierda.

Así nacieron, o prosperaron, el partido comunista a partir de 1920, la extrema izquierda de la SFIO (Marceau Pivert), toda una variedad de grupos «izquierdistas» y de organizaciones sindicalistas revolucionarias que clamaron alto y fuerte su rechazo a las instituciones republicanas existentes. *Por lo tanto, una gran parte de la izquierda no era republicana*, un detalle que la historiografía «oficial» actual se guarda muy bien de recordar.

Y eso no es todo. Hay que entender que, a comienzos de los años 1930, la República también tiene adversarios entre las mismas personas que se proclaman ruidosamente sus defensores. Después del congreso de Tours de 1920, los socialistas de la SFIO rechazan contundentemente la dictadura del proletariado y la idea de la insurrección revolucionaria. Pretenden alcanzar el socialismo por la vía de las elecciones. Por lo tanto, apoyan las instituciones republicanas en

su vertiente política, es decir, el respeto de los mecanismos electorales y parlamentarios (y lo hacen con la misma vehemencia con que las atacan las ligas de extrema derecha). Eso les hace parecer solidarios con los demás partidos republicanos moderados y radicales que también defienden el parlamentarismo. Sin embargo, es obvio que son unos amigos muy extraños para la República, porque su objetivo no es perpetuar el régimen republicano tal y como es. Aunque rechazan los métodos bolcheviques de los comunistas, en realidad sus objetivos son los mismos que los de ellos, lo que afirma con fuerza Blum en su discurso en el congreso de Tours. Aspiran a la restauración de una economía dirigida y planificada en la que el Estado se adueñe de los medios de producción y en la que las fuerzas «populares» sean las únicas que organicen toda la vida social. Defienden la nacionalización de la mayor parte de la economía, de la banca, del crédito, de los seguros y de las industrias más importantes, según el programa marxista más clásico. Por lo tanto, los socialistas admiten en la República lo que podríamos llamar la parte visible del iceberg, es decir, los aspectos institucionales exteriores, pero no aceptan la parte sumergida, que es inseparable de la primera, es decir, la visión social liberal que encarnan las instituciones forjadas en 1875. En otros términos, aceptan la vertiente democrática de la democracia liberal, pero no la vertiente liberal. Para los socialistas, 1793 no elimina a 1789, pero la primera fecha prevalece sobre la segunda como el fin prevalece sobre los medios.

Entre «Charybde» de derechas y «Scylla» de izquierdas, la República intenta mantener el rumbo contra viento y marea. Resulta llamativo que en una época en que toda Europa se siente tentada por fórmulas totalitarias y regímenes de partido único, se consiga mantener la República, al menos hasta Vichy¹⁸.

¹⁸ Sabemos que los programas para derrocar las instituciones democráticas inspiradas por la extrema derecha de corte fascista y la extrema izquierda marxista en la década de 1930 no lograron triunfar en Francia, ni en la derecha fascista, durante la revuelta de las Ligas y, en especial, el 6 de febrero de 1934, ni en la izquierda, con el Frente Popular. El primer motivo de este sorprendente hecho es que en Francia, las fuerzas de extrema derecha y de extrema izquierda eran más o menos iguales, lo que impedía que una se impusiera a la otra. Por otro lado, la tradición del Estado de derecho ya estaba sólidamente implantada en la Francia de aquella época. Los métodos de insurrección «contundentes» que se utilizaron con éxito en otros países (Rusia, Italia, Alemania, España...) nunca recibieron en Francia el apoyo y la simpatía de las masas. Por el contrario, la sociedad civil apoyó en su mayoría a gobiernos legalistas, que reprimieron con energía dichos métodos tanto en 1934 como en 1936-1938.

IV. DE VICHY A LA QUINTA REPÚBLICA

De hecho, es la derrota de junio de 1940, el Armisticio, la Ocupación y la desastrosa situación general, en la que el pueblo soberano no podía expresarse, lo que propicia por fin la revisión constitucional soñada desde Boulanger y exigida cada vez con más fuerza por los extremistas de izquierda y de derecha a lo largo de los años 1930, así como acabar con el régimen «burgués», deshonrado y despreciado desde hace tanto tiempo por muchos franceses. Sabemos que esta ejecución tuvo lugar durante la votación del 10 de julio de 1940 en el Parlamento, que confiere plenos poderes al Mariscal Pétain.

¿Qué políticos prepararon y llevaron a cabo este golpe de Estado? Resulta sorprendente que entre ellos, los hombres de izquierdas sean casi tan numerosos como los de derechas. El hombre clave del 10 de julio es Pierre Laval, un antiguo diputado socialista. Los jefes más importantes de las organizaciones colaboracionistas de París son el antiguo responsable socialista, delfín de Léon Blum, Marcel Déat y el ex-dirigente de las Juventudes comunistas Jacques Doriot. Lo que une a estos hombres a los de Vichy, procedentes de la extrema derecha, es el desprecio que sienten por el liberalismo, el capitalismo y el parlamentarismo¹⁹.

Sin embargo, la «Revolución nacional», el poder paternalista y después policial y, sobre todo, la colaboración van a desacreditar enseguida al régimen de Vichy y, con él, la «revisión» que realizó de las instituciones republicanas. En consecuencia, aunque a comienzos de la Francia Libre y de la Resistencia existía una cuasi-unanimidad en la opinión pública en contra de la Tercera República, ese régimen «corrupto» que ponía de manifiesto la responsabilidad de la derrota, ese juicio va a evolucionar e incluso a dar un giro radical.

¹⁹ Estas idas y venidas entre la extrema derecha y la extrema izquierda, ambas enemigas de la democracia liberal, las ilustran muchos otros nombres del periodo de entreguerras y de periodos posteriores (ver las obras clásicas de Zeev Sternhell, *La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme*, Seuil, 1978; *Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France* [1983], ed. Complexe, 1987). Mussolini fue el dirigente socialista italiano más importante antes de convertirse en líder del partido fascista. El programa del partido nazi es socialista. Henri de Man, secretario general del Partido socialista belga, se hará pro-nazi. También se produce lo contrario: Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Claude Roy y muchos otros intelectuales y políticos franceses, pasarán de la extrema derecha a la extrema izquierda (recordemos a un tal François Mitterrand...). De esta fluida circulación de cargos y de electores entre la extrema derecha y la extrema izquierda se puede concluir que las «visiones del mundo» de ambos bandos no son tan diferentes como se dice. Ambos son enemigos de la «tradición republicana» que se ha descrito anteriormente.

La propia nostalgia que había surgido durante la Primera Guerra Mundial por la «Belle Époque» de 1900-1914, va a beneficiar a la República demócrata liberal de las décadas de 1920 y 1930. A medida que pasan los meses y se consolida el cuasifascismo de Vichy, la Tercera República aparecerá retrospectivamente como un régimen no tan detestable: ¿no se habían respetado las libertades civiles y políticas?, ¿se vivía tan mal?

De repente, en 1946 y contra todo pronóstico, se restaurará prácticamente el mismo régimen republicano tradicional. De Gaulle no podrá imponer su versión de la «revisión», es decir, la instauración del régimen presidencial que describió en su famoso discurso de Bayeux del 16 junio de 1946. Los social-comunistas tampoco podrán imponer su proyecto de constitución revolucionaria, prácticamente calcada de la Comuna de París, que daba preferencia a una asamblea única y suprimía la separación de los poderes, columna vertebral de toda democracia liberal. Habrá que elegir a una segunda Asamblea constituyente para conseguir por fin la Constitución de la Cuarta República²⁰. Esta nueva Constitución, inspirada principalmente por los demócrata-cristianos, los radicales y los socialistas más moderados, hace de la Cuarta República un clon de la Tercera: *Francia sigue siendo una democracia liberal*.

Es cierto que este régimen sólo durará doce años. Será lo bastante dinámico como para permitir la reconstrucción del país y entablar el ciclo de los «Treinta Gloriosos», es decir, el intenso crecimiento económico que caracteriza a la Francia de los años 1945-1975. Sin embargo, precisamente porque este régimen ha retomado poco a poco la Constitución de la Tercera República que acaba de terminar sin aportarle el correctivo de un reforzamiento apropiado del ejecutivo –que, como hemos visto, muchos políticos, desde Jules Ferry a Millerand o Doumergue, consideraban necesario– va a adolecer de la misma inestabilidad ministerial crónica que su predecesor. En realidad, va a cono-

²⁰ A continuación repaso el calendario de esos fracasos de los «revisionistas» y el éxito inesperado de la tradición republicana en 1946: 21 de octubre de 1945, referéndum con dos preguntas (1. ¿Abandonar la Constitución de la Tercera República? Respuesta «sí» en un 96%. 2. ¿Limitar los poderes de la Asamblea frente al ejecutivo? Respuesta «sí» en un 66%). El mismo día, elección de la 1ª Asamblea Constituyente; 20 de enero de 1946, dimisión de De Gaulle; 5 de mayo de 1946, referéndum sobre el 1º proyecto de Constitución. Rechazado por el 53% de los votos emitidos; 2 de junio de 1946, elección de la 2ª Asamblea Constituyente; 13 de octubre de 1946, referéndum sobre el 2º proyecto de Constitución. Aprobado por el 53,5% de los votos emitidos; 10 de noviembre de 1946, elecciones legislativas.

cer una inestabilidad aún peor a causa de las profundas divisiones que suscitan entre los franceses las guerras coloniales. El país pasa a ser ingobernable rápidamente, hasta que la crisis de Argelia hace saltar por los aires definitivamente el régimen y, en 1958, proporciona a De Gaulle la oportunidad de regresar triunfalmente al poder.

De Gaulle va a aprovecharse de la situación para imponer al país no sólo el refuerzo del ejecutivo, que todo el mundo consideraba necesario, sino también una revisión constitucional profunda que tiene como fin modificar toda la sociedad francesa, sus estructuras y sus grandes equilibrios. Para entender lo que va a pasar, tenemos que ir marcha atrás en la cronología. Tenemos que detenernos en el gaullismo y en los extraños vínculos que entabló desde sus orígenes con el comunismo.

V. EL GAULLO-COMUNISMO

El tema de los vínculos entre el gaullismo y el comunismo es complejo y se ha estudiado en múltiples ocasiones²¹. A continuación, nos ceñiremos a lo estrictamente necesario para nuestros propósitos.

En primer lugar, señalemos que la derrota francesa de junio de 1940 constituyó un trauma insoportable para la nación. Es cierto que Francia nunca debió perder la guerra. La humillación nacional fue tan profunda que desde los años 1940 y después, se han buscado con una enorme violencia «chivos expiatorios» a los que cargar con la responsabilidad de la derrota y de las desgracias del país. Pero fue la alianza gaullo-comunista que triunfó en la Liberación, la que pudo designar a los chivos expiatorios. Seguramente fue entonces cuando se forjó un auténtico *mito* que todavía hoy sirve de estructura profunda de la cultura política francesa.

Primero es necesario explicar cómo pudo entablarse una alianza tan poco probable entre De Gaulle y los comunistas.

Según Henri-Christian Giraud, se firmó un pacto secreto entre De Gaulle y Stalin después del ataque alemán contra la URSS en junio de 1941 (Courtois y Lazar, 1991). Es incuestionable que existía una aso-

²¹ Ver en especial GIRAUD, 1988 y COURTOIS y LAZAR, 1991.

ciación formal a finales de 1942. Si simplemente se hubiera tratado de una unidad de acción en el combate contra el enemigo común, no podría haber sido más legítimo. Pero hubo algo más desde el principio: la alianza tuvo por razón de ser resolver un problema doble de legitimidad que se planteaban los socios.

Los comunistas, lacayos de Moscú, que habían firmado el pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1939, habían reclamado un acercamiento a los alemanes durante toda la «estúpida guerra» y a principios de la Ocupación.

Con el lanzamiento de la operación Barbarroja, habían provocado un giro de 180°: ahora querían prestar ayuda a la Unión Soviética desatando una guerra de partisanos en el Oeste. Lideraron operaciones de «resistencia» que en realidad eran operaciones suicidas destinadas a fabricar héroes comunistas artificiales. Enviaron a la muerte a decenas de jóvenes de veinte años que creían morir por Francia, pero que en realidad morían para que el Partido Comunista se convirtiera en el «partido de los fusilados». Sin embargo, como para la opinión pública francesa los comunistas seguían siendo unos traidores, necesitaban urgentemente salir de su aislamiento, ser reconocidos por la Francia Libre y por el resto de la Resistencia.

Por su parte, los anglosajones consideraban a De Gaulle un elemento prescindible, aunque gozara de la simpatía de Churchill. El reconocimiento diplomático de un tercer país como la URSS podía erigirlo en jefe de Estado para gobernar a una futura Francia liberada. Pero el precio que pedía Stalin por este reconocimiento era demasiado alto. De Gaulle no sólo tenía que apoyar a Stalin ante los anglo-americanos en el tema de la apertura rápida de un segundo frente en el Oeste, sino también aceptar asociar estrechamente a la liberación de Francia a las fuerzas «democráticas», es decir, los comunistas. Y lo hizo. Es el origen de la operación Jean Moulin: este gran patriota, «compañero de viaje», ayudó a establecer el dominio absoluto de los comunistas en los movimientos de la Resistencia, aunque los primeros miembros de la Resistencia habían sido hombres de derechas y de centro (en especial demócrata-cristianos) que, de otro modo, habrían permanecido, sin duda, a la cabeza del movimiento (Dreyfus, 1996).

Después del desembarco de los Aliados en el Norte de África en noviembre de 1942, había que fortalecer la alianza. De Gaulle y sus

franceses libres representan a unos cuantos miles de hombres; el ejército de África, dirigido por militares más o menos fieles a Vichy, a varios cientos de miles. Los americanos trataron con el general Giraud –un oficial que acababa de escapar de Alemania y que no podía haber vuelto a la Francia Libre, suponiendo que lo hubiera querido–, e incluso brevemente con el Almirante Darlan, «delfín» de Pétain, que se encontraba en Argel en el momento del desembarco de las tropas anglo-americanas. Después del asesinato de este último, Giraud se convirtió en el hombre fuerte en el Norte de África francés, y es posible que De Gaulle se sintiera marginado. En esta situación, volvió a beneficiarse del apoyo de Stalin.

En efecto, los intereses de ambos hombres convergían una vez más. Stalin sabía que Giraud era favorable al plan de Churchill, que consistía en atacar Alemania en la «tripa blanda» de los Balcanes en lugar de hacerlo en el Oeste, maniobra que habría permitido a los aliados llegar a Viena y después a Berlín antes que al Ejército Rojo y que habría reducido a cenizas los proyectos soviéticos de extender el comunismo en la Europa central. Por lo tanto, le resultó útil que eliminaran a Giraud. Ordenó a los comunistas franceses, cuya influencia era dominante en la Resistencia interna, como ya hemos visto, desacreditar a Giraud tratándolo de «vichysta» y, por lo tanto, implícitamente de colaboracionista e incluso fascista. De Gaulle se prestó a esa mentira y a esa flagrante injusticia. Giraud y sus allegados fueron desacreditados y eliminados en pocas semanas y De Gaulle se quedó solo en la pista con los comunistas.

Entre gaullistas y comunistas también hubo convergencias ideológicas, por su naturaleza más duraderas y que debían sobrevivir a las circunstancias especiales de la guerra.

Sin duda, es una paradoja. Los comunistas acusaron en varias ocasiones a De Gaulle de «hombre de derechas», de burgués, de militar, de cristiano, etc., y lo cierto es que jamás profesó ideas totalitarias y colectivistas, que se alejaban de su formación intelectual y su medio social. Pero la filosofía política personal de De Gaulle presentaba similitudes con la de los comunistas. Comulgaba con ellos en el antiliberalismo, en el estatismo y en lo que podríamos denominar el anti-anglosajonismo. Influido en su juventud por las ideas de la derecha de Maurras y, después, como muchos de los franceses de su generación,

por el «anticonformismo de los años 1930»²², De Gaulle rechazaba con horror las utopías bolcheviques, pero no se atrevía a apoyar sinceramente a la vieja república parlamentaria y liberal, supuestamente corrupta y desprovista de valores espirituales. Además, al igual que una serie de militares, detestaba y despreciaba a la burguesía industrial y comerciante, a la que consideraba atávicamente egoísta e interesada, además de intelectualmente limitada. Por lo tanto, buscaba, a la misma distancia de las dos formas de materialismo deshumanizado que eran el capitalismo y el comunismo, una «tercería vía» filosófica, política, socioeconómica y diplomática.

Por lo tanto, en los comienzos de la guerra, De Gaulle no era más hostil a los comunistas rusos que a los capitalistas anglosajones, dos tipos de extranjeros con los que había que mantener las distancias y negociar por necesidad al mismo tiempo. Por eso, no tenía la impresión

²² *Les anticonformistes des années 1930* es el título de una obra de Jean-Louis Loubet del Bayle [1969], Seuil, 2001. La expresión designa los movimientos, grupos y revistas como *Jeune Droite*, *Ordre Nouveau* o *Esprit*, que consideraban que el mundo de los años 1930 vivía una terrible regresión de la civilización. Culpaban a la sociedad moderna en su conjunto. Rechazaban tanto el capitalismo como el marxismo, a los que consideraban materialismos que conducían al reinado de la máquina y de la deshumanización de la sociedad (Robert Aron et Arnaud Dandieu publicaron ya en 1931 un libro de título significativo, *Le Cancer américain*, en el que acusaban a América de ser el país donde los trabajadores estaban más alienados y el máximo culpable del individualismo hedonista). Por el contrario, querían fomentar una sociedad en la que la persona humana y sus valores espirituales pasaran a primer plano. A sus ojos, era evidente que la «tradicción republicana» era incapaz de crear esa sociedad. Bien al contrario, estaba comprometida con el capitalismo y roída por el parlamentarismo. Por lo tanto, se necesitaba una Revolución. Es cierto que rechazaban tanto el revolucionarismo de la extrema izquierda como el de la extrema derecha, ya que habían comprobado, por los ejemplos de Rusia, Italia y Alemania, que producían regímenes totalitarios nada humanistas. Su rechazo apasionado de la sociedad existente no era menos significativo. Por ello, los jóvenes que formaban parte de la élite intelectual del país —muchos se harían escritores, filósofos, eruditos conocidos y estimados de la posguerra: entre ellos encontramos los nombres de Emmanuel Mounier, Daniel-Rops, Thierry Maulnier, Pierre-Olivier Lapie, Jean Lacroix, Maurice Blanchot, Etienne Borne, Pierre-Henri Simon, Henri-Irénée Marrou, Denis de Rougemont, y entre los más mayores que los apadrinaban, a Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Nicolas Berdiaeff, Daniel Halévy, Ramuz...—, jóvenes instruidos, moderados, con una posición social media o elevada que no les predisponía en absoluto a actitudes extremistas, consideraban que había que quemarlo todo en la Francia pacífica, y ¡eso en pleno florecimiento económico de Poincaré y de Briand! ¡No reconocían ningún valor espiritual ni moral a la República que tantos avances científicos y sociales había dado al país! Sin duda, De Gaulle —al igual que muchos otros miembros de su entorno social, burgueses alejados de los asuntos económicos, funcionarios, profesores o militares— se imbuyó de esta moda y también creyó que era urgente rechazar «el egoísmo obtuso del mundo burgués-liberal» (según la fórmula de Jean de Fabrègues). Ninguna persona, a no ser que fuera un pensador original, habría podido resistirse a la corriente generalizada del «espíritu de la época», ni siquiera un De Gaulle. Esto debe hacernos reflexionar sobre las condiciones de la formación de este espíritu. No podemos por menos que sorprendernos del silencio que, en esa época, guardaron en Francia las grandes voces capaces de mostrar el vínculo entre el sistema denominado «capitalismo» y el respeto de las libertades fundamentales de la persona. La ruptura parece ser total entre los medios económicos y los medios intelectuales, a diferencia de lo que había ocurrido en los periodos anteriores de la historia de Francia, en la época de la Ilustración, en la época de la Revolución francesa y en los dos primeros tercios del siglo XIX. En los años 1920-1930, hubo en Francia un verdadero déficit de pensamiento democrático y liberal. Aunque los republicanos logran, mejor que peor, que la sociedad de derecho y de la libertad sobreviva institucionalmente, nadie parece ya defenderla en sus principios. Ese déficit merecería un análisis concienzudo.

de estar cenando con el Diablo cuando se ponía en contacto con Stalin. Admite contar con colaboradores que simpatizan abiertamente con el régimen soviético e incluso, en un momento en el que sus contactos con los ingleses se habían enfriado, planea trasladar la Francia Libre a Moscú. No comprendería la verdadera naturaleza del comunismo hasta 1944, cuando los comunistas quisieron imponer su voluntad al gobierno de Argel, y, sobre todo, hasta el inicio de la Guerra Fría. Sin embargo, no extraerá como conclusión de los horrores del totalitarismo soviético que el socialismo es en sí mismo un error y que las sociedades liberales son las únicas que pueden ser al mismo tiempo justas, prósperas y propicias a la expansión de los valores humanistas. A lo largo de la Cuarta y la Quinta Repúblicas, seguirá desconfiando de los «burgueses» y de los partidos que los representan. Desconfiará de América, no por antipatía irracional, sino por rechazo meditado del tipo de sociedad que encarna. Jamás se mostrará verdaderamente hostil a los sindicatos marxistas, cuyo pecado era a sus ojos el «separatismo», es decir, la sumisión ciega a una potencia extranjera, la URSS, más que la acción anticapitalista en sí misma. Bajo la Quinta República, él y sus colaboradores estarán de acuerdo con los sindicalistas y dispuestos a colaborar con ellos a menudo. Admitirán en la práctica, si no exactamente en teoría, las tesis de la social-democracia y justificarán el crecimiento del aparato del «Estado Paternalista» y el peso de los impuestos obligatorios para «corregir» en la medida de lo posible los supuestos efectos antisociales del liberalismo. De Gaulle estaba igualmente preocupado por el desarrollo económico, pero en ese campo creía espontáneamente en el papel de motor del Estado más que en la libre iniciativa de la sociedad civil. Es así como De Gaulle y los comunistas *comulgaron constantemente al menos en un terreno, el del estatismo y el crecimiento de la función pública.*

Ahora podemos intentar entender lo que ocurrió en el plano ideológico en la época de la Liberación.

VI. EL «PRECIPITADO QUÍMICO» DE LA IDEOLOGÍA DE LA POSGUERRA

Como la humillación y los sufrimientos de la Ocupación abonaron un terreno favorable a la designación de «chivos expiatorios» y como só-

lo la alianza gaullo-comunista podía reivindicar la victoria, era la única que podía decir qué había estado del lado del Bien o del lado del Mal durante la guerra. Así, acontecimientos que en un principio eran improbables y contingentes, ya que se deben principalmente a estrategias circunstanciales que ya hemos analizado, iban a determinar durante mucho tiempo la visión que los franceses tendrían de su historia.

Gaullistas y comunistas comulgaban, como acabamos de ver, en el anticapitalismo, el antiburguesismo y el anti-anglosajonismo. Por lo tanto, fue en este terreno en el que establecieron su propaganda común. Desde la creación del Consejo Nacional de la Resistencia y, posteriormente, tras la formación del gobierno de Argel y la Liberación, tomó forma un discurso determinado, que se fue abriendo paso por contagio en el conjunto de un país angustiado y vengativo. Se dio a entender que *era el sistema demócrata liberal, impotente y corrupto, el que había conducido inexorablemente al país a la guerra y a la derrota* y, por otro lado –y ahí se nota especialmente la «mano» de los comunistas–, *que la burguesía francesa había sido en su mayoría vichysta y cómplice de los nazis*²³. De ahí que la victoria contra el nazismo tuviera que ir acompañada de una política radicalmente anticapitalista. La «Liberación» debía desembocar en un cambio profundo de las estructuras de la economía y de la sociedad francesa. Y, en primer lugar, hacer que el Estado tome las riendas de la economía nacional.

Los gaullistas hicieron suyo este lenguaje y este programa y aunque no volvieron a identificarse con la propaganda específicamente comunista, se negaron a rechazarla²⁴. No hace falta decir que en Londres, en Argel, y más tarde en el París de la Liberación, existía el derecho a no ser comunista. Sin embargo, en la propaganda de la Francia Libre, no tardó en extenderse la idea de que un buen francés no debía oponerse abiertamente al comunismo. Por el contrario, se entendía que cuando uno se declaraba anticomunista de manera abierta y deci-

²³ La afirmación de que los burgueses tienden íntimamente a simpatizar con el fascismo era coherente con la interpretación histórica que dio la doctrina marxista a ese fenómeno histórico. Según esta doctrina, el fascismo es la fórmula política que eligió la burguesía cuando se sintió amenazada por los avances de los revolucionarios. Se alía con la pequeña burguesía y decide deliberadamente crear regímenes autoritarios capaces de aplastar al proletariado y a su vanguardia comunista. El fascismo no es más que otro aspecto –y, de hecho, es la verdadera cara– del capitalismo.

²⁴ En sus mensajes desde Londres, De Gaulle dijo infinidad de veces que la Liberación debía ir acompañada de una «insurrección». Desde luego, no se refería ni deseaba una insurrección comunista. Este lenguaje revolucionario era igual de coherente que el del *acuerdo* firmado con Stalin.

dida, tenía que ser necesariamente de Vichy. En otras palabras, a partir del momento en el que entró en vigor la alianza gaullo-comunista y empezó a controlar todas las expresiones oficiales de la lucha de la liberación nacional, *el simple hecho de declararse anticomunista o de oponerse ideológicamente al marxismo* podía valerle a uno la sospecha de colaboracionismo.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los franceses se declaraban «republicanos moderados» y por tanto en este sentido eran tan anticomunistas como antifascistas. La gran mayoría de las élites instruidas se declaraban explícitamente anticomunistas por razones religiosas, filosóficas o económicas. Antes de que estallara la guerra, los hombres de los partidos republicanos moderados, como es el caso de Miguel Tardieu, Gaston Doumergue o Pablo Reynaud, se habían manifestado en contra del comunismo, mientras que los radicales, incluido Daladier, habían sido en general adversarios, a veces brutales, de las empresas del PCF. Hasta los «anticonformistas de los años 30», que poco tenían en común con las instituciones republicanas, se declaraban abiertamente antimarxistas y antitotalitarios. *El triunfo del mito difundido por la alianza gaullo-comunista residió por tanto en la eliminación o si se prefiere, en la relegación a un segundo plano, de esta opinión, mayoritaria en el país.*

A partir de este día, las ideas calificadas de «derechas» quedaron en cierta manera vetadas. Se entremezclaron todos los tipos de derechas, desde la derecha pro fascista hasta la derecha cristiana tradicional, pasando por los partidarios de la democracia liberal y de la economía de mercado. Todas esas facciones fueron acusadas indistintamente de ser enemigas acérrimas de los liberadores de Francia. Estos últimos, heroizados, eran los «puros», mientras que el resto eran considerados «impuros». Durante años, una sospecha infame pesó sobre todos aquellos que no eran ni de izquierdas ni gaullistas, a los que se consideraba culpables y en el mejor de los casos, sospechosos²⁵.

²⁵ La eliminación del general Giraud ilustra este proceso a la perfección. Su único «delito» fue no ser partidario del comunismo, al igual que la casi totalidad del ejército y la casi totalidad de los funcionarios de Vichy o del Norte de África, —salvo un número muy reducido—, que no simpatizaba ni con los regímenes comunistas ni con los regímenes fascistas. La exclusión de Giraud supuso el primer acto de eliminación política, cuando no física, de todos los franceses antitotalitarios, partidarios de una democracia liberal en el sentido más amplio de la palabra (aunque algunos de ellos no fueran republicanos o lo fueran sin demasiado entusiasmo). Resulta curioso que estemos hablando de la misma Francia que, después de haber

El liberalismo, así como la democracia cristiana y todos los «moderados» perdieron, a partir de este día, el poder espiritual en Francia. En la recién nacida Cuarta República, los franceses no socialistas y los no comunistas votaron en su mayoría al partido demócrata-cristiano²⁶. Sin embargo, los dirigentes de este partido se vieron obligados a declararse de izquierdas y a avalar un buen número de reformas estructurales decididas en la Liberación, comenzando por las nacionalizaciones, todo con el fin de ser aceptados por la ideología dominante. Sus electores se sintieron frustrados e incluso traicionados, por lo que tendrían que relegar a un segundo plano sus ideas de libertad social y económica. Los valores morales, los sentimientos íntimos y los análisis intelectuales de al menos la mitad de los ciudadanos franceses quedarán excluidos del *ágora* pública. En ese momento, André Malraux pudo pronunciar una insolente sentencia: «¡Entre los comunistas y nosotros [los gaullistas] no hay *nada!*».

El absurdo incremento del peso del marxismo estuvo provocado por este «precipitado químico» o esta polarización artificial de los espíritus, y se dio más allá de las instituciones. En Francia, el marxismo se convirtió para buena parte de la clase intelectual, en lo que Jean-Paul Sartre denominó «el horizonte indispensable de nuestro tiempo». Todo ello provocó una gran desorientación que con el tiempo derivó en una profunda decadencia de más de medio siglo en lo que a la producción intelectual francesa se refiere. Todo el pensamiento francés, y en particular las ciencias sociales, quedó esterilizado por el antiidealismo, el nihilismo y el cinismo propios del marxismo, que envenenaron también a la literatura francesa, tan prolífica hasta la fecha. El prestigio que se confirió artificialmente a la visión marxista fue la causa de que un gran número de catedráticos y varias generaciones de políticos y periodistas formados por ellos no fueran capaces de comprender la lógica económica y social

tomado las primeras iniciativas de Resistencia interior, puso en el campo de batalla a numerosos contingentes de hombres que hicieron posible la victoria final de la Francia libre y de los Aliados. ¿Hace falta recordar que fue el ejército de África —preparado por Weygand en 1940, reorganizado por Giraud en los primeros meses de 1943, y dirigido por los generales «vichystas» Juin y De Lattre de Tassigny— el que combatió en Italia, desembarcó en la Provenza, liberó el sur y el este del territorio francés, entró en Alemania y consiguió incluir a Francia entre los cuatro firmantes del tratado de capitulación del Tercer Reich el 8 de mayo de 1945?

²⁶ El «Movimiento republicano popular» (MRP).

del mundo económico moderno, ya que, en su formación de base, se había introducido un «obstáculo epistemológico» que les prohibía la asimilación de dicha lógica. Las ideas político-económicas que, por ejemplo, sustentaban la riqueza y el poder de los Estados Unidos, resultaban incomprensibles para las generaciones de posguerra. El antiamericanismo se convirtió en la especialidad francesa, algo impensable si tenemos en cuenta que desde el siglo XVIII América siempre había tenido una prensa excelente.

Esta especie de delirio colectivo durará bastante tiempo, distorsionando toda percepción de la realidad histórica. La información acerca de la realidad de la Unión Soviética y del Gulag no se conoció en Francia hasta la aparición de los «Nuevos Filósofos» y la publicación de los grandes textos de Solzhenitsin; es decir, se tuvo que esperar hasta los años 1974-1980 para conocer la verdadera situación. Para toda una generación de intelectuales, el personaje ridículo y despreciable por excelencia fue «el pequeño burgués radical». Por el contrario, a todos los revolucionarios antioccidentales, ya fueran militares de extrema izquierda en el interior del país, o en el exterior, nacionalistas indochinos o argelinos, «guardias rojos» maoístas o combatientes del círculo del «Che» Guevara, a todos se les consideraba héroes.

Sin embargo, bajo la Quinta República los efectos de estos sucesos ideológicos fueron limitados. De Gaulle había dimitido en 1946 y los comunistas estaban fuera del poder en 1947. Desde los inicios de la Guerra Fría, Francia, gobernada por demócrata-cristianos, un antiguo resto de radicales y por socialistas moderados, se había colocado claramente del lado del mundo libre aunque, naturalmente, las dos grandes fuerzas gaullistas y comunistas de la oposición, que habían unido sus invectivas, denunciaran con violencia este «atlantismo» en la Cámara. Aunque los marxistas eran poderosos en los medios intelectuales y en la calle, no pudieron apropiarse de los mecanismos de poder que les habrían permitido transformar la sociedad francesa. De hecho, aunque el régimen estaba expuesto a la inestabilidad y al «vals de gobiernos», siguió siendo profundamente democrático. El Parlamento desempeñaba su papel de representante de la sociedad civil, en el que el sector público todavía tenía un peso relativamente modesto. Por lo tanto, podía proteger eficazmente a la sociedad francesa de las empresas de los revolucionarios.

La campaña de nacionalizaciones que se emprendió en la Liberación se detuvo inmediatamente en el Parlamento y se rechazaron los demás proyectos de «reformas estructurales», como el proyecto de creación de una «escuela única» enunciado en el plan comunista Langevin-Wallon de 1947.

Las cosas cambiaron cuando De Gaulle recuperó el poder en 1958. La democracia liberal se vio sometida a nuevas pruebas, comenzando por la cuasisupresión del Parlamento, que quedó reducido a una mera cámara que registraba las decisiones del ejecutivo. El jacobinismo francés regresaba con fuerza. Es cierto que en tiempos del propio De Gaulle y sus sucesores inmediatos, Pompidou y Giscard d'Estaing, no se produjo nada irremediable, ya que los gobernantes se ceñían, en lo esencial, a la economía de mercado. Sin embargo, la situación se agravó de repente cuando los social-comunistas llegaron al poder en 1981. Se dieron cuenta que la Constitución de la Quinta República (a la que, sin embargo, se opusieron con todas sus fuerzas en 1958 y en 1962), les confería todos los poderes necesarios para alcanzar sus objetivos de socialización. Y consiguieron provocar un crecimiento espectacular del sector público y de la recaudación de impuestos obligatorios, una maquinaria desenfrenada que la derecha, que regresó al poder de forma intermitente y breve (1986-1988, 1993-1997), jamás pudo detener. Desde hace veinte años, asistimos a *una auténtica regresión de la democracia liberal en Francia* y a una revancha inesperada de 1793 sobre 1789.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDRIEU, C.; LE VAN, L.; PROST, A. (dir.) (1987): *Les nationalisations de la Libération. De l'utopie au compromis*, Prensa de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas.
- APRILE, S. (2000): *La II^e République et le Second Empire. 1848-1870. Du Prince-Président à Napoléon III*, col. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- ARON, R. (1954): *Histoire de Vichy. 1940-1944*, Fayard.
- AURIOL, V. (1970): *Mon septennat*, Gallimard.
- BACKOUCHE, I. (2000): *La monarchie parlementaire. 1815-1848. De Louis XVIII à Louis-Philippe*, col. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- BEAU DE LOMÉNIE, E. (1954) (R.2001): *Les responsabilités des dynasties bourgeoises*, 5 vol, R. Ed. du Trident.
- BECKER, J.J. (2000): *Histoire politique de la France depuis 1945*, Armand Colin.
- BECKER, J.J. y BERSTEIN, S. (1990): *Victoire et frustrations. 1914-1929*, Nouvelle histoire de la France contemporaine, n° 12, Seuil.
- BERSTEIN, S. y RUDELLE, O. (dir.) (1992): *Le modèle républicain*, PUF.
- BORNE, D. y DUBIEF, H. (1976) (R.1989): *La crise des années 30. 1929-1938*, Nouvelle histoire de la France contemporaine n° 13, Seuil.

- BROCHE, F. (2001): *La III^e République. 1870-1895. De Thiers à Casimir-Périer*, col. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- COURTOIS, S. y LAZAR, M. (dir.) (1991): *50 ans d'une passion française. De Gaulle et les communistes*. Balland.
- DEBRAY, R. (1991): *Que vive la République*.
- DELPORTE, CH. (1998): *La III^e République. 1919-1940. De Poincaré à Paul Reynaud*, col. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- DREYFUS, F. G. (1996) (R.2003): *Histoire de la Résistance*, Editions de Fallois (R. Le Livre de Poche).
- DUROSELLE, J.B. (1988): *Clémenceau*, Fayard.
- FAUVET, J. (1969): *La IV^e République*, Fayard.
- GIRARD, R. (1972): *La Violence et le sacré*, Grasset.
- , (1982): *Le Bouc émissaire*, Grasset.
- GIRAUD, H.C. (1988): *De Gaulle et les communistes*, 2 vol, Albin Michel.
- GIRAUD, H.C. (dir.) (2004): *Réplique à l'amiral De Gaulle*, Editions du Rocher.
- KRAUTKRAMER, E. (1992): *Vichy-Alger. 1940-1942*, Economica.
- LOUBET DEL BAYLE, J.L. (1969) (R. 2001): *Les anticonformistes des années 1930*, Seuil.
- MAYEUR, J.M. (1973): *Nouvelle histoire de la France contemporaine, 10. Les débuts de la III^e République*, Seuil.
- REBÉRIOUX, M. (1975): *La république radicale? 1898-1914*, Nouvelle histoire de la France contemporaine n° 11, Seuil.
- ROTH, F. (2001): *Poincaré*, Fayard.
- STERNHELL, Z. (1978): *La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme*, Seuil.
- , (1987): *Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France*, ed. Complexe.
- WEBER, E. (1985): *L'Action française*, Fayard.

Nueva Revista

DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE

la cultura al día,
la actualidad bien pensada

Si «los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo» (*Tractatus*, 5.6), los ensayos, poemas y relatos de *Nueva Revista* buscan ampliar el horizonte de comprensión de la actualidad para lograr una lectura sin fecha de caducidad.

Nueva
Revista

Nueva
Revista

PRESIDENTE
Antonio Fontán

DIRECTOR
Rafael Llano

Nueva Revista
Javier Ferrero, 2
28002 Madrid
Tel.: 91 519 97 56

www.nuevarevista.com

LA DEMOGRAFÍA DE NUESTROS VECINOS: ¿UNA PREOCUPACIÓN GEOESTRATÉGICA?

Europa del Sur está a punto de experimentar un descenso en su población activa por primera vez en su historia, mientras que África del Norte se enfrenta a la oferta más alta de población activa de su historia. La única manera de enfrentarse a los problemas que provienen del rápido crecimiento de la población africana es una planificación integrada de acciones políticas en ambas orillas del Mediterráneo. El islamismo fundamentalista puede crecer como movimiento fruto de una mala gestión de la nueva realidad demográfica.

Desde hace tiempo los demógrafos hablan de «nuevas» tendencias demográficas globales, refiriéndose básicamente al descenso de las tasas de fertilidad y mortalidad. Sus implicaciones principales para las sociedades occidentales son bien conocidas: el envejecimiento de la población y el crecimiento más lento o incluso negativo del mismo (Sandell, 2003A). Estos fenómenos tienen también implicaciones políticas y económicas, por ejemplo: ¿cómo habrán de financiarse las pensiones con un número progresivamente decreciente de cotizantes pero creciente de jubilados? Por otra parte, la sanidad y la educación también se verán afectadas por los cambios en la estructura de edad de la población. Por último, pero no por ello

Rickard Sandell es Investigador Principal (Demografía, Población y Migraciones Internacionales), del Real Instituto Elcano. Doctor en Sociología por la Universidad de Estocolmo.

menos importante, la población activa también tenderá a descender, fruto de la baja fertilidad de los años 70 y 80. En consecuencia, será necesario aumentar la productividad a fin de mantener el rendimiento económico actual. En resumen, los cambios demográficos serán de tal magnitud que tanto el crecimiento económico como nuestro bienestar se verán abocados a un inevitable deterioro si los Estados no logran adaptarse a la nueva realidad demográfica.

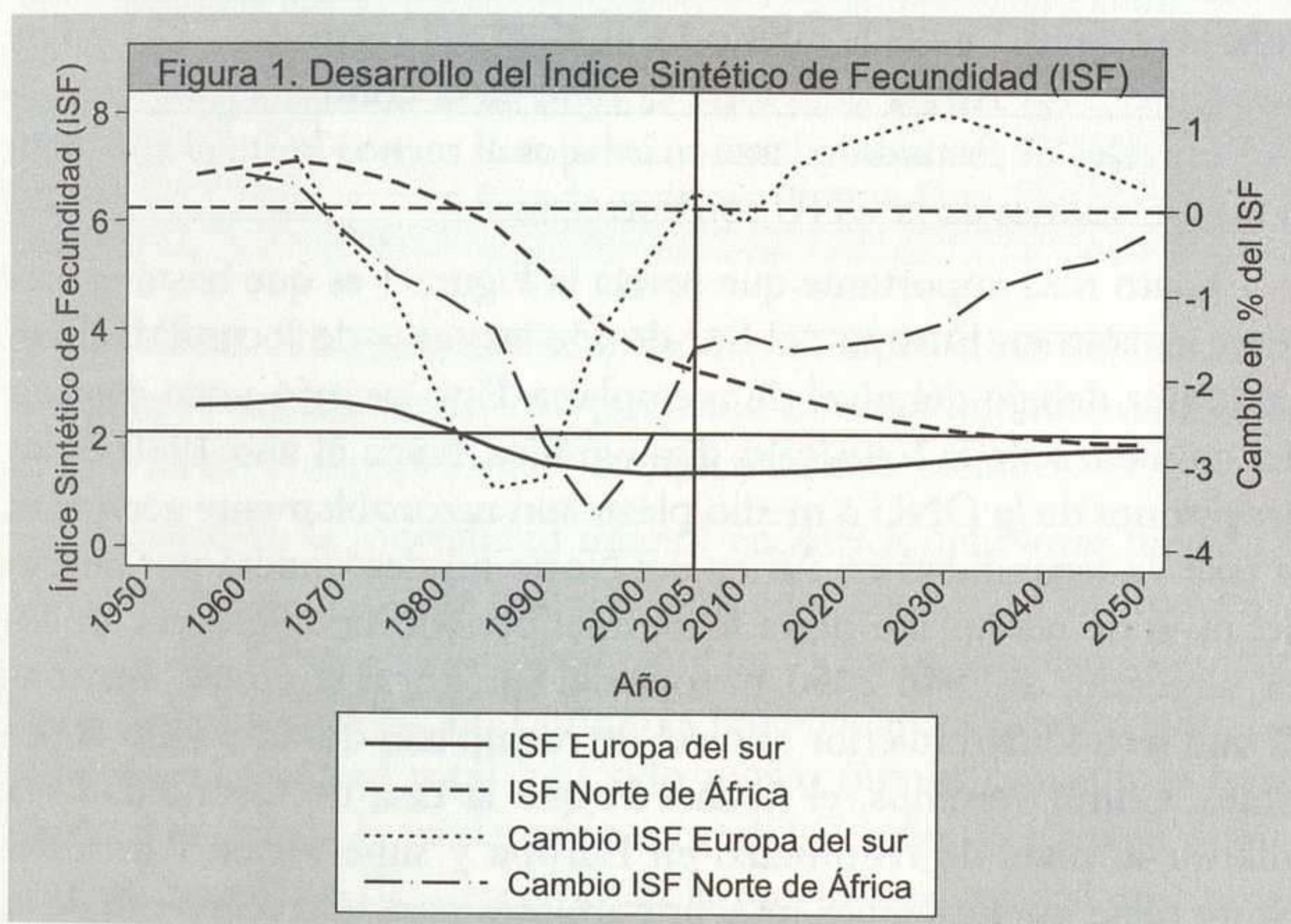
El hecho de que las nuevas tendencias demográficas se califiquen de globales por la simple razón de que están presentes en todos los países en el mundo, tanto ricos como pobres, puede llevar a engaño. Tendemos a generalizar demasiado sobre cómo afecta el desarrollo demográfico a diferentes países y regiones. Gran parte del debate actual en el mundo occidental se centra en exceso en cuestiones de «lujo» como el bienestar, descritas anteriormente. Pero estos problemas son propios de los países desarrollados, aun cuando los países en vías de desarrollo experimenten exactamente las mismas tendencias demográficas. Aunque los países en vías de desarrollo se enfrenten al mismo proceso de transición demográfica, es mucho más difícil predecir el efecto que tendrá en ellos en el futuro. Tampoco se ha investigado a fondo el efecto que puedan tener los cambios demográficos en los países en vías de desarrollo sobre los países desarrollados (McNicoll, 1984).

El presente artículo se centra en los cambios demográficos en la región mediterránea, contrastando los desarrollos demográficos en los litorales sur y norte del Mar Mediterráneo. Los países incluidos en el litoral europeo, definido aquí como Europa del Sur, son Francia, Grecia, Italia, Portugal y España. Los países que constituyen África de Norte son Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, y Túnez.

El propósito de la comparación es mostrar cómo unas tendencias demográficas similares en África del Norte y en Europa del Sur darán lugar a unos desarrollos demográficos generales opuestos en cada una de las dos subregiones. Es, a su vez, probable que las diferencias demográficas afecten la actuación general (política y económica) de los países en la región. Las diferencias demográficas podrían ser complementarias si se emplean en nuestra ventaja. Si las ignoramos, son potencialmente peligrosas y podrían generar conflictos y tensiones en la región.

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA: PRINCIPALES COMPONENTES

Las «nuevas» tendencias demográficas globales empezaron a manifestarse en la región mediterránea en los años 60 y 70, cuando la tasa de fecundidad comenzó a descender rápidamente y de forma repentina en ambas orillas del litoral. Así, el descenso de la tasa de fecundidad fue un fenómeno universal en la región, en tanto que se produjo prácticamente al mismo tiempo en el litoral norte y en el sur. No obstante, esta coincidencia temporal puede hacernos ignorar otros datos importantes sobre este fenómeno.

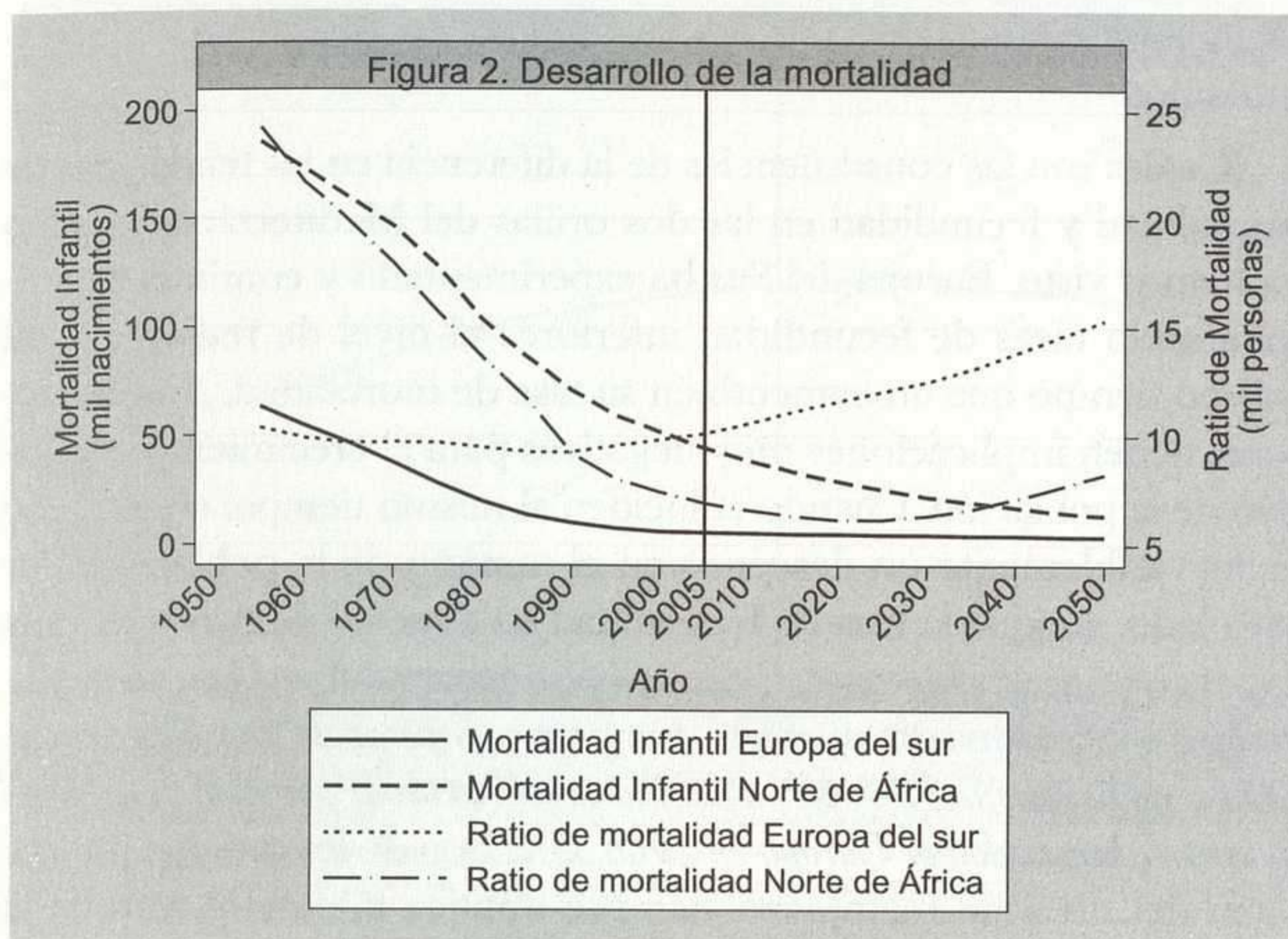


La Figura 1 muestra la evolución del Índice Sintético de la Fecundidad (el número de hijos por mujer) a ambos lados del Mediterráneo. Vemos que la fecundidad alcanza su máximo aproximadamente al mismo tiempo (1965-1970) en ambos litorales. Lo que marca la diferencia más destacada entre las dos regiones es que al comenzar el proceso de transición demográfica, en Europa del Sur la fecundidad total era de 2,7 niños por mujer, mientras que en África del Norte alcanzaba los 7,08 niños por mujer.

Es fácil apreciar que, en términos absolutos, hasta el año 2005 la caída de la fecundidad en África del Norte excede la caída en Europa del Sur por un factor de 4. Así, es tentador concluir que África del Norte ha experimentado cambios más dramáticos en el periodo 1965 a 2005. En cambio, si analizamos la caída de la fecundidad en términos relativos llegamos a una conclusión distinta (véase el eje de la derecha en la Figura 1): la fecundidad cayó más rápidamente en Europa del Sur que en África del Norte. Esto implica un avance relativo más rápido de la transición demográfica en Europa que en África del Norte. Otra conclusión a la que llegamos analizando el cambio relativo es que a partir de 2005 Europa del Sur previsiblemente entrará en la siguiente fase de la transición demográfica, estabilizándose la fecundidad total a niveles inferiores al nivel del reemplazo (2,1 niños por mujer). En África del Norte la tendencia continúa dirigiéndose hacia niveles de fecundidad aun más bajos al menos hasta el año 2030 si las previsiones de la ONU son correctas.

El dato más importante que revela la Figura 1 es que hasta el presente es sólo en Europa del Sur donde las tasas de fecundidad han caído por debajo del nivel de reemplazo. Esto ocurrió poco después del comienzo de la transición demográfica, hacia el año 1980. Si las previsiones de la ONU a medio plazo son razonablemente acertadas, la tasa de fecundidad en África del Norte no descenderá por debajo del nivel de reemplazo hasta finales del periodo de referencia, es decir, alrededor de 2040-2050. Europa del Sur, por el contrario, registrará una fecundidad inferior al nivel de reemplazo durante todo el periodo. Como veremos, el hecho de que la tasa de fecundidad sea inferior al nivel de reemplazo en Europa y superior en África del Norte tiene implicaciones muy importantes para el crecimiento de la población en las dos orillas del Mediterráneo.

Para comprender debidamente los efectos de la transición demográfica, además de la evolución de la fecundidad, es necesario analizar las tasas de mortalidad. La Figura 2 muestra la evolución de la mortalidad infantil por cada mil nacimientos, y la tasa de mortalidad total por cada 1.000 personas a ambas orillas del Mediterráneo. La evolución de la mortalidad infantil es impresionante. Desde 1990, la mortalidad infantil en Europa del Sur se reduce desde 50 muertes infantiles en el 1950 a un mínimo en los años noventa. En África del Norte la



tendencia ha sido aún más llamativa. Las muertes infantiles han caído desde aproximadamente 200 por cada mil nacimientos en 1950 a apenas 50 en el año 2005, si se cumplen las estimaciones.

La caída de la mortalidad infantil en África del Norte ha sido la razón principal de que la tasa de mortalidad total haya ido reduciéndose también muy significativamente en dicha región, especialmente hasta finales de los 80. En Europa la tendencia es algo diferente. Las tasas de mortalidad total han sido más o menos constantes hasta ahora, a pesar de la caída en la mortalidad infantil. Esto se debe a que los beneficios del descenso de la mortalidad infantil en Europa del Sur ya se capitalizaron antes de la década de los 50. A partir de 2005 y hasta el final del periodo en 2050, la tasa de mortalidad subirá significativamente en Europa a consecuencia del aumento en el envejecimiento en Europa del Sur que, a su vez, es consecuencia de la mayor esperanza de vida que en África del Norte a lo largo del siglo pasado.

Sin embargo, el dato de más importancia respecto a la evolución de la mortalidad es que ha sido inferior en África del Norte que en Europa desde los años 90, y que será significativamente más baja en

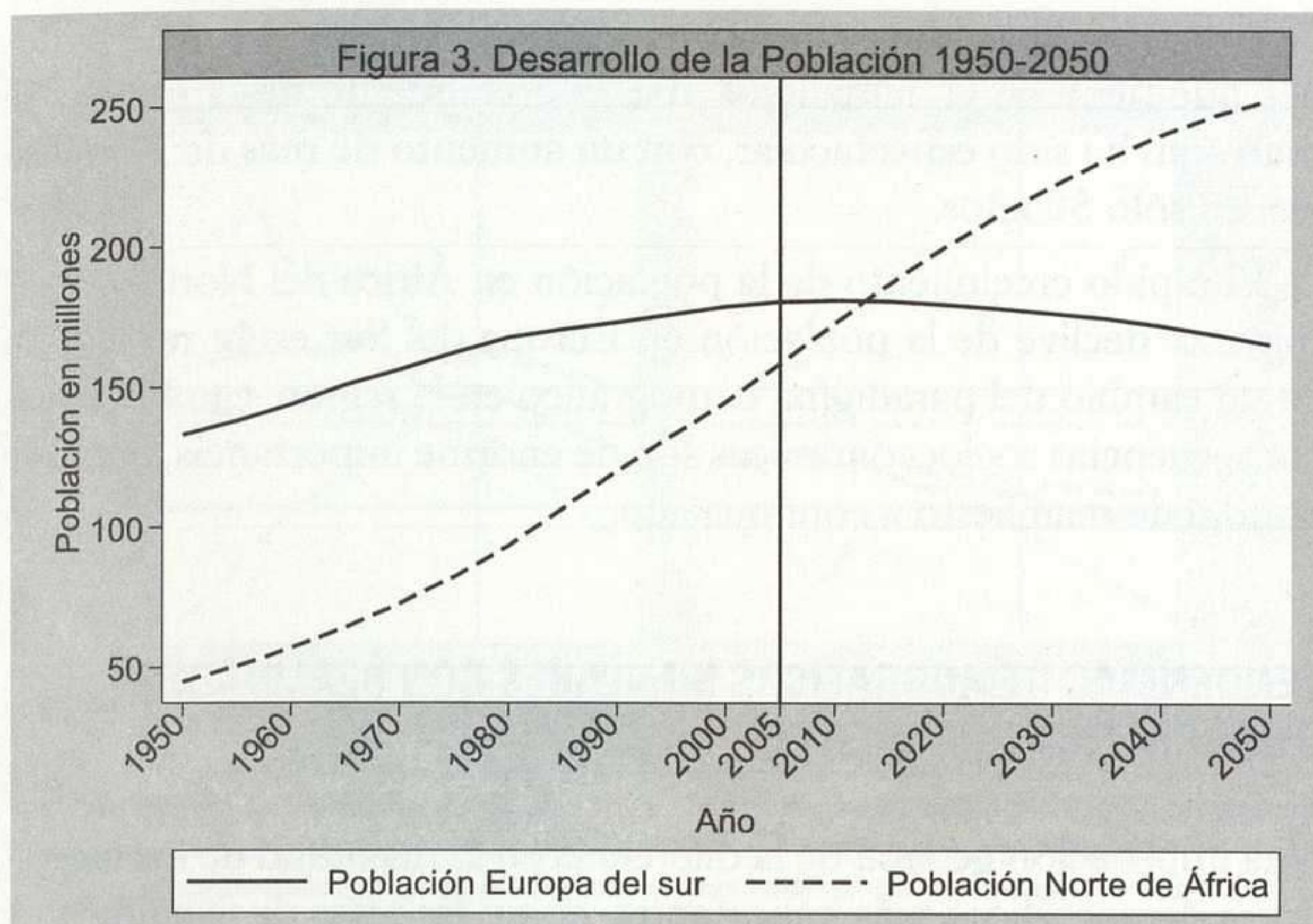
dicha región que en Europa del Sur durante todo el periodo que estudiamos.

¿Cuáles son las consecuencias de la diferencia en las tendencias de mortalidad y fecundidad en las dos orillas del Mediterráneo? Como ya hemos visto, Europa del Sur ha experimentado y continúa experimentando tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo, al mismo tiempo que un aumento en su tasa de mortalidad. Ambos factores tienen implicaciones muy negativas para el crecimiento vegetativo de la población. Cuando coinciden al mismo tiempo, el resultado es inevitablemente un descenso en el tamaño de la población. Por otro lado, aunque la tasa de fecundidad en el norte de África es cada vez menor, previsiblemente no caerá por debajo del nivel de reemplazo hasta mediados de este siglo. De hecho, *a pesar de una fuerte caída, la tasa de fecundidad del África del Norte está todavía por encima del nivel máximo alcanzado por Europa en 1965*. Una tasa de fecundidad por encima del nivel de reemplazo siempre implica el crecimiento de la población. Si además la tasa de mortalidad cae, el crecimiento de la población puede ser muy explosivo.

Esto implica que el crecimiento de la población aún es muy significativo en África del Norte, y que es previsible que lo siga siendo durante gran parte de este siglo. En contraste, Europa del Sur se enfrenta a un importante descenso en el tamaño de su población¹. La diferencia en las tasas de fecundidad y mortalidad entre los litorales norte y sur del Mediterráneo, y el efecto que estas tendencias tienen sobre el crecimiento de la población, resultarán en un significativo cambio en el centro de gravedad de la población en la región.

La Figura 3 muestra la evolución del tamaño de la población en los litorales norte y sur del Mediterráneo. A juzgar por la pendiente, la velocidad de crecimiento de la población en África del Norte está en su máximo histórico. Sin embargo, y aún más importante, en 1950 Europa del sur tenía una población tres veces mayor que la de África del Norte. Hoy en día, la población de Europa del Sur sigue siendo

¹ Aun cuando la previsión de la ONU fuera errónea o la tasa de fecundidad subiera directamente por encima del nivel del reemplazo, el daño ya está hecho en Europa del Sur, y el declive de la población en Europa es inevitable a partir del 2020. La razón para esto simplemente es que 25 años de tasas de fecundidad por debajo del reemplazo ha hecho que el número de madres potenciales haya disminuido muy sustancialmente.



mayor que la de África del Norte, pero para finales del periodo en estudio (2050), siempre que las previsiones de la ONU sean acertadas, la población de África del Norte excederá a la de Europa del Sur en cerca de 100 millones de personas. El cambio es aún más dramático si comparamos países individualmente.

En la Tabla 1 se compara la evolución del tamaño de la población en Marruecos con la de España en cuatro momentos diferentes. Como muestra la tabla, la población de Marruecos estaba por debajo de los 10 millones en 1950, mientras que la española era de cerca de 30 millones. Las proyecciones de la ONU indican que a partir de 2025 la población de Marruecos excederá a la de España. Para poner el crecimiento de la población marroquí en perspectiva, si la población española hubiera crecido al mismo ritmo que la de Marruecos en el periodo 1950-2005, España tendría una población

Cuadro 1

Población (en millones)

País	1950	1980	2005	2025*	2050*
Marruecos	8'9	19'4	31'5	40'7	47'1
España	28'0	37'5	41'2	40'4	37'3

* UN medium variant.

FUENTE: UN World Population Prospects, 2002 Revisión.

de cerca de 100 millones de habitantes en 2005, y no los 41,2 millones que tiene en la actualidad. Así, el crecimiento de la población marroquí ha sido espectacular, con un aumento de más de 22 millones en sólo 50 años.

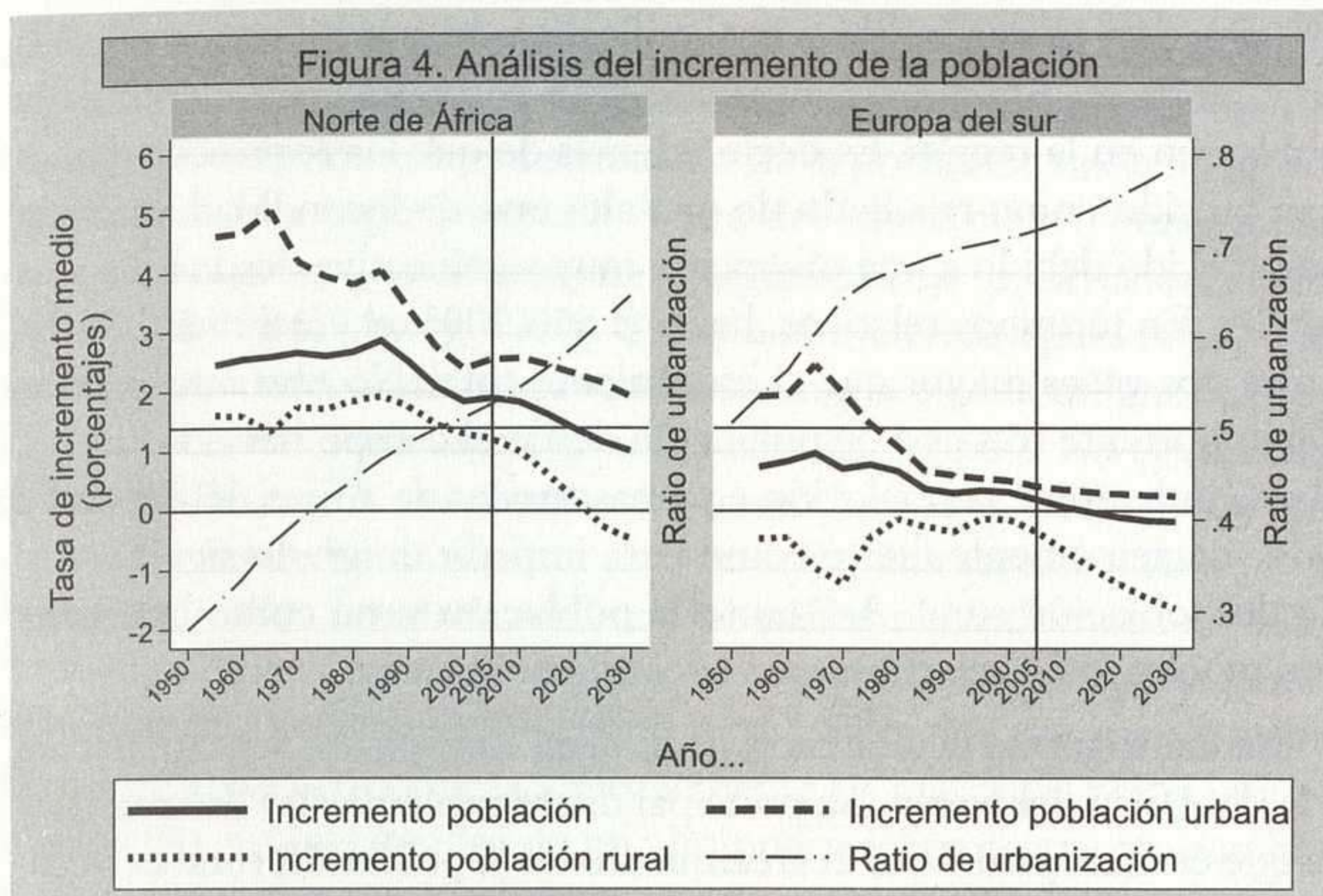
El rápido crecimiento de la población en África del Norte y el inminente declive de la población en Europa del Sur están resultando en un cambio del paradigma demográfico en la región, cambio cuyas consecuencias socioeconómicas son de enorme importancia, como se pondrá de manifiesto a continuación.

TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS SIMILARES CON REALIDADES DEMOGRÁFICAS DIFERENTES

Una implicación general de la diferencia en la magnitud de los indicadores demográficos más importantes, como las tasas de fecundidad y mortalidad, es que mientras que todos los países de la región están experimentando las mismas tendencias demográficas, se enfrentan a realidades demográficas muy distintas (Keyfitz, 1980). A su vez, las diferentes realidades demográficas generan diferentes necesidades y respuestas políticas, y pueden alterar las condiciones en las que se establecen las relaciones internacionales, e incluso la perspectiva de seguridad para los países y regiones implicados (McNicoll, 1984; Homer-Dixon, 1991).

¿Qué tipo de realidades pueden provocar estos cambios demográficos en el norte de África? Hay múltiples, y a veces contradictorias, respuestas a esta pregunta (McNicoll, 1984). Quizá uno de los procesos más importantes que se ven afectados por el crecimiento de la población, especialmente si es rápido, es la urbanización. Como fenómeno, la urbanización es el resultado de factores económicos y políticos. Sin embargo, la rapidez del proceso depende en gran medida de los factores demográficos discutidos en la primera parte de este artículo (Lowry, 1990).

Tradicionalmente, los Estados norteafricanos han tenido un carácter agrario, con la mayor parte de la población en zonas rurales. Este no es el caso de Europa del Sur donde la población se ha concentrado en núcleos urbanos desde los años 50 (Lowry, 1990). La Figura 4



muestra cambios importantes en cuanto a la distribución geográfica de la población en África del Norte.

Ambos litorales han registrado una creciente urbanización a lo largo del tiempo, y se prevé que el proceso continúe hasta 2050, pero con una diferencia importante: la urbanización norteafricana es mucho más rápida que la de Europa del Sur y, además, parte de una tasa de urbanización muy inferior a la europea.

Desglosando las tasas de crecimiento de la población a fin de reflejar las diferencias entre zonas rurales y urbanas obtenemos una mejor comprensión de los cambios presentes y pasados en los procesos espaciales de la población. Tanto el Norte de África como el Sur de Europa registraron tasas de crecimiento de la población en general más o menos constantes a lo largo del periodo 1950-1980, aunque con una magnitud muy diferente (como muestra la línea continua en la Figura 4).

En África del Norte, especialmente al comienzo del periodo, la velocidad de crecimiento de la población urbana excede con gran diferencia tanto la velocidad de crecimiento de la población en general como la de la población rural. La tasa de crecimiento urbana extrema, de entre el 3% y el 4% superior a la tasa de crecimiento rural hasta mediados de los años 80 y a partir de entonces aproximadamente del

2% superior, es una indicación significativa de que las zonas urbanas en el norte de África han absorbido gran parte del crecimiento de la población en la región. Es decir, además de que las regiones urbanas han crecido como resultado de una alta tasa de fecundidad, también han crecido debido a una migración muy significativa desde las zonas rurales. En términos relativos, hasta el año 2005, el crecimiento urbano es dos veces mayor que el crecimiento total. No obstante, a pesar del importante trasvase de población desde el campo hacia la ciudad, el crecimiento de la población en áreas rurales de África del Norte ha sido suficientemente fuerte como para impedir un grado significativo de despoblación rural. Así, tanto la población rural como la urbana son mucho mayores ahora que hace cincuenta años.

En cierto modo la tendencia general en Europa del Sur es parecida a la de África del Norte. La principal diferencia entre las dos regiones es que en Europa del Sur el crecimiento de la población rural es negativo para todo el periodo 1950-2050. Es decir, las regiones rurales en Europa del Sur están sometidas a un grave proceso de despoblación. Este proceso era particularmente significativo en el periodo previo a los años 70, reflejado en la evolución negativa de la tasa de crecimiento rural y la correspondiente evolución positiva de la urbana.

Ambas regiones verán una segunda ola de urbanización al entrar en el siglo XXI. En Europa, esta segunda ola estará vinculada en menor medida que anteriormente con el movimiento de la población rural a zonas urbanas, siendo más bien el resultado de un crecimiento vegetativo de la población o, mejor dicho, de la falta de crecimiento vegetativo en las áreas rurales. El precio de la despoblación rural es que las personas que eligen abandonar el campo por la ciudad son típicamente las más jóvenes y, por lo tanto, las que están en edad fértil, dejando atrás a sus padres. Esto impide el aumento natural de la población rural en el futuro, como es el caso en Europa. En contraste, África del Norte verá acelerarse la urbanización a consecuencia de una rápida despoblación de las áreas rurales, es decir, un movimiento urbano similar al de Europa del Sur en los 70-80. Fruto de ello será una tasa de incremento de la población urbana muy superior al crecimiento de la población total en la región.

Sin duda, la conclusión más importante que puede extraerse de la Figura 4 es que el litoral africano ha visto una transformación com-

pleta de la sociedad: de ser una sociedad rural y agrícola ha pasado a ser una sociedad industrial y urbana en menos de una generación. La rápida urbanización y la redistribución de la población hacia áreas urbanas, como ha experimentado África del Norte, tienen consecuencias económicas y políticas muy significativas para la sociedad (McNicoll, 1984; Lowry, 1990). Cuando una sociedad pasa de ser una sociedad predominantemente rural a ser una sociedad urbana se producen también cambios en las instituciones del país. En el caso de África del Norte, la economía está pasando de ser eminentemente agrícola a estar dominada por la industria y los servicios (Bloom y Freeman, 1986). En otras palabras, los países norteafricanos no sólo están experimentando una transición demográfica, sino que también se enfrentan a una transición económica. La historia nos muestra que las transiciones económicas, especialmente las marcadas por la industrialización, están cargadas de un alto potencial para generar conflictos entre ganadores y perdedores del nuevo orden social y económico (Kuznets, 1973; Goldstone, 1986). En algunos países la transición ha llevado incluso a la rebelión y la guerra civil (Kuznets, 1973).

La transformación de una sociedad rural en una urbana no tiene que ser necesariamente problemática, aunque hay una alta posibilidad de que lo sea. El problema más obvio al que se enfrenta un país en esta situación es poder atender a las nuevas necesidades de la sociedad en asuntos tan sencillos como la producción alimentaria. Para mantener el ritmo del rápido aumento de la población urbana y el incremento de la demanda de alimentos que esto conlleva, la producción agrícola tiene que ser más eficaz. Fracasar en la tarea de aumentar la productividad agrícola tiene como resultado que una parte creciente del suministro de alimento deba proceder de las importaciones, con el elevado gasto consiguiente (Homer-Dixon, 1991). El esfuerzo interno por satisfacer la demanda alimentaria puede llevar a la degradación de la superficie cultivable del país, creándose un círculo vicioso en el que la creciente escasez sólo se puede paliar con mayores importaciones. Este problema se acentuará en el norte de África cuando empiece el proceso de despoblación rural en la primera mitad de este siglo. Cuanto mayores son los recursos que se dedican a la importación de alimentos, menores son los recursos que quedan para invertir en otras áreas importantes para el buen funcionamiento de la sociedad.

Es probable que a medida que avance el proceso de urbanización surjan otros problemas relacionados con la falta de recursos. Con una tasa de crecimiento de la población urbana en las próximas décadas superior al 2% (y 1%-1,5% superior al crecimiento total), existe un riesgo muy alto de que los gobiernos sean incapaces de aumentar lo suficiente su capacidad (económica y administrativa) para mantener el orden y el imperio de la ley, incrementándose así el potencial para la generación de disturbios y desorden social (Goldstone, 1986).

También hay una interacción importante entre la industrialización y la velocidad de urbanización. La industrialización requiere una población urbana creciente para satisfacer su demanda de mano de obra. Pero existe el riesgo de que la velocidad de urbanización alcance y adelante la velocidad del proceso de industrialización. Hay varias razones para ello. Los sueldos son normalmente más altos en los sectores industrial y de servicios que en el sector agrícola. La vida en la ciudad suele ser más cómoda, con mejores servicios y posibilidades educativas que en el campo. En términos relativos, la vida urbana es más atractiva que la vida rural y esto hace que la urbanización progrese más rápidamente que la transición económica (Lowry, 1990). Otra razón es que el sector agrícola es incapaz de absorber un aumento de la población activa superior a cierto nivel, entre otras cosas por la escasez de tierra cultivable.

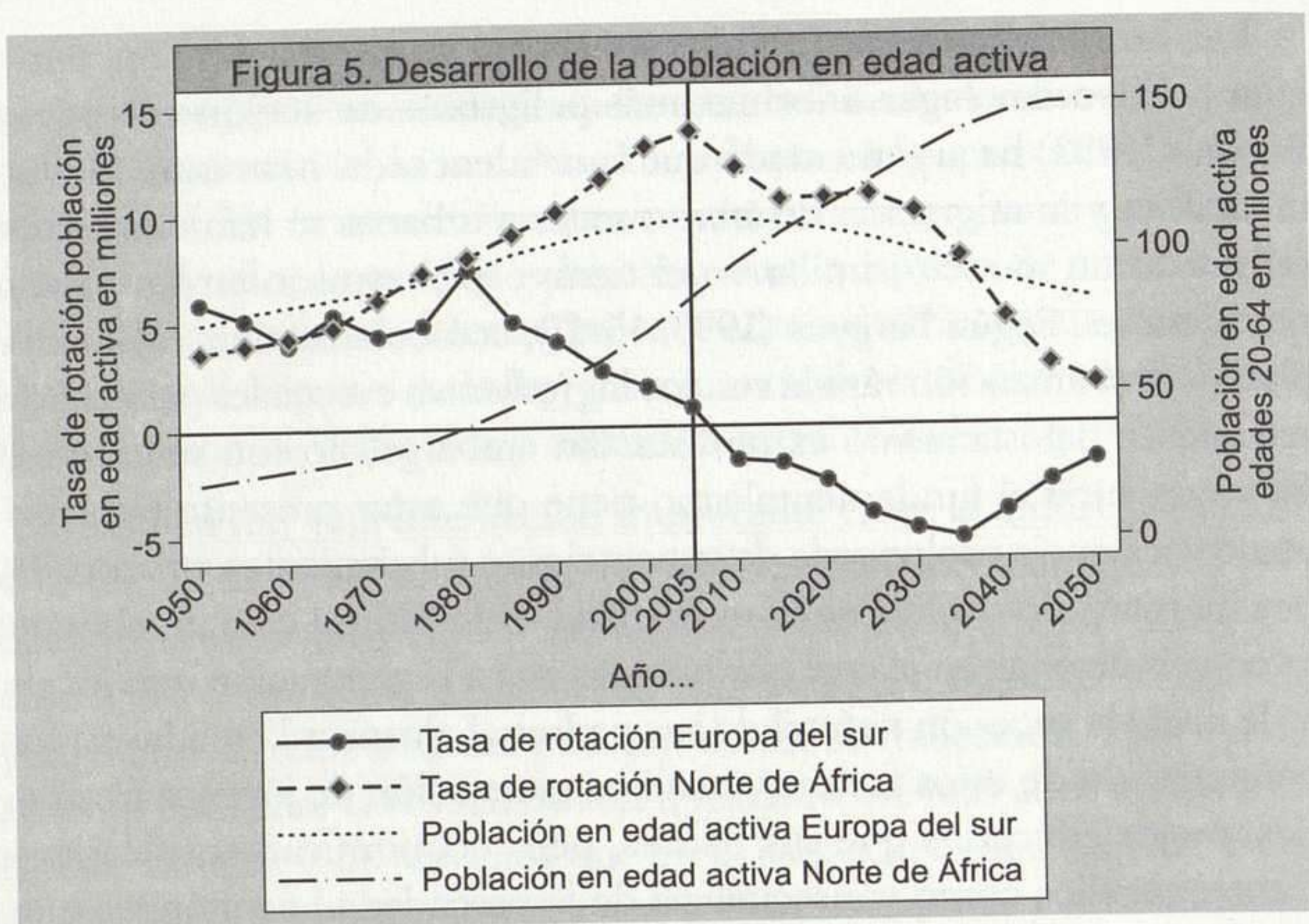
Cuando la velocidad del proceso de urbanización alcanza y sobrepasa la velocidad del proceso de industrialización, la oferta de trabajo es menor que la demanda. Cuando hay una discrepancia en la oferta y la demanda del trabajo, la economía paralela crece desproporcionadamente (Bloom y Freeman, 1986). Esto debilita la capacidad fiscal del Gobierno y crea más dificultades a la hora de adaptar su capacidad de gobernar frente al rápido aumento de la población urbana.

Cuando la velocidad del proceso de la urbanización excede la velocidad de la transición económica, o la velocidad a la que el Gobierno puede absorber el crecimiento urbano, el resultado es la «sobreurbanización» (Lowry, 1990). La sobreurbanización puede generar problemas y tensiones en áreas urbanas y llevar a la protesta política. Las urbes facilitan el movimiento de masas y la acción colectiva y, por lo tanto, hay una correlación entre el rápido crecimiento de la población urbana y la incidencia de protesta política (Auvinen, 1997).

Las transiciones demográficas rápidas, como la urbanización, también pueden dar lugar a formas más peligrosas de acción colectiva. Fargues (1993) ha argumentado que la incidencia del islamismo fundamentalista y la migración de áreas rurales a urbanas se han extendido siguiendo un modelo similar en el tiempo y el espacio en los países musulmanes. Según Fargues (1993, 15-17), la escolarización, el desempleo y la urbanización rápida son los ingredientes esenciales para el florecimiento del islamismo extremista. Sin embargo, no son suficientes. Para que surja el fundamentalismo tiene que estar presente también una coexistencia prolongada de generaciones subsiguientes, provocada por un marcado declive en la mortalidad. Esto último crea un choque intergeneracional, en el cual por primera vez a la generación más joven se le niega la sucesión natural de sus padres al alcanzar la madurez. La combinación de estos factores crea una generación de jóvenes frustrados, mejor educados que sus padres, pero económicamente dependientes de ellos como consecuencia de la precariedad económica que conlleva la vida en la ciudad. Esta generación frustrada rechaza la ideología de sus padres y se refugia en el fundamentalismo religioso. Todos los Estados de África del Norte se exponen a este riesgo.

Diez años después de la publicación del artículo de Fargues, conocemos la capacidad destructiva del islamismo fundamentalista. Es imposible saber si son las tendencias demográficas las que han causado el auge del islamismo, pero tampoco podemos excluir esta posibilidad. Si la hipótesis de Fargues fuera correcta, el mundo Occidental sería responsable de parte del problema. Como he indicado, algunos de los ingredientes que provocan el auge del islamismo son consecuencia de la escasez de recursos, absorbidos por una urbanización acelerada, en combinación con la falta de un crecimiento económico sostenible.

El desafío más importante al tratar de adaptar una sociedad a los efectos de una transición demográfica y económica es absorber el crecimiento explosivo de la población en edad activa. El incremento de la población significa que cada nueva generación excede en números absolutos a la generación precedente. Cuanto más grande es la tasa de crecimiento, mayor es la diferencia en tamaño entre las dos generaciones. Un aumento del número de nacimientos tiene un efecto retrasado sobre el mercado de trabajo. Cada nueva generación tarda aproximadamente veinte años para alcanzar la edad activa. Así, el



mercado de trabajo de África del Norte está en este momento enfrentándose al reto de absorber la generación que nació hacia 1985. En dicho año la tasa de fecundidad en el norte de África era de unos 6 niños por mujer, frente a la actual de 3.

A medida que las «nuevas» y más numerosas generaciones alcancen la edad activa, la sociedad necesitará desarrollar su capacidad de absorber el aumento en el número de personas en edad activa. La Figura 5 muestra la magnitud del problema en África del Norte y la compara con el desarrollo simultáneo en Europa del Sur. El gráfico se centra en la tasa de rotación de la población en edad activa, es decir, en el número de personas que entran en edad activa (los que cumplen 20-24 años en los siguientes 5 años) menos las personas que salen naturalmente de la edad activa (los que cumplen 65-70 en los siguientes cinco años).

El gráfico muestra unos patrones de cambio muy llamativos. Los países del norte de África han experimentado un aumento ininterrumpido en el número de personas que entran en la edad activa frente a los que salen en cada periodo de cinco años hasta el presente. Durante los próximos cinco años el aumento llegará a su máximo histórico. Entre 2005 y 2010, las personas que entran en la edad activa excederán a las personas que salen en aproximadamente 14 millones de personas. Después de 2010, el aumento neto cada cinco años se es-

tabilizará en alrededor de 10 millones de personas, y se prevé que la velocidad de aumento se irá reduciendo a partir de 2030.

Si la tasa de participación en el mercado de trabajo fuese del 100% entre las personas en edad activa, el aumento actual significaría que los Estados de África del Norte tendrían que crear alrededor de 10 millones de nuevos puestos de trabajo cada cinco años para absorber el incremento de mano de obra. Sin embargo, una tasa de participación del 100% es un supuesto irrazonable para el conjunto de este grupo: según datos del Banco Mundial, sólo son mujeres el 32%-33% de los trabajadores. Así, para simplificar y teniendo en cuenta que no todas las personas en edad activa son contratables, podemos asumir que una tasa razonable de participación sería de alrededor del 70%. También asumimos que las posiciones antes cubiertas por aquellos que dejan la población en edad activa se reciclan. Dados estos supuestos, aproximadamente 7 millones de nuevos puestos de trabajo tendrían que crearse cada cinco años durante las próximas décadas para absorber con éxito el aumento de la población en edad activa. La tarea no es imposible, pero ciertamente bastante difícil.

Juzgando por las experiencias del pasado, la región norteafricana ha sido relativamente exitosa en su labor de crear nuevos puestos de trabajo. Entre 1999 y 2003 el número de personas con empleo creció en aproximadamente 6,5 millones según datos de empleo del Banco Mundial. ¿La pregunta es: puede la región sostener este ritmo de creación de empleo en el futuro?

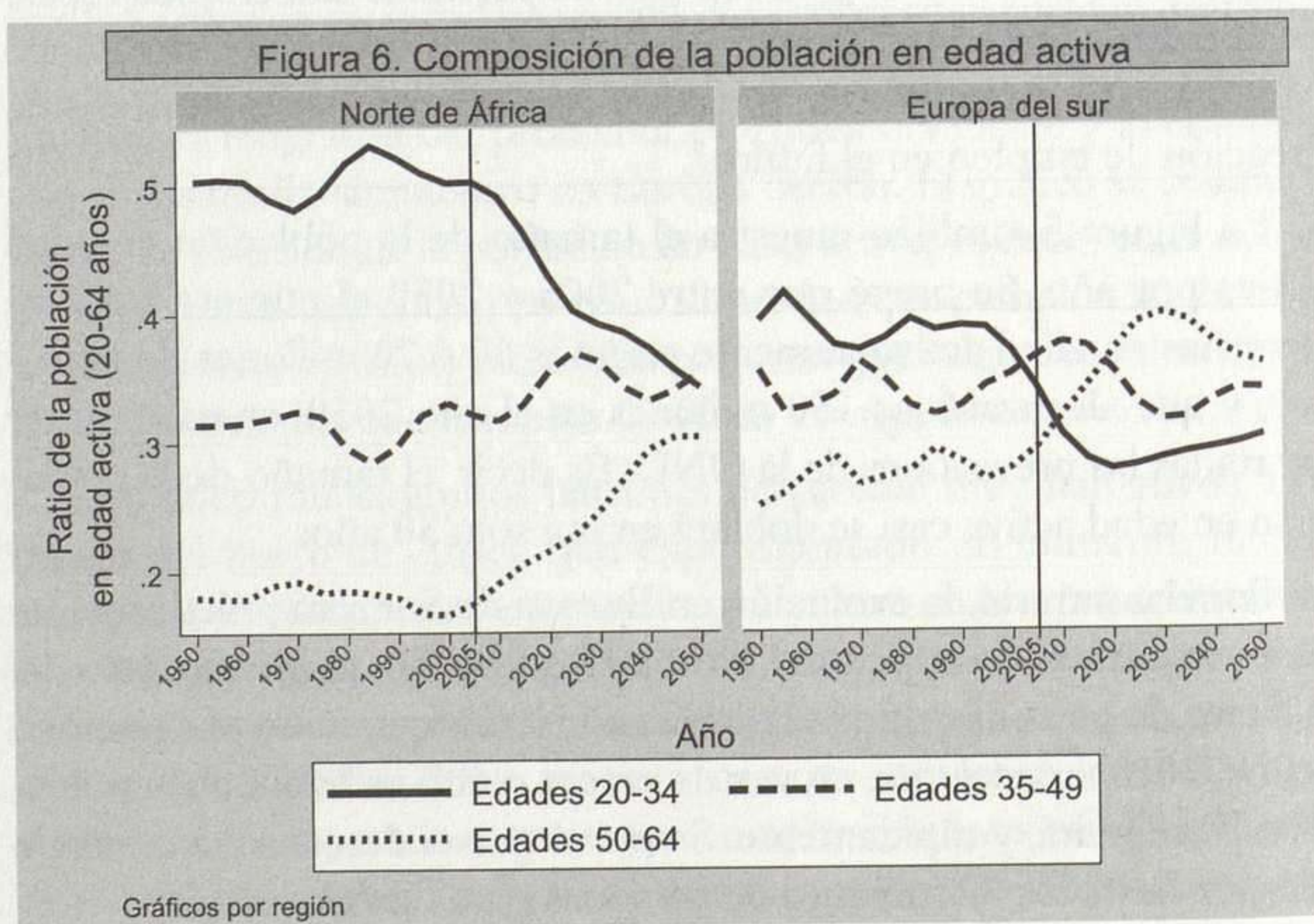
La Figura 5 también muestra el tamaño de la población en edad activa por año. Se prevé que entre 2005 y 2030 el número total de personas en edad activa aumente en unos 60 ó 70 millones de personas, y que alcanzará los 150 millones en el año 2050, en caso de ser acertadas las previsiones de la ONU. Es decir, el tamaño de la población en edad activa casi se doblará en tan sólo 30 años.

Por el contrario, la evolución en Europa de Sur será prácticamente la inversa de la de África del Norte. Desde 1980, el crecimiento del número de personas en edad activa casi ha desaparecido por completo. De 2010 en adelante, en vez de crecer como es habitual, la población disminuirá, y rápidamente. Se prevé que el descenso acumulado alcance hasta los 30 millones de personas para finales de 2050.

Una de las consecuencias de estos acontecimientos es que el tamaño potencial del mercado de trabajo en África del Norte será el doble que el de Europa del Sur en 2050, frente a sólo 2/3 hoy. Sólo podemos especular sobre cuáles serán las consecuencias de tal desarrollo, pero si las economías de África del Norte tienen cierto éxito en su reto de absorber su creciente bolsa de mano de obra, su peso en el mercado internacional y en la región mediterránea podría mejorar sustancialmente. Sin embargo, si fracasa a la hora de absorber el aumento en el número de personas en edad activa podrían surgir otras consecuencias más problemáticas.

El desarrollo casi extremo del tamaño de la población activa implica un aumento en la lucha por obtener un puesto de trabajo, que puede llevar a reducciones en el nivel salarial y, posiblemente, a un grave descontento en el grupo de población en edad activa. Aparte del tamaño de la población en edad activa, hay aspectos cualitativos que deben considerarse al tratar el posible aumento del grado de competencia por obtener un puesto en el mercado de trabajo.

Uno de los aspectos que podría tener implicaciones competitivas más graves es la estructura de edad de las personas en edad activa. Una manera de estudiar este fenómeno es dividir la población activa en grupos según edad.



La Figura 6 muestra un ejemplo de una posible agrupación que pueda resultar útil para la comprensión de los problemas aquí estudiados. Como podemos ver, se producirán interesantes cambios futuros con respecto a la composición de la población activa en ambos litorales del Mediterráneo. La magnitud del cambio es tal que es probable que se endurezca la competencia en el mercado de trabajo y que incluso se reduzca su rendimiento.

En el periodo 1950-2000 el grupo más joven (entre 20-34 años) dominó la población activa a ambos lados del Mediterráneo. En África del Norte incluso constituyó la mayor parte de la población en edad activa. En Europa constituía aproximadamente el 40% de las personas en edad activa. Al avanzar la transición demográfica la composición de la población en edad activa cambia dramáticamente.

En el litoral europeo, en menos de diez años el grupo más joven (de edades entre 20 y 34) pasará de ser el más numeroso a ser el más pequeño de la población en edad activa. En el litoral africano el cambio será aun más dramático en términos absolutos aunque, a pesar de un marcado declive, las personas de edades comprendidas entre 20 y 34 años continuarán siendo el grupo mayor en la población en edad activa a lo largo del periodo observado. Al mismo tiempo, veremos un marcado aumento del tamaño del grupo compuesto por los más viejos (aquellos entre las edades de 50 y 64 años) en la población activa. En el caso de Europa del Sur, a partir de 2020 este grupo será el mayor en la población en edad activa, con un 40% del total, mientras que en África del Norte representará un tercio de la población en edad activa a finales del periodo de estudio.

Hay varias observaciones importantes que pueden extraerse de estos resultados. Tal vez la más obvia es que los mercados de trabajo de ambos litorales están cada vez más subordinados a los trabajadores más viejos. Esto tiene implicaciones para la productividad del mercado. Una manera de aumentar la productividad del mercado de trabajo es mejorar o aumentar el nivel de educativo de los trabajadores (Becker *et al.*, 1990). Cuando la bolsa de trabajadores jóvenes disminuye las industrias nacionales ya no pueden beneficiarse del aumento del capital humano proporcionado por la educación pública de la misma manera que en el pasado. Esto es especialmente el caso de Europa del Sur, que se enfrenta a un declive muy sustancial en la oferta de perso-

nas más jóvenes a medida que generaciones cada vez más pequeñas empiezan a entrar en la población en edad activa. En Europa, mucho más que antes, aumentar la productividad está volviéndose un problema cuya solución consiste más en mejorar la habilidad y conocimiento de los trabajadores más viejos que en su reemplazo por trabajadores más jóvenes, como ha sido la norma hasta ahora.

En África del Norte el cambio estructural del perfil de los trabajadores plantea un problema algo diferente. Como hemos visto, el tamaño de la población en edad activa en África del Norte se expande rápidamente. La explosión en el crecimiento de la población que ha experimentado África del Norte durante los últimos cincuenta años significa que el número de personas mayores es escaso comparado con los más jóvenes. Puesto que la población ya envejece, la explosión en el crecimiento de la población ahora pasará también a incluir a las edades más avanzadas, con la consecuencia de que el número de personas entre 50-64 está empezando a crecer significativamente en la sociedad. Cuando el tamaño de este grupo aumenta también aumenta la competencia entre los trabajadores jóvenes y viejos.

Otra razón por la que este grupo está volviéndose más numeroso tan rápidamente es la mejora en la esperanza de vida en la región, fruto del descenso de la mortalidad. No será hasta el año 2005 que la esperanza de vida en la región esté por encima de los 65 años (en 1950 era de tan sólo 40 años). Por lo tanto, históricamente el grupo entre 50-64 años ha estado poco representado en la población activa por la simple razón de que las personas morían antes de alcanzar los 50 años, o edades comprendidas entre los 50 y los 65. Los trabajadores más viejos son, en otros términos, un fenómeno nuevo en África del Norte, y es probablemente demasiado pronto para decir exactamente cómo la aparición repentina de trabajadores de edades más avanzadas afectará a las oportunidades de las personas en edad activa.

Hay varias situaciones posibles. Habrá una incidencia creciente de personas jóvenes que competirán con éxito con los trabajadores de edades más avanzadas: los trabajadores más jóvenes tienen ventaja frente a los mayores en cuanto a la educación y porque son más baratos a la hora de contratar que los trabajadores mayores. Semejante situación traería un desempleo creciente entre los trabajadores mayores. Un aumento en el desempleo entre los trabajadores mayores podría,

por un lado, conducir a un aumento en su propensión a la emigración, algo relativamente desconocido hasta ahora, o, por otro lado, aumentar la carga que deberán soportar las generaciones más jóvenes.

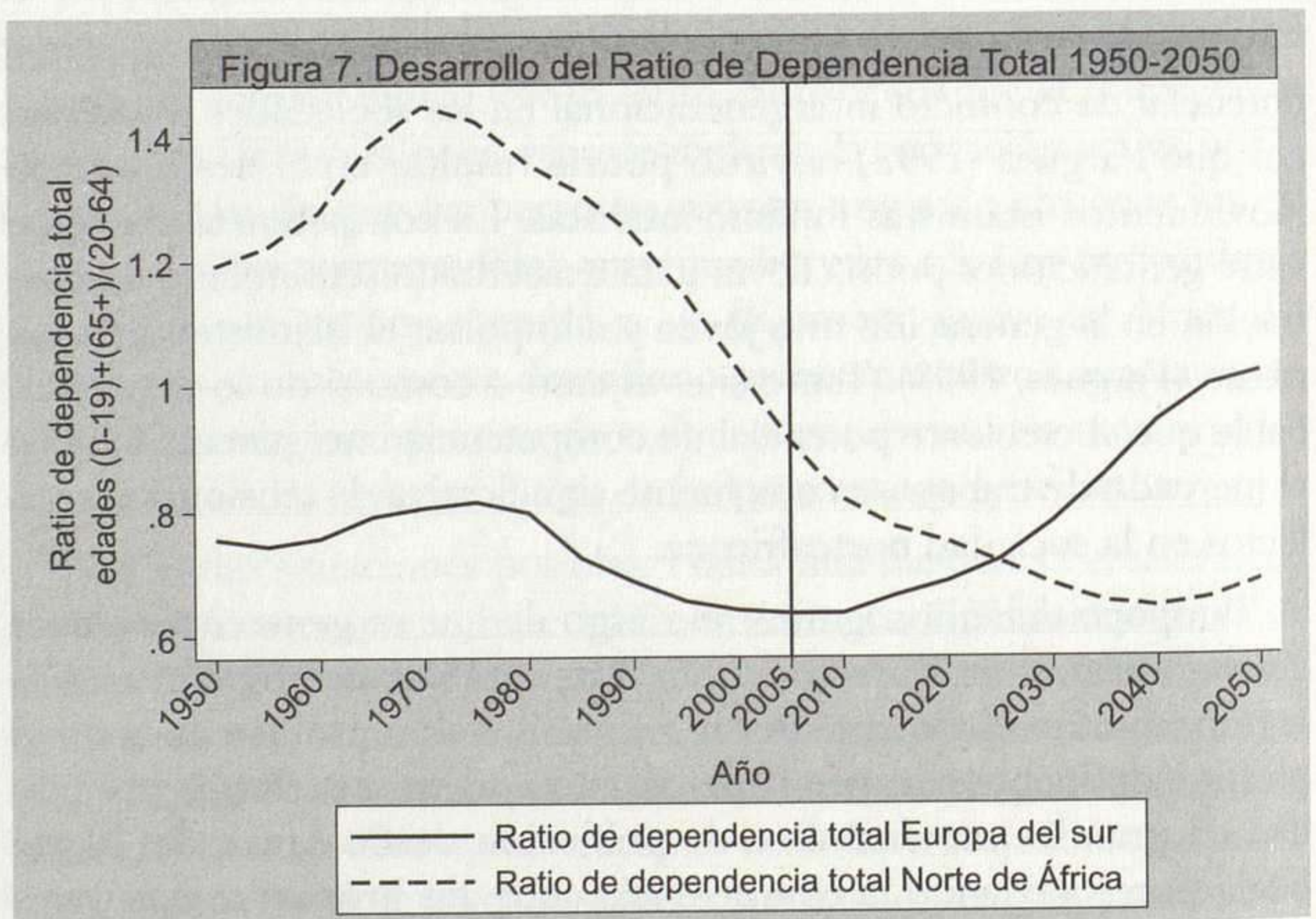
También es posible imaginar una situación inversa, con una reducida tasa de reemplazo de los puestos ocupados por trabajadores mayores, al contrario de lo ocurrido anteriormente cuando la tasa de mortalidad en este segundo grupo era más elevada. Puesto que los trabajadores mayores viven más años, la vida en edad activa probablemente será más extensa. Una menor tasa de reemplazo de trabajadores mayores por generaciones más jóvenes naturalmente reduce la demanda de reemplazo de la mano de obra. Esto implica que los trabajadores más jóvenes podrían enfrentarse a una creciente dificultad a la hora de entrar en el mercado de trabajo. De nuevo, el resultado será un aumento del desempleo, esta vez entre los trabajadores jóvenes. El proceso podría incluso agravarse más si los países de África del Norte se muestran incapaces de crear nuevos puestos de trabajo a un ritmo similar al aumento del tamaño de este grupo, que, como ya hemos visto, será muy significativo. Un retraso en la entrada en el mercado de trabajo también aumentaría el potencial para la emigración y un mayor movimiento de la población, esta vez entre las generaciones más jóvenes. Por supuesto, no hay nada que impida que las dos situaciones puedan darse simultáneamente.

Además, la Figura 6 nos ofrece evidencia empírica del creciente potencial de conflicto intergeneracional en las sociedades musulmanas que Fargues (1993) advirtió podría resultar en el desarrollo de movimientos islamistas fundamentalistas. La competencia creciente entre generaciones podría llevar a un exacerbado sentimiento de frustración en la generación más joven y a impulsar el islamismo más extremo (Fargues, 1993). Tanto si es el caso o como si no lo es, es probable que el creciente potencial de competencia intergeneracional en el mercado de trabajo sea una fuente significativa de tensiones y conflictos en la sociedad norteafricana.

Tampoco debemos ignorar el riesgo de que se generen tensiones y antagonismos en Europa del Sur. Los cambios demográficos en la región podrían fácilmente llevar a una situación problemática en el propio continente europeo. Además, no podemos excluir la posibilidad de grandes movimientos de población desde África del Norte hacia Europa cuando la competencia entre los propios trabajadores

dificulte sus posibilidades de ganarse la vida en el mercado laboral del litoral africano. Mientras Europa ciertamente tiene la capacidad de recibir inmigración procedente de África del Norte, es dudoso que esté disposición de recibir una inmigración masiva y probablemente incontrolada. Ya hemos visto algunas señales del aumento de las tensiones entre comunidad inmigrantes en crecimiento y las poblaciones nativas de Europa (notablemente en Francia y Holanda). La inmigración en masa podría fácilmente llevar a una escalada de la tensión y provocar una confrontación más abierta en el futuro entre las minorías étnicas y la población nativa de Europa del Sur (Homer-Dixon, 1991).

Europa del Sur también se enfrenta al gran desafío de una creciente población de personas mayores. La tasa de dependencia es un importante medio para evaluar el proceso de envejecimiento al que se enfrenta Europa del Sur. Se obtiene agregando el número de personas jóvenes (menos de 20 años) al número de personas mayores (de más de 65 años) y dividiendo la suma resultante por el número de personas en edad activa (de entre 20 y 64 años). Las dos primeras categorías son a menudo (pero no siempre) económicamente dependientes de las personas en edad activa. Así, una tasa de dependencia alta implica que la carga económica para la población en edad activa es alta, y a la inversa si la tasa de dependencia es baja.



Como podemos apreciar en la Figura 7, Europa del Sur está experimentando un momento triunfal en lo que se refiere a su tasa de dependencia. Nunca tan pocas personas han sido dependientes de tanta gente en Europa. Esto está a punto de cambiar. Cuando las generaciones del «*baby boom*» nacidas tras la II Guerra Mundial empiecen a alcanzar la edad de jubilación, las generaciones nacidas en los años 70 y 80, cuando la fecundidad estaba en su mínimo histórico, empezarán a entrar en la población en edad activa. El resultado será un número decreciente de personas en edad activa y un número creciente de personas en edad de jubilación. Juntas, estas dos tendencias causarán un marcado aumento de la dependencia en Europa del Sur a lo largo de la primera mitad de este siglo. Hay un acuerdo general en que la tasa de dependencia creciente en Europa señala entre otras cosas que los generosos sistemas de pensiones serán insostenibles en un futuro muy cercano (Sandell, 2003B).

Solucionar el problema requiere reformas incómodas, y los Estados del bienestar deben proponer formas alternativas de financiar las pensiones. Alemania y Francia ya han anunciado cambios en esa dirección en medio de protestas políticas masivas. Se avecinan reformas difíciles en muchos países europeos y es previsible que más de un gobierno caiga antes de que la realidad política europea se ajuste a su realidad demográfica. La incapacidad de resolver el problema del envejecimiento podría generar una crisis económica excepcional. El aumento en la carga económica que imponen las pensiones podría fácilmente llevar a una situación de penuria relativa en la que tanto las personas en edad activa como las jubiladas verían un deterioro económico continuo y una reducción en los servicios prestados por el Estado del bienestar. Esto podría llevar a un incremento en la rivalidad entre diferentes grupos de la sociedad. Es previsible que cada grupo de interés intente mantener su nivel de vida constante a pesar de la disminución en los recursos económicos (Homer-Dixon, 1991). Finalmente, como el problema demográfico europeo coincide en el tiempo con el problema demográfico norteafricano, la capacidad de Europa de proporcionar recursos para paliar el problema demográfico norteafricano se volverá cada vez más limitada. Esto puede complicar aún más la situación en el área mediterránea.

La Figura 7 no es portadora solamente de malas noticias. Mientras Europa empieza a experimentar un aumento en su tasa de dependen-

cia, los Estados norteafricanos previsiblemente verán un declive muy significativo en la suya. La importancia de este factor no debe ser infravalorada.

Claramente, es probable que el muy favorable desarrollo en la tasa de dependencia en África del Norte proporcione nuevas oportunidades para esta región. En el pasado, África del Norte se enfrentaba a una situación en la que la mitad de su población tenía una edad inferior a los 15 años. A medida que descienda su tasa de fecundidad, el número de jóvenes respecto a las personas en edad activa disminuirá con gran rapidez. Esto abrirá la posibilidad de liberar recursos que tradicionalmente se han destinado al mantenimiento de las familias grandes y dedicarlos en cambio a la inversión para favorecer el desarrollo, y la economía. *Caeteris paribus*, el desarrollo demográfico tras la caída de la tasa de dependencia en África del Norte implicará que en el futuro un aumento menor en los ingresos de un trabajador africano resultará en un aumento mayor en la renta per cápita (Malmberg y Lind, 2004; Bloom y Freeman, 1986). Estos recursos podrían ser vitales cuando la sociedad africana se enfrente con los problemas derivados de la despoblación rural, y facilitar el proceso de adaptación a un crecimiento elevado de la población urbana. Además, una tasa de dependencia en descenso quizá sea una indicación temprana de que al norte de África le ha llegado el turno de gozar de un crecimiento económico sostenible, reduciendo así el diferencial económico que le separa de sus vecinos ricos en el norte.

CONCLUSIONES

La transición demográfica que estamos experimentando promete ser apasionante, pero también es potencialmente peligrosa y con una creciente probabilidad de que derive en tensiones y disputas nacionales e internacionales al ir enfrentándose cada Estado con sus nuevas condiciones demográficas.

Sólo podemos especular sobre la naturaleza de los conflictos y tensiones que es probable que surjan como resultado del desarrollo demográfico en África del Norte y en Europa del Sur. La literatura sobre estos temas está lejos de ser unánime en cuanto a proporcionar pistas

sobre los tipos de enfrentamientos que cabe esperar. Tampoco hay mucha evidencia empírica sobre lo que probablemente vaya a pasar, porque las tendencias demográficas son realmente extremas y por tanto no tienen precedentes históricos fiables (McNicoll, 1984). A pesar de que las evidencias no son concluyentes con respecto a la relación entre la demografía y la seguridad, la comunidad científica está más o menos de acuerdo en dos cuestiones. En primer lugar, cualquier conflicto o tensión que pueda estar relacionada con cambios demográficos probablemente tendrá ramificaciones tanto nacionales como internacionales (Homer-Dixon, 1991; Bloom y Freeman, 1986; McNicoll, 1984). En segundo lugar, la probabilidad de que los conflictos generados por cambios demográficos resulten en un estado de guerra en un futuro cercano es real (Tir y Diehl, 1998), aunque se estima que el riesgo es muy reducido (McNicoll, 1984).

Para poder hacer frente a sus realidades demográficas, tanto europeos como norteafricanos necesitan una gestión acertada. Los países de África del Norte presentan esencialmente problemas relacionados con la escasez de recursos: alimentos y agua. Pero la sociedad norteafricana también adolece de una falta de recursos para absorber su creciente población urbana, siendo el obstáculo principal la carencia de crecimiento económico.

Europa no es responsable de la falta de crecimiento económico en África del Norte pero probablemente contribuye indirectamente a la situación. A través de una cooperación más amplia, Europa puede contribuir tanto con recursos como con oportunidades que resulten útiles para mejorar el crecimiento económico en toda la región del Mediterráneo. Hasta ahora la diferencia en riqueza entre ambos litorales ha ido en aumento. En esto la región es un caso único, pues en otras áreas en las que países desarrollados lindan con otros en vías de desarrollo las diferencias tienden a reducirse (Moré, 2003). La única manera factible de evitar un aumento de la tensión en la región mediterránea, y por tanto de reducir la probabilidad de conflictos en el futuro, es poner freno a esta peligrosa situación e invertirla.

La consecuencia más obvia de un fracaso general de los esfuerzos políticos de asimilar y ajustar la sociedad actual a la nueva realidad demográfica es indudablemente un elevado riesgo de que se produzcan grandes movimientos de población. En sí, esto no tiene por qué

ser negativo. Hemos visto que Europa del Sur y África del Norte están enfrentadas a tendencias opuestas en cuanto al tamaño de sus poblaciones en edad activa. Es decir, hay un potencial de beneficio mutuo derivado de un movimiento de la población. Europa del Sur está a punto de experimentar un descenso en su población activa por primera vez en su historia, mientras que África del Norte se enfrenta a la oferta más alta de población activa de su historia. De la misma manera que los países europeos solucionaron parte de la tensión resultante de sus procesos de industrialización de finales del siglo XIX y principios del XX mediante la emigración en masa (Kuznets, 1973), Europa del Sur puede ofrecer una oportunidad parecida a África del Norte, compensando así su propio déficit demográfico y al mismo tiempo reduciendo en cierto modo las tensiones que viven hoy las sociedades africanas.

El problema, sin embargo, es que Europa no puede absorber toda una ola masiva de inmigración. Por consiguiente, la inmigración no es una solución al problema demográfico africano, sino más bien un pequeño alivio que resulta más beneficioso para Europa que para África del Norte. La única manera de enfrentarse a los problemas que provienen del rápido crecimiento de la población africana es una planificación integrada de acciones políticas en ambas orillas del Mediterráneo.

Finalmente, el islamismo fundamentalista puede crecer como movimiento fruto de una mala gestión de la nueva realidad demográfica. Aunque probablemente sea la mayor amenaza mundial en términos de seguridad que se deriva de los cambios demográficos actuales en África del Norte (Fargues, 1993), el factor demográfico no es nada más que una parte pequeña de este complejo problema. Aun así, el riesgo no debe infravalorarse.

BIBLIOGRAFÍA

- Auvinen, J. (1997): «Political Conflict in Less Developed Countries 1981-89». Vol. 34, No.2, *Journal of Peace Research*.
- Becker, G. S.; Murphy, K.M. y Tamura, R. (1990): «Human Capital, Fertility, and Economic Growth.» *The Journal of Political Economy*, 98.
- Bloom, D. E. y Freeman, R. B. (1986): «The Effects of Rapid Population Growth on Labor Supply and Employment in Developing Countries». Vol. 12, No.3, *Population and Development Review*.
- Fargues, P. (1993): «Demography and Politics in the Arab World». Vol. 5, *Population: an English Selection*.
- Goldstone, J.A. (1986): «State Breakdown in the English Revolution: A new Synthesis». Vol. 92, No. 2, *American Journal of Sociology*.

- Homer-Dixon, T. F. (1991): «On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict». Vol. 16, No. 2, *International Security*.
- Keyfitz, N. (1980): «Population Appearances and Demographic Reality». Vol. 6, No. 1, *Population and Development Review*.
- Kuznets, S. (1973): «Modern Economic Growth: Findings and Reflections». Vol. 63, No. 3, *The American Economic Review*.
- Lowry, I. S. (1990): «World Urbanization in Perspective». Vol. 16, Supplement. Resources, Environment, and Population: Present Knowledge, Future Options, *Population and Development Review*.
- Malmberg, B. y Lind, T. (2004): «Ålderschock gynnar globala tillväxten» *Dagens Nyheter*, January 7, Sweden.
- McNicoll, G. (1984): «Consequences of Rapid Population Growth: An Overview and Assessment». Vol. 10, No. 2, *Population and Development Review*.
- Moré, I. (2003): «El Escalón Económico entre Vecinos: El caso España-Marruecos». Documento de Trabajo n.º 9 Real Instituto Elcano.
- Sandell, R. (2003A): Envejecimiento de la población: una oportunidad para la reforma de las políticas públicas, Documento de Trabajo n.º 20, Real Instituto Elcano.
- Sandell, R. (2003B): Ageing Populations: An Opportunity for Public Policy Reform, Working Paper n.º 20, Real Instituto Elcano.
- Tir, J. y Diehl, P. F. (1998): «Demographic Pressure and Interstate Conflict: Linking Population Growth and Density to Militarized Disputes and Wars, 1930-89». Vol. 35, No.3, Special Issue on Environmental Conflict, *Journal of Peace Research*.

LA ILUSTRACIÓN liberal

Revista española y americana

Diciembre de 2004

NÚMERO

21
22

Constitución Europea: Argumentos para el 'No'

(CON ARTÍCULOS DE FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS, ALBERTO RECARTE, CARLOS SEMPRÚN MAURA, ALBERTO MÍGUEZ, GEES...)



• • •
VARIA

ALBERTO RECARTE: Los precios en el mercado inmobiliario español
CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN: Retórica antiliberal
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ: Abundancia sin límites
CRISTINA LOSADA: La soledad del antiguo izquierdista
ALBERT ESPLUGAS: Una argumentación liberal pro-vida

• • •

ESPECIAL FILOSOFÍA (ROGELIO FERNÁNDEZ DELGADO,
FRANCISCO CARPINTERO Y ALEJANDRO TAGLIAVINI)

• • •

RETRATO: José María Aznar

• • •

IDEAS EN LIBERTAD DIGITAL • RESEÑAS
EL LIBRO PÉSIMO • EL RINCÓN DE LOS SERVILES

• • •

Y acceda a los contenidos
de todos los números anteriores
en nuestra página web

www.lailustracionliberal.com

E-MAIL: lailustracion@libertaddigital.com

LAS NACIONES UNIDAS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. PRIMER BALANCE

Las Naciones Unidas han sido conscientes de los problemas planteados por el terrorismo desde el comienzo de la década de los años setenta. La sensibilidad mostrada ante el fenómeno desde entonces ha dependido de la que fuera la experimentada por el conjunto de la comunidad internacional en cada momento. Los tratamientos recomendados, siempre en el marco del respeto a la legalidad internacional y a las obligaciones de cooperación entre los Estados que forman la sustancia de la Carta, han ido adquiriendo un carácter progresivamente reforzado e incluso obligatorio, en la medida en que el terrorismo ampliaba su campo de acción y su letalidad.

El conjunto de medidas para la lucha contra el terrorismo que hoy impone, porque de una imposición se trata, las Naciones Unidas a los 191 Estados miembros forma una malla sólida, razonable y contundente. A pesar de algunas vacilaciones iniciales, y de algunas reticencias subsistentes, el cuerpo político y doctrinal antiterrorista de la ONU configura hoy un punto de referencia inexcusable a la hora de enfrentarse con el riesgo de seguridad más grave y visible para la humanidad en el comienzo del siglo XXI. Las Naciones Unidas, tantas veces acusadas de inermes o de inanes a la hora de enfrentarse a los problemas de la humanidad, han terminado por definir su papel en la lucha contra el terrorismo de una manera nítida. Al hacerlo han comprometido en el empeño autoridad y legitimidad. La descripción de lo que sigue debería ser contemplada en esa perspectiva.

Javier Rupérez es Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

Ha sido el Consejo de Seguridad (CS) el principal protagonista en la asunción de las responsabilidades antiterroristas por parte de las Naciones Unidas. Y, en contra de la creencia generalizada, lo ha venido haciendo desde el comienzo de la década de los años noventa. Es decir, casi diez años antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. A finales de los ochenta, diversos actos terroristas de grueso calibre agitan la conciencia de la humanidad. En diciembre de 1988 el vuelo 103 de la compañía Pan-Am cae sobre la localidad escocesa de Lockerbie como consecuencia de una bomba colocada a bordo del avión. Mueren las 259 personas que se encontraban a bordo y 11 más sobre el terreno. En septiembre del 1989 el vuelo 772 de la compañía aérea francesa UTA cae sobre Níger, tras la explosión de un artefacto que se encontraba en el interior de la aeronave. Mueren 171 personas. En ambos casos se presume la participación de Libia en la realización de los atentados. En 1995, el 26 de junio, varios terroristas atentaron, infructuosamente, contra la vida del Presidente de Egipto, Hosni Mubarak, que asiste a una reunión de la Unión Africana en Addis Abeba, capital de Etiopía. Tres de los sospechosos se refugian en Sudán, cuyo Gobierno se muestra remiso a conceder las extradiciones que Egipto solicita.

En enero de 1992 la Resolución 731 del Consejo de Seguridad previno a Libia sobre las consecuencias de sus actos en el caso de que no accediera a entregar los sospechosos de los atentados. En marzo del mismo año la Resolución 748, que califica las acciones libias de amenaza contra la paz y la seguridad internacionales, invoca el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas –«acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión»– para imponer un amplio y duro catálogo de sanciones, reforzadas en 1993 con la Resolución 883 y en 1998 con la Resolución 1192. Los dos ciudadanos libios sospechosos de haber organizado los atentados llegaron a los Países Bajos, donde habrían de ser juzgados por jueces escoceses y de acuerdo con la legislación escocesa, el 5 de enero de 1999. El CS levantó las sanciones tres días después. Por su parte, y como consecuencia del paquete de sanciones impuesto por el CS, en 1996 Francia había obtenido de Libia satisfacción parcial a sus demandas. La justicia francesa juzgó y condenó a seis personas de nacionalidad libia por su participación en el atentado contra el avión de la UTA.

Como consecuencia de la negativa sudanesa a conceder la extradición de los sospechosos de haber atentado contra la vida del Presidente Mubarak, el CS impuso sanciones económicas a Jartum a través de la Resolución 1054. Es también una Resolución aprobada bajo la autoridad del Capítulo VII de la Carta, ampliada en 1996 por la Resolución 1070, que llega a incluir la prohibición de vuelos comerciales a Sudán. Las sanciones, que tuvieron un claro efecto sobre el comportamiento de las autoridades sudanesas, fueron levantadas el 28 de septiembre de 2001 por la Resolución 1372 tras los atentados del 11 de septiembre. Cabe recordar que Sudán había previamente decidido expulsar del país a gentes varias sospechosas de terrorismo, entre ellas al propio Bin Laden, y que en agosto de 1998, como represalia a los ataques terroristas que sufrieron las embajadas americanas en Nairobi y en Dar es Salaam, aviones americanos bombardearon una fábrica de productos farmacéuticos en Jartum.

En efecto, el 7 de agosto de 1998 dos poderosos artefactos explosivos estallaron simultáneamente en las embajadas americanas en Kenia y Tanzania. Los atentados produjeron en total 263 muertos, de los que 12 eran americanos, y más de 5.000 heridos, de los que 15 eran americanos. En la Resolución 1189, adoptada por el CS inmediatamente después, la condena tajante de los atentados se añade a la exigencia de cooperación de los miembros de la ONU en la investigación sobre los culpables. Que de manera cada vez más precisa son identificados como los miembros del grupo de seguidores de Bin Laden integrados en la agrupación Al Qaida, por aquel entonces residentes en Afganistán bajo el amparo del gobierno de los talibanes. El CS actúa en consecuencia e impone sanciones económicas varias al gobierno de Afganistán a través de la Resolución 1267, adoptada en octubre del año 1999, amén de exigir a los talibanes que cesen en su apoyo al terrorismo internacional y concedan la extradición de Bin Laden. El régimen de sanciones se refuerza en diciembre del año 2000 con la Resolución 1333 (congelación de haberes financieros, embargo de armas) y con la Resolución 1363, de julio del año 2001, que establece un sistema de seguimiento para el cumplimiento de las sanciones. Ello se tradujo en una agrupación de expertos dedicados a facilitar la realización de las

tareas del Comité creado por la Resolución 1267 en la imposición de sanciones contra Al Qaida y contra los talibanes. El Comité, como luego los creados por las Resoluciones 1373 (2001) y 1540 (2004), se configura como un órgano subsidiario del CS y con los mismos miembros. En julio de 2001, pues, en una acción que había comenzado dos años antes, el CS de la ONU, daba reiterada y preocupada noticia del riesgo que para la paz y seguridad internacionales suponía la alianza entre Al Qaida y los talibanes. Faltaban pocas semanas para comprobar en toda su dimensión el horror que esa cooperación entrañaba.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pennsylvania producen la conmoción de todos conocida y recordada. Naciones Unidas no es ajena a la misma. El Consejo de Seguridad, con fecha 12 de septiembre, aprueba por unanimidad una Resolución, la 1368, cuya principal y novedosa característica radica en la invocación al derecho a la legítima defensa individual o colectiva, en los términos del artículo 51 de la Carta, en la hora solemne de exigir a todos los Estados miembros que cooperen «para someter a la acción de la justicia a los que han perpetrado, organizado o patrocinado» tales actos terroristas y a «redoblar sus esfuerzos para prevenir y evitar actos terroristas». La invocación a la legitimidad de la acción militar para defenderse contra actos terroristas no está muy lejana.

El 28 de septiembre, pocos días más tarde, el Consejo de Seguridad, invocando el Capítulo VII de la Carta, aprueba por unanimidad la Resolución 1373, que sin duda supone un salto cualitativo y cuantitativo importante en la dirección que el Consejo, y en definitiva Naciones Unidas, pretende imponer al tratamiento del terrorismo. La Resolución, que tiene carácter vinculante para todos los Estados miembros, impone una amplia serie de medidas legales, financieras, policiales y de cooperación. Exige además que todos los Estados miembros ratifiquen y cumplan las convenciones internacionales y protocolos relativos al terrorismo¹. La Resolución 1373 crea el Comi-

¹ Convención de Tokyo sobre Delitos y otros Actos cometidos a bordo de Aeronaves (1963); Convención de La Haya para la Represión de la Toma Ilícita de Aeronaves (1970); Convención de Montreal para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil (1971); Convención sobre la Prevención y Sanción de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas (1973); Convención contra la Toma de Rehenes (1979); Convención sobre la Protección Física

té Contra el Terrorismo (CCT), órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, compuesto, como el creado por la Resolución 1267, por los mismos miembros del Consejo, y encargado de vigilar el cumplimiento de la Resolución. Para lo cual ésta instruye al CCT para que comience sus trabajos pidiendo a todos los Estados miembros un informe sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las decisiones del Consejo.

Al promulgar la Resolución 1373 el Consejo de Seguridad inaugura un terreno prácticamente desconocido en la vida política y jurídica de la organización, cual es el de imponer obligaciones genéricas legales sobre los Estados miembros. Que, entre otras cosas, se encuentran ahora bajo la obligación de criminalizar el terrorismo, sus practicantes, sus cómplices y sus financiadores, amén de proceder a la ratificación de las convenciones internacionales antiterroristas y a su traslación a las leyes domésticas. La Resolución 1373, a diferencia de las anteriormente referidas, no impone sanciones a países responsables de actos considerados como reprobables por el Consejo o a los que con ellos colaboran, sino que decide sobre las conductas que los Estados miembros –todos ellos–, deben observar en la lucha contra el terrorismo. Naturalmente, no cabe excluir que el Consejo, presumiblemente a instancias del CCT, eventualmente decida la adopción de sanciones o de otras medidas contra los incumplidores. Pero esa no es la primera lógica de la Resolución 1373. Y tampoco la situación actual de sus actividades. El CCT, en los tres años de su existencia, ha mantenido una activa y exigente correspondencia con los Estados miembros. Han sido ya cuatro las oleadas de informes solicitados y recibidos de los Estados miembros, con resultados mixtos. Mientras que las primeras exigencias informativas fueron respondidas por la totalidad de los 191 miembros de la ONU, las sucesivas han tenido menor respuesta, y hoy un tercio de los Estados miembros se encuentra

del Material Nuclear (1980); Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos al Servicio de la Aviación Civil (1988); Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas ubicadas en la Plataforma Continental (1988); Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (1988); Convención sobre el Mercado de los Explosivos Plásticos con el propósito de su Detección (1991); Convención sobre la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas (1997); Convención sobre la Represión del Financiamiento del Terrorismo (1999).

retrasado en la presentación de las correspondientes contestaciones. Pero resulta evidente que la Resolución 1373 ha contribuido a la creación de un estado de ánimo, donde nadie hoy osa poner en duda la obligación que abarca a todos los Estados miembros de colaborar en el progresivo acorralamiento de la actividad terrorista. Y, como queda reseñado, esa no es una obligación declamatoria sino un extremo legal y políticamente exigible por el Consejo de Seguridad².

Desde el comienzo de sus actividades el CCT contó con un pequeño número de expertos y de personal de apoyo. A finales del año 2003 algunos de sus miembros pusieron de relieve la insuficiencia de tales medios y la necesidad de proceder a la «revitalización» del Comité. Un informe a tales efectos fue aprobado, no sin ciertas dificultades, por el CCT el 19 de febrero del año 2004. El informe, que proponía entre otras medidas la creación de una Dirección Ejecutiva Antiterrorista (DEAT) al frente de la cual se encontraría un Director Ejecutivo, fue endosado unánimemente por el Consejo de Seguridad en la Resolución 1535, del 26 de marzo del mismo año. Presidía en aquellos momentos el CCT el Embajador permanente de España ante Naciones Unidas, Inocencio Arias. Y, cabe recordarlo, pocos días antes, el 11 de marzo de 2004, habían tenido lugar en Madrid los terribles atentados terroristas que acabaron con la vida de más de 190 personas. No cabe disociar ambos datos –España había sido uno de los más firmes defensores del reforzamiento del CCT desde que fuera elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2003/2004– para explicar la relativa premura con que el plan de revitalización fue aprobado tras su lenta y dificultosa elaboración. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1535, el

² Después de tres años de experiencia en el seguimiento de los informes que el CCT recibe de los Estados miembros, una primera y provisional evaluación permite comprobar que, de un total de 191 –el censo actual de las NN.UU.– unos 35 cumplen sobradamente con sus obligaciones bajo la Res. 1373; unos 60, con diversa fortuna, se esfuerzan por hacerlo y están en el camino de conseguirlo; otros tantos, sin duda por problemas de orden económico y material, se encuentran en condiciones precarias de cumplimiento, y finalmente son otros 35 los que, bajo pretextos varios, muestran poca voluntad política para hacer frente a las obligaciones antiterroristas que el Consejo de Seguridad impone. Para los 120 con dificultades materiales de cumplimiento el CCT y la DEAT diseñan programas de asistencia técnica, en colaboración con otras agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales. Está todavía por describir el procedimiento a seguir contra los incumplidores. Cabe recordar a tales efectos que el CCT, como sus congéneres de las Res. 1267 y 1540, funciona sobre la base del consenso de los 15 miembros.

Secretario General, con la aprobación del Consejo de Seguridad, procedió al nombramiento del Director Ejecutivo de la DEAT el 18 de mayo de 2004. El nombramiento –honor y responsabilidad– recayó sobre mi persona. Tomé posesión el 28 de junio. Desde entonces he concentrado mis actividades en lo que constituye la parte fundamental y permanente de mi mandato –proponer esquemas de trabajo al CCT, poner en práctica sus decisiones, desarrollar esquemas de cooperación con Estados y organizaciones internacionales– y en aquello más urgente e inmediato, cual es obtener la aprobación presupuestaria de los gastos de la nueva entidad y proceder al reclutamiento de sus integrantes –20 expertos y 14 personas de apoyo administrativo y técnico. La DEAT debería estar «operativa» en las primeras semanas del año 2005.

En la actividad desarrollada por el Consejo de Seguridad a la hora de diseñar una estrategia global contra el terrorismo, cabe destacar la reciente aprobación de dos Resoluciones. La primera, la 1540, de 28 de abril de 2004, contempla con preocupación la posibilidad de que el terrorismo haga uso de las armas de destrucción masiva –químicas, biológicas y nucleares. El texto de la Resolución, también situado bajo la autoridad obligatoria del Capítulo VII de la Carta, impone una detallada serie de obligaciones a los Estados miembros para evitar que los terroristas, aquí calificados de «agentes no estatales», se hagan con ese armamento. Especifica la Resolución que los agentes a los que se hace referencia son los aludidos en las Resoluciones 1267 –Al Qaida y talibanes– y 1373 –terroristas en general– y crea también, por un tiempo no superior a dos años, un Comité, órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, para vigilar el cumplimiento de sus mandatos.

A diferencia de otras Resoluciones anteriores y posteriores del Consejo, la 1540 no está inspirada ni motivada por ninguna acción terrorista previa y supone un esfuerzo notable, obtenido no sin dificultades, dicho sea de paso, para «legislar» sobre acontecimientos que la comunidad internacional querría por todos los medios evitar. Perteneció pues a una escuela de pensamiento más previsor que reactiva. E indica una disposición de ánimo contundente. El objetivo es utilizar todos los instrumentos políticos y legales que el Consejo tiene a su alcance para cerrar cualquier resquicio que pudiera existir en la acción internacional contra el terrorismo.

Una segunda y reciente Resolución del Consejo merece también mención. Se trata de la 1566, aprobada por unanimidad, bajo el Capítulo VII de la Carta, el 8 de octubre de 2004. Tuvo como origen un proyecto presentado por la Federación Rusa tras los atentados terroristas de Beslán en la República rusa de Ossetia de Norte, que en septiembre de 2004 costaron la vida a unas 350 personas, de las cuales 11 pertenecían a las fuerzas de seguridad rusas y 172 eran niños, alumnos de la escuela en cuyo interior los terroristas realizaron su acción. El Consejo, a través de su Presidente, condenó los hechos de manera tajante, recordando que el terrorismo «constituye una de las amenazas más serias contra la paz y la seguridad internacionales», añadiendo que «todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, sea quien sea el que los cometa y en cualquier circunstancia». Se sitúa la Resolución en la línea marcada por la 1373, pero a su vez contiene novedades importantes en el desarrollo de la acción antiterrorista del Consejo. De una parte, contiene un bosquejo de definición de lo que sea el terrorismo, junto con una condena sin fisuras del mismo y de sus pretendidas justificaciones. Es suficientemente conocido el hecho de que las Naciones Unidas, después de cerca de cuatro décadas de intentarlo, ha sido hasta ahora incapaz de consensuar una definición del terrorismo. La Resolución 1566 intenta cortar el complicado nudo gordiano con este texto, recogido en su tercer párrafo operativo: «Recuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar, e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza».

La Resolución 1566, por otra parte, establece un grupo de trabajo «para que estudie y le presente recomendaciones sobre las medidas prácticas que se han de imponer contra las personas, los grupos y las entidades involucrados en actividades terroristas o asociados con ellas, además de las ya enunciadas por el Comité de Sanciones contra Al Qaida y los Talibanes...» y «considere la posibilidad de establecer un fondo internacional para indemnizar a las víctimas de actos de terrorismo y sus familias...». Con ello se abren dos nuevas vías en el conjunto de la política antiterrorista de la ONU. Una, que podría desembocar en una lista universal de grupos e individuos dedicados al terrorismo. Otra, llevaría eventualmente a la constitución de un fondo de ayuda a las víctimas del terrorismo. La versión final que la Resolución 1566 ofrece difiere del borrador original en la inmediatez de las decisiones: será un grupo de trabajo el que estudie ambas cuestiones y someta al Consejo las correspondientes propuestas. Y es de prever que las tareas del grupo de trabajo no resulten fáciles ni cómodas. Con todo, y en los tres aspectos reseñados, la Resolución 1566 supone avances muy significativos en el empeño del Consejo de Seguridad de cerrar las escapatorias que el sistema de cooperación internacional todavía pudiera ofrecer a los terroristas.

La reciente e intensa actividad del Consejo de Seguridad por lo que se refiere al terrorismo no debería relegar al olvido las numerosas ocasiones en que la Asamblea General (AG) se ha pronunciado sobre el tema en el curso de los últimos treinta años. Esos pronunciamientos responden inevitablemente a las diversas urgencias de los cambiantes tiempos. Su conjunto, sin embargo, tomado en esa perspectiva, ofrece varios elementos dignos de ser tenidos en cuenta. El primero es que la sustancia, y en muchas ocasiones la letra, de las decisiones adoptadas en los últimos tiempos por el Consejo de Seguridad provienen de textos aprobados por la Asamblea General en diversos momentos de su trayectoria. El segundo permite apreciar una evolución homogénea en las Resoluciones de la Asamblea General, de manera que, a pesar de los diferentes énfasis que las circunstancias imponían, el conjunto mantiene una indudable y enriquecedora coherencia. El tercero debe recordar que ha sido precisamente la actividad normativa de la AG la que ha dado a la luz las convenciones y protocolos internacionales sobre el terrorismo que hoy destaca el Consejo de Seguridad

como obligación básica de los Estados miembros en la lucha global contra el terrorismo. Desde el punto de vista sustancial sería incierto afirmar que Asamblea y Consejo mantienen puntos de vista diferentes o encontrados sobre el tratamiento que se debe aplicar al terrorismo.

La Asamblea, como es por otra parte lógico dada su composición y sus normas para la adopción de decisiones, ofrece un adecuado reflejo de lo que ha sido la sensibilidad mundial sobre el terrorismo a lo largo de las últimas tres décadas. Se han distinguido a tales efectos tres épocas³: una primera, que abarcaría desde 1972 hasta 1991, caracterizada, en los mismos términos adoptados por las Resoluciones del momento, por ofrecer «medidas para prevenir el terrorismo»; una segunda, desde 1993 hasta 2001, en donde la consideración básica es «derechos humanos y terrorismo»; una tercera, y actual, en donde el concepto, y la terminología, evoluciona hacia las «medidas para eliminar el terrorismo». No hace falta recordar que para estas consideraciones, como para tantas otras en la vida internacional, existe un antes y un después de la Guerra Fría. La desaparición del enfrentamiento bipolar revierte muy favorablemente sobre la Organización internacional y sobre sus capacidades de actuación, tantas veces bloqueadas durante el tiempo en que duró la contraposición de los bloques. El año 1991, en esa perspectiva, y el cambio que refleja en la orientación de la política antiterrorista de la AG no son una coincidencia. Lo mismo podría decirse del funcionamiento del Consejo de Seguridad.

Lo que en muchos medios se añora, sin embargo, a veces con mucho reproche, es que las Naciones Unidas, y más específicamente la Asamblea General, no hayan sido capaces hasta la fecha de fijar una definición comúnmente aceptada del terrorismo. Y que tampoco hayan sido capaces de concluir una Convención Global Antiterrorista de la que la definición debería formar parte fundamental. En efecto, y desde 1996, la AG debate un borrador que tuvo su origen en una propuesta de la India y que, en la práctica, estaría cercano a su finalización si no fuera por la persistencia de los desacuerdos sobre el tema

³ Consúltese, por ejemplo, el artículo de M. J. Peterson en Boulden y Weiss (2004). También de mucho interés es Bianchi (2004).

de la definición. Las dificultades de ésta son claras: para unos, que el término terrorista pueda ser aplicado a los llamados movimientos de liberación y a sus componentes; para otros, que los movimientos de liberación y sus componentes pudieran sentirse autorizados a utilizar con impunidad métodos terroristas. Recuérdense la conocida y escéptica expresión: «tu terrorista es mi combatiente por la libertad». Una tercera dificultad proviene del interés mostrado por algunos países en separar las normas contraterroristas de las aplicables a los conflictos bélicos y a las fuerzas armadas que en ellos participan, interés paralelo al mostrado por otros para conseguir lo contrario.

Y, efectivamente, para cerrar el acelerado círculo de la política global antiterrorista que la ONU hoy lidera, sería positivo contar con la una, la Convención, y con la otra, la definición. No cabe achacar la dificultad de conseguirlo a otra cosa que no sea la mostrenca voluntad de los Estados miembros, dicho sea en descargo de la misma ONU. Pero, mientras tanto, sería maliciosamente inexacto afirmar que la Organización no puede hacer nada para ayudar a los Estados en la lucha antiterrorista o, de manera más radical, que nada se puede hacer en ausencia de una definición. Ambas interesadas tentaciones chocan hoy con una muy diferente realidad. Por una parte, la inexistencia de la definición del terrorismo no impidió en su momento que la AG propusiera las convenciones y protocolos antiterroristas que hoy el Consejo de Seguridad ha convertido en obligatorios para los Estados miembros. Y tales instrumentos internacionales contienen la descripción de todos aquellos actos asociados con la comisión de actos terroristas. Por otra, la evolución de la conciencia de la comunidad internacional sobre el terrorismo, tal y como esa conciencia queda reflejada en las decisiones de la AG y del CS de las Naciones Unidas, permiten comprobar que la tolerancia sobre el terrorismo y sus manifestaciones es mínima, por no decir nula. Mas allá de los mismos terroristas y de sus simpatizantes, es extremadamente raro escuchar palabras de encomio o de justificación de las acciones terroristas. La misma discusión sobre las «raíces profundas» del terrorismo, tantas veces destinada a ocultar pretensiones de justificación, conoce hoy tonos discretos y cautelosos. Tanto como para permitir abordar esa parte del problema –la medida en que determinadas circunstancias

políticas, sociales o económicas explican el recurso a los métodos terroristas o, alternativamente, la utilización torticera de esas condiciones por parte de los terroristas para intentar justificar sus acciones— de forma razonable y veraz.

Las diferencias, pues, de tratamiento sobre el terrorismo entre Asamblea General y Consejo de Seguridad no provienen de enfoques diferentes por lo que al fondo de la cuestión se refiere. Se trata más bien de perspectivas «jurisdiccionales»: frente a una AG legisladora y deliberante se ha alzado la figura de un CS que sitúa todo, o así se le acusa, bajo las cuestiones de «paz y seguridad», que le son propias, y sobre las que extiende una novedosa voluntad normativa, en principio residenciada bajo la responsabilidad de la Asamblea. En esa tensión, que tantos elementos positivos contiene, no es difícil encontrar los ecos de las arañadas soberanías nacionales y de su alegato en recordatorio del respeto a «los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados» que la Carta recoge en su artículo 2.7. Tampoco, dicho sea de paso, la visible insatisfacción de la masa mayoritaria que constituye la AG frente al poder minoritario y elitista encarnado por el CS y, sobre todo, por sus cinco miembros permanentes. El Consejo de Seguridad y sus órganos subsidiarios procuran «democratizar» sus deliberaciones con la convocatoria regular de sesiones abiertas al resto de sus miembros. Bien pudiera ser que la generalización prudente del sistema, en el marco de lo que la Carta permite, y el establecimiento de diálogos reales sobre los temas más candentes del momento, entre los cuales el terrorismo en todas sus implicaciones ocupa lugar preferente, pudiera contribuir a restañar un tanto los sinsabores de los que debaten frente al poder de los que deciden. Aunque, a la postre, los sentimientos heridos debieran también encontrar un punto de reflexión. Tantas veces han sido las Naciones Unidas criticadas por su inanidad a la hora de tomar decisiones que no cabe demasiado espacio para los que las critican por decidir demasiado. Aunque sea a través del Consejo de Seguridad. Cuyo papel y cuya legitimidad, por lo demás, están suficientemente descritos en la Carta de las Naciones Unidas.

A las aportaciones del CS y de la AG sobre el tema del terrorismo en la política de las Naciones Unidas deben sumarse las realizadas por

el mismo Secretario General. En octubre del año 2001, poco tiempo después de los atentados del 11 de septiembre y casi simultáneamente a la aprobación por el CS de la Resolución 1373, Kofi Annan decidió la creación de un Grupo Asesor sobre las Naciones Unidas y el Terrorismo. El Grupo formuló 31 recomendaciones en agosto de 2002, agrupadas en una «estrategia tripartita» encaminada a conseguir:

- a) Disuadir a los grupos de descontentos de adoptar el terrorismo.
- b) Negar a los grupos o individuos los medios para llevar a cabo actos terroristas.
- c) Fomentar una cooperación amplia en la lucha contra el terrorismo»⁴.

Las recomendaciones del Grupo Asesor, cuyos miembros han vuelto a reunirse recientemente, tras el nombramiento y con la presencia del Director Ejecutivo de la DEAT, son valiosas e interesantes de por sí, y en la medida en que reflejan el sentir institucional de la Organización, como algo sutilmente diferente de los Estados miembros, ofreciendo un orden de prioridades que sin alterar el sentido fundamental marcado por Consejo y Asamblea, pone acentos y subrayados de manera diversa. Es evidente, en cualquier caso, que el Secretario General no desea quedar ausente del debate. En ello confirma la línea seguida en otros muchos temas de actualidad y preocupación internacionales.

La literatura producida en torno al 11 de septiembre, sus alcances y consecuencias, es hoy incalculable. Sus efectos en la vida internacional son igualmente incalculables y no menos evidentes. Desde la óptica del funcionamiento de las Naciones Unidas, que es tanto como decir desde la óptica del funcionamiento de la sociedad internacional, el 11 de septiembre, en la medida en que supone la definitiva toma de conciencia sobre el impacto de un terrorismo totalizador y aniquilante, es comparable a la desaparición de la URSS y al consiguiente final de la Guerra Fría. La década post-soviética de los noventa pudo per-

⁴ Cartas idénticas de fecha 1 de agosto de 2002 dirigidas al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General. A-57-273; S-2002-875.

mitirse el lujo de orillar las preocupaciones obsesivas sobre la seguridad de los decenios anteriores para concentrarse en la recuperación de la paz, en los impulsos para el desarrollo, en la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en la propuesta democrática como factor definitivo de la estabilidad. En algún perverso sentido el 11 de septiembre nos ha hecho retornar, sin quererlo ni buscarlo, a los malos tiempos de la bipolaridad, cuando todo quedaba reducido a la simplicidad de la relación adversaria y a sus exigencias. El reto al que hoy se enfrentan las Naciones Unidas, como se enfrenta toda la humanidad, consiste en responder al reto sin por ello abandonar ni archivar las características que han hecho de nuestro sistema de civilización, precisamente el que hizo posible el nacimiento de las Naciones Unidas y ha hecho posible su continuación en el tiempo, el más perfecto, o si se quiere el menos imperfecto, de los que la humanidad ha conocido en su ya larga y convulsa historia. Se trata, una vez más, de vencer a las obscuras fuerzas del totalitarismo. Cabe esperar de las Naciones Unidas que con claridad de juicio, voluntad firme y sentido histórico se muestren a la altura de lo que la sociedad internacional espera. El balance provisional que aquí se ofrece permite albergar una amplia esperanza al respecto.

BIBLIOGRAFÍA

Bianchi, A. (2004): *Enforcing International Law Norms Against Terrorism*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.

Boulden, J. y Weiss, T.G. (2004): *Terrorism and the UN*. Indiana University Press.

LA REFORMA DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO: UN ERROR HISTÓRICO*

La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que plantea el «Plan Almunia» constituye un error de trascendencia histórica. La relajación de la disciplina presupuestaria prevista en el PEC bajo el principio de «impunidad selectiva» se traducirá en mayores tipos de interés reales en la zona euro, en un euro menos atractivo como moneda de reserva internacional y en una crisis de credibilidad de las instituciones y compromisos europeos. El Banco Central Europeo, el Bundesbank y los propios expertos de la Comisión Europea han vertido duras críticas sobre la propuesta de reforma del PEC.

1. LOS FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Objetivos: la estabilidad monetaria y el crecimiento económico

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se consensuó en 1997 para velar por la disciplina presupuestaria de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo, la de los países del «área euro». Se complementó sabiamente con la independencia del Banco Central Europeo, con un nítido objetivo: evitar el riesgo de que la indisciplina fiscal incubara la enfermedad mortífera por excelencia para las monedas y las uniones monetarias, la inflación.

El carácter estricto de las reglas de disciplina presupuestaria del PEC se gestó en el Tratado de Maastricht (en sus criterios de conver-

Jaime García-Legaz es Técnico Comercial y Economista del Estado. Director de Economía y Políticas Públicas de FAES.

* Agradezco los numerosos comentarios de los colaboradores de Fundación FAES que han enriquecido sustancialmente este texto. Mi especial agradecimiento es para Eugenio Domingo Solans, q.e.p.d., que me ayudó en este trabajo en el mes de octubre de 2004.

gencia) y fue una condición *sine qua non* de Alemania y los países del «área marco», con la aquiescencia de Francia, para renunciar a sus monedas nacionales y adoptar una moneda común.

El objetivo era evidente: asegurar la exclusión de la Unión Monetaria Europea de aquellos países con una dilatada trayectoria inflacionista y deficiente credibilidad de estabilidad macroeconómica en el pasado (como España, Italia o Grecia) que pudiesen contaminar la nueva área monetaria.

La renuncia de Alemania al marco, el «ancla» de la estabilidad monetaria europea, con sus garantías constitucionales de estabilidad monetaria y la paradigmática independencia de su banco central, el Bundesbank, con origen en la infausta hiperinflación que siguió a la Segunda Guerra Mundial, justificaron esas cautelas.

La disciplina presupuestaria que inspira el PEC y la estabilidad de precios, encomendada como objetivo explícito a conseguir al Banco Central Europeo, facilitarían la consecución de un segundo objetivo: el mantenimiento de los tipos de interés reales a niveles reducidos, facilitando así la acumulación de capital, el crecimiento económico y la creación de empleo.

El PEC y la independencia del BCE son dos elementos esenciales para la prevención de la inflación y para el mantenimiento de bajos tipos de interés reales. Todo un seguro de salud para el euro.

La flexibilidad del PEC

Las actuales reglas del PEC, largamente negociadas y sólidamente fundamentadas en la teoría económica y en la experiencia fiscal y monetaria europea de las últimas décadas (Feito, 2004), cumplen razonablemente bien sus objetivos. La razón estriba en su sabia combinación de flexibilidad y rigor.

Al contrario de lo que algunos afirman, el PEC es muy flexible. No sólo admite a la perfección la aplicación de políticas presupuestarias anticíclicas, sino que, como acertadamente señala José Luis Feito, el PEC está diseñado con el objetivo de evitar las políticas procíclicas, tan dañinas como desgraciadamente frecuentes.

El PEC reconoce y aprueba los déficit presupuestarios coyunturales en las fases más débiles del ciclo económico. Ampara, por tanto, la

actuación de los estabilizadores automáticos, con el límite para el déficit presupuestario del 3% del PIB, que está establecido en el Tratado de la Unión Europea y que, además, se puede traspasar gratuitamente en presencia de una recesión de suficiente intensidad.

La actuación de los estabilizadores automáticos tiene, no conviene olvidarlo, dos implicaciones: una, la de permitir que menores ingresos públicos y mayores gastos (y el consiguiente déficit fiscal) ejerzan efectos expansivos sobre la demanda agregada en las fases de menor actividad cíclica; la segunda, frecuente y deliberadamente olvidada en este debate, es la consecución de superávit presupuestarios en las fases de mayor actividad del ciclo.

Es esencial subrayar que la potencia estabilizadora del déficit público en la fase baja del ciclo reside precisamente en las actuales reglas del PEC, que hacen creíble que el desequilibrio presupuestario sea limitado, transitorio y reversible.

En consecuencia, el PEC es muy flexible y no sólo admite a la perfección la aplicación de políticas presupuestarias anticíclicas sino que las alienta, como aconseja la teoría macroeconómica (concretamente, la teoría de las áreas monetarias óptimas), al tiempo que pretende evitar la aplicación de políticas procíclicas.

La prevención de los déficit presupuestarios excesivos

Lo que el PEC buscó evitar fueron los déficit presupuestarios elevados y persistentes o, si se quiere, en la terminología comunitaria, los «déficit excesivos».

Que los déficit presupuestarios presionan sobre la captación de ahorro en los mercados de capitales y elevan los tipos de interés es algo sobradamente conocido. Cuando la presión es transitoria y se efectúa en las fases más bajas de la actividad, los efectos sobre los tipos de interés son aceptables. El carácter pernicioso de los déficit presupuestarios surge cuando éstos son elevados y persistentes, ya que generan expectativas de mayores impuestos, entre ellos, del impuesto inflacionario. Los mercados de capitales reaccionan elevando adicionalmente los tipos de interés a largo plazo, en este caso, los de los activos denominados en euros.

El problema radica en que este incremento del coste de la financiación no sólo perjudica a los países que incurren en los déficit excesivos. Perjudica también al resto de miembros de la unión monetaria. Existe abundante literatura económica que precisamente por esta razón defiende la existencia de pactos de estabilidad presupuestaria en el seno de las uniones monetarias (Beetsma y Uhlig, 1997; Chari y Kehoe, 1998; Dixit, 2000; Dixit, 2001; Dixit y Lambertini, 2001)

De ahí las reglas del PEC, que lo convierten en un auténtico bien público europeo. Lo es porque los efectos macroeconómicos de los Estados que incurren en déficit presupuestarios elevados y persistentes afectan negativamente no sólo a los países que incurren en los déficit excesivos, sino también a los «virtuosos», los que de forma responsable respetan la disciplina presupuestaria pactada entre todos los socios europeos. Por eso hablamos de externalidades negativas de la indisciplina fiscal (BCE, 1999, 53), y por eso el PEC es un bien público europeo.

Para garantizar su provisión y evitar los efectos externos negativos, o, si se quiere, para evitar que los países que incurren en déficit excesivos actúen como «viajeros sin billete» (*free riders*) y se aprovechen de los bajos tipos de interés que hacen posible los países que preservan su equilibrio presupuestario, el PEC estableció una regla clara (el equilibrio presupuestario o el superávit como norma, *close to balance or in surplus*) y sanciones disuasorias para los países incumplidores.

En efecto, tras varios años de trabajo y con mucho fundamento, el PEC incorporó procedimientos que incentivan la corrección de los déficit excesivos, que pueden culminar en la aplicación de elevadas sanciones pecuniarias a los países que incumplen el PEC. Las sanciones irían a parar a las arcas públicas de los países perjudicados por los efectos adversos de los déficit excesivos.

Hay, de hecho, quien opina que el fallo estructural más grave del PEC es precisamente la radicalidad del sistema de sanciones (por su elevado coste económico y político para los países infractores), que ha engendrado las presiones para evitarlas a través de una auténtica «voladura» del PEC. Nuestra opinión difiere: las sanciones deben ser disuasorias para lograr el objetivo pretendido.

2. LA GÉNESIS DE LA VOLADURA DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

La Cumbre de Lisboa, celebrada en la primavera de 2000, supone, por su ambiciosa estrategia, un referente en la política europea de la última década. Bajo el liderazgo de los primeros ministros Blair y Aznar, y con el horizonte de 2010, estableció con claridad los dos pilares básicos de la política económica europea:

- a) El equilibrio presupuestario.
- b) Las reformas estructurales en los mercados de factores y servicios, si se quiere, las políticas de oferta, encaminadas a incrementar la flexibilidad de los mercados y la competencia.

Algunos países europeos apostaron por esta vía, particularmente Irlanda, España y Reino Unido.

Otros países prefirieron posponer las reformas y evitaron privatizar, flexibilizar sus mercados de factores y liberalizar sus mercados de productos. No sólo eso. Incumpliendo la letra y el espíritu del PEC, estos países optaron por no avanzar en materia de consolidación presupuestaria en el periodo expansivo del ciclo, hasta el punto de deteriorar en ese periodo el saldo presupuestario cíclicamente ajustado.

Con el avance del ciclo, estos países llegaron a la fase de desaceleración con posiciones presupuestarias desequilibradas, y entonces comenzaron a incumplir el PEC.

Se inicia en ese momento la reacción para evitar la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, con el coste político que ello implica, y para evitar la aplicación de medidas de ajuste presupuestario. Se argumenta, entre otras cosas, que en una fase de desaceleración económica el PEC «ahoga la recuperación».

Estas dificultades los obligan a actuar, en primer lugar, en el ECOFIN, en el curso del cual (noviembre de 2003) se decide no aplicar dicho procedimiento a Francia y Alemania. Comienza así la operación «voladura del PEC».

Esa decisión encuentra su primer obstáculo serio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su sentencia rechaza dicho acuerdo del ECOFIN por considerarlo parcialmente incompatible con el derecho comunitario.

Esta sentencia es el detonante definitivo de la reforma. El Comisario socialista Almunia inicia la propuesta de reforma del PEC para proporcionar una salida «estructural» a estos dos países.

Para ello se comienza a construir un «argumentario» sobre supuestos defectos estructurales del PEC, como paso previo a la propuesta de reforma. Curiosamente, estos supuestos defectos no fueron detectados ni en la génesis del PEC, ni en sus seis años de funcionamiento, especialmente cuando el procedimiento de déficit excesivo se inició contra otros países europeos.

3. LOS SUPUESTOS «DEFECTOS» DEL PEC

Los «ideólogos» de la reforma del PEC han esgrimido supuestos defectos estructurales del pacto para fundamentar la propuesta de reforma. En su opinión, el PEC, por un lado, sería «poco flexible, no permitiría actuar a los estabilizadores automáticos y obligaría a aplicar políticas procíclicas» y, por otro, «estaría lastrado por los pactos políticos de su génesis».

Todos estos argumentos no resisten un análisis fundamentado. Vayamos por partes.

Lo primero que conviene explicar es que resulta muy cuestionable afirmar que los déficit presupuestarios tienen siempre efectos expansivos. Si recurrimos a la evidencia empírica, la experiencia fiscal de los países europeos de los últimos treinta años resulta bastante concluyente. Los expertos de la Dirección General de ECFIN (Giudice, Turrini y Veld, 2004) dejan claro que en la gran mayoría de los casos (tres de cada cuatro) las políticas de consolidación presupuestaria tienen claros efectos expansivos. El argumento de que la unión monetaria desactiva los efectos expansivos no keynesianos de la consolidación presupuestaria no tiene respaldo empírico, como ha destacado el profesor Juergen Donges, ex Presidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania.

En segundo lugar, el argumento de que el PEC obliga a aplicar políticas procíclicas (a reducir el déficit en un contexto recesivo) es muy pobre. Ya se ha explicado que existe consenso en el rechazo de las po-

líticas fiscales procíclicas y en el respaldo a la actuación de los estabilizadores automáticos. La teoría de las «área monetarias óptimas» es bastante concluyente.

Como se ha explicado ya, los márgenes del PEC son bastante amplios (déficit fiscal de hasta un 3% del PIB) y permiten actuar con cierta potencia a los estabilizadores automáticos en periodos contractivos del ciclo económico. Más aún, la potencia estabilizadora del déficit público en las fases de debilidad en la actividad económica reside precisamente en las reglas del PEC, que dotan de credibilidad al hecho de que el desequilibrio presupuestario sea limitado, transitorio y reversible. A lo anterior se añade que el PEC admite superar gratuitamente ese límite cuando concurren circunstancias exógenas verdaderamente extraordinarias, pagando las cantidades estipuladas en el PEC en otro caso.

El problema se plantea cuando los países no cumplen el PEC, no progresan en su consolidación presupuestaria en el periodo expansivo del ciclo y llegan a la fase de desaceleración con posiciones presupuestarias desequilibradas.

Y cuando el ciclo pasa por fases de desaceleración es cuando se argumenta que el PEC «ahoga la recuperación». Los defensores del Plan Almunia reconocen, por ejemplo, en el caso de Alemania, el deterioro del déficit fiscal cíclicamente ajustado (más allá de las discrepancias técnicas sobre su medición) durante el periodo de bonanza económica, pero plantean que «a una mala política económica no se debe responder con otra mala política económica». Este argumento es, de nuevo, falaz e inconsistente.

Por un lado, lo que subyace bajo el débil crecimiento es esencialmente el rechazo a aplicar políticas de oferta, las políticas de Lisboa. Por otro, aunque se reconoce la insuficiente consolidación presupuestaria previa, no se quiere aceptar, a pesar de su evidencia, que esa es la verdadera causa de que se puedan superar los límites del PEC, no la pretendida e inexistente «inflexibilidad» del PEC.

La situación de Alemania, como la de Portugal, responde precisamente a la aplicación de políticas fiscales procíclicas en el periodo 1996-1999, por parte, por cierto, de gobiernos socialistas. Como afirma Feito, en lugar de aplicar el dividendo fiscal de la fase expansiva del

ciclo a reducir el déficit presupuestario, estos gobiernos optaron por incrementar el gasto público (sin incrementar en paralelo los impuestos) o a reducir los impuestos (sin reducir en paralelo el gasto público).

Por tanto, si a la fase de desaceleración se llega con equilibrio presupuestario, no hay nada que temer en relación con el PEC y su procedimiento de déficit excesivo. Los estabilizadores automáticos podrán actuar plenamente.

De hecho, la situación de Alemania lo que hace es dar precisamente la razón a los defensores del PEC al poner de manifiesto justamente su buen funcionamiento. Porque lo que hace es castigar a quienes incumplieron sus compromisos europeos en la fase expansiva. El PEC está funcionando exactamente como se quería que funcionase, y envía las señales correctas: los países que aplican políticas presupuestarias procíclicas en las fases expansivas tendrán dificultades para utilizar dicha política de forma anticíclica en las fases recesivas. Su pecado tiene ahora esta penitencia.

Y es que no conviene engañarse: lo que está en juego es la propia credibilidad del PEC. Si no se aplica el procedimiento de déficit excesivo en un caso «de libro», la credibilidad del PEC quedará reducida a cero. En sus primeros años de andadura, la credibilidad de un Pacto de tanta trascendencia como el que sustenta una unión monetaria y, por tanto, las señales que envía y los incentivos que induce son, simplemente, irrenunciables.

Otro argumento más a favor del PEC en su redacción actual: «flexibilizarlo» en el sentido planteado por el Plan Almunia tiene el grave inconveniente de eliminar los efectos estabilizadores del déficit presupuestario. Si los agentes económicos interpretan que ese déficit no es limitado ni suficientemente transitorio y reversible, los mecanismos «ricardianos» eliminarán los efectos estabilizadores keynesianos del déficit.

Aun así, ¿significa esto propugnar que los países que se encuentran actualmente en un contexto de débil crecimiento deban aplicar políticas procíclicas y reducir su gasto público o incrementar sus impuestos? Naturalmente que no. El PEC admite traspasar el límite del 3% del PIB. Si las autoridades alemanas consideran que la política presupuestaria óptima implica que su déficit supere el 3% de PIB, y que se

sitúe en el 4% o el 5% de su PIB, pueden hacerlo. Pero con todas sus consecuencias: aceptando el pago de las multas establecidas en el PEC, con su ineludible coste político. Esas son las reglas del juego.

Por tanto, el «castigo al infractor» resulta imprescindible si no se quiere que estas conductas irresponsables se generalicen en el futuro y si se quiere preservar el carácter estabilizador del déficit en la fase baja del ciclo económico. Los recientemente laureados con el Nobel de economía, Kydland y Prescott, podrían acudir a este caso para ilustrar la inconsistencia temporal en las políticas y sus consecuencias.

Una segunda línea argumental se ha basado en los supuestos «lastres de las circunstancias políticas de la creación del euro», de los que ahora tocaría desprenderse. Pretender que el euro no es heredero del marco alemán o negar que la credibilidad de la moneda única europea le debe casi todo a la estabilidad ganada por el marco durante cinco décadas es ser bastante osado.

Llama la atención que los críticos del PEC no hayan recurrido al argumento de que «es posible la estabilidad monetaria sin pactos fiscales» (Carbajo, 2002). Un ejemplo de unión monetaria sin pactos fiscales como el PEC al que podían haber acudido es los Estados Unidos de América (Wengast, 1995; McKinnon, 1998).

Un primer problema es conceptual: el modelo fiscal federal de los Estados Unidos es un modelo de «competencia fiscal interestatal», un concepto profundamente liberal, cuya primera defensora en Europa al máximo nivel político fue, por cierto, Margaret Thatcher. Los que aspiran a reformar el PEC están en las antípodas de los postulados liberales y de un modelo de competencia fiscal para la Unión Europea.

El segundo problema es político: de haber optado por la voladura completa del PEC, una buena parte de la opinión pública hubiera considerado incomprensible el énfasis en dicho pacto en la génesis de la unión monetaria europea precisamente por parte de aquellos que ahora defienden la reforma.

El problema de fondo que subyace al Plan Almunia es una combinación de tres factores:

- a) Confianza en la vieja doctrina keynesiana del déficit fiscal, pero erróneamente interpretada y aplicada.

- b) El rechazo encubierto a la Estrategia de Lisboa y a sus implicaciones sobre las políticas de reforma estructural y liberalización económica.
- c) Las tradicionales políticas electoralistas de incremento del gasto público (especialmente, gasto en transferencias a diversos colectivos).

La conclusión es muy clara: el déficit presupuestario no es «el instrumento» para crecer. Quienes, incumpliendo la Estrategia de Lisboa, han rechazado las reformas estructurales y han incrementado su gasto público y su déficit presupuestario son los que han registrado estancamiento e incremento del paro. Los que han aplicado las recetas de Lisboa y han optado por las reformas y el equilibrio presupuestario son los países que más han crecido y más empleo han creado. El déficit presupuestario se ha convertido, en todo caso, en un indicador de una política económica fracasada por la falta de voluntad de aplicar reformas estructurales.

4. LAS «CUATRO VÍAS DE IMPUNIDAD» DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

El Plan Almunia tiene como objetivo final la condescendencia con los países irresponsables en su política presupuestaria. O, si se quiere, la impunidad de quienes violen el PEC. Pero no la impunidad general, sino selectiva: se pretende redactar de nuevo el PEC con la suficiente ambigüedad como para que admita la arbitrariedad en la aplicación de sanciones. Para ello se establecen cuatro vías para escapar a la aplicación de las reglas del PEC.

La extensión del periodo de corrección del déficit presupuestario

La propuesta comienza por extender el periodo para corregir el déficit presupuestario excesivo (hasta ahora, un año), y sin precisar fechas.

La consideración de «circunstancias excepcionales» en la aplicación del procedimiento sancionador

La propuesta de reforma continúa con la redefinición de las «circunstancias excepcionales» a la hora de valorar la situación presupuestaria de cada país. Para ello se enumera un conjunto de variables macroeconómicas de referencia.

Entre esas variables se encontraría la consideración de la *ratio* Deuda pública/PIB (aunque no se ha explicado, imaginamos que su nivel absoluto, la evolución creciente o descendente, y, en este caso, su ritmo de descenso), o determinadas medidas de sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública (vgr., aunque tampoco se ha hecho explícito, que el valor actual de los superávit primarios descontados al tipo de interés real a largo plazo corregido por la tasa de crecimiento económico real a largo plazo –con todas las discrepancias existentes sobre cómo medirla– sea igual o superior al nivel de endeudamiento neto –de activos financieros– actual en términos de PIB).

Un primer problema es que la experiencia demuestra que estas medidas son muy volátiles, por lo que su utilización resulta cuestionable. A ello se añade la dificultad de cuantificar el superávit primario potencial a largo plazo o la tasa de crecimiento económico real a largo plazo, cruciales para evaluar la sostenibilidad. También se une la posible controversia a la hora de valorar la posición de endeudamiento neto, por la vía de los activos financieros.

Otro elemento de crítica es que se excluyen otras medidas tan o más importantes de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas como, por ejemplo, la contabilidad intergeneracional en materia de seguridad social (vgr., la consideración de la deuda implícita en los sistemas públicos de pensiones basados en mecanismos de reparto).

La deliberada ausencia de objetivación en la valoración de las «circunstancias excepcionales»

Siendo discutible lo anterior, el principal elemento de crítica reside en que la reforma rehuye cuidadosamente cualquier objetivación de las variables que sirven para esgrimir la existencia de «circunstancias excepcionales»: se da carta blanca a la arbitrariedad.

El Plan Almunia pretende así consagrar legalmente la posibilidad de aplicar la política de «trato desigual» practicada en los últimos tiempos en la Unión Europea. Cuando quien incumple es un país pequeño, se le aplica implacablemente el régimen sancionador; cuando se trata de un país grande (como Francia y Alemania, que vienen incumpliendo las normas del Pacto durante varios años consecutivos), se mira hacia otro lado.

Si este «trato desigual» resulta inaceptable en la práctica comunitaria (como ha señalado, además, el Tribunal de Luxemburgo), más aún lo es intentar modificar la ley comunitaria para así dar amparo a los incumplidores.

La exclusión de determinados capítulos de gasto del cómputo de «déficit excesivo»

Otra opción que se ha barajado es excluir determinadas partidas de gasto público en el cómputo del déficit excesivo. El gasto en políticas de I+D, el gasto en defensa o los denominados «costes de aplicación de las políticas de Lisboa» se han perfilado como candidatos a esa exclusión de cómputo. Esta opción es descalificable por su completa arbitrariedad y su nulo fundamento.

También se ha planteado que las transferencias netas al presupuesto comunitario podrían quedar excluidas de la cifra de déficit público a efectos del PEC. Además de constituir una opción igualmente criticable por su arbitrariedad, esta propuesta plantea una pregunta: ¿los países con transferencias netas del presupuesto comunitario computarán esas partidas de forma simétrica a como lo harían los que transfieren fondos netos al presupuesto común?

Otros elementos criticables: un régimen sancionador defectuoso y ausencia de mecanismos concretos para alcanzar superávit en fases de bonanza

La reforma excluye, además, mejorar el régimen sancionador para dotarlo de auténtica credibilidad, condición imprescindible para ser

capaz de disuadir la incursión en déficit presupuestarios excesivos, y avala un procedimiento por el que el Estado que incurre en déficit excesivo participa en la decisión de si se le deben aplicar sanciones o no.

A lo anterior se une el hecho de que, a pesar de su retórica, el Plan Almunia no contiene ninguna propuesta concreta que ayude a lograr el superávit presupuestario en las fases de bonanza económica.

El debate «saldo presupuestario anual versus saldo presupuestario estructural»

Habría que mencionar, por último, un argumento que, aunque no está presente en el Plan Almunia, sí ha sido objeto de debate en el marco del funcionamiento del PEC: el argumento de que el saldo presupuestario anual no mide adecuadamente la situación fiscal de un país, debido a que su componente cíclico «contamina» el cómputo. Sería preferible, según este argumento, el empleo del «saldo presupuestario estructural».

Las objeciones vienen, en primera instancia, por el lado de su aplicación práctica, real, más que por la vía conceptual. No existe acuerdo en el mundo económico sobre la definición más adecuada de saldo estructural, ni tampoco sobre la medición del crecimiento potencial de la economía. Baste recordar que ni siquiera la OCDE y el FMI comparten el mismo concepto (saldo estructural cíclicamente ajustado; impulso fiscal).

Por otro lado, no parece previsible que el cómputo de saldos estructurales induzca comportamientos fiscales diferentes de los que se derivan del uso de saldos anuales. En el actual contexto, un PEC basado en saldos estructurales sólo hubiera hecho saltar la polémica un par de años antes.

5. LOS PELIGROS DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

El Plan Almunia abrirá la mano para incurrir en déficit presupuestarios persistentes o estructurales en la Unión Europea. El resultado se-

rá un incremento de los tipos de interés a largo plazo y una pérdida de atractivo del euro como moneda de reserva internacional.

Los bancos centrales independientes suelen tomar muy en cuenta la evolución de los tipos de interés a largo plazo porque contienen información valiosa sobre las expectativas de inflación, que son inflacionistas en sí mismas, al generar actitudes defensivas en forma de mayores precios y salarios. El Banco Central Europeo, en un contexto de mayores tipos a largo plazo, acabará por elevar los tipos a corto plazo. El resultado será una subida generalizada de los tipos de interés reales, menor crecimiento de la formación de capital y del consumo, menor crecimiento económico y menor creación de empleo en toda la «zona euro».

Al mismo tiempo, una moneda contaminada por mayores expectativas de inflación se resiente en su función de depósito de valor. Se reduce el atractivo del euro como moneda de denominación de activos en los que materializar las reservas de divisas. El euro perderá posiciones frente al dólar como moneda de reserva internacional y los Estados europeos perderán ingresos públicos por señoriaje.

Por todo ello, el Banco Central Europeo, el Bundesbank y los propios expertos de la Comisión Europea han vertido duras críticas contra el Plan del Comisario socialista.

El BCE afirma que el Plan «reduce los incentivos para aplicar políticas presupuestarias sensatas, aumenta el riesgo de discrecionalidad y dificulta el marco en el que debe aplicarse la política monetaria única». Hasta ahora, sin embargo, no ha llegado a ejercer toda su capacidad de reacción ante una amenaza de políticas presupuestarias desequilibradas, por ejemplo, incrementando los tipos de interés.

El Bundesbank ha criticado con mucha dureza la reforma. Ha afirmado, además, con toda la razón, que «el PEC fue una precondition esencial para la introducción del euro durante el debate público en Alemania».

Los expertos de la Dirección General de ECFIN, de la Comisión Europea, afirman que «para conseguir mayor flexibilidad fiscal en la UME, la obligación de cumplimiento del PEC debería ser reforzada y no ser relajada» (Buti y Van den Noord, 2004), hasta el punto de recomendar al Consejo de la Unión rechazar la propuesta de su Comisario.

6. CÓMO PODRÍA REFORZARSE EL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Lo primero que conviene subrayar es que el PEC ha funcionado bien hasta ahora. Europa no ha regresado a los niveles de déficit presupuestarios de los noventa. Esto no hubiera ocurrido si el PEC no hubiera estado en vigor.

Si hubiera que modificar el PEC, en todo caso habría que avanzar en la dirección contraria a la que plantea el Plan Almunia, para hacer más creíble el régimen sancionador.

1. Sería deseable el establecimiento de reglas más automáticas, criterios menos interpretables de forma arbitraria.
2. El principio de «trato idéntico» (*equal treatment*) debería ser sagrado.
3. Sería conveniente mejorar los procedimientos de «alerta temprana» (*early warning*), concretándolos para asegurar que cumplan su función, algo que ahora no ocurre.
4. Deberían instrumentarse mecanismos permanentes de supervisión.
5. Sería muy saludable la exclusión de la decisión sobre la aplicación del régimen sancionador de los propios países incumplidores.
6. Además, y a la vista del «escándalo griego» –la falsificación de las cuentas públicas griegas para poder acceder al euro– habría que reforzar los mecanismos del PEC para prevenir este tipo de prácticas.

7. LA CRITICABLE POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL

El Presidente del Gobierno ha afirmado estar dispuesto a apoyar la reforma del PEC a cambio de un presunto trato favorable en la próxima negociación sobre las perspectivas financieras comunitarias.

Esta postura resulta lamentable por dos razones:

- a) Por lo que supone de hacer explícita la renuncia a la estabilidad presupuestaria europea y de aceptar el intercambio de principios y convicciones a cambio de un «maletín».
- b) Por revelar su debilidad negociadora de partida, una pésima estrategia negociadora en cualquier ámbito.

No es que esto último deba sorprendernos, porque ocurrió lo mismo con motivo de la negociación de la Constitución Europea, pero no por ello debe dejar de ser criticado.

8. CONCLUSIONES

La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que pretende el «Plan Almunia» plantea serios peligros sobre la credibilidad del euro a largo plazo. Relajar las medidas de estabilización presupuestaria previstas en el PEC e incrementar aún más la arbitrariedad de sus reglas sólo se traducirá en mayores tipos de interés reales, en menor crecimiento económico, en menor crecimiento del empleo y en un euro menos atractivo como moneda de reserva.

El PEC está actualmente bien diseñado:

1. Tiene pleno fundamento económico, tanto teórico como empírico.
2. Es muy flexible y permite la actuación de los estabilizadores automáticos.
3. Está articulado para evitar políticas procíclicas y permitir políticas anticíclicas.
4. Ha contribuido a evitar los deterioros de las posiciones fiscales que se registraron en el pasado.
5. Ha contribuido a mantener bajas expectativas de inflación y tipos de interés históricamente bajos.
6. El importantísimo papel que el euro ha adquirido en pocos años como moneda de reserva internacional hubiera sido impensable sin el PEC.

Como afirmó Eugenio Domingo (2004), la moneda única europea es el avance de mayor trascendencia real y práctica para los ciudada-

nos de la Unión Europea de las últimas décadas (la mayor «realización concreta» a las que se refería Robert Schuman en su Declaración de 9 de mayo de 1950), y ha costado cuarenta años hacerla realidad. Y si es una realidad y goza de buena salud es precisamente porque su creación vino avalada por las garantías contenidas en el PEC.

El PEC pretende preservar el euro como moneda estable y fomentar la aplicación de políticas presupuestarias anticíclicas, invirtiendo las pautas procíclicas que se han venido aplicando en Europa con carácter generalizado en las últimas décadas.

Para ello estableció unas reglas cuyo objetivo último es incentivar las políticas correctas y castigar las inapropiadas. Las presiones para cambiar las reglas, generadas precisamente por quienes las han incumplido, son justamente el mejor indicador de que las reglas están funcionando razonablemente bien.

La Unión Monetaria Europea es todavía muy joven, y proponer reformas que sólo debilitan al euro o instauran la impunidad selectiva de quienes incumplen las reglas de estabilidad presupuestaria pactadas es profundamente irresponsable. Porque nada es irreversible. Y el euro, aunque sea difícil creerlo, tampoco. Jugar con la estabilidad de la moneda única es jugar con fuego. Recordemos las palabras de Jacques Rueff, destacado europeísta, cuando afirmaba que «Europa se hará por la moneda, o no se hará».

Si algún día el euro, un cemento esencial de la Unión Europea, dejara de existir, la Unión Europea dejaría inmediatamente de ser una verdadera potencia económica. Pero no sólo eso: el fin de la Unión Monetaria Europea seguramente sería el detonante de una crisis aún mayor, de consecuencias incalculables. El futuro de Europa requiere preservar sus elementos más preciados de unión y, entre ellos, la moneda es probablemente el más valioso. Poner en cuestión su estabilidad con reformas como la propuesta del PEC es, a la vez, un ejercicio de irresponsabilidad y de antieuropeísmo.

Por si lo anterior fuera poco, el «Plan Almunia» dará argumentos a los euroescépticos, y hará más difícil que los Estados miembros que voluntariamente permanecen fuera de la Europa del euro (Reino Unido, Suecia y Dinamarca) se sumen a la moneda única.

BIBLIOGRAFÍA

- BCE (1999), *Boletín Mensual*, mayo.
- Beetsma, R. y Uhlig, H. (1997), «An analysis of the Stability Pact», Tilburg University.
- Buti, M. y Van den Noord, P. (2004), «Fiscal Policy in EMU: Rules, discretion and political incentives», Comisión Europea y OCDE.
- Carbajo Isla, A. (2002), «Estabilidad sin pactos: el ejemplo de Estados Unidos», *Círculo de Empresarios, Libro Marrón*, diciembre.
- Chari, V.V. y Kehoe, P. (1998), «On the need for fiscal constraints in a monetary union», *Federal Reserve Bank of Minneapolis*, Research Department.
- Dixit, A. (2000), «A Repeated Game Model of Monetary Union», *Economic Journal*, 110, octubre.
- Dixit, A. (2001), «Games of Monetary and Fiscal Interactions in the EMU», *European Economic Review*, 45, mayo.
- Dixit, A. y Lambertini, L. (2001), «Monetary-Fiscal Policy Interactions and Commitment versus Discretion in a Monetary Union», *European Economic Review*, 45, mayo.
- Domingo Solans, E. (2004), «El futuro de Europa desde el Banco Central Europeo», *Colegio de Economistas de Madrid*, 2 de junio de 2004.
- Feito Higuera, J. L. (2004), «Riesgos y sinsentidos de las críticas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento», *Círculo de Empresarios*, Madrid.
- Giudice, G., Turrini, A. y Veld, J. (2004) «Non-Keynesian Fiscal Consolidation in the EU? Ex Post Evidence and Ex Ante Analysis», *CEPR*, Discussion Paper nº 4388.
- McKinnon, R. (1998), «Market-Preserving Fiscal Federalism in the American Monetary Union», en Mario Blejer (Ed.), «*Macroeconomic Dimensions of Public Finance*», Londres.
- Wengast, B. (1995), «The Economic Role of Political Institutions», *Journal of Law, Economics and Organization*, nº 11.

LA IMAGEN DE IBEROAMÉRICA EN LAS IZQUIERDAS EUROPEAS

La antiglobalización es la gran seña de identidad de las izquierdas actuales, y esto vale para Europa tanto como para América. Las izquierdas han dejado de ser hace mucho lo que eran a finales del siglo XIX y principios del XX, porque lo que entonces reivindicaban es hoy realidad en todo Occidente. Ahora sólo queda un populismo que es, en realidad, la negación de la política, porque no es una ideología sino un estilo. No es una concepción del mundo, sino una estética.

Hace muchos años, Stefan Zweig escribió una frase lapidaria acerca del país en el que se suicidó, que hoy resulta aplicable al conjunto de Iberoamérica: «Brasil es el país del futuro y siempre lo será». La pregunta angustiosa es por qué, en aquellas naciones, el porvenir, que parece allí, más que en ningún otro lugar del planeta, al alcance de la mano, es perpetuamente postergado. Las izquierdas europeas suelen dar a ese interrogante una respuesta que tienen por obvia: eso pasa porque gobiernan las derechas, tradicionalmente aliadas al imperialismo –el que toque, pero con preferencia el norteamericano, aunque los Estados Unidos poco tengan que ver con las situaciones en que se los alude– y entreguistas por naturaleza.

La prensa a través de la cual se expresan esas izquierdas europeas sigue diciendo lo mismo, aun ahora, cuando en los países más importantes de la región –importantes por dimensiones, población, producción y nivel cultural–, han llegado al gobierno lo que ellas consideran las izquierdas locales. Hace un tiempo se hablaba, con profundo des-

Horacio Vázquez-Rial es escritor.

conocimiento de la realidad, de un eje Kirchner-Lula-Chávez, al que ocasionalmente se añadían, en un extremo, Lagos y, en el otro, Castro. A ese quinteto, se ha sumado ahora Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, un pequeño país en cuyos campos se criaron las vacas necesarias para alimentar a otros mucho mayores, y que posee un especial valor simbólico en el conjunto por su peso cultural y por haber sido «la Suiza de América» durante décadas, signifique eso lo que signifique. Periódicos españoles, y europeos en general, celebraron y titularon con lo que Eduardo Galeano apuntó en un artículo: «por primera vez gobierna la izquierda en el Uruguay». Se referían a una nación que tuvo ley de divorcio y régimen de jubilaciones antes que cualquier Estado europeo. Con lo que volvemos a la cuestión que siempre se elude: ¿qué son las izquierdas y qué son las derechas en Iberoamérica para esas izquierdas europeas, y qué son en realidad?

Las izquierdas europeas conciben como izquierdas iberoamericanas al conjunto de las organizaciones y personas que, en aquella parte del mundo, se declaran como tales. Lula, Chávez, Kirchner, Lagos, Vázquez y Castro, por tanto, son izquierda, y si las cosas les van mal es porque las derechas no les dejan actuar.

El gran modelo es, por supuesto, Cuba, con el comandante en jefe a la cabeza. En Cuba no hay nada: ni siquiera dólares sucios del narcotráfico que la isla apaña, según expresa declaración de Castro: «vamos a aniquilarle varias generaciones al imperialismo en su propio territorio». Las izquierdas, iberoamericanas y europeas, y hasta una parte ingenua de la derecha, coinciden en sostener que la culpa de que en Cuba no haya nada es del imperialismo norteamericano con su bloqueo, y que no habrá solución política ni económica para Cuba mientras los Estados Unidos no lo levanten. Hablan como si el comercio exterior cubano hubiese estado suspendido en su totalidad desde el 1 de enero de 1959. Y, lo que es más llamativo, son muchos los españoles que lo creen, ignorando que España no dejó jamás de comerciar con Cuba, y que la reducción al mínimo de las compras de azúcar y tabaco no obedeció en su día a acuerdos con los Estados Unidos, sino a que la vida económica de varias de nuestras provincias estaba ligada a la remolacha y el tabaco. El Departamento del Tesoro

de los Estados Unidos reveló en 1994 que empresas americanas habían comerciado con Cuba durante una década, a través de filiales en el extranjero, por valor de 700 millones de dólares al año.

Lo cierto es que hoy Cuba no comercia porque no tiene con qué: en la mayoría de los países otrora compradores, sus productos tradicionales han sido sustituidos por otros, locales. Lo mismo ocurre en muchas otras naciones subdesarrolladas, sobre las cuales no pesa embargo alguno pero cuyas economías dependían de necesidades ajenas ahora satisfechas. El bloqueo americano ha restado algunos clientes a Cuba, pero no ha perjudicado su comercio en la medida en que lo ha hecho el monocultivo, el empeño en no reformar un régimen productivo obsoleto.

Sólo un antiamericanismo cerril, del que sobra tanto en las izquierdas como en las derechas europeas, puede explicar el que se atribuyan al bloqueo todos los males de Cuba. Ignoran que *el bloqueo es la gran coartada de Fidel Castro*, que se ampara en él para explicar hambres, enfermedades, corrupciones e ineptitudes. Las cosas funcionan como funcionan, dice el comandante en jefe, por culpa del enemigo americano. Tampoco es novedad: la mayor parte de las castas en el poder en la América hispana se valen del fantasma del imperialismo desde hace un siglo, tanto para lavar sus culpas, endilgándolas a otros, como para ganar elecciones con discursos populistas que no perjudiquen sus propios intereses. Sin esa coartada, ¿cuánto tardarían los cubanos en reconocer sin ambages el fracaso histórico de la revolución que ha marcado casi la mitad de su vida como nación independiente?

Cuanto más tarde caiga Fidel Castro, menores serán las posibilidades de Cuba de ser la nación que fue, y mayores las de retrogradar hasta convertirse en un infierno como Haití. Cuanto más se resista Fidel Castro a abandonar el poder, más violento será el final del régimen, aunque él muera en la cama. No hay nada que defender en la Cuba actual: los avances en el terreno de la educación y de la sanidad con que suele justificarse la totalidad de la acción política de la revolución, pese a ser menores que los alcanzados en varios países capitalistas, no se sostienen si no hay comida. Y no hay comida en Cuba. No hay medicinas en Cuba. No hay libros en Cuba. No hay ropa en

Cuba. No hay transporte en Cuba. No hay libre circulación de personas en Cuba. No hay sinceridad en Cuba, porque hay miedo en Cuba. Y cada vez hay menos cubanidad en Cuba, el país de América con un mayor número de exiliados en proporción a su población.

Por último, el argumento de oro de que el bloqueo americano impide a Cuba comprar petróleo, no proporciona respuesta para la pregunta de oro: ¿con qué puede comprar petróleo Cuba? No puede, pero para satisfacer sus necesidades básicas, en un régimen productivo escuálido, cuenta con la generosidad de Chávez como en otra época contó con la de los rusos.

A todo esto, el liberalismo conservador al que los analistas de izquierdas de la prensa europea pretenden meter en el saco informe de «la derecha», en el que caben desde Mussolini hasta Haider, pasando por unos presidentes de los Estados Unidos demonizados en una perpetua caricatura –salvo en los casos, como el de Clinton, en que uno de ellos se somete a los deseos del eje franco-alemán en cuestiones tan graves como la de Yugoslavia–, el liberalismo conservador, decía, no ha sido capaz de dar o, al menos, de comunicar una respuesta propia. El proteccionismo de Fidel Castro se ampara en un proteccionismo inverso, el del bloqueo. Y ya es bien curioso que una política que se caracteriza por su oposición a la globalización, se queje del mecanismo económico que le permite seguir siendo proteccionista.

Lo que la prensa europea tiene por izquierda gobernante en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, no es otra cosa que una suma heterogénea de políticas antiglobalizadoras.

Las izquierdas han dejado de ser hace mucho lo que eran a finales del siglo XIX y principios del XX, porque lo que entonces reivindicaban, los objetivos en torno de los cuales construyeron su identidad, desde la jornada de ocho horas hasta el sufragio femenino, desde la seguridad social hasta la organización sindical, desde el derecho al divorcio hasta la liquidación del latifundio, es hoy realidad en todo Occidente. Obviaré extenderme aquí sobre la forma en que algunos de esos objetivos fueron alcanzados: por decisión de gobiernos autoritarios en unos cuantos casos, por obra del simple desarrollo del ca-

pitalismo en otros. Lo cierto es que las izquierdas no pueden dar hoy batallas que ya han ganado, de modo que por un lado se aplican a sobrealimentar ciertos triunfos, acelerando los trámites de divorcio, garantizando por ley el derecho a transitar desnudo por la vía pública –como ha hecho el parlamento catalán, con alcance local–, o haciendo derivar el discurso internacionalista hacia el multiculturalista; y, por otro, a promover rancios principios colbertianos, cuya subsistencia podía tener sentido en algunos países volcados al desarrollo autárquico –España, en condiciones de posguerra y sin los beneficios del plan Marshall, sin ir más lejos– hace sesenta años, y que hoy se traduce en la antiglobalización.

La antiglobalización es la gran seña de identidad de las izquierdas actuales, y esto vale para Europa tanto como para América. Toda América, la del norte y la del sur, en el poder y en la oposición. La Cuba de Fidel Castro es el gran bastión de la antiglobalización, el extremo autárquico del proteccionismo. Naturalmente, ningún propagandista del régimen puede abogar por la continuidad del bloqueo –lleno de agujeros por los que se filtra el comercio, gran motor de civilización– sin quedar en evidencia ante su público, de modo que siguen reclamando su desaparición, pero con la boca cada vez más pequeña: su triunfo radica en la subsistencia del régimen del comandante en contra de la globalización.

Contra la globalización está Chávez, y es eso lo que le convierte en un líder de las izquierdas. En su democracia autoritaria, ratificada y exacerbada tras su éxito en un tortuoso referéndum, se han perdido todos los límites. El antiimperialismo de Chávez, tan sentado sobre su petróleo como la monarquía saudí, se ha salido del rumbo leninista tradicional para trasponer barreras temporales. La propaganda soviética de la guerra fría, que derivó de la noción de socialismo en un solo país a la de imperialismo en un solo país, pasando por encima de Hilferding y de Hobson, inspiradores de Lenin en su célebre opúsculo sobre el tema, había servido para concentrar en los Estados Unidos todos los odios que genera el subdesarrollo. Pero los odios de Chávez alcanzan a la España de los Reyes Católicos, a la llegada misma de los europeos a América, y fomentan el derribo de estatuas de Cristóbal

Colón. No registra la historia ninguna experiencia de grupo, del tipo que hoy, impregnados por la terminología romántica, llamaríamos nacional, desde la más remota antigüedad, que no haya tendido a la globalización, de modo que si hay gente que hoy aniquila monumentos recordatorios de la figura de Colón, sólo su ignorancia del pasado le impide manifestarse en contra de los asirios, de Alejandro Magno o de Marco Polo. La prensa europea, con su discurso predominante, próximo a las izquierdas, a la corrección política y al multiculturalismo, dice que eso es antiglobalización, y es de temer que digan la verdad, y que ese concepto sea en última instancia más bárbaro de lo que cabía suponer hasta no hace mucho.

No son pocos los que le celebran a Chávez esas bromas macabras, pero el que más cercano a sus posiciones se muestra es Néstor Kirchner, ya perdido el pudor de los primeros tiempos, cuando aún no se sentía seguro en su puesto.

El azar quiso que el autor de estas líneas estuviese presente en Buenos Aires el día en que Kirchner juró su cargo, en presencia de otros mandatarios iberoamericanos, entre ellos Fidel Castro. También en este caso sirvió Castro para definir el carácter del nuevo gobierno, otorgándole con su sola visita una imagen de izquierda, rápidamente asumida por todos, en Europa como en América. Es decir, una imagen antiimperialista y antiglobalizadora. Aprovechando su estancia en Buenos Aires, Castro pronunció uno de sus larguísimos discursos en la Facultad de Derecho. Naturalmente, no alcanzó el aula magna de la institución para albergar a todos los que fueron a escucharle, y el hombre, ni corto ni perezoso, trasladó la cátedra al exterior del edificio. Varias cadenas de televisión transmitieron el acto, y la prensa europea lo infló tanto como el propio gobierno argentino: la realidad es que Castro había reunido, en una ciudad de casi quince millones de habitantes, sólo veinte mil espectadores. Lo cual venía a demostrar palmariamente que, hiciera lo que hiciera Kirchner en función de su imagen, ese veinte por ciento de argentinos que lo había votado en la primera ronda –recordemos que no hubo segunda porque, en una maniobra deslegitimadora y antidemocrática, Menem se abstuvo de presentarse–, no lo había hecho porque fuera de izquierdas. Hubiese

ganado en la segunda, seguramente, pero no por méritos propios, sino porque una gran mayoría hubiese ido a votar contra Menem. Nadie sabía realmente cuál era el plan de gobierno de Kirchner, si es que existía, pero el discurso de asunción dibujó uno con el que en principio no cabía estar en desacuerdo: lucha contra la corrupción, renegociación de la deuda externa, remedio de los conflictos derivados de la dictadura.

Los primeros pasos de gobierno parecían ir en esa dirección: se removieron cargos policiales sospechosos de connivencia en delitos graves –narcotráfico y tráfico de armas, secuestros y torturas–, fueron pasados a retiro militares vinculados con la represión en la dictadura, se inició la reforma y la renovación de la Corte Suprema, diseñada a su medida, en número de miembros y en designación de jueces adictos, por Carlos Menem para garantizar su propia impunidad. Y basta, nada más. La seguridad de los ciudadanos no mejoró, sus garantías legales tampoco, porque en la policía y en la judicatura los leales a Menem fueron sustituidos por leales a Kirchner o a su discutido mentor, Eduardo Duhalde, que no había tenido legitimidad suficiente para actuar en su momento. Pero lo más grave es lo que sucedió con la deuda externa.

Kirchner tenía tres posibilidades: derogar la ley por la cual el ministro Cavallo había establecido la consolidación de la deuda –es decir, la asunción por el Estado de las deudas de las empresas privadas, una barbaridad jurídica que sigue en pie, y por la cual el Estado acepta como propias, por ejemplo, deudas que algunas empresas filiales de otras, extranjeras, tienen con sus casas matrices–; o asumir las consecuencias de esa ley hasta el momento de su asunción y promover su derogación para el futuro, que hubiese sido la más sensata y honesta, si se proponía asumir compromisos nacionales; o negociar una postergación de pagos con largos plazos para generar confianza en nuevos inversores y promover la producción. Optó por una salida imprevisible: no hacerse cargo sino de la cuarta parte de la deuda. No es improbable que, consciente de que la madeja judicial que eso generaría no iba a ser fácil de desenredar a corto plazo, delegara así el problema en su sucesor, quien fuera. Peronista, eso sí, porque las eleccio-

nes argentinas son, y serán en el porvenir inmediato, entre un peronista y otro peronista.

Los antiglobalizadores, que no sólo se oponen al libre comercio, sino también al pago de la deuda externa, hicieron suya la medida de Kirchner y le incorporaron al panteón de las izquierdas. Y, con los antiglobalizadores, la prensa bienpensante europea, que es mayoritaria. Al cabo de un año y medio de gobierno, cumplido el 25 de octubre, la deuda sigue allí, pero incrementada por la acumulación de intereses, y la producción no ha aumentado. El país continúa en *default*.

Con ser el suyo un gobierno representativo, en términos personales, de lo que en la Argentina de los años setenta se autodenominó izquierda, es decir, del ala izquierda del peronismo, el movimiento montonero, resulta ser en la realidad última una continuación del menemismo. Ya en 1989 fueron muchos los ex montoneros que apoyaron a Menem y tuvieron cargos de relieve en su administración, y el propio Kirchner se recicló como demócrata en el Partido Justicialista de la época. La prensa europea de izquierdas que no se dejó seducir por la vertiente populista de la personalidad de Menem, lo pintó como un neoliberal, palabra que en sus textos resulta ser anatema, y que aún nadie ha explicado: sirve tanto para designar a los que creemos que la globalización es a la vez una realidad y una solución para unos cuantos problemas, como para rotular a los corruptos de toda laya; también para degradar la imagen del liberalismo. La verdad es que el menemismo fue el imperio de la corrupción, y resultó más trascendente que sus pares contemporáneos –Alan García, Carlos Andrés Pérez, Collor de Melo, todos ellos tan favorecidos por las izquierdas reinantes como Bettino Craxi– por las dimensiones territoriales, culturales y políticas del país, y porque esa corrupción no le costó el poder ni la entrada en prisión.

Menem ha servido a los enemigos del liberalismo para identificar cualquier proceso de privatización con la corrupción, poniendo el acento en las privatizaciones traumáticas, asociadas a los nombres de Enron y Aerolíneas Argentinas. Y su deriva personal ha contribuido a hacer de la impunidad un *way of life*.

No han comprendido las izquierdas europeas que el populismo no es una ideología, sino un estilo. No es una concepción del mundo, sino una estética. Lo que de igual percibimos en Chávez y en Fidel Castro, en Lula y en Menem o Kirchner es una forma de la violencia, ejercida contra los modos tradicionales de hacer política. En un sector de la sociedad, el más educado en términos democráticos, esos personajes producen, sobre todo, vergüenza ajena.

Pero ese estilo se acompaña de consignas. Es en sí mismo una declaración de principios, pero tiene un aspecto verbal: por ejemplo, las célebres consignas «patria o muerte», «socialismo o muerte», «la sangre derramada jamás será negociada» o «el pueblo unido jamás será vencido». Todas, negaciones de plano del hecho político, de la política y de lo político. Porque ante lo irrealizable de un proyecto existen alternativas distintas de la muerte. Porque a lo largo de la historia, hombres y mujeres derramaron sangre únicamente para forzar negociaciones. Porque el concepto mismo de pueblo es una proclamación, cierto que abstracta, de unidad.

El populismo es la negación de lo político, la burla de lo político, la parodia de lo político. En los Chávez y los Castro de este mundo, la realización de este aserto es evidente. Pero no son ellos los únicos populistas en estos albores del siglo y del milenio. Las izquierdas del Occidente desarrollado se han apuntado encantadas al pensamiento desestructurado, a las frases triviales y en ocasiones sanguinarias, a la no-política.

Lo políticamente correcto y el populismo, con no ser sinónimos, son términos coincidentes en más de un aspecto. Ambos sirven a un mismo público: el más zafio, el más ignorante, el más pobre en todos los sentidos, el que necesita el amparo de lo colectivo para sentirse en el mundo. Ese público, que no ciudadanía, se tranquiliza cuando piensa, o cree que piensa, como la mayoría de los que le rodean.

El populismo no cree en el Estado. Y, puesto que el Estado es, ante todo, un pacto entre iguales, cuando no se cree en él, cuando se desconoce la necesidad de un marco general y común de garantías, se contribuye a debilitarlo y, en ocasiones, a acabar con él. Cuba no va a

salir del castrismo sin tener que reinventarse como Estado, sin elaborar un nuevo pacto civil. Rusia aún vive la enfermedad del Estado destruido. La Argentina del peronismo posterior a 1955 sigue sin encontrar su camino.

El presidente de Chile, Ricardo Lagos, se sale del marco populista. Aunque la prensa insista en sumarlo a Kirchner, Lula, Chávez, Castro y, ahora, Vázquez, su imagen no ha podido ser asimilada a las de los demás. Chile pertenece al APEC (Acuerdo de Cooperación Asia-Pacífico), ha firmado tratados de libre comercio con los Estados Unidos, México, Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea y China, y está en elaboración el que suscribirá con Japón. Todo lo contrario de una política antiglobalización. Lagos ofrece una política de Estado coherente en lo interior y en lo exterior. Los inversores lo saben, y por eso apuntan a Chile, aunque su economía diste de estar realmente saneada, aunque su población esté en una situación tan lamentable como la de los demás países de la región, y aunque una parte importante de esa población viva, desde el punto de vista productivo, en la Argentina depauperada que, sin embargo, aún ofrece mejores oportunidades a los trabajadores chilenos que cruzan constantemente, de un lado a otro, una frontera más teórica que real, una frontera tan permeable que ha determinado la decadencia de Buenos Aires como eje de las exportaciones argentinas, muchas de las cuales se hacen ahora por el Pacífico. De ningún modo el socialista Lagos ha hecho una política interior que tendiera a resolver los problemas cotidianos de los chilenos en salud, educación y vivienda, siendo como es Chile el país más favorecido por los inversores extranjeros en la región, es decir, pudiendo permitírsele: ahí siguen campando por sus respetos las «poblaciones», el analfabetismo y la marginalidad. Pero ese déficit moral del gobierno no cambia nada en relación con su lugar en el mundo como Estado, coherente con su pasado. Permite señalar, eso sí, que las políticas sociales son un problema interno, y que lo que se haga con las riquezas acumuladas en intercambios de privilegio depende únicamente de los gobernantes locales.

En Chile no ha habido ruptura, sino transición a la democracia. En la Argentina ha habido regreso a la política de antes de la dictadura,

lo mismo que ha empezado a ocurrir ahora en el Uruguay, desde el momento en que Vázquez ha llamado a participar en el gobierno a viejos cuadros tupamaros.

En Brasil, después de la salida del gobierno de Collor de Melo, se ha recobrado sin traumas la continuidad. Lula es un populista aparente, pero, por mucho que se pretenda identificarlo con Kirchner, Castro, Chávez o Vázquez, es un hombre de Estado. Hace poco, Lula hizo aprobar en el Congreso una ley de la que se ha hablado menos de lo que merecía: la que ordena abatir en vuelo a los aviones que, sobrevolando territorio brasileño, no se identifiquen. Se instituye así una forma de la pena de muerte, sin juicio previo, en un país que no reconoce ese extremo jurídico. Lula, que en este caso no estaba haciendo populismo, tenía razones de peso para promulgar esa ley. Se enfrentaba, se enfrenta, al narcotráfico y el terrorismo, negocios inseparables e instalados en el territorio amazónico, dentro y fuera de las fronteras de Brasil, y que no son de alcance local ni regional, sino internacional: el narcotráfico en Iberoamérica no está únicamente en manos de los cárteles colombianos, venezolanos y colombianos, sino que Hezbollah ha trasladado allí parte de sus negocios, perjudicados por la intervención en Afganistán. Por otra parte, los Estados Unidos habían pedido a los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina su colaboración en la lucha para lograr el desmantelamiento de las organizaciones que operan en la Triple Frontera, algunas de ellas directamente ligadas a Al Qaeda, con muy magra respuesta por parte de Paraguay y Argentina. Las relaciones del Brasil con los Estados Unidos son buenas, y el discurso oficial no se vale de consignas antiimperialistas al uso. Lula viene dando un tratamiento de Estado a los problemas internacionales que, en no pocas ocasiones, le acercan más a Álvaro Uribe que a cualquiera de aquellos colegas con los que se le suele identificar. Y le convierten en un sucesor claro de Fernando Henrique Cardoso.

Por esas políticas de Estado, Brasil es el segundo país del subcontinente en la confianza de los inversores, y aunque a la vez aloje en Porto Alegre el más importante foro de la antiglobalización, su gobierno dista mucho de identificarse con sus postulados: le sirven para proponer formas alternativas y graduales de globalización, socialmen-

te menos traumáticas, del tipo del mercado BRIC (Brasil, Rusia, India, China). Lula cimentó su campaña y cimentó su popularidad en el programa Hambre Cero, en gran medida realizable en las condiciones de intercambio del Brasil; e imposible de extender en otras, aunque el propio presidente prescindiera de esa verdad de a puño cuando va a reclamar ayudas al G-8, dando pábulo a una lectura errónea de su propia experiencia por unos creadores de opinión europeos que prefieren guiarse por las consignas antes que por la contabilidad. Los que sí leen contabilidades, saben que Lula no es Kirchner, ni mucho menos Chávez o Castro: cuando reparte, no reparte pobreza, sino riqueza. Lagos no reparte nada: desplaza población; y por falta de generosidad política, ahoga a Bolivia.

No son las izquierdas las que gobiernan en los países rectores de Iberoamérica, sino los populismos. Lo que deberían preguntarse los observadores es si queda otra izquierda que la populista.

JON JUARISTI

CERVANTES ANTE LOS PARTICULARISMOS ESPAÑOLES

El cuarto centenario de la publicación de la Primera Parte del Quijote coincide con la ofensiva concertada de los nacionalismos secesionistas y de una gran parte de la izquierda contra la unidad de la nación española, circunstancia que, en cierto modo, nos obliga a preguntarnos qué idea de España prevalece en la obra cervantina.

¿**E**xiste acaso en la obra de Cervantes y, más en particular, en el *Quijote* –que la imaginación liberal, desde Unamuno a Américo Castro, pasando por Ortega, consideraba nuestra biblia nacional– una determinada concepción de España? Así parecía creerlo Julián Marías, a las puertas del siglo XXI, cuando afirmaba de Cervantes que «habla de muy diversas porciones de España, al hilo de las andanzas de sus personajes; está lleno de simpatía por las varias regiones españolas y las colma de elogios; aparecen en sus libros castellanos, andaluces, vascos, catalanes, aragoneses, valencianos; no se siente distinto de ellos, no hay conciencia de castellanía exclusiva; no hay ni asomo de que Cervantes se sienta extraño ante ninguna porción de España. Hay una fraternidad general y espontánea en la obra entera de Cervantes, reflejo de lo que había sido la génesis de España durante la Edad Media y parte de la Moderna: Cervantes escribe cuando la unidad de España está consolidada desde más de un siglo antes»

Jon Juaristi es Catedrático de filología española y escritor.

(Marías, 1990, 30). Sin embargo, Cervantes vivió y escribió en una época en que esa unidad, tan lenta y dolorosamente construida, comenzaba a debilitarse. No se equivocaba Ortega al escribir, en su *España invertebrada*, que, concluido el ciclo incorporativo imperial, «de 1580 hasta el día, cuanto en España acontece es decadencia y desintegración» (Ortega y Gasset, 1964, 67), siendo el primer síntoma de tal proceso desagregativo la eclosión, ya bajo el reinado de Felipe II, de particularismos estamentales y territoriales (e incluso de particularismos neoestamentales fuertemente territorializados) que no sólo afectarían a los grandes espacios trasatlánticos, sino al cogollo peninsular del Imperio. Cervantes, como muchos de sus contemporáneos, no pudo menos que percibirlos, pero no buscó remediarlos excitando el castellanocentrismo ni postulando la cirugía de hierro para tratar los abscesos disgregadores (él, que era a la vez castellano, soldado e hijo de cirujano), al contrario de lo que más tarde haría Quevedo. Como el liberal que ya era, antes del liberalismo, confió en que, al mostrar en el espejo de la ficción los dislates ridículos del espíritu de campanario, los españoles de su tiempo sabrían reconocerse en ellos y enmendarían libremente sus conductas.

Para el Cervantes hondamente español, tocado por el erasmismo y el neoplatonismo, sólo el amor podía mantener unidos a los pueblos. Un amor que implica la mutua comprensión, por encima incluso de las diferencias idiomáticas, sobre la base de una historia y una morada geográfica compartidas. Entronca así con una tradición pasada, vagamente aristotélica, que había visto en el clima y en el medio natural los presupuestos de una relativa unidad caracterológica y moral de los españoles, condición necesaria para el entendimiento cordial entre todos ellos a despecho de las barreras lingüísticas, tradición que se había plasmado, por ejemplo, en una de las múltiples metáforas médicas del amor cortés que pueblan la poesía de Ausiàs March, cuñado de aquel Joanot Martorell cuyo *Tirant lo Blanc* Cervantes admiró tanto:

*Lo viscaí qui es troba en Alemanyà,
Paralitic, que no pot senyalar,
Si és malalt, remei no li pot dar
Metge del mon si doncs no es d'Espanya,*

*Qui del seu mal haurà mes coneixença
 I entendrà millor sa qualitat:
 A tal son jo, en estrany lloc posat,
 Que altre sens vós ja no em pot dar valença.* (March, 1992, 271)

Ausiàs March se limitaba a recoger una creencia vulgar, muy difundida en su tiempo (nos referimos a la primera mitad del siglo XV) sobre la fabulosa capacidad de comprensión preverbal entre los españoles. Plantea deliberadamente un caso extremo: el de un vizcaíno (es decir, un vasco) al que hay que suponer ignorante de otra lengua que no sea la suya vernácula, y además paralítico, lo que le priva del recurso a la gestualidad. Los españoles, por cierto, desconfiaban del valor universal de los gestos: recuérdese lo que pasó entre griegos y romanos, según el Arcipreste de Hita, cuando éstos pidieron a aquéllos sus leyes. La empatía entre médico y enfermo se establece en medio de la quietud y el silencio, como una forma de milagroso reconocimiento fraternal entre dos españoles que se encuentran en *estrany lloc*, y, aunque la historia parezca inverosímil, su sentido no puede ser más claro.

Se trata, efectivamente, de una metáfora del amor patrio que el gran poeta valenciano traslada, en dos escuetos versos, al plano del amor entre el amante y la amada ausente (el *amor de lohn* de los trovadores provenzales). Aunque se pueda encontrar una explicación rigurosamente naturalista al improbable caso del vizcaíno y su médico (quizá a partir de una afinidad de la distribución humoral –o *complexión*– debida a idéntica influencia del clima y de las constelaciones, lo que facilitaría la aplicación laxa del axioma homeopático *similia a similibus curantur*), nos hallaríamos, al cabo, ante una petición de principio, porque, si el médico descubre una similitud oculta entre el enfermo y él mismo, lo hace desde la intuición afectiva (que hoy llamaríamos saber emocional) de un nexo preexistente entre ambos. Y Cervantes no creía en ello por haberlo descubierto gracias a su innegable genialidad, sino porque era lo que habían creído los españoles y habían argumentado médicos e historiadores desde hacía, al menos, dos siglos.

Ahora bien, a Cervantes, la fe en la unidad no le estorbaba la percepción de lo diverso. Lo que pasa es que consideraba la diversidad como algo puramente adjetivo. Marías observa que, habiéndose consolidado la unidad de España a lo largo del siglo XVI, «en otros países

Europeos esto no era así y persistían relaciones de extranjería dentro de los territorios nacionales. Ahora hay gentes que pretenden presentar España como un *mosaico*, pero la realidad es literalmente la contraria, y los escritos cervantinos lo muestran sin proponérselo» (Marías, 1990, 30). Por las páginas cervantinas, en efecto, desfilan andaluces, extremeños, castellanos, catalanes, valencianos, aragoneses, vascos, asturianos, murcianos y gallegos con idéntica prosopopeya española, pero no estoy tan seguro de que Cervantes no se *propusiera* jamás mostrar lo engañoso de esta apariencia de mosaico o de calidoscopio. Una vez, al menos, intenta hacerlo con prodigiosa ironía, a través de un complejo diálogo con la larguísima tradición de las *laudes Hispaniae* o alabanzas de España, procedente de la Baja Antigüedad. Me refiero al párrafo final de la descripción quijotesca de los ejércitos, al comienzo de la aventura de los rebaños:

En estotro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis; los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo; los que gozan las provechosas aguas del divino Genil; los que pisan los tartesios campos, de pastos abundantes; los que se alegran en los éliseos jerezanos prados; los manchegos, ricos y adornados de rubias espigas; los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda; los que en Pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de su corriente; los que su ganado apacientan en las estendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso; los que tiemblan con el frío del silvoso Pirineo y con los blancos copos del levantado Apenino; finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra (Cervantes, 1978. I, 18).

Como observa Martín de Riquer (2003, 152), «a nadie le puede caer la menor duda de que todo esto está escrito en broma». La tradición literaria invocada y parodiada aquí es amplísima. Riquer señala, en primer lugar, la *Yliada romance* u *Homero romanizado*, de Juan de Mena, en cuya dedicatoria se enumera ampulosamente a los pueblos cuyos embajadores acuden a rendir pleitesía a Juan II de Castilla. También se remedan jocosamente algunos pasajes de la *Arcadia* de Lope de Vega, obra que es objeto de otras contrahechuras burlescas en distintos pasajes del *Quijote*. Menciona, en fin, Riquer sendos pasajes de *El Caballero del Febo* y del *Palmerín de Inglaterra*, que contienen también enumeraciones descriptivas de ejércitos y caudillos.

Obviamente, todos estos libros y muchos más por el estilo debieron comparecer en la imaginación cervantina (o en su memoria, que viene a ser lo mismo) cuando escribió las líneas antecitadas. ¿En broma? Sí, desde luego, pero también en serio. Cervantes apunta a dos modelos primordiales: las ya mencionadas *laudes* isidorianas y alfon-síes, y el catálogo de las naves aqueas en el Canto Segundo de la *Iliada* (versos 494-760). Nótese que Cervantes no hace distinciones entre las gentes de España. Sólo los vizcaínos, mencionados mediante una paráfrasis («los de hierro vestidos»), son calificados como «reliquias antiguas de la sangre goda», pero aquí Cervantes no se aparta un punto de lo que eran las convenciones establecidas en la historiografía unitaria de su tiempo (singularmente, en la *Historia de España* de Juan de Mariana), que hacía de las gentes del norte peninsular, donde abundaba el hierro, los descendientes legítimos de los godos que se refugiaron supuestamente en las montañas cantábricas tras la derrota de don Rodrigo por los árabes. Y esta caracterización gótica de los vizcaínos o cántabros (ambos etnónimos son rigurosamente equivalentes en tiempos de Cervantes) va a contrapelo de la historiografía particularista vizcaína (Zaldibia, Garibay, Poza), que separaba a los vizcaínos de los godos y les daba una ascendencia protohistórica y bíblica (los caldeos de Túbal, hijo de Jafet).

Todos los españoles son iguales en su (in)definición regional, con la excepción de los vascos o cántabros, a los que se asigna un rasgo genealógico que sólo denotaría un nexo con la España visigótica. Lo que introduce diversidad es la geografía, no la historia. Como en las *laudes*, España es una tierra surcada de ríos (Betis, Tajo, Genil, Pisuerga, Guadiana), con tierras feraces en pasto y cereales, rica en toda clase de ganados. En el indiferenciado rebaño de carneros, don Quijote dibuja el mapa de la morada común.

¿Por qué el otro modelo, el homérico? Como es sabido, a Homero el catálogo de las naves le permitió desplegar una variada taxonomía étnica: un panorama de la Grecia arcaica descrita, ésta sí, como un mosaico de pueblos y de reinos, con sus correspondientes caudillos o *basileos*. Cervantes sabía, por supuesto, que un modelo como éste habría sido apropiado para una descripción de la España medieval, y acaso de la mayor parte de los países europeos de su tiempo, donde la unidad nacional distaba, como dice Marías, de haber sido alcanzada, pero que resultaría absurdo si se intentaba aplicar a la descripción retórica de la España de Felipe III. ¿Por qué, entonces, recurre a él?

En realidad, Cervantes no fue el primero en echar mano del modelo homérico para referirse a España. Ya lo había hecho así Fray Luis de León (2001, 113) en su *Profecía del Tajo*, cuyo asunto era, precisamente, la leyenda de la *Pérdida de España*:

*Llamas, dolores, guerras,
Muertes, asolamientos, fieros males
Entre los brazos cierras;
Trabajos inmortales
A ti y a tus vasallos naturales:*

*A los que en Constantina
Rompen el fértil llano, a los que baña
El Ebro, a la vecina
Sansueña, a Lusitania,
A toda la espaciosa y triste España.*

Quien habla en el poema es el río Tajo, que se dirige admonitoriamente al último rey godo, Rodrigo. Lo que éste hacía, en el momento en que el río toma la palabra, nos es sucintamente notificado en los tres primeros versos del poema:

*Folgaba el rey Rodrigo
Con la hermosa Cava en la ribera
Del Tajo, sin testigo.*

Dicho de otro modo, Rodrigo es interpelado por el Tajo –el único testigo– cuando se halla perpetrando el crimen por el que España toda va a perderse a manos de los árabes. En rigor, España ya se ha perdido en el momento mismo en que el río se levanta y comienza a reprender al rey. El castigo está implícito en la transgresión y, por eso, la unidad del reino visigótico puede descomponerse ya en una enumeración analítica de sus fragmentos, como lo hace Fray Luis. La unidad primitiva, mítica, desaparece para ser sustituida por un mosaico del que sólo algunas teselas se enumeran: las suficientes para sugerir a la imaginación, melancólicamente, el objeto perdido –«la espaciosa y triste España»– que asoma en el último verso de la serie como nombre de la totalidad que ha estallado y como ideal a restituir. Fray Luis, que escribe desde el ápice o culminación del proceso incorporativo, con la unidad ya restaurada y aparentemente segura, expone el

hecho histórico con el lenguaje del mito: la pérdida de España (o sea, del reino visigodo de Toledo), la fragmentación de la antigua unidad (los reinos medievales) y la reunificación simbolizada por el nombre final, España (como equivalente a la nueva criatura política, la Monarquía Católica, alumbrada por Isabel I y Fernando V y consolidada por sus sucesores). Los nombres geográficos que utiliza Fray Luis definen la totalidad del territorio desde los cuatro puntos cardinales: Constantina (el Sur); el Ebro (el Norte); Lusitania o Lusitania (el Oeste) y Sansueña (el Este). Pero Sansueña –equivalente a Zaragoza– es un topónimo del mundo de la fantasía caballeresca, tomado del romancero del ciclo carolingio y del *Amadís* y proyectado desde el mundo literario irreal al discurso de la Historia.

La técnica de Cervantes es precisamente la inversa. El fragmento citado del Quijote se inscribe en una descripción más amplia, que es un pastiche caballeresco con resonancias homéricas. El efecto que así consigue es una des-realización de la Historia. Los nombres geográficos referidos a ejércitos son meros fantasmas, miembros repartidos de un cuerpo que no existe, porque no tiene nombre alguno que lo unifique, y, cuando lo buscamos, como en el poema de Fray Luis, donde el nombre de España funciona como un lenitivo de la angustia producida por la fantasía del descuartizamiento, encontramos en su lugar una fuga en el sentido («Y [los que tiemblan] con los blancos copos del levantado Apenino; finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra») que busca producir en el lector –español– una decepción irónica. No hay ascenso desde los fragmentos a la unidad, sino remisión de los mismos a un conjunto más amplio de fragmentos dispersos: esa Europa inconclusa donde, como dice Marías, «persistían relaciones de extranjería dentro de los territorios que hoy llamamos nacionales».

Si Cervantes siguió a su manera el modelo homérico, fue porque intuyó la desagregación particularista (que treinta años después, en tiempos de Olivares, encararía Quevedo con retórica belicista y autoritaria) de la España del Quinientos, acaso idealizada por el antiguo soldado de Urbina, pero en la que, por cierto tiempo al menos, había conseguido arraigar –a través de las utopías pastoriles navideñas del teatro de Juan del Encina y de Gil Vicente, a través del *Lazarillo* y gracias a la levadura erasmista– la esperanza de una palingénesis nacional basada en la fraternidad y en la compasión.

Entre las parodias del catálogo homérico posteriores a Cervantes hay una que no me resisto a citar, porque tiene su raíz en el *Quijote* mismo. Me refiero a la descripción, no ya de los ejércitos, sino de los ganados de Irlanda en el *Ulises* de Joyce, donde la visión del caballero de la Mancha es devuelta a los términos de la percepción empírica, para satirizar así las visiones gloriosas y heroicas del pasado irlandés que habían difundido los dramaturgos nacionalistas. En los rebaños, don Quijote ve ejércitos. En los ejércitos de Yeats y Lady Gregory, esto es lo que ve Stephen Dedalus:

Y por aquel camino dirigían sus pasos innumerables rebaños de julos clarinados y ovejas de cría y carneros esquilados y corderos y gansos silvestres y novillos medio cebados y yeguas alborotadoras y terneras descornadas y ganado de pelo largo y ovejas de reserva y los rozagantes novillos cebados de Cuffe y animales de engorde y marranos capados y cochinos de matanza y las distintas y diferentes variedades de ganado porcino en alto grado distinguido y vaquillas de Angus y toros descornados de pura raza junto con vacas lecheras y toros premiados en concursos: y continuamente se oye un ruido de pisadas, un cacareo, alboroto, mugido, bramido, estruendo, rezongo, mordisqueo, un rumiar de ovejas y cerdos y ganado de cansinas pezuñas desde los pastizales de Lusk y Rush y Carrickmines y desde las torrenteras de los valles de Thomond, desde las cimas del M'Gillicuddy el inaccesible y desde el señorial Shannon el insondable, y desde los suaves declives del terruño de la raza de Kiar, las ubres dilatadas por la superabundancia de leche y cubiertas de manteca y cuajadas de queso y tina-cos de granja y faldillas y pescuezos de corderos y celemines de grano y huevos oblongos a cientos, de varios tamaños, desde el ágata al pardo. (Joyce, 1999, 338-339).

No será 2005 un mal año para leer el *Quijote*. Y el *Ulises*.

BIBLIOGRAFÍA

- Cervantes, Miguel de (1978). *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Edición de Luis Andrés Murillo. Editorial Castalia, Madrid.
- Joyce, J. (1999): *Ulises*, Edición de Francisco García Tortosa, Cátedra Madrid.
- León, Fray Luis de (2001): *Poesías completas. Propias, Imitaciones y Traducciones*, Edición de Cristóbal Cuevas, Castalia, Madrid.

- March, A. (1992): *Poesies*, Edició a cura de Vicent Josep Escartí, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
- Marías, J. (1990): *Cervantes clave española*, Alianza, Madrid.
- Ortega y Gasset, J. (1964): *España invertebrada*, Espasa, Madrid.
- Riquer, Martín de (2003): *Para leer a Cervantes*, El Acan-tilado, Barcelona.

EL MOMENTO NEOCONSERVADOR EN LOS EE.UU.

La consistencia y coherencia del discurso neoconservador y la ausencia, lógica, de una alternativa mejor –no su capacidad de intriga o conspiración–, están en la base del éxito de los «neocons». Si verdaderamente Europa quiere llegar ser fuerte en el mundo, debería comenzar a escuchar cuanto antes lo que propone la visión neoconservadora, porque de lo contrario, encerrada sobre sí misma, tratando ingenuamente de sostener su seguridad sobre su aislamiento, se irá encontrando cada vez más sola, y finalmente será más vulnerable.

Hay algo que ha cambiado en las filas conservadoras en lo que toca a la política y a la acción exterior. Ese algo lo ilustra perfectamente una anécdota reciente: Durante la convención del Partido Republicano, del pasado septiembre en Nueva York, varios miembros de la delegación del Partido Conservador británico tuvieron que aguantar la experiencia de que cada vez que eran saludados por un convencional americano, le espetaran lo mismo: «Mi más alto reconocimiento hacia su Primer Ministro», el laborista Tony Blair. El gesto de gratitud de un conservador norteamericano, normalmente muy conservador, hacia un socialdemócrata laborista europeo, sólo podía causar sorpresa y mortificación en los delegados británicos.

De hecho se puede entender perfectamente bien el porqué de los sinsabores de los conservadores tradicionales europeos. Al fin y al cabo, ¿qué podían tener en común un Presidente americano como George W. Bush –moralista y tejano–, el Primer Ministro Tony Blair –católico y de izquierdas–, y el Presidente José María Aznar –un prag-

Rafael L. Bardají es Director de Estudios de Política Internacional en FAES.

mático posibilista—, cuando se reunieron en las Azores para hablar del futuro de Irak? ¿Cómo explicar desde las rigideces ideológicas tradicionales la visión y la voluntad que compartían estos tres líderes?

Algunos han encontrado una respuesta fácil, inspirados en teorías conspirativas: Un grupo muy cohesionado de intelectuales, unos fuera de la Administración, otros en puestos claves, habrían «secuestrado» a los tres personajes imponiéndoles su interpretación de la realidad internacional y su agenda estratégica. Ese grupo de conspiradores serían los llamados neoconservadores, más popularmente conocidos como «neocons».

La posibilidad de un asalto al poder, simultáneo en tres naciones tan distintas como Estados Unidos, Reino Unido y España, con líderes de características políticas y humanas dispares y con una cultura política, un aparato administrativo y unos procedimientos gubernamentales tan alejados unos de otros, debería ya de por sí descalificar la teoría de la conspiración. Por si fuera poco, además, los representantes del neoconservadurismo, empezando por Paul Wolfowitz en el Pentágono y acabando con Bill Kristol o Charles Krauthammer en los medios de comunicación, nunca han ocultado sus ideas y planes, todo lo contrario. Son bien conocidos porque han pasado —y pasan— buena parte de su vida haciendo públicas sus propuestas. Un rasgo poco sensato para un conspirador.

En realidad, si las ideas de los neoconservadores han tenido éxito y han sido asumidas por los responsables políticos, no se debe a su capacidad de intriga, sino a la fuerza y consistencia de su visión frente a unas circunstancias tan nuevas como especiales y que tras los ataques del terrorismo global han obligado a reorientar la atención política internacional. La vivencia y la necesidad de dar una respuesta a estas circunstancias, retos y amenazas, era lo que realmente compartían Bush, Blair y Aznar, tres líderes a los que difícilmente se podía calificar de neoconservadores. Sin embargo, lo que ocurre es que desde el 11-S no hay ninguna alternativa conceptual o ideológica que ofrezca mejor respuesta y guía que la que ofrecen los neoconservadores. El terrorismo islamista acabó tanto con la visión socialdemócrata y liberal del mundo como con la conservadora y realista.

LA REVOLUCIÓN NEOCONSERVADORA

Frente a los idealistas liberales, –quienes entienden la vida internacional como una trinidad formada por la paz, la democracia y el libre mercado–, y a los realistas –que la ven como la defensa nacional, la democracia y el libre mercado–, los neoconservadores defienden que la democracia y el libre mercado son valores a defender pero que la paz no se consigue solamente con instituciones internacionales o con una defensa nacional robusta, sino a través de una política que busca el cambio de régimen y la democratización, por la fuerza si es necesario, de aquellos regímenes dictatoriales y autocráticos en el Oriente Medio que son el caldo de cultivo del actual terrorismo internacional, que no es sino terrorismo islámico.

La gran innovación, por tanto, no reside en los conceptos más referidos por la prensa y la izquierda, como acciones de anticipación y guerras preventivas, sino en retar el mantenimiento del *statu quo* en zonas, como el Oriente Medio, donde la situación actual, gestionada pero no alterada, es una amenaza contra los intereses del mundo occidental. En ese sentido, lo que los neoconservadores proponen no es únicamente una intervención militar tras otra, de lo que se les suele acusar, sino el cambio de las condiciones políticas, económicas y sociales en los países de la zona, cambio ayudado por el recurso retórico o real de la fuerza si es necesario. La expansión de la democracia, por tanto, no sólo es una cuestión moral, sino un imperativo de la seguridad internacional.

La segunda gran innovación es que retoman el rechazo a las actitudes apaciguadoras y el valor que se le concede a la disposición a hacer la guerra contra el terrorismo hasta la victoria final. Ya no se trata de contener a los terroristas, sino, en la medida en que los suicidas islamistas son incontenibles, enfrentarse a ellos y vencerles. Y para éso no basta con el refuerzo de la protección del territorio o la defensa nacional, sino que es necesaria también la utilización anticipatoria de la fuerza más allá del suelo nacional, allí donde los terroristas se concentren para planificar o preparar sus ataques.

Igualmente –y volvemos al punto anterior–, perseguir y derrotar a los terroristas es imprescindible pero no suficiente. También hay que

eliminar los factores que favorecen que gentes normales se conviertan en Bin Laden. Y para ello nada mejor que promover la apertura política, la liberalización económica y la tolerancia religiosa en el mundo musulmán. Esto es, la transformación del Norte de África y el Oriente Medio.

Las acciones anticipatorias y las intervenciones militares preventivas no son algo nuevo en la agenda internacional. Lo que es verdaderamente revolucionario en los neoconservadores es el rechazo del *statu quo*, de la idea última de que el mantenimiento de la estabilidad es un objetivo estratégico valioso; y, por tanto, que asumen y defienden que el cambio y la inestabilidad en el corto plazo son situaciones deseables y con consecuencias más que positivas. Con todas las dificultades del Irak post-Saddam, es innegable que será gracias a la presencia militar norteamericana y de la coalición internacional que tendrán lugar las primeras elecciones libres en ese país en muchas décadas. Como también será gracias a la presión y firmeza de Washington que los palestinos puedan elegir libremente entre varios candidatos.

Voluntad de cambio, moral de combate y ambición de victoria. Ésas son las componentes esenciales de la visión neoconservadora.

NO HAY MEJOR ALTERNATIVA

Las propuestas de los neoconservadores han sido criticadas desde todos los lados, desde la izquierda internacionalista y desde la derecha tradicional. Sin embargo, ninguna de estas escuelas de pensamiento ha sabido o podido presentar una concepción alternativa que claramente pueda resolver los problemas a los que nos enfrentamos o que no suponga más riesgo para nuestra seguridad.

La primera reacción frente al terrorismo islámico es culparnos a nosotros mismos: «Algo habremos hecho mal en el mundo –los Estados Unidos seguro, se afirma sin pudor– por lo que hemos provocado las iras de otros». Por lo tanto, una retirada o un retraimiento debería garantizar una mayor seguridad. Esta fue una línea de razonamiento adoptada inicialmente por el PSOE. Pero como los sucesivos intentos de atentados tras el 11-M han puesto de relieve, no por dejar de estar en Irak el fundamentalismo islámico ha dejado de ver en

España un enemigo a batir. Ahí están los casos del AVE y de la Audiencia Nacional. De hecho, una postura aislacionista lo único que garantiza es que los terroristas disfrutan de una mayor libertad y capacidad de actuación, de más facilidades para su preparación y entrenamiento, y acceso a más cuantiosas fuentes de financiación. Nunca lo contrario. Por tanto, estando como estamos sometidos a una dinámica bélica que los terroristas han elegido, pretender aislarse del mundo es suicida en el medio plazo.

Por su parte, los internacionalistas liberales, incluidos los teóricos del Partido Socialista, han preferido siempre como fórmula para enfrentarse al terrorismo las opciones no militares y los marcos multinacionales. Dicho con otras palabras: «el poder blando» y los organismos internacionales. En el caso del actual gobierno español estas preferencias han adoptado la retórica oficial de «multilateralismo efectivo» y «alianza de civilizaciones».

Los neoconservadores, en contra de lo que suele afirmarse, no desdennan el multilateralismo efectivo. El problema es que el multilateralismo que existe rara vez acaba siendo efectivo. Y ése es el problema. En ausencia de un mecanismo multinacional eficiente, ¿cuáles son las opciones? Para la izquierda, claramente la inacción. Para los «neocons», la responsabilidad de los miembros individuales de la comunidad internacional.

La izquierda pone toda su fe en las Naciones Unidas. Dejando al margen todo lo que sabemos sobre la corrupción que sacude de arriba abajo a su secretariado general, hay que admitir que el sistema de Naciones Unidas, en sus principios y en sus procedimientos, está montado para el sostenimiento del *statu quo* internacional. El respeto a sus miembros, independientemente de la naturaleza de sus gobiernos, la no-injerencia y la parálisis del Consejo de Seguridad, todo contribuye a que se cometan los peores crímenes sin apenas castigos y con grandes dificultades para aliviar sus sufrimientos. Es más, tratándose de la guerra contra el terrorismo, las Naciones Unidas se sitúan claramente a favor del *statu quo* en el Oriente Medio. Si se piensa, como creen los neoconservadores, que el actual *statu quo* es del todo inaceptable porque alimenta la violencia y permite el crecimiento del terrorismo, la ONU no es representativa de ningún multilateralismo efectivo, sino de una peligrosa ineficacia.

A su vez, el cacareado concepto de «Alianza de Civilizaciones» que suele emplearse como una solución mágica y universal, parte de un loable deseo: ser capaces de separar y divorciar definitivamente el Islam del terrorismo islamista. Siendo un piadoso deseo la institucionalización del Islam moderado, el problema es que deja en manos de los actuales gobernantes teócratas la realización eficaz de dicho objetivo. Cuando los déspotas religiosos de Arabia Saudí o Irán, entre otros, han dado más que pruebas de que son incapaces, o aún peor, alimentan directamente, la ideología de los terroristas. Desde el momento en que se deja en las manos del adversario o de los causantes del terrorismo islámico la solución, en realidad se está reviviendo la política de apaciguamiento por la que los europeos optaron inicialmente frente a Hitler con tan dramáticas consecuencias. La Alianza de Civilizaciones nos responsabiliza, presa de un síndrome de Estocolmo, de la existencia de terroristas, a la vez que nos hace irresponsables de cualquier medida para acabar con ellos. Masoquismo en lugar de vigor; política del avestruz en lugar de firmeza. Ésa, y no otra, es la «doctrina Zapatero».

Por su parte, los realistas o conservadores tradicionales son fieles al principio clásico de que las naciones no tienen amigos o enemigos permanentes, sino sólo intereses, y creen que son capaces de manipular el entorno estratégico e internacional de tal manera que los suyos sean garantizados. Para un realista no importa que en un momento dado se produzca una alianza táctica con un dictador o un sátrapa si eso conviene para maximizar la seguridad en un escenario concreto. Jugar con el Irak de Saddam en los 80 para contener las ambiciones de Teherán, por ejemplo. El problema es que no siempre el enemigo de mi enemigo puede ser considerado un amigo.

Es verdad que durante décadas el paradigma realista ha inspirado la política exterior de la mayoría de países, pero precisamente en esta experiencia reside su propia debilidad. En el Oriente Medio ya se ha experimentado de sobra con los regímenes autoritarios, a los que se les ha prestado una gran cantidad de ayuda material y política. Durante años se creyó que gracias a esas ayudas, regímenes como el saudí librarían su propia batalla interna para erradicar a los islamistas radicales y a los terroristas. Hoy sabemos que eso no ha sido así, sino todo lo contrario, y que sus políticas represivas sólo han servido para

cercenar la libertad de expresión política a favor de la libertad y la democracia pero no el radicalismo religioso, que ha gozado de un amplio margen de actuación a través de las mezquitas y escuelas coránicas.

Es más, apoyando este tipo de regímenes, se ha estado fomentando que la única oposición real a los mismos vengan, no del apoyo liberalizador, sino del islamismo radical, no dejando más alternativa a la teocracia, a la corrupción, que la revolución islámica, en lugar de favorecer una alternativa viable a ambos extremos.

Y esto ha sido así gracias a la visión realista del manejo de la realidad internacional. Seguir defendiendo las mismas prácticas sólo puede llevar a más fanatismo y odio en el mundo árabe y musulmán. De ahí que sea tan importante para los neoconservadores apostar decididamente por la democratización del Oriente Medio. Todo lo demás son soluciones malas o suicidas, porque lejos de aumentar la seguridad conducirán a más inestabilidad y a más islamismo radical, y, por lo tanto, a más terrorismo global.

EL MOMENTO NEOCONSERVADOR

La consistencia y coherencia del discurso neoconservador y la ausencia, lógica, de una alternativa mejor, –no su capacidad de intriga o conspiración–, están en la base del éxito de los «neocons». Las dificultades encontradas en Irak tras el derrocamiento de Saddam y las dudas que había sobre el resultado electoral de las presidenciales americanas, llevó a muchos a afirmar que la visión neoconservadora había llegado a su fin. El Gobierno Zapatero llegó incluso a creerse que su giro radical en pos de la retirada estratégica iba a servir de ejemplo para el resto de países de la coalición, incluido Estados Unidos. La victoria de Howard en Australia debería haber sido un aviso de que no parecía ser ésa la dirección que tomaban las cosas. La victoria aplastante de George W. Bush sobre Kerry ha dejado bien patente que la política de la «rendición preventiva» de Zapatero es una actitud y filosofía no compartida por nadie más. No hay salida de Irak y no hay escape posible a la guerra contra el terror.

En ese sentido, el segundo mandato de George W. Bush parece lejos de haber agotado la visión neoconservadora, más bien todo lo

contrario. El tono y las palabras del Presidente americano, las caras de los nuevos responsables, el discurso de apoyo de sus aliados, todo lleva a pensar que, al igual que tras los ataques del 11-S, los Estados Unidos encuentran más que persuasivas y pertinentes las ideas de los «neocons». Simplemente porque los neoconservadores han decidido encarar directamente los problemas que realmente preocupan porque son la mayor amenaza para la estabilidad mundial. Mientras sigan siendo la escuela de pensamiento que más y mejores opciones presentan para el futuro del mundo democrático y libre, los neocons vivirán su particular momento de gloria. El momento neoconservador.

Por razones obvias ese momento emana de los Estados Unidos. Por dos razones, porque allí encuentran a un Presidente que recoge buena parte de las ideas neoconservadoras y, sobre todo, porque sólo los Estados Unidos son capaces de llevar adelante tan ambiciosa agenda internacional. Con todo, el fenómeno neoconservador no es exclusivamente norteamericano. Es verdad que salvo la excepción de Blair, no hay gobiernos europeos que puedan ser considerados como alineados con los postulados «neocons», más bien todo lo contrario. Se debe en parte a la ideología imperante en la izquierda y a la falta generalizada de poder. Pero eso no quiere decir que no surjan voces que reclaman a la izquierda y, sobre todo, a la derecha, una profunda reflexión sobre su actitud hacia los problemas del mundo. De hecho, si en verdad Europa quiere llegar a ser una Europa fuerte debería comenzar a escuchar cuanto antes lo que propone la visión neoconservadora, porque de lo contrario, encerrada sobre sí misma, construyendo su seguridad sobre su aislamiento o bunkerización, al final se va a encontrar más sola, más amenazada y más vulnerable.

UN GOBIERNO OBSCENO

Durante más de dos décadas las características esenciales de la política socialista en Cataluña habían sido su absoluta ineficacia como alternativa a Pujol y una exasperante pusilanimidad en el ejercicio de la oposición. Ahora, Maragall es, con toda crudeza, el heredero de Jordi Pujol y lo que ha resultado ser hasta ahora su obra de gobierno avala la tesis de que el nacionalismo gobernante, elaborado y construido por el pujolismo, es un escenario político irrevocable.

Pasqual Maragall i Mira tomó posesión, el 20 de diciembre del 2003, de la presidencia del gobierno catalán. El ciento veintisiete presidente de la Generalitat de Cataluña. La institución se remonta a mediados del siglo XIV, aunque entre el Decreto de Nueva Planta de 1714 y la dictadura del general Franco registra más de dos siglos y medio de abolición. Dicho sea todo esto según las más recientes investigaciones (Solé i Sabaté, 2004), porque durante los últimos veintitrés años los catalanes se acostumbraron a una numeración que designaba a Jordi Pujol i Soley como el presidente ciento quince de la institución. Pero ya se sabe que la historia de las naciones, especialmente de las naciones *avant la lettre*, es dúctil y está sometida siempre a las últimas investigaciones.

La toma de posesión, aquel día de invierno, del presidente Maragall representó una gran novedad. De esta novedad se ha hablado poco, en Cataluña y fuera de ella, deslumbrados tal vez los analistas por los innumerables y laboriosos trámites de la negociación y por

Arcadi Espada es periodista. Su último libro: *Notas para una biografía de Josep Pla*.

los indeseables azares que marcaron los primeros meses de su alianza con el partido independentista y republicano.

La novedad no estaba sólo en la superficie de las cosas. Es decir, no sólo en la evidencia de que por vez primera la izquierda accedía al gobierno de un lugar que en los primeros momentos de la transición había sido llamado «la isla roja de Europa». Ni siquiera en la interpretación, posible y tal vez justa, de que el cambio suponía el fin del proceso de la transición catalana, del mismo modo que la llegada en 1982 de los socialistas al gobierno de España se había interpretado como la consolidación definitiva del proceso abierto con la muerte, en la cama del poder, de Franco. La novedad profunda era que la izquierda, obstinadamente ausente del poder durante más de dos décadas, iba a confirmar el carácter de la práctica política nacionalista. Es decir, iba a decidir con su acción de gobierno si el nacionalismo era un mero atributo endosable a la política de *Convergència i Unió* o bien se trataba ya de un rasgo ontológico, independiente de las políticas concretas que cada partido aplicara. Era en este sentido que alguna gente se preguntaba antes de las elecciones, y casi siempre con cierta ironía resignada, si Maragall iba a ser el sustituto de Pujol o su heredero.

Desde luego, y bastaba con una somera mirada a los antecedentes, la pregunta tenía bastante de retórica. Durante más de dos décadas las características esenciales (y vinculadas una a la otra) de la política socialista habían sido su absoluta ineficacia como alternativa a Pujol y una exasperante pusilanimidad en el ejercicio de la oposición. Tan sólo durante algún tiempo, indefinido y breve, en torno a los prolegómenos de los Juegos Olímpicos de 1992, Maragall, entonces alcalde de Barcelona, había hecho concebir la posibilidad de que fraguara un discurso alternativo al pujolismo. Pero el errático carácter de su política y la perenne confusión de sus ideas no permitió que la posibilidad se concretara. Y las siempre discretas esperanzas de los adversarios del pujolismo se sostenían por el extenuante hartazgo de esa política veintitrés años hegemónica antes que por las garantías que la alternativa ofrecía. La campaña electoral de los socialistas no cambió el panorama. Lo más nítido de su oferta fue la reforma del Estatuto. Ni en el resto de las iniciativas que acompañaban el programa, ni en las personas que iban a encargarse, presuntamente, de aplicarlo podían advertirse signos de clara ruptura con el pujolismo.

A pesar de los antecedentes sería absurdo negar que la formación del nuevo gobierno no levantó expectativas. Y hasta esperanzas en buena parte de los que querían que la victoria de Maragall supusiera un cambio profundo. Aunque sólo fuera por oír pronunciar a los locutores de las emisoras públicas el anhelado sintagma «El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall...» ya valía la pena correr, para muchos, el riesgo de la ingenuidad. Además, Maragall había actuado con inteligencia. Aunque obtuvo menos escaños (no menos votos) que su rival convergente y quedó por debajo de las expectativas, dio un ejemplo de fortaleza y confianza en sus posibilidades desde la misma noche electoral. Cuatro años antes ya había ensayado la misma actitud, cuando se empecinó en la evidencia que tantos pasaban por alto: esto es, que había obtenido más votos que Pujol. Aquel empecinamiento logró restarle a su rival unas micras de legitimidad y puso las bases, aunque fueran infinitesimales, de la complicada operación estratégica que le llevaría finalmente a la presidencia. La noche electoral del 2003 Maragall insistió una y otra vez en que el gobierno de la izquierda era posible y que había que trabajar por él. Muchos de sus más incondicionales partidarios no podían creer lo que estaban viendo y siguieron sin creerlo hasta que el 20 de diciembre fue investido, sobre todo por sí mismo y la confianza fértil que había demostrado en sus posibilidades.

Ha bastado un año, sin embargo. Maragall es, con toda crudeza, el heredero de Jordi Pujol y lo que ha resultado ser hasta ahora su obra de gobierno (y también lo que no ha resultado ser) avala la tesis de que el nacionalismo gobernante, elaborado y construido por el pujolismo, es un escenario político irrevocable. Maragall y la izquierda lo han revalidado nacionalmente, asumiendo con una simpleza política y moral muy meditable, que Cataluña es nacionalista o no es. El cierre completo del modelo nacional que la política de la izquierda garantiza (cierre al que tampoco el Partido Popular de Cataluña de Josep Piqué se opone) es seguramente la condición primera de que la palabra *obscenidad* resulte muy adecuada para describir la actividad política del gobierno tripartito.

Pujol siempre temió que una victoria electoral de los socialistas catalanes pusiera en evidencia, aunque sólo fuera por contraste, los excesos de su política. Y, desde luego, las frías y hasta desagradables relaciones personales y políticas que mantuvo casi siempre con Ma-

ragall no eran las que podía esperarse entre un páter y un disciplinado heredero. Aun en sus épocas más implacables Pujol gobernó con la relativa timidez del que ignora qué van a hacer los que vengan. Eso no quiere decir, por supuesto, que su política no fuera, a mi juicio, desgraciada y sectaria, y que tuviera poco que ver con la visión de estadista que un cierto complejo de inferioridad muy madrileño le atribuyó cíclicamente. Pero Pujol, y es lo único que advierto en él de estadista, trató siempre de evitar una política demasiado exhibida.

Ahora los miramientos parecen haberse acabado. La mayoría de la izquierda se aventura sólida y duradera. Es cierto que la ínfima categoría de Carod y su profunda inexperiencia es un factor continuo de inestabilidad; pero incluso este factor puede jugar a favor del gobierno tripartito. Porque la chocarrería y la demagogia del presidente de Esquerra Republicana le aseguran el clamor de las bases del partido y las mantiene unidas a un proyecto cuya radicalidad podría verse afectada por el realismo imponente de cualquier acción de gobierno. No hay bien que por mal no venga, y la expulsión de Carod de la gestión gubernamental, a causa de sus conversaciones con los terroristas, puede haber contribuido a la consolidación de un dualismo que, en formas diversas, suele caracterizar a los partidos que gobiernan y que contribuye al mantenimiento de su hegemonía. El ejemplo vasco de la época de Arzalluz e Ibarretxe es perfectamente revelador.

Sin embargo, la obscenidad del tripartito no se explica tan sólo por su despejado horizonte. También lo tuvo Pujol. Se explica, sobre todo, porque los que vengan no van a reprocharle sus excesos. No: partirán de sus excesos. Hay que insistir en ello: el acceso al poder de la izquierda ha blindado el *statu quo* nacionalista y cualquier política posible avanzará desde él.

En un año el gobierno catalán ha aprobado seis leyes. Dos de ellas, las referidas a los presupuestos y a las medidas fiscales, eran obligatorias. De las otras cuatro, sólo dos se han aprobado por su propia iniciativa. El resultado es paupérrimo. Contrasta con las fantasías de Maragall, que al firmarse el acuerdo de gobierno había anunciado poco menos que una revolución legislada. El yermo refleja los considerables problemas políticos que ha atravesado la coalición y la dificultad de aunar sus intereses en la gestión de las cosas. Pero, sobre todo, es una desoladora muestra de la falta de imaginación política de la iz-

quiera catalana, que ha esperado veintitrés años para gobernar y que, impelida ahora a concretar el radio de su ambición y la novedad de sus puntos de vista, se ha quedado dramáticamente muda. El vacío legislativo, además, tiene un correlato más indefinido pero igualmente inesperado en lo que afecta a la gestión pública propiamente dicha. Los usos y modos del anterior gobierno se mantienen, más allá de ligeros maquillajes: baste ver, en este sentido, el ejemplo de los medios de comunicación autonómicos en cuya ética y estética cualquier observador imparcial aprecia cambios insignificantes.

La evidencia obscena de un gobierno que no gobierna y sólo administra (o sólo representa) cabe vincularla, desde luego, al proyecto fundamental de este gobierno, la reforma del Estatuto de Autonomía. No sé si es muy conocido fuera de Cataluña que el gobierno, a propuesta de uno de sus miembros más ornamentales, el dirigente de Iniciativa, Joan Saura, convocó un concurso de ideas para esta reforma. El concurso estaba abierto a todos los ciudadanos. La ocurrencia, en sí misma, sólo puede ser calificada de sensacional y bastará, para calibrarla, con que se piense en la posibilidad de que la reforma de la Constitución española fuera sometida a un concurso de ideas análogo. De lo que se deduce a qué niveles de dejadez y de simplismo ha descendido la política en Cataluña. Como en los tiempos de Pujol, el principal desmentido de que Cataluña sea una nación lo sigue ofreciendo la gestión política de la autonomía. Sin embargo, el concurso de ideas revela simbólicamente algo más profundo que atañe a la inactividad legislativa y al propio sentido del proyecto de reforma estatutaria. En realidad, hay crecientes sospechas de que el gobierno catalán no sabe en qué reformar el Estatuto. Se comprende: la autonomía ha alcanzado niveles competenciales que tienen difícil equiparación en el resto de estados democráticos. Y bien: lo que puede mejorar del funcionamiento autonómico, como la cuantía o distribución del dinero o la atención a los inmigrantes, no necesita de una reforma. Y lo que podría reformarse, como la inclusión del derecho de autodeterminación, no tiene la menor posibilidad de reformarse. La reforma del Estatuto ha quedado, así, limitada al nombre que ha de recibir Cataluña!, pendiente, por otro lado, de lo que se acabe disponiendo en la propia Constitución. No extraña que se pidan ideas para amenizar el inmenso vacío dispuesto. La reforma del Estatuto no es nada y va desnuda.

El nombre de la cosa y la polémica que se generó en torno a éste es, sin embargo, otro rasgo claramente obsceno. Puede decirse que el consenso constitucional de 1978 relativo a la organización autonómica se basó en lo indecible. El texto constitucional establecía que en España había nacionalidades y regiones. No se especificaba cuáles lo eran. Esa ambigüedad era la clave de bóveda, como muchas veces se ha dicho. Una ambigüedad fértil, porque, a pesar de su naturaleza, o quizá gracias a ella, ha ordenado dos décadas de desarrollo autonómico. Ahora se pretende acabar con la ambigüedad. La operación es peligrosa. Uno puede aceptar lo real. Al fin y al cabo lo real es irrevocable. Otra cosa muy distinta es aceptar lo real por escrito, sellado y rubricado. Sólo los espíritus muy sumarios, es decir, los espíritus nacionalistas, tienen dificultades en comprender esta distinción. También está la posibilidad de que la comprendan perfectamente: algunas de las declaraciones y actitudes de los gobernantes catalanes llevan a pensar que lo que en el fondo pretenden es sólo, y precisamente, esto: que conste por escrito la superioridad histórica, es decir moral, de su autonomía. Tal vez como forma de aliviar los siglos de derrotas y de complejos de las que los actuales nacionalistas se sienten inexorablemente herederos.

Cualquiera de las dos hipótesis va a traer inestabilidad y muchos problemas. El conflicto real de las asimetrías, incluidos los federalismos asimétricos, no se da entre Cataluña y España, sino entre Cataluña y Extremadura, Andalucía o Navarra. Es la misma distinción fundamental que hay entre *Madrid* (cursiva) y Madrid (redonda). El Madrid cursivo ha sido la sinécdoque que muchos catalanes, incluidos algunos catalanes no nacionalistas, han utilizado para aludir a los problemas de entendimiento con el gobierno central. Pero cuando Carod pide el boicoteo a los Juegos Olímpicos de Madrid es evidente que da un paso al frente inédito: el antiguo *Madrid* ya no es el gobierno del Estado, sino el pueblo de Madrid. Es peligroso. Peligroso no quiere decir la guerra civil. Una de las imposibilidades de la crítica política en España es que la guerra civil aparece o se intuye a los dos palabras de discusión. Peligroso quiere decir algo más peligroso que esa guerra civil invocada, pesadilla ya muy fondona. Peligroso quiere decir subdesarrollo. Económico. Político. Moral. Cultural. Peligroso quiere decir, también, los resultados del Informe

Pisa¹ y la indiscutible corrupción intelectual española de la que el nacionalismo es un ejemplo, y no menor. Peligroso es que las energías colectivas de un país estén sometidas a un fatigoso pleito inacabable. Aunque subvencionado. Porque una de las más llamativas características del pleito nacionalista es que para sobrevivir no tiene que apoderarse de ningún mercado. Todos sus protagonistas y la totalidad del intercambio se sucede en un imaginario donde no hay que presentar balances: el nacionalismo es una discusión de las élites gubernamentales, ministros, consejeros, alcaldes, concejales y presidentes de Diputación. Comen, viajan y discuten gratis. Estoy seguro de que buena parte de las razones de su supervivencia se deben a su carácter gratuito. A eso y a su nimio vuelo intelectual: en el nacionalismo, como en las discusiones deportivas, todo el mundo participa. Incluso el presidente extremeño Rodríguez Ibarra y el citado Carod.

Antes he mencionado la guerra civil. Su evocación creciente en la política española y catalana se ha teñido también de obscenidad. Hasta ayer mismo la política de la izquierda respecto a la guerra civil seguía fundamentada en los ya remotos principios de la reconciliación nacional fijados por el Partido Comunista de España en 1956. Es decir, una política basada en el sometimiento a la realidad, en la comprensión dolorosa y fría de que Franco había ganado la guerra civil y en la demanda de pacto y olvido. No es ya la política de la izquierda española y mucho menos de la catalana. Las graves implicaciones de este cambio de actitud no puedo analizarlas ahora en detalle. En metáfora puede decirse que la izquierda española persigue una utopía. Una utopía más: ganar la guerra civil. Lo había visto muy claramente, y muy pronto, uno de los fascistas más completos que yo haya tratado en mi vida, el empresario Francisco Godia, cuando hablando desde el otro lado de su mesa de trabajo, ornada por un crucifijo y la reproducción del testamento de Franco, se mostró dispuesto a olvidar que hubo una guerra civil, dispuesto incluso a olvidar «que la ganamos», pero absoluta y violentamente opuesto a admitir «que la perdimos». En fin, metáforas. Algo mucho más económico y ambiguo que el proyecto en el que trabaja el vicepresidente Saura, ese *Memorial*

¹ El martes 7 de diciembre el diario *El País* daba a conocer los resultados de la segunda macroencuesta educativa conocida con el nombre de Informe Pisa. Aún más devastador que el primero por lo que respecta al nivel de conocimientos de los alumnos españoles.

Democrático que el gobierno tripartito va a crear. Un lugar de memoria y un centro de estudio dedicado, en exclusiva, a los caídos republicanos de la guerra civil y al conjunto del antifranquismo. No me interesan, por obvios, los déficit morales de la iniciativa. Lo importante son los científicos: esa ilusión pueril de explicar una guerra y sus consecuencias con una de las dos balas. Aunque sea con la bala de plata.

Los ejemplos de obscenidad se acumulan, pero pocos superan, en este sentido, el impacto de la imagen que mostró a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, leyendo por orden de Carod un papel donde reafirmaba que catalán y valenciano eran la misma lengua. Pasaré rápido por la falsa e irresoluble polémica. Catalán y valenciano son la misma lengua si se entiende, por analogía, que el español de Colombia es el mismo que el de España. El problema es que, a diferencia de lo que pasa entre españoles y colombianos, los valencianos y los catalanes no utilizan el mismo nombre para designarlas. A los catalanes no les parece prestigioso llamarla valenciano. Y a los valencianos tampoco llamarla catalán. Este es el único e irresoluble problema, que fija muy bien, por otro lado, los límites de la permanente ensoñación catalana. No sólo es que el pancatalanismo político no haya resistido la prueba elemental de la democracia. Sólo funcionó, como tantos otros mitos de la izquierda y del nacionalismo, durante el franquismo; y, desde ese punto de vista, nunca Valencia y Cataluña, al menos el *establishment* político, habían estado tan divorciadas como en este primer año de gobierno tripartito. Pero es que ni siquiera el pancatalanismo lingüístico ha pasado la prueba. Porque cabría recordar, en este sentido, que la aspiración política del catalanismo no fue que las instituciones científicas reconocieran que catalán y valenciano son una misma lengua. Aspiraban a que se llamarán igual. A que se llamara catalán. A que se llamara como hoy nadie lo llama en Valencia, con la excepción de algunos restos del naufragio que aseguran, con gran seriedad, que ellos hablan en «català, registre valencià», y pasa la gente y los mira.

La imagen sometida de la vicepresidenta va mucho más allá del texto concreto que debió leer. Es el reflejo de una relación entre gobiernos y entre minorías parlamentarias, a la que no le importa exhibirse como lo que realmente es: un chantaje. El chantaje forma parte de la práctica política española desde el principio de la restauración

democrática. Pujol fue un virtuoso de la estrategia. Pero nunca como ahora la manifestación pública del chantaje había formado parte del chantaje mismo. El 20 de noviembre de 2004, poco antes de la primera votación presupuestaria del gobierno Zapatero, el diario *El País* publicó este titular a cuatro columnas en su sección de España:

«El Gobierno reconoce la unidad del catalán y ERC apoya los Presupuestos».

El primer párrafo de la información decía: «La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer que catalán y valenciano son una sola lengua, y se amparó para ello en la opinión de la comunidad científica y universitaria. Fernández de la Vega hizo el pronunciamiento tras el Consejo de Ministros, y con él cumplió el acuerdo al que llegaron la pasada semana José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de ERC, Josep Lluís Carod, en la Moncloa. Poco después del pronunciamiento del Gobierno, Carod anunció el apoyo de ERC a los Presupuestos».

Nada de esa información fue desmentida. Y por supuesto no la desmintieron los hechos. Los hechos tampoco desmentían nada en tiempos de Pujol. Pero sí lo hacían sus protagonistas. En otros tiempos una información semejante habría sido corregida por algún miembro del gobierno pujolista. Algo así:

«Convergencia niega que su apoyo a los presupuestos se deba a la resolución del conflicto lingüístico».

Sin embargo, en esta ocasión, nadie, ni del gobierno catalán ni del gobierno español, ni ninguno de sus representantes parlamentarios se vieron en la necesidad de semejante disimulo. No creo que haga falta insistir en la degradación de la política que supone semejante circunstancia. Que cumple, además, el rasgo más habitual del chantaje: esto es, que el chantajista cobra en una especie (unidad lingüística) en absoluto vinculada con su amenaza (presupuestos). Y donde lo más llamativo, como ya anticipaba, es la indiferencia obscena que chantajeador y chantajista manifiestan ante la publicidad de su común negocio.

Acabo. Hay un último episodio. Vinculado a la fibra íntima de la nacionalidad catalana. La lengua. Durante años, el nacionalismo y

Pujol, destacadamente, eludieron cualquier manifestación organicista de la identidad catalana. El hecho diferencial catalán estaba en el idioma. Los excesos de Pujol respecto a la relación entre lengua y cosmovisión no pasaron nunca de alusiones más o menos huera al romanticismo alemán y al hecho (sic) de que el uso de una lengua determinara la cosmovisión del individuo. A finales del mes de noviembre, y durante su asistencia a la feria del libro de Guadalajara (Méjico), Pasqual Maragall pronunció la frase inmortal: «La lengua es el ADN de Cataluña». Llegó donde nunca se había atrevido a llegar Pujol. En metáfora: a la síntesis definitiva entre naturaleza y cultura como conformadoras del ser catalán. Que las palabras del presidente de la Generalitat no signifiquen nada, que sean sólo producto de su cerebro esponjiforme (la formulación es un mero retal arrancado y mal cosido de la moda ontológica del gen y de las curiosas y publicitadas afirmaciones del periodista Álex Grijelmo respecto al gen, al genio y a la eugenesia de las lenguas) y que no vayan a tener ninguna importancia práctica, es lo de menos. Lo importante es que hayan podido ser dichas, que ejemplifiquen a la perfección este estado de barra libre –cuatro barras libres– en que vive la Cataluña nacionalista (pleonasma). Un lugar donde la obscenidad ha desplazado a su antónimo más genuino. A la política.

BIBLIOGRAFÍA

- Solé i Sabaté, J. M. (2004): *Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents (1359-2003)*, Enciclopèdia Catalana.

ESTO NO ES PLAN

En mayo de 2005 concluye una legislatura marcada por el Plan Ibarretxe, que aún promete otros cuatro más en el mismo tono, ahora con la vista puesta en el Congreso de los Diputados. La aprobación del plan en el Parlamento Vasco, después de la sistemática vulneración de los principios del parlamentarismo, permite decir que nada que no sea la pérdida del poder va a apartar a los nacionalistas de la trayectoria que emprendieron al pactar con ETA.

El 30 de diciembre de 2004 se materializaba en el Parlamento Vasco el mayor desafío que la democracia española ha experimentado desde febrero de 1981. El Plan Ibarretxe, que su autor describió por vez primera el 27 de septiembre de 2002, era aprobado por la mayoría absoluta de la cámara, integrada por los tres partidos que apoyan al Gobierno Vasco y tres votos cedidos por el grupo de la ilegalizada Batasuna. Durante la intervención parlamentaria que precedió al anuncio, Arnaldo Otegi leyó una carta del dirigente etarra Josu Ternera, sin que ninguno de los 74 parlamentarios presentes se opusiera a ello.

En aquella ocasión, el presidente del Gobierno Vasco prometió un consenso mayor del que había tenido el Estatuto de Autonomía, mientras anunciaba que iba a mantener contactos con los agentes sociales para explicarlo y recabar el mayor número de adhesiones. También anunció que un año más tarde presentaría un texto articulado de su plan de convivencia amable con España.

Santiago González es periodista.

Se sucedieron las rondas de contactos con empresarios, sindicalistas, los máximos representantes del mundo universitario, colectivos de mujeres empresarias, asociaciones de empresarios jóvenes, escuelas de F.P., colegios profesionales de abogados, arquitectos, economistas, etc., sin que ninguno de estos colectivos se moviera de las posiciones que tenía antes de la reunión.

El 23 de julio de 2003, los periódicos del grupo Vocento publicaron el texto articulado del Plan Ibarretxe. Se llamaba «Estatuto Político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi» y constaba de un preámbulo y sesenta y nueve artículos, recogidos en siete títulos, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria que enterraba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

Aquella misma mañana, Ajuria Enea hizo público un «Comunicado del lehendakari», en el que se leía:

«El borrador de trabajo filtrado a través de 'El Correo español', 'El Diario vasco' y 'ABC' es uno de los ocho trabajos-borradores con los que el lehendakari viene trabajando y seguirá trabajando a lo largo del mes de agosto para realizar posteriormente su propuesta en nombre del Gobierno.

A partir de septiembre debatiremos de un proyecto de convivencia. Hasta entonces que nadie se ponga nervioso...

Hasta entonces abstenerse de meter ruido».

Ibarretxe, el campeón del diálogo, tiene muy a menudo deslices semánticos parecidos: «Hasta entonces que nadie se ponga nervioso... Hasta entonces abstenerse de meter ruido». Sólo un totalitario puede llamar «ruido» a las opiniones que le son contrarias y atribuirles despectivamente a los nervios.

El escrito revela un método de trabajo peculiar. Lo normal cuando se redacta un texto de cualquier naturaleza desde que se generalizó el uso de los ordenadores es, en primer lugar, hacer un esquema e ir desarrollándolo, completándolo, aprovechándose para ello de las facilidades que brindan los procesadores de textos. Finalmente se pulen los artículos, se les agrupa temáticamente y se ponen epígrafes, títulos, números de los artículos, etc. Lo normal es que una persona tenga un sistema de ideas y de creencias, un sistema de valores y princi-

pios; un proyecto político. Sólo Groucho Marx se escapaba de la norma: «Estos son mis principios, pero si no les gustan, no importa; tengo otros». Haría falta padecer una esquizofrenia muy elaborada para tener ocho estatutos en la cabeza, cada uno de ellos con su preámbulo, sus siete títulos, decenas de artículos y sus disposiciones transitorias y derogatorias. Si aceptamos como verosímil la improbable nota de la Presidencia del Gobierno Vasco, aceptaremos también la imposibilidad del redactor de optar entre los ocho estatutos. Esa es precisamente la razón que ha podido obligarle a escribir ocho en lugar de uno, que es lo que haría cualquier persona normal.

La redacción de la Constitución y los Estatutos de Autonomía partió de una ponencia integrada por las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía. Primero se redactó un borrador con el concurso de todos, sometido a la regla del consenso. Que un gobernante elabore por su cuenta ocho proyectos de ley con ínfulas constituyentes, para escoger de entre ellos uno; exigir al resto de las fuerzas políticas que elaboren sus propios proyectos para confrontarlos en el Parlamento e imponer el que resulte más votado es algo verdaderamente insólito en los usos del parlamentarismo moderno.

Pero, ¿qué es el Plan Ibarretxe? Pues según en qué momentos de su autor el proyecto de libre asociación es un plan de paz, un plan de soberanía, un plan de convivencia amable con España, un camino hacia la independencia, una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los vascos, un plan para completar el Estatuto o un plan para superarlo.

El 27 de septiembre de 2002, en el debate de política general celebrado en el Parlamento Vasco, Ibarretxe dijo también:

«Este modelo de relación basado en la libre asociación y en la soberanía compartida, es utilizado y reconocido en el ámbito europeo y en el concierto internacional. Este modelo está en la base de la propia construcción de Europa e, incluso, ha sido el fundamento de estados europeos y de otros existentes en el mundo occidental.»

Se trata, en definitiva, de una propuesta que utiliza las bases jurídicas y políticas que en Europa Occidental se han utilizado y se están utilizando para resolver, pacífica y democráticamente, los conflictos que se derivan de la existencia de hechos nacionales diferenciados en el seno de un mismo estado o de los conflictos de relación que surgen entre hechos nacionales que atañen a diferentes estados».

En el mismo sentido, unos días más tarde, el 4 de octubre de 2002, declaraba en el diario *El País*: «Mi iniciativa está relacionada con los instrumentos jurídicos que se están utilizando en la construcción europea». La europarlamentaria Rosa Díez preguntó por tal extremo a la Comisión Europea, que respondió:

*«No, el Tratado de la Unión no puede, en ningún caso constituir la base jurídica que ampare la propuesta presentada por el Sr. Ibarretxe en el Parlamento regional el 27 de septiembre de 2002».*¹

Al día siguiente, Ibarretxe se explicaba en declaraciones a Radio Euskadi:

«Es obvio que no son las bases jurídicas de la Unión Europea sobre las que se sustenta mi propuesta (...) (La Unión Europea) lo que dice en su pronunciamiento es: oigan ustedes, arréglese entre ustedes, resuelvan entre ustedes los problemas y punto, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer».

Esto es lo extraordinario del Plan Ibarretxe. Un plan de convivencia que a la otra parte no le queda más remedio que aceptar. Si lo aceptan, habremos dado un paso definitivo hacia la independencia; dentro de quince años daremos el último. Si no lo aceptan, «nos establecemos por nuestra cuenta».

No es ni puede ser un plan de paz. Si no satisface las aspiraciones de los nacionalistas más moderados, de ninguna manera podrá contentar a los terroristas. Después del apoyo de ETA recibido en el Parlamento con tres votos de Batasuna y una carta de Josu Ternera, el terrorismo se erigirá en garante del plan frente a la imposibilidad legal de que prospere. Este será el pretexto que invocarán para su actividad en el futuro.

Recordemos las cábalas inacabables sobre la posibilidad de que ETA declarase una tregua hacia el final de 2004. Se llegó a aventurar que ese podría ser el mensaje del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, en el mitin del 14 de noviembre en el velódromo de Anoeta. Pese a la beatería de la izquierda bienpensante, nada permitía

¹ Según consta en las Actas del Parlamento Europeo del 22 de octubre de 2002, H-68302.

suponer tal cosa. Ni los dos artefactos colocados por ETA en un refugio militar de Belagua unas horas antes del mitin de Anoeta, ni las octavillas que dejaron junto al lugar del atentado quienes lo perpetraron, ni el último *Zutabe* que Batasuna repartió entre los asistentes al velódromo, ni el comunicado que la banda terrorista hizo público en octubre.

Los tres documentos coincidían en anunciar la continuidad de la violencia. Violencia que estaba también implícita en el discurso de Otegi: «la izquierda abertzale se presenta hoy aquí con un ramo de olivo en la mano. Que nadie deje que se caiga al suelo». La expresión es una versión maquillada de la empleada 30 años antes por Yaser Arafat en su célebre comparecencia ante la Asamblea de Naciones Unidas: «Vengo con el fusil de combatiente de la libertad en una mano y la rama de olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano». A nadie se le debería ocultar la amenaza elíptica contenida en el discurso de Arafat, más elíptica aún en el de Otegi, que nada dice al público sobre lo que tiene la izquierda abertzale en la otra mano. En rigor, no hacía falta. El pueblo vasco es jugador de mus y le bastan unas señas mínimas para comprender la jugada. De ahí que la advertencia del portavoz batasuno no requiera de más explicitud para resultar inquietante.

No para todo el mundo, claro. A pesar de las amenazas previas, las bombas de Belagua, las cinco bombas colocadas en sendas gasolineras madrileñas que colapsaron la operación salida del puente de la Inmaculada, las siete que hicieron explosión en otras tantas ciudades españolas el día de la Constitución, no deben de ser hechos significativos

A pesar de que la propia Batasuna expresó por medio de su portavoz que todo este despliegue no era sino la prueba de que «el conflicto sigue» y que eso hacía más necesaria, si cabía, su propuesta, hubo quienes seguían interpretando que ETA había roto la estrategia de Batasuna con los atentados, incapaces de comprender la esencia del discurso de Otegi en el velódromo de Anoeta: ETA es lo que la izquierda abertzale tiene en la otra mano. Que la organización terrorista se muestre en el dominio de lo que mejor sabe hacer, no es más que un acto intimidatorio para que los ciudadanos se agarren a la rama de olivo, una clase práctica para explicar la advertencia de Otegi.

¿Es imposible una declaración de tregua por ETA? Depende. Si el Gobierno no actúa con decisión para impedir la presencia de Bata-

suna en las elecciones autonómicas, podría haber tregua de campaña para favorecer sus expectativas de voto, como ya hicieron en 1998, sin que esto sea incompatible con algún atentado en breve para dejar constancia de su desacuerdo último con el plan que han aprobado.

Hay gentes, sin embargo, que necesitan como sea agarrarse a la esperanza de que las cosas no son tan desalentadoras como parecen y se empeñan en considerar que ETA está dispuesta a ofrecer la paz y que, *mutatis mutandis*, los nacionalistas no creen de verdad lo que de manera reiterada y pública repiten una vez tras otra desde hace unos años.

El tiempo y el dinero público invertido por el lehendakari en la difusión de su plan no ha servido para ganarse una sola adhesión entre la parte no nacionalista de la sociedad vasca, pero sí como argamasa a la sociedad nacionalista. Sin embargo, apenas se dio a conocer el proyecto, empezaron a correr bulos sobre el alto grado de descontento que el plan levantaba entre el empresariado nacionalista, los dirigentes del Bizkai Buru Batzar (Ejecutiva vizcaína del PNV) o el diputado general de Bizkaia. Hoy mismo se difunde con idéntico entusiasmo la especie de que muy significados mandos jeltzales expresan *sotto voce* su radical oposición al plan y a su autor.

Tales desencuentros no son más que un espejismo. Los únicos nacionalistas de cierto relieve que se han opuesto al plan lo han hecho de manera pública: Emilio Guevara y Joseba Arregi. Ambos están hoy fuera del PNV; el primero por expulsión, y Arregi por voluntad propia.

No hay razón para suponer que los demás vayan a renunciar a un instrumento que les ha permitido mantenerse en el poder, según lo expresó en el diario *El Correo* el 21 de noviembre de 2004 el portavoz nacionalista en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka:

«Se podría revisar (la política del PNV) si se produjera una convulsión interna del partido o externa, si perdiéramos las elecciones. Sólo si hubiera un cambio de fondo nos plantearíamos la estrategia. Mientras tanto, ¿para qué cambiar?»

El planteamiento es de una sinceridad descarnada. En el interior del PNV no se vislumbra otra razón (interna o externa) para cambiar de política que la pérdida de las elecciones. No lo es, por supuesto, la constatación de que la convivencia democrática en el País Vasco ha

retrocedido para dejar paso a la crispación y al enfrentamiento, el hecho de que la raya que parte hoy en dos a la sociedad vasca atraviesa la mesa del comedor de las familias y las cuadrillas de amigos.

Sólo en el caso de que «hubiera un cambio de fondo» estarían dispuestos a revisar su estrategia, dice el portavoz parlamentario, y estas palabras denotan su insobornable confianza en sí mismos. Aun en el caso de que perdieran las elecciones, confían en que no esté todo perdido, que puedan seguir al frente de las instituciones mediante un pacto con los socialistas, por ejemplo.

Ibarretxe no tenía el año pasado el apoyo de sus socios de gobierno. Por eso no pudo cumplir su promesa de enviar su plan como un proyecto de Ley de Reforma del Estatuto, según afirmó el 26 de septiembre de 2003 durante el debate de política general:

«En todo caso, deseo anunciarles que todos los aspectos y contenidos que, de forma nítida y clara, se recogen en esta propuesta, se plasmarán posteriormente en un texto articulado de un nuevo Estatuto Político Vasco, que será aprobado en el seno del Consejo de Gobierno el próximo 25 de octubre como proyecto de Ley de reforma del Estatuto actualmente vigente, y posteriormente será depositado en esta Cámara para su conocimiento, estudio, debate y votación».

El 25 de octubre de 2003, aniversario del Estatuto de Autonomía, el lehendakari llevó personalmente un texto al Parlamento. La jornada de aquel sábado había comenzado con un Consejo de Gobierno extraordinario. Al término de la reunión, el lehendakari posó para las televisiones y los fotógrafos rodeado por sus once consejeros y leyó una declaración institucional.

Ibarretxe entró en el Parlamento flanqueado por Joseba Azkarraga y por Javier Madrazo en una imagen que transmitía el apoyo al lehendakari de sus socios de Gobierno. Aquella imagen era un trampantojo, y el apoyo de sus socios de Gobierno, virtual, una escena prefabricada que no se había producido en ningún momento. El texto que Ibarretxe entregó a Atutxa con tanta solemnidad y acompañamiento no era un Proyecto de Ley. Hubo Consejo de Gobierno, declaración del lehendakari, foto del Gobierno, excursión al Parlamento y entrega del texto al presidente de la Cámara: lo que allí faltaba era el apoyo del Gobierno a la propuesta de Ibarretxe.

El lehendakari había prometido un proyecto de ley de reforma del Estatuto y lo que llevó fue «algo» imprecisamente llamado «proyecto normativo», de naturaleza desconocida, precisamente porque no tuvo el apoyo de sus socios. Ni Eusko Alkartasuna ni Madrazo apoyaron la conversión del plan en un proyecto de Ley, y los proyectos de Ley no pueden ser presentados en el Parlamento por un presidente, aunque sea lehendakari. Es el Gobierno que preside quien sí puede hacerlo.

El lehendakari carece de atribuciones para desarrollar iniciativas legislativas. El Estatuto de Autonomía de Guernica establece en su artículo 46. 1 a) a quién le corresponde la iniciativa para su modificación, a saber:

«Al Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado Español».

El engendro presentado por Ibarretxe en el Parlamento tampoco otorga al lehendakari la iniciativa para la reforma del Estatuto. En su artículo 17. a) se establece que dicha iniciativa corresponderá:

«Al Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus miembros, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado».

Exactamente lo mismo en este punto que el Estatuto del 79. Es decir, ni el Estatuto de Guernica ni el artefacto jurídico diseñado para sustituirlo, atribuyen al lehendakari competencia para hacer lo que hizo.

La presencia de sus once consejeros rodeando al lehendakari y acompañándole a la entrada del Parlamento trata de sugerir visualmente el apoyo del Gobierno, que es justamente de lo que carece.

El hecho de que un Gobierno en pleno lleve en mano al Parlamento un documento que no suscribe solidariamente, roza lo increíble. El hecho de que pretendan sustituir un Estatuto que tiene rango de Ley Orgánica por algo que ni siquiera había podido ser proyecto de ley, es algo llamado a revolucionar el Derecho Constitucional. El envío de un «proyecto normativo» tan importante no se corresponde con el hecho de que el Gobierno no le diera forma jurídica a su debido tiempo.

Un año y dos meses después, el plan ha sido aprobado con el cantado apoyo de sus socios de Gobierno y el no tan previsible de

Batasuna, cuyos tres votos no incomodan lo más mínimo a Ibarretxe: «No voy a ser yo quien ponga en duda la legitimidad de los apoyos recibidos», afirmó en su Mensaje de Nochevieja el 31 de diciembre de 2004. ¿Por qué habría de hacerlo quien ya fue investido lehendakari con el voto de Josu Ternera?

El voto de Batasuna ha proporcionado un gran triunfo para Ibarretxe y el PNV, aunque ambos estuvieran preparados para la hipótesis contraria, para el rechazo. En tal caso, la legislatura habría concluido como si nada hubiera pasado. El fracasado plan se habría reconvertido en programa electoral para las elecciones autonómicas de 2005. El portavoz nacionalista en el Congreso lo expresaba así en la entrevista citada más arriba:

«No sería un fracaso, porque el lehendakari no lo ha planteado como un reto para esta legislatura. Se pretende avanzar en una reconsideración del modelo de relación con el Estado español y eso no se consigue en un día. Si no obtiene la mayoría en diciembre, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina a las que concurriremos, lógicamente, con el proyecto de nuevo Estatuto como bandera».

Esto habría permitido hacer campaña electoral contra la izquierda abertzale, a la que habrían reprochado aliarse con los socialistas y el PP contra la voluntad de los vascos, y pedir el voto a la clientela de Batasuna para llegar a la mayoría absoluta.

En mayo de 2005 concluye una legislatura marcada por el Plan Ibarretxe, que ha hecho pasar a la Comunidad Autónoma Vasca cuatro años de balde y que aún le promete otros cuatro más en el mismo tono, ahora con la vista puesta en el Congreso de los Diputados. Si se aprueba, bien. En caso contrario tendrán argumento para una campaña victimista sobre la base de que España niega a los vascos y a las vascas el derecho a decidir su futuro. O su propio futuro si tienen el día enfático. Nada que no sea la pérdida del poder va a sacar a los nacionalistas de la derrota que emprendieron al pactar con ETA.

No hay, sin embargo, un horizonte político que permita prever la alternancia en el gobierno de la comunidad autónoma vasca. La oposición firme que el Partido Popular y el Socialista mantienen frente al Plan Ibarretxe no es probable que cristalice en un acuerdo de Gobierno para después de las elecciones. El presidente del Gobierno ha rea-

lizado recientemente dos declaraciones que han añadido algo más de confusión por el cambio de postura que revelan. La primera de ellas, formulada durante la reunión de los representantes políticos en el aniversario de la Constitución:

«ETA está abocada a abandonar las armas porque 'el Estado de Derecho es, ha sido y será más fuerte que cualquier intento de cambiar las reglas a través de la violencia' (...) el 'único destino' para la banda es el abandono del terror (...) el Gobierno quiere trabajar con todas las fuerzas políticas democráticas para conseguir que ese fin llegue 'muy pronto'».

Veinticuatro horas más tarde, durante la visita del presidente francés, Jacques Chirac, Rodríguez Zapatero reclamó a Batasuna lo siguiente:

«Valentía política, moral y cívica para exigir a ETA el fin de la violencia, (...) es la única condición que el Gobierno plantea a Batasuna para volver a las instituciones democráticas».

En ambas manifestaciones, el presidente Rodríguez Zapatero suscribe dos expresiones que conforman la actitud característica del nacionalismo respecto al terrorismo etarra. La primera de ellas es lo que podríamos llamar «desistimiento tácito» y está permanentemente presente en el habla de Ibarretxe. Consiste en confiar en que los violentos se avengan por sí mismos al abandono de la violencia, en hacerles exhortaciones morales, en lugar de la elemental advertencia de que la primera responsabilidad de un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley y que para ello está dispuesto a usar todos los recursos del Estado de derecho.

La segunda expresión pasa por aceptar la posición tradicional de todo el nacionalismo, al considerar que ETA y Batasuna son cosas diferentes, en contra de la argumentación que llevó al Tribunal Supremo a su ilegalización. Tal como señala Andrés Montero (2004, 27):

«En realidad Batasuna no es ilegal por su comprensión del terrorismo, sino porque es un instrumento del terrorismo. Batasuna no está fuera de la ley por no repudiar a ETA, sino porque es ETA. Y mientras ETA exista, Batasuna será ETA. Por eso una condena, por muy explícita que fuera, no debería valer. Cuando la banda etarra desapareciese, bien pudiera comenzar a plantearse que

una izquierda abertzale democrática, si la contradicción es admisible, emergiera con unos estatutos desvinculados de la violencia. Batasuna no condena a ETA porque primero ETA tiene que condenarse a sí misma desarticulándose. Es inviable permitir a Batasuna recomponerse con subterfugios condenatorios de no se sabe qué ambigüedad, porque entonces tendremos etarras para una década».

La mejor de las hipótesis para favorecer la alternancia sería la predisposición de los dos grandes partidos de la política nacional a establecer un acuerdo para gobernar tras las elecciones y que ambos sumaran los 38 escaños que constituyen la mayoría absoluta de la cámara vasca.

Ambas son improbables. Los socialistas vascos han reiterado por boca de su secretario general y candidato a lehendakari, su voluntad de desalojar al Partido Nacionalista del Gobierno Vasco, aunque este deseo no guarda una correlación estricta con los hechos. Sólo hay dos caminos para ello. El primero es pactar con los populares y alcanzar con ellos una mayoría suficiente para gobernar. El PSE y el PP son vasos comunicantes en las elecciones autonómicas. Es probable que los socialistas obtengan en estas próximas más escaños que los populares, pero también es predecible que la suma de ambos no aumentará lo suficiente como para llegar a la mayoría absoluta.

Aun en el caso contrario, los socialistas vascos se han vacunado contra la posibilidad de alcanzar un acuerdo postelectoral con los populares. El llamado «Plan Guevara» había sido concebido para oponer una alternativa vasquista a un programa electoral basado en el Plan Ibarretxe, una campaña plan contra plan. Su única función ahora es la de impedir un gobierno que los propios socialistas consideran «frentista», con la esperanza, quizá, de que el resultado de las elecciones obligue al PNV a recabar su apoyo. Por otra parte, se han producido ya clamorosos desencuentros a propósito de asuntos serios: las declaraciones de Moratinos imputando al anterior gobierno el favorecimiento de un golpe de Estado, la discutida y discutible reforma del Poder Judicial, el fin del consenso en política exterior, la previsible polémica por el referéndum sobre la Constitución Europea, etc. Todo ello arrastrará inevitablemente a socialistas y populares vascos a un enfrentamiento que haría imposible en cualquier caso una hipotética coalición de gobierno entre ambos.

La peor de las hipótesis, con todo, es la indecisión que transmite el Estado de derecho sobre su voluntad de defenderse de la agresión que supone el Plan Ibarretxe. El Gobierno no va a recurrir al Tribunal Constitucional con el peregrino argumento de que la derrota del dislate tiene que ser política y no jurídica, como si estuviéramos ante una iniciativa política que no se comparte, en lugar de un desafío a la legalidad. Los socios del PSOE en el Congreso van a votar afirmativamente el plan sin que el presidente reconsidere su alianza, como si la discrepancia fuese sobre una cuestión baladí, una juez de Bilbao archiva la causa contra Atutxa por desobediencia al Tribunal Supremo con un auto en el que ella sola se constituye en tribunal de casación del Supremo y el fiscal general del Estado lo da por bueno. Todo ello abona la determinación de Ibarretxe de recorrer el camino hasta el final, incluida la celebración de un referéndum ilegal. En 2005, ésta se ha convertido en una hipótesis mucho más probable de lo que era en 2004 a los ojos de la ciudadanía vasca.

BIBLIOGRAFÍA

Montero, Andrés (2004): «Eutanasia para ETA», en *El Correo*, 7 de diciembre.

EL PROYECTO DE LA IZQUIERDA PARA ESPAÑA

Los mensajes socialistas que identifican al PP con el franquismo, y oponen el «progresismo» de la izquierda al «autoritarismo» de la derecha, pueden tener éxito cuando domina la hegemonía ideológica de la izquierda. En los países más desarrollados democráticamente, por experiencia histórica y el ejercicio cotidiano de sus principios y valores, como son el Reino Unido y Estados Unidos, también la izquierda contó hasta hace tres décadas con un plus de legitimidad. Hasta que se inició un movimiento social e intelectual de raíz liberal (en Europa) y conservador (en Estados Unidos), que se rebeló contra el plus de legitimidad ideológica que venía representando la izquierda, y que se concretaba en privilegios y derechos de poder.

El factor crítico de un orden político está en su centro de gravedad ideológico. ¿Sobre qué ideología evoluciona el sistema y se desarrolla la sociedad?

Desde hace más de 25 años la política española está dominada por una hegemonía de izquierdas. Intelectual y política. Esa hegemonía se concreta en un privilegio: el país en su conjunto asume que la izquierda puede hacer cosas que al centro-derecha no le están permitidas. Por ejemplo, los socialistas obtienen rentabilidad política y electoral utilizando el voto del miedo contra la derecha. Su campaña anti-PP y de confrontación guerracivilista les ha llevado al poder. ¿Se imagina alguien que el centro-derecha tratase de hacer lo mismo? Además, los socialistas se jactan de ello. Todavía hoy atribuyen la victoria de los populares en el año 2000 a que, entre otras cosas, «el PP aprovechó a

Antxón Sarasqueta es escritor, periodista y consultor.

fondo la volatilización del miedo a la derecha», como afirmó la ponencia marco del 36 Congreso Federal del PSOE.

Esa hegemonía de la izquierda está presente igualmente en la sociedad civil y la vida privada. Gracias a lo cual los sindicatos tienen una presencia de cuota en los medios de comunicación, especialmente los públicos, que se les niega a los colegios profesionales, los empresarios autónomos, y muchas otras organizaciones que sí representan de una forma muy mayoritaria a la sociedad. A pesar de ser éstos el auténtico motor de la sociedad. Ese dominio ideológico de la izquierda supone que al cambiar radicalmente la política del PSOE, como proyecto ideológico, su impacto ha afectado de lleno a todo el sistema constitucional. Hasta el punto de cuestionarlo e iniciar un proceso rupturista del mismo. Algo que como veremos responde a la lógica del modelo de *democracia radical*, que aunque no ha sido explicitado como proyecto político, los socialistas empezaron a aplicarlo en el año 2001. Entonces pasaron de aquel mensaje de *oposición tranquila* al de la oposición de las barricadas y las pancartas callejeras. Del brazo de los comunistas y junto a los grupos antisistema.

LA LÓGICA DE LA DEMOCRACIA RADICAL

El PSOE tiene firmados un pacto antiterrorista *con* el Partido Popular y otro *contra* el Partido Popular. Ambos vigentes. El segundo con los comunistas e independentistas catalanes, que han negociado y cedido al terrorismo de ETA (para negociar con los terroristas, primero hay que ceder). De igual forma, cuando a España le tocó presidir la Unión Europea durante el gobierno Aznar, y se celebraron los principales actos en Barcelona y Sevilla, los socialistas estuvieron en los actos institucionales y al mismo tiempo manifestándose en la calle con los antiglobalización. De allí salió el mensaje «Contra el eje ultraliberal» que dio lugar a la campaña radical de la izquierda contra Aznar, Bush, Blair, y Berlusconi. Era el 14 de Marzo de 2002, y no había tropas españolas en Irak¹.

¹ El diario *El País* del 15 de Marzo de 2002, destacó en el centro de su primera página la foto de la manifestación con el siguiente titular: *100.000 personas claman contra el «eje ultraliberal» de Aznar, Blair, y Berlusconi.*

Pero lo que puede parecer una contradicción, no lo es. Responde a lo que en la teoría pos-marxista se llama *lógica de la hegemonía socialista*. En la práctica significa jugar todas las posibilidades en los diferentes espacios políticos y sociales, para tener el dominio hegemónico sobre el todo. El hecho de que esta teoría política de la izquierda se quiera implantar en un país desarrollado como España contiene un significado estratégico. Supone una referencia para la izquierda de los países desarrollados, y no sólo para los subdesarrollados.

Esta estrategia socialista ha tenido inicialmente un triple éxito. El primero, interno: ha conseguido coordinar el apoyo de todos los grupos de izquierdas, incluidos los nacionalistas e independentistas que desde hace años mantienen una red de relaciones con los sectores más extremos, desde los antisistema a los terroristas. Esto les ha dado el poder a los socialistas en Cataluña y en el Gobierno de la Nación. Como consecuencia, han conseguido el segundo objetivo: impedir que se consolidara el primer proyecto liberal que amenazaba con romper la hegemonía ideológica de la izquierda en España. Aunque el proyecto no solamente debe seguir vigente, sino que deberá reforzarse de manera sustancial para hacer frente a este desafío de la izquierda. El tercer objetivo que ha conseguido es de carácter más global: el socialismo español ha demostrado que tiene una alternativa de izquierdas diferente a la *tercera vía* de Blair, y que es posible implantar su nuevo modelo de *democracia radical* en Europa. Como alternativa a la democracia liberal.

LA IZQUIERDA, OBLIGADA A OCULTAR SUS VERDADEROS PLANES

Uno de los elementos de esta estrategia para conseguir sus objetivos, es que no se conozca. Que no se haga explícita. Que nadie sepa muy bien qué está pasando, e incluso que todo parezca muy incongruente. Muchos de los actores principales no saben que están trabajando en este proyecto. «Las reglas y los jugadores no llegan a ser jamás plenamente explícitos», concluyen dos de los teóricos de «este juego», como ellos mismos lo definen y al que ponen nombre: «se llama hegemonía». Son los autores del libro *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia* (Laclau y Mouffe, 1987), publicado

hace dos décadas, cuando declinaba el socialismo y caía el imperio soviético. Desde entonces, este y otros trabajos relacionados con las futuras alternativas ideológicas de la izquierda, han sido muy debatidos en los foros de la izquierda.

En el citado libro sus autores dicen que el liberalismo no debe ponerse en cuestión «porque está hoy más vigente que nunca». Su objetivo no es entrar a debatir la democracia liberal sino a destruirla. «De lo que se trata –afirman– es de la producción de *otro* individuo, un individuo que ya no sea más construido a partir de la matriz del individuo posesivo». Y aunque este lenguaje suene a lo que es (puro marxismo del hombre sin alma y desprovisto de su ser autónomo), y que algunos lo consideren de otra época (que también lo es), sigue formando parte de los discursos teóricos que movilizan proyectos y estrategias de buena parte de la izquierda occidental, y desde luego en la izquierda española.

La Internacional Socialista (IS), que durante la *guerra fría* jugó el papel de freno al comunismo, ha recogido y procesado los nuevos vientos e ideas radicales, desarrollando un modelo de *socialismo global*. Se trata de una alternativa a la democracia liberal. «Hay que desarrollar un concepto de gobierno global opuesto a la ideología neo-liberal», dice la IS en uno de sus documentos. «El gobierno democrático debe ser reinventado», explica (IS, 2003).

Uno de estos nuevos *inventos* socialistas consiste en dar por superado el Estado-nación, y sustituirlo por *la unión de los pueblos*. En el caso español, se trata de que los poderes autonómicos vayan sustituyendo el poder del Estado. Esta idea, que ya fue expuesta por Felipe González en 1998 en un documento titulado *La Unión Europea como una Unión de Pueblos*, ha sido recogida posteriormente como doctrina de la Internacional Socialista, y es la que se está aplicando en España por parte del PSOE. Otro de los inventos socialistas es rechazar la *tercera vía* desarrollada por Tony Blair como alternativa centrista a la socialdemocracia, y apostar por una izquierda más genuina y radical. «Los principios de la izquierda están en los intereses de los países en desarrollo, y los de la derecha en los países desarrollados» (IS, 2003). Eso también coincide con la estrategia y planteamientos seguidos por el PSOE en España.

URGE DISTINGUIR LO VERDADERO DE LO FALSO

Ante estos planteamientos y actitudes conviene recordar algunos fundamentos del pensamiento liberal, como es distinguir lo verdadero de lo falso. Algo que no es sólo una cuestión moral sino también científica. Karl Popper lo ha explicado siempre con claridad: no se trata de demostrar lo verdadero sino de refutar la falsedad de una teoría. Así, por ejemplo, se consigue demostrar la falsedad de cualquier teoría democrática que no responde a su modelo genuino. Los totalitarismos se han inventado a lo largo de la historia todo tipo de teorías sobre la democracia, para desvirtuarla o para acabar con ella. La *democracia directa*, *democracia social*, *democracia progresista*, *democracia burguesa*, *democracia radical*, *democracia alternativa*, *democracia global*... Pero la auténtica democracia sólo responde a unos principios que son incuestionables porque están en su naturaleza. Sin ellos, no existe.

La democracia se describe etimológicamente como la soberanía popular. Pero también como algo más: «pertenece al conjunto de los ciudadanos». La propiedad de la democracia no es del sistema y de quienes lo dirigen, sino de los individuos como personas. Votantes y contribuyentes. Por eso, por encima de sus leyes no hay nadie. La democracia no es liberal por definición ideológica, sino por su naturaleza. Es democracia porque hay libertad para ejercerla. Las personas deciden libremente, y cuanto menos libres sean menos democracia es.

¿Por qué desde hace años hay una parte de la población vasca que denuncia que esa comunidad no es una democracia a pesar de que se mantienen las formas? Porque no se sienten libres. Porque no son libres. Hay cientos de miles de vascos que se consideran exiliados, en el interior y en el exterior del País Vasco. Exiliados de todos los colores ideológicos y condición. También nacionalistas. El totalitarismo no distingue.

LA POSICIÓN RESPECTO AL TERRORISMO DEFINE A LOS DEMÓCRATAS

Por definición, también el terrorismo es un totalitarismo violento. El terrorismo es un fenómeno antiguo, pero para los contemporáneos es

una realidad nueva. Y después de la caída del comunismo y del imperio soviético, el terrorismo se ha convertido en la principal amenaza global y local para el sistema democrático. Es otra forma de hacer la guerra, no sólo de los propios grupos violentos, sino de los Estados y las fuerzas políticas, económicas e intelectuales, que utilizan el terrorismo como uno de los medios para obtener sus fines e imponer formas totalitarias de vida y de gobierno.

De ahí la importancia de considerar las relaciones y actitudes de las fuerzas políticas e institucionales en relación con el terrorismo y todo lo que le rodea en términos sociales, financieros e ideológicos. De igual forma que durante la *guerra fría* la izquierda y la política de los Estados se definía en las democracias por su relación con las dictaduras comunistas (todavía ocurre en algunos casos, como el de Cuba), ahora se establece una relación similar con el terrorismo. Es la propia izquierda la que ha señalado esa diferencia en España dentro de sus propias filas, discrepando abiertamente sectores del socialismo vasco (los más directamente afectados por el terrorismo) de la línea oficial adoptada por el PSOE, favorable a lo que eufemísticamente se llama *una solución dialogada*.

El PSOE y la IS condenan el terrorismo, pero lo llegan a justificar haciendo responsable del mismo a las causas que a su juicio lo originan, y cuya responsabilidad siempre recae en las *políticas neoliberales* y en Estados Unidos. «Si es el terrorismo lo que inspira el despliegue militar de Estados Unidos vemos un futuro sombrío... No se puede usar el terror contra el terrorismo» (IS, 2003). ¿Cuántas veces hemos oído ese argumento en España, de equiparar a los terroristas de ETA con el gobierno de Aznar?

LA ESTRATEGIA DE ACOSO Y DERRIBO CONTRA EL CENTRO-DERECHA

A partir del año 2001 se puso en marcha la alternativa radical de la izquierda española, que condujo al pacto citado al inicio de este trabajo, y conocido el 12 de diciembre de 2003 tras los resultados en las elecciones autonómicas de Cataluña. El acuerdo que suscriben socialistas, comunistas e independentistas para formar una mayoría de gobierno, es la materialización de un plan diseñado no sólo para echar al PP del poder, sino para sustituir –y por tanto romper– el actual régimen

constitucional. «Estas fuerzas –dice literalmente el acuerdo– se han de comprometer a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renunciar a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios en las cámaras estatales».

El acuerdo incluye el compromiso para poner en marcha medidas y acciones que revoquen tanto los pasos dados por el PP durante sus ocho años de gobierno, y que puedan suponer un riesgo para la hegemonía ideológica de izquierdas en materia educativa, social, institucional, etc., como para hacer irreversible un proceso de cambio del actual régimen político. Por fases, pero irreversible.

Antes y después de la firma de esos acuerdos la izquierda española ha desarrollado una estrategia de acoso y derribo del PP, en lo que se ha conocido como la campaña anti-PP. Una estrategia que por otra parte fue calcada –sólo actualizada a las circunstancias– a la seguida en el acoso y derribo socialista que acabó con la desaparición de UCD tras su hundimiento en las elecciones de 1982.

Cualquiera que realice un análisis comparativo de los dos casos y épocas, lo puede comprobar. Lo que en el ataque contra UCD fue la campaña del aceite de colza, en el caso del PP fue la catástrofe del Prestige; lo que en el primer caso fue una querrela contra el director general de RTVE, en el segundo los socialistas hicieron lo mismo contra el director de los informativos de la misma RTVE; si en 1982 fue la campaña contra la OTAN, esta vez ha sido contra la intervención en Irak (en los dos casos asociándolo al mensaje *guerra NO* y una actitud *antiamericana*, y en los dos casos de la mano de la izquierda más extremista).

Y si entonces fue la amenaza golpista la que sirvió para desestabilizar a UCD (el golpe militar del 23-F de 1981 se dio contra un gobierno de centro-derecha), en esta ocasión ha sido la amenaza del terrorismo islámico asociado a la presencia española en Irak, la que ha servido para jugar ese papel. Hasta Felipe González repitió en esta ocasión las mismas palabras que entonces («luces rojas») para transmitir el mismo mensaje desafiante: si la izquierda no llegaba al poder, España viviría una situación de riesgo².

² Presentado como un alegato y bajo el título *González: Por qué no debe ganar el PP*, el ex presidente socialista Felipe González afirmó en el diario *El País* el 6 de Marzo de 2004, en vísperas electorales: «Si las elecciones avalan su política (del PP), nos llevará con esas luces rojas encendidas a una situación muy seria».

Esta estrategia es propia de la izquierda más revolucionaria, y del nazismo, y asimismo es utilizada por el terrorismo. Consiste en intimidar y desmoralizar al enemigo por todos los medios. En desestabilizar cualquier proceso, utilizando especialmente las modernas técnicas y medios de comunicación. Como consecuencia de ello, durante estos años el PP ha tenido que denunciar el asalto violento de más de doscientas sedes de su partido, hasta llegar a ver rodeada su sede central en Madrid por miles de personas atacando verbalmente a los populares la misma víspera de las elecciones. En plena conmoción por la masacre terrorista del 11-M en Madrid, con casi doscientos muertos sobre el asfalto.

HACER QUE PAREZCA NORMAL LO ANTIDEMOCRÁTICO

Son formas de agitación y de movilización de lo que en su jerga llaman «espacios». Los cuales pueden ser sociales, artísticos, sindicales, estudiantiles, gremiales, y que a su vez pueden estar fragmentados, pero que en conjunto forman parte activa del mismo proceso para *radicalizar la democracia* e ir forzando otro orden político. Estamos ante un caso típico de subversión del orden democrático. Unas minorías que por sí solas no cuentan con la mayoría para gobernar y que representan programas e intereses heterogéneos, tratan de imponer mediante un pacto que suma la mayoría nominal, un nuevo sistema y modelo de Estado –un nuevo régimen– a la mayoría. Hay quienes, entre los protagonistas de estas operaciones, niegan que su propósito sea cambiar el actual régimen democrático, e incluso hay quienes afirman que todo ello se mejorará. Pero aun aceptando que así lo crean, la resultante no varía. El orden democrático tiene una lógica axiomática: cuando se subvierte el orden democrático, se pierden la democracia y el modelo social y político que representa. Poco a poco o de golpe, la democracia se desvanece.

Cada vez son más los actos antidemocráticos que van pareciendo *normales*, y por ello no producen consecuencias negativas para quien los ejerce. Por el contrario, les produce unos réditos que después de protagonizar una campaña y unos acuerdos tan antidemocráticos, el PSOE se permite afirmar que la manera de hacer política del PP «debilitó y deterioró seriamente la democracia» (González, 2004).

Los hechos cotidianos de este cuarto de siglo dejan constancia de ese plus de legitimidad democrática que la sociedad española (y también –y sobre todo– el centro derecha) ha otorgado a la izquierda y a los nacionalistas. ¿Qué lo ha hecho posible?

EL PLUS DE LEGITIMIDAD DE LA IZQUIERDA

En los países más desarrollados democráticamente, por experiencia histórica y el ejercicio cotidiano de sus principios y valores, como son el Reino Unido y Estados Unidos, también la izquierda contó hasta hace tres décadas con un plus de legitimidad. Entonces eran los sindicatos de izquierdas los que entraban –literalmente– en el despacho del primer ministro inglés e imponían sus condiciones salariales para la política económica, por encima de lo que opinase el Parlamento (así cayó el primer ministro conservador Edward Heath en 1974).

Hasta que se inició un movimiento social e intelectual de raíz liberal (en Europa) y conservador (en Estados Unidos), que se rebeló contra el plus de legitimidad ideológica que venía representando la izquierda, y que se concretaba en privilegios y derechos de poder. Dos de los protagonistas históricos de esos cambios fueron Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, y ambos han publicado libros y escritos relatando cómo cambiaron no solamente la política de los gobiernos, sino también el centro de gravedad ideológico en el pensamiento de sus respectivas sociedades³.

Pero en el caso español, al plus de legitimidad ideológica que ha tenido históricamente la izquierda, en parte conseguido a través de su discurso de lucha de clases y en parte gracias a la poderosa propaganda financiada a partes desiguales por la maquinaria soviética (Koch, 1977) y por la Internacional Socialista, se suma un plus de legitimidad democrática. Todavía hoy en España se suele dar más crédito democrático a la izquierda que a cualquier otra ideología, dentro o fuera del PP. Es tan extensa la documentación acumulada que acredita la existencia de este plus de legitimidad democrática de la izquierda, que los estudiosos tienen un auténtico filón a su alcance. Hace unos meses se

³ En *The Right Nation*, John Micklethwait y Adrian Wooldridge (2004), historian y analizan el crecimiento del movimiento conservador en la sociedad y la política norteamericana, y el cambio del centro de gravedad ideológico en esa dirección.

publicó un artículo del historiador Juan Pablo Fusi en el que entre otras cosas afirma que «el pensamiento de la izquierda era ya entonces –años del franquismo tardío y de la transición a la democracia– el pensamiento hegemónico del país». Lamenta el profesor que no haya reaparecido el liberalismo como pensamiento vertebrador de la sociedad contemporánea, señalando que la hegemonía del pensamiento de izquierdas en España ha sido y es posible «porque en España el pensamiento de la derecha era entonces y lo es aún, o inexistente o carente de legitimidad y prestigio» (Fusi, 2004).

Esa hegemonía del pensamiento de izquierdas, que a su vez domina el clima de opinión e informativo diario de los medios de comunicación, es lo que ha contribuido decisivamente a consolidar ese plus de legitimidad democrática a la izquierda. Que es su principal fuente de credibilidad.

EL ÉXITO DE UNA GRAN FALACIA

Cuando hoy se habla del «complejo de la derecha» ante la falta de una mayor reacción y movilización frente a las descalificaciones y ataques contra el PP y sus dirigentes, y contra lo que representan, se está reconociendo una inferioridad que deberá ser superada. Ese plus de legitimidad democrática que se arroga la izquierda está tan presente en la acción política, que el propio presidente José María Aznar cuenta en su último libro (Aznar, 2004) cómo a pesar de haber ganado las elecciones de 1996 «se pusieron en marcha todo tipo de operaciones para impedir que llegáramos al poder». Y al referirse a ellas, añade: «En el fondo, este intento se amparaba en el argumento de la supuesta superioridad moral de la izquierda, que sería la única legitimada para gobernar».

Más adelante, y en relación con la campaña desestabilizadora de la izquierda durante la guerra de Irak, analiza de nuevo este hecho: «La gran coartada de la izquierda en España ha sido que nosotros no teníamos legitimidad histórica para gobernar nuestro país. Que el centro-derecha español hubiera llegado al poder era un accidente o una desgracia. Con eso pretendían intimidarnos. Pero no era una maniobra táctica o puramente cínica, era también la expresión de un prejuicio muy arraigado, compartido por mucha gente».

Uno de los argumentos de la izquierda parte de una gran falacia, la cual se encuadra dentro de lo que científicamente se considera *pensamiento ilógico*. Se presenta como lógico lo que no lo es. El resultado es el siguiente mensaje: «Los demócratas eran los antifranquistas, y como la derecha no era antifranquista, no es demócrata. Por el contrario la izquierda ha sido antifranquista, y por eso es demócrata».

Ninguno de los hechos con que se construye el mensaje conducen necesariamente a la lógica de su conclusión. Estar contra el régimen de Franco no suponía ser demócrata. Los comunistas y la URSS eran antifranquistas y ha sido el imperio totalitario más sangriento del siglo XX. Son muchas las falsedades que se acumulan en esta falacia, pero basta limitarse a tres: 1.) No sólo la izquierda fue antifranquista, sino que hubo movimientos de la derecha que se opusieron al franquismo y pagaron por ello (monárquicos, democristianos, liberales); 2.) La izquierda y su ideología no tienen una raíz democrática, y la principal oposición a Franco en la izquierda la ejercieron los comunistas con el apoyo de la dictadura soviética; 3.) La transición democrática española estuvo dirigida por el centro-derecha. El PSOE no gobernó hasta 1982, seis años después de empezar las reformas, y cuatro después de aprobarse la Constitución en 1978. Se puede intentar manipular la Historia como se quiera, pero los hechos son objetivos.

Sin embargo, la falacia ha tenido éxito. Ha calado y forma parte del paisaje intelectual y de la creencia popular. A ello ha contribuido decisivamente una estructura de medios de comunicación dominada por la izquierda, y que paradójicamente se ha beneficiado a lo largo de los años de importantes apoyos y recursos del centro-derecha.

Los mensajes socialistas de identificar al PP con el franquismo, y de poner en un plano de competencia el «progresismo» de la izquierda contra el «autoritarismo» de la derecha, sólo pueden utilizarse con éxito político y electoral cuando domina la hegemonía ideológica de la izquierda.

ESPAÑA NO ES SOCIOLÓGICAMENTE DE CENTRO-IZQUIERDA

Ese dominio ideológico es el que hace asumir a todos, incluido a los estrategas del centro-derecha, la teoría (también falsa) de que España

es mayoritariamente una sociedad de centro-izquierda. Teoría que es fácilmente rebatible. Ninguno de los partidos que ha ganado las elecciones desde 1977 lo ha hecho presentando un proyecto ortodoxo y abiertamente de izquierdas. Los que lo han hecho, como los comunistas del PCE (IU), han menguado progresivamente. En las elecciones del año 2000 el PSOE decidió presentarse aliado con los comunistas, y el rechazo de la mayoría a su oferta fue tan rotundo como el respaldo dado al PP, que consiguió una mayoría absoluta. Luego, en las elecciones del 2004, el PSOE tuvo que inventarse la marca de ZP para envolver su proyecto. Si el análisis se hace en términos de comportamientos socioeconómicos, y respecto a los valores culturales, morales, y religiosos, la resultante tampoco sale a favor de la izquierda.

Sin embargo, lo que además confirma que España no es mayoritariamente de izquierdas son dos hechos. Uno, que a pesar de tener esa hegemonía ideológica y ese plus de legitimidad, y de esas campañas desestabilizadoras de acoso y derribo de la izquierda, el centro-derecha ha llegado a gobernar durante ocho años, mantiene grandes parcelas de poder, y el PP es hoy la alternativa más fuerte conseguida nunca por una oposición de su signo. Hasta el punto de que si no gana por mayoría absoluta, la izquierda no le deja gobernar, y así y todo lo consigue (Madrid, Baleares, Valencia...).

El otro hecho tiene que ver con uno de los grupos periodísticos que apoya al PSOE y que más se ha manifestado en la campaña anti-PP. Un grupo que cotiza en Bolsa y que es uno de los pocos en Europa que practica una de las formas de capitalismo más viejas y humillantes (además de caras) para la sociedad: el monopolio. Aunque bien es verdad que la izquierda y el viejo capitalismo español (estatista) han tenido siempre algo en común: su posición antiliberal.

La mayoría de la sociedad española no es de centro-izquierda, a no ser que se considere que la izquierda tiene el monopolio de unos valores sociales y éticos de los que carece la derecha. O que el dinero de las subvenciones del Estado es propiedad sólo de la izquierda.

¿Por qué van a tener menos credibilidad moral o ética, medios de comunicación como la *COPE*, *La Razón*, o el *ABC*, que *El País*? ¿Dónde está la superioridad ideológica de *Canal Plus* sobre *Antena 3*? ¿Los periodistas y escritores de izquierda que están en *El Mundo* o en otros medios dejan de ser de izquierdas porque no están en *El País* o

no apoyan al PSOE, e incluso no les importa compartir espacio con los liberales del centro-derecha?

Si creer en la libertad, en la solidaridad, defender la ética, ser tolerantes, impulsar el progreso social, todo ello se considera de izquierdas, entonces el resultado final siempre será el mismo. La mayoría es de centro-izquierda, porque ¿quién dice al encuestador que no está a favor de todos esos valores –y de muchos más en la misma línea, si además los comparten?

Pero eso es admitir la propaganda sectaria del propio socialismo: «El socialismo es portador de los valores universales de solidaridad en mucha mayor medida que la derecha» (Oualalou, 1997). «Hay que profundizar en los valores y principios que nos son propios, como la solidaridad, la igualdad de oportunidades en la educación, la justicia social», afirmó Felipe González en su intervención *Globalización e identidad cultural* en la Comisión de Progreso Global de la Internacional Socialista.

Pero si se admite que una persona del centro-derecha y con valores liberales hace tanto por los demás como cualquiera, siente y padece como los demás, y está tan comprometida con su entorno social y con el mundo como los demás, entonces el recuento hay que hacerlo de otra manera. Es tradicional que la izquierda quiera atribuirse todos los mejores valores. Es un mito falso. Ha tratado de hacerlo siempre apoyándose en grandes maquinarias propagandísticas. Aunque la realidad también siempre ha sido la contraria. Históricamente ha llegado a cautivar a millones de personas vendiéndoles la promesa de «un hombre nuevo», mientras en realidad desarrollaba las tiranías más sangrientas. Algunos de quienes mejor describen esta realidad son precisamente los que han compartido esa experiencia vital de la izquierda, y la cuentan en sus libros y artículos. Lo que resulta más difícil de comprender es por qué las personas que no son de izquierdas en España tienen que renunciar a considerar esos valores como propios. ¿O es que no defiende la paz igualmente una persona que no es de izquierdas? ¿Por qué algunos dirigentes y líderes del centro-derecha tienen que aparentar ser de izquierdas para defender esos valores, como hemos visto que ocurre con frecuencia? ¿Se atreven los socialistas españoles a decir que sus socios ingleses, polacos o checos en la Internacional Socialista son belicistas y no creen en la paz, porque

han enviado tropas a Irak como hizo el gobierno de Aznar? ¿Se es más pacifista enviando tropas a Afganistán u ordenando los bombardeos de los Balcanes, que ayudando a liberar Irak y a que su población construya un régimen democrático?

PONER FIN AL PLUS DE LEGITIMIDAD DE LA IZQUIERDA

«¿Por qué agradecemos y reconocemos la figura de Ronald Reagan?», se preguntaba recientemente el veterano sindicalista polaco, Lech Walesa. «Porque le debemos la libertad», contestaba acto seguido con sinceridad y rotundidad el que llegó a ser presidente de su país, y además le concedieron el premio Nobel de la Paz (Walesa, 2004). Nadie de la izquierda le puede dar lecciones a Walesa y a un ejército de compañeros que protagonizaron el movimiento polaco *Solidaridad* frente al totalitarismo comunista del caído imperio soviético. Porque todos ellos lucharon por la libertad durante muchos años en su actividad diaria, jugándose su propia vida.

La lógica de la libertad y de la democracia sólo es una: luchar por ella, ejercerla. Un conservador como era Reagan la defendió a capa y espada, dentro y fuera de su país (entre otras cosas por eso fue elegido por dos veces presidente de los Estados Unidos, y en su muerte hasta sus enemigos más frontales –como fue el caso del líder soviético Mijail Gorbachov– le han rendido tributo personal). No importa que Walesa sea un sindicalista de base, la historia los ha unido, porque defendían un mismo sistema en el que es posible enfrentarse y discrepar en libertad.

No, la izquierda no tiene un plus de legitimidad ideológica ni democrática sobre el centro-derecha, aunque esta leyenda le ha dado buenos frutos. Ese plus de legitimidad ha permitido a los socialistas ir con Estados Unidos a la guerra de Irak cuando gobernaba en 1991, y estar en contra del gobierno popular que hizo lo mismo en el 2003. De igual forma le permitió estar contra la entrada de España en la OTAN cuando gobernó UCD, y a favor de la Alianza cuando destruyó al partido centrista y alcanzó el gobierno. En todas las posiciones buscó y obtuvo rentabilidad partidista, política y electoral.

Javier Solana, destacado protagonista de las campañas socialistas contra la OTAN y que luego llegó a ser Secretario General de la propia Alianza Atlántica, lo explica muy bien. Justifica así su oposición de entonces a la decisión del gobierno de UCD de entrar en la OTAN, y su posterior cambio: «No queríamos una operación de entrada en las estructuras de la OTAN por la puerta de atrás» (Iglesias, 2003, 217).

Aquel gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, que había conseguido el apoyo de la mayoría parlamentaria para entrar en la OTAN, no tenía legitimidad para hacerlo, en opinión de los socialistas. La decisión adoptada democráticamente por una mayoría parlamentaria que no es la suya, supone en la mentalidad socialista «entrar por la puerta de atrás». Admitir todo esto no sólo es humillante para los millones de personas que tienen un sentimiento noble y respetuoso de la pluralidad de ideas y de las reglas democráticas. Es además injusto, y desestabilizador para el propio sistema, porque se da paso a los agravios en todos los órdenes. Políticos, entre autonomías, sociales y económicos, raciales, de sexo. Se apuesta, una vez más en la historia de España, por el dogmatismo y la radicalización.

LA VIGENCIA DE UN PROYECTO LIBERAL

El modelo de *democracia radical* que está queriendo imponer la izquierda en España, con el apoyo de los nacionalistas, garantiza además un choque frontal con las tendencias globales de las que depende el crecimiento y desarrollo de las próximas décadas. Porque es un modelo segregacionista en lugar de integrador. Su hegemonía está basada en la desintegración para tratar de conseguir un control sobre todo ideológico y con carácter indefinido (divide los sexos por cuotas, a la sociedad en clases, a la nación en una *federación de estados asimétricos*). Es un viejo modelo de orientación totalitaria para enfrentarse a una realidad futurista que tiene otras leyes.

Una de las más importantes de estas leyes es la de la diversidad, que invalida cualquier teoría totalitaria y de control hegemónico. La diversidad se ha convertido en uno de los mensajes presentes en el centro de nuestro pensamiento y de nuestra actividad diaria, porque esa es la configuración de nuestro entorno.

Esa es la realidad global. Diversidad de las ideas, razas, actividades, en los sistemas de vida, en una realidad planetaria. Esa diversidad (infinita) hace que la realidad tenga vida propia, y que los procesos de cambio vayan de forma irreversible en una dirección y no en otra. «La tecnología es una fuerza liberalizadora de nuestra vida, y será la principal arma del siglo XXI», escribe el físico Freeman Dyson (2004, 271).

Si el proyecto liberal iniciado por el Partido Popular con el liderazgo de Aznar, ha demostrado su valor potencial de futuro, es entre otras cosas porque su dinámica está asociada a las tendencias que dominan los cambios en la globalización. Un modelo reformista y disciplinado permite hacer de la flexibilidad y el rigor los mejores instrumentos para convertir los cambios –tan veloces y profundos– en un proceso virtuoso. Los resultados positivos de ese modelo ya han sido demostrados, en comparación a otros deficitarios como el socialista alemán y el estatista francés.

TODO DEPENDE DE UNA DECISIÓN

El desafío al que se enfrentan el Partido Popular y la sociedad que se rige por unas ideas y valores liberales y democráticos, es el de cambiar el curso de los acontecimientos emprendidos por la izquierda en España. Y no hay cambio posible, aunque el centro-derecha tenga el poder, si continúa admitiéndose la hegemonía ideológica de la izquierda. Lo que significa poner en marcha un proyecto renovado y movilizador, sin escatimar recursos ni medios, sean estos materiales, intelectuales, estratégicos y mediáticos. Sabiendo que en este cambio lo que está en juego es lo más básico en la vida de las personas. La libertad, su seguridad, el bienestar, y la capacidad de competir y progresar.

Es un desafío al que desde perspectivas diferentes se enfrentan la mayor parte de las sociedades y de las fuerzas políticas en otros países. Las fuerzas totalitarias han reaccionado, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, en contra de la globalización. Porque se sienten desplazados y vencidos ideológicamente. He escrito en mi último libro que la globalización representa un nuevo sistema de pensamiento (Sarasqueta, 2004). La sociedad del conocimiento depende del co-

nocimiento y no de los viejos dogmas ideológicos predicados por sus elites. ¿Por qué el éxito del proyecto socialista de una *democracia radical* depende de que no se haga explícito? Porque la mayoría de la sociedad lo rechazaría.

En democracia la mayoría es siempre moderada. Los proyectos radicales no consiguen victorias electorales. Por eso, quienes los quieren imponer tienen que esconderlos a la opinión pública. Ocultándolos y/o confundiendo. Son minorías que se necesitan unas a otras, y que como consecuencia, en su propia dinámica se disputan la radicalidad. Ninguno de los partidos que participan en este proyecto radical cuentan con el apoyo social para gobernar por sí mismo. Ni en las autonomías del País Vasco y Cataluña, ni en el Parlamento español. Ni los nacionalistas, ni los partidos de izquierda.

El *factor crítico* que determina una evolución u otra de las cosas no está en cambiar la Constitución ni el modelo democrático y de Estado al que ha dado lugar, sino en no hacerlo depender de las ideologías que lo repelen. Y sí, por el contrario, potenciar el constitucionalismo y el proyecto liberal de España. Es decir, cambiar el actual centro de gravedad ideológico, que sigue estando en la izquierda.

De lo contrario, el centro-derecha estaría aceptando la imposición de la hegemonía ideológica de la izquierda. Como ha cambiado la doctrina estratégica e ideológica de la izquierda, de la Internacional Socialista y del PSOE, los españoles tienen que someterse a un nuevo régimen político y renunciar a todo lo que han conseguido. El efecto sería desmovilizador para la sociedad, precisamente cuando es urgente movilizar a todos los sectores del centro-derecha para hablar alto y claro de su propio proyecto. Con razón y en libertad. Porque lo que está verdaderamente en juego es la democracia en sí.

LA FUERZA DEL MENSAJE: HACER REALIDAD LO QUE ES REAL

La fuerza del mensaje es la fuerza de la realidad. Sea ésta auténtica o engañosa, las personas percibimos una realidad. La fuerza de la realidad la confirman tanto los que la defienden en su nitidez y objetividad, como los que tratan de desvirtuarla o modificarla para presentar una realidad falsa e interesada. Las cosas y los sistemas –o las relacio-

nes— comienzan a estar en peligro cuando empieza a desfigurarse su realidad, y por tanto lo que representa la misma. No hay diferentes tipos de democracia, hay una, la que combatió contra el nazismo y contra el comunismo. Con frecuencia se recuerda a Winston Churchill por sus citas, pero no tanto por su gran batalla dentro del propio Partido Conservador, tratando de demostrar lo que era evidente, real: que seguir el juego al régimen de Hitler suponía ser cómplices del nuevo totalitarismo nazi.

El pensamiento liberal y el totalitario se distinguen muy claramente por sus formas opuestas de utilizar la realidad como sujeto político, moral, y científico. El liberalismo parte de una realidad existente, objetiva y veraz. El hecho de que cada persona vea la realidad de distinta manera no quiere decir que ésta sea distinta, sino que la interpretamos de manera diferente. Por eso las personas, cuando comprobamos los efectos derivados de la realidad, solemos decir que *la realidad se impone*. Porque es un valor objetivo. Nadie impone la realidad. Sólo los fanáticos y los totalitarios creen que lo pueden hacer. Es la realidad la que se impone.

Sin embargo, quienes actúan con una mentalidad totalitaria hacen lo contrario. Para que todos observen la misma realidad, ésta tiene que ser impuesta. No es la realidad la que se impone. Después de firmar un pacto para impedir que gobierne el PP, lo que objetivamente convierte el hecho en una realidad que revela la actitud antidemocrática de los partidos que lo han firmado, estos dicen —sin rubor— que han sido los populares los que han deteriorado la democracia.

El pensamiento liberal trata de influir en la realidad, sabiendo que ésta es el resultado de influencias infinitas. Cuanto más positivas sean esas influencias, mejores serán sus efectos globales, para el conjunto. De ello se deriva la evolución del progreso. Liberalizando y reformando el sistema, la política popular ha creado cinco millones de puestos de trabajo y ha aplicado el déficit cero en las cuentas del Estado, y eso ha contribuido al bienestar y la seguridad general.

Mientras que la izquierda ha acuñado el término de «*transformar la realidad*» porque pretende imponer su realidad. De ahí se deriva su afán intervencionista en todo. En tener más poder que los padres en la educación, en imponer cuotas de reparto de sexos en la actividad pública y laboral, en hacer de las subvenciones una fuente de depen-

dencia clientelar del poder. El resultado de su modelo durante casi 14 años de gobierno no pudo ser más desolador en pérdidas de empleo, crisis social, y en la corrupción del propio sistema.

En una realidad global, la mayor parte de lo que influye en nuestras vidas (en las de todos) es externo. Lo que no quiere decir que sea ajeno. El azar como variable que influye en nuestras vidas es uno de los factores que más pesa en la ciencia moderna. El *efecto mariposa* se ha popularizado a escala mundial y en todas las culturas porque ilustra muy bien la influencia del azar en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Tanto en la percepción de su teoría genuina (un cambio sensible en las condiciones iniciales puede terminar en una gran tormenta) como en la más popular (todo afecta a todo). Por eso, las políticas e ideologías que pretenden imponer su propia realidad tienen que utilizar métodos coercitivos y la fuerza para tratar de conseguirlo. La mayor parte de los conflictos políticos se derivan de ello.

Divulgar la realidad es hoy el arma más poderosa del pensamiento liberal y de las fuerzas políticas y sociales que comparten los valores del centro-derecha. Hacer realidad lo que es real, es un principio científico cargado de fuerza política. Porque en la sociedad de la información y del conocimiento, ganar la batalla de las ideas pasa por divulgar las ideas y combatir las del adversario. Compararlas y hacer de ellas razón. Y sin ganar la batalla de las ideas no se gana el poder. Se puede llegar a ganar ocasionalmente el gobierno, pero no el poder. En 1996 el PSOE perdió el gobierno pero no el poder, que todavía se sigue atribuyendo a la hegemonía ideológica de la izquierda en España.

Hacer ver la realidad no impide que otros disfracen la realidad, pero es más difícil que engañen. Para ganar la batalla de las ideas, primero hay que darla.

Los españoles tienen que saberlo e interiorizarlo, lo que está en juego no son cuestiones de segundo orden de carácter territorial o social, como quieren hacer ver de forma táctica y engañosamente, socialistas y nacionalistas. Los ciudadanos tienen que percibirlo como algo real, su propia realidad: la izquierda en el poder tiene un proyecto para sustituir progresivamente la democracia liberal y el Estado constitucional por el nuevo modelo hegemónico de socialismo radical. Y desde la ruptura constitucional, hasta la política exterior, todo

forma parte de ese proyecto ideológico. Lo cual es posible, precisamente, porque la izquierda no ha dejado de tener un plus de legitimidad en España.

BIBLIOGRAFÍA

- Aznar, J.M. (2004): *Ocho años de gobierno. Una visión personal de España*. Planeta, Barcelona.
- Dyson, F. (2004): *Infinite in all Directions*, Princeton.
- Fusi, J. P. (2004): «La libertad en la historia», en *El País*, 30 de agosto.
- González, F. (2004): *González: Por qué no debe ganar el PP*, *El País*, 6 de Marzo.
- Iglesias, M^a. A. (2003): *La memoria recuperada*, Aguilar, Madrid.
- Internacional Socialista (IS) (2003): *Gobernar en una sociedad global*. Informe adoptado por la Internacional Socialista en su congreso celebrado en Sao Paulo (Brasil).
- Koch, S. (1977) (ed. española, 1997): *El fin de la inocencia*, Tusquets, Barcelona.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (1987): *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*, Siglo XXI, Madrid.
- Micklethwait, J. i Wooldridge, A. (2004): *The Right Nation*, Penguin, New York.
- Oualalou, F. (1997): *Las respuestas del socialismo global*, IS.
- Sarasqueta, A. (2004): *Una visión global de la globalización*, Eunsa.
- Walesa, L. (2004): en *The Wall Street Journal*, 11 de junio.

EL HILO DE LA LIBERTAD

La empresa de ser libres exige que sepamos a qué atenernos. Los liberales no creemos en las ilusiones falsas ni en los espejismos de los grandes conceptos. Sabemos que la libertad hay que ganársela día a día. Es la consecuencia de una decisión que reiteramos cada mañana. Es la decisión que distingue al hombre libre del esclavo. Una decisión que permitió la caída del Muro de Berlín, hace ahora quince años.

«Pero ¿qué es propiamente el aura? Una trama muy especial de espacio y tiempo: la irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que pueda encontrarse».

(Pequeña historia de la fotografía, Walter Benjamin).

1. UN ITINERARIO FOTOGRÁFICO DE LA LIBERTAD EN EL SIGLO XX

Hace quince años triunfó la libertad. Y lo hizo en Berlín. Muy cerca del lugar en el que el totalitarismo nazi se fraguó en 1934 con el incendio del Reichstag. En ese mismo Berlín y en ese mismo Reichstag semiderruido por la artillería del Ejército Rojo, se inmortalizó unos años después la victoria de Stalin y la apoteosis del Imperio Soviético con la fotografía en blanco y negro de un soldado ruso que agitaba el 30 de abril de 1945 la bandera roja con la hoz y el martillo sobre los tejados berlineses.

Con esta imagen nos aproximamos al tema de este trabajo. Es la primera de un álbum que ofrezco a continuación. Un álbum que

José María Lassalle es Profesor de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad San Pablo CEU.

avanza sus páginas tentativamente, siguiendo el esfuerzo de una imaginación fotográfica que se pone al servicio de la búsqueda del «aura» de ese particular y esquivo hilo de Ariadna que es siempre la libertad. Un hilo que en la segunda mitad del siglo XX tuvo que arrastrarse en un fluir a ras de suelo y en medio del laberinto de una historia cargada de tragedia y esperanza.

Pero antes de continuar, es preciso deslizar una premisa que me gustaría plantear al comienzo de estas páginas. Describir la libertad como un hilo de esperanza supone hablar de algo tan antiguo como la humanidad misma. Y es que el oficio de ser libre nunca ha sido fácil. La única y verdadera utopía –con minúscula– radica en ser o no fiel a su vocación: una vocación profunda, intensa, que emerge en el seno del corazón humano como una necesidad a la que se atiende o se repudia.

Es indudable que son numerosos los factores que influyen en la aceptación o no de la vocación de ser libre. Sería arduo mencionarlos todos. Su factura es tan diversa como las circunstancias a las que aludía Ortega. Sin embargo, nunca fue tan difícil la libertad como durante el siglo XX y en un espacio geográfico y metafísico tan brutal como el padecido bajo la tiranía impuesta por el comunismo. Bastaría leer el testimonio de quienes como Platonov, Orwell, Koestler, Soljenitsin o Zajayewski, entre otros, tuvieron el valor de dar forma literaria a su vivencia para comprenderlo.

Con todo, millones de hombres y mujeres fueron capaces de ser fieles a la esperanza que encarnaba la libertad. Lo fueron incluso bajo la atroz experiencia de los muros del «gulag». Muchos fallecieron sin ver cumplida esa esperanza. Tuvieron que ser los nietos de aquellos que lo vieron nacer quienes disfrutaron finalmente de la salida del laberinto totalitario a los que les condujo la tiranía comunista.

Lo más sorprendente es que ese hilo de libertad pudo haber sido cortado, y cientos de millones de personas hubieran quedado atrapadas y condenadas a habitar bajo la oscuridad humillante impuesta por los muros del totalitarismo. Afortunadamente el desenlace fue otro bien distinto y hoy podemos felicitarnos de que la pesadilla quedó atrás, a pesar de las incertidumbres que gravitan sobre la vigencia y continuidad planetaria de la libertad.

Pues bien, con este álbum de fotos que se pone delante de la imaginación del lector paciente, se trata ahora de reflexionar sobre ese

acontecimiento histórico que fue el derribo el 9 de noviembre de 1989 del Muro de Berlín. Un derribo que, como veremos, supuso el punto y aparte de una confrontación planetaria entre la libertad y la tiranía, y que durante 41 años hizo de Berlín el lugar en el que los dos bloques cruzaban sus miradas cara a cara.

2. COMIENZA NUESTRA ANDADURA FOTOGRÁFICA

Unos pocos años después de que se produjera el izado de la bandera roja sobre Berlín, otra foto nos sitúa detrás de un montón de escombros. Estamos en 1948. Se divisan un niño, una pareja y un padre con su hijo entre los brazos. Contemplan una fortaleza volante norteamericana que aterriza sobre Berlín con su bodega repleta de alimentos.

Era la respuesta que el mundo libre daba al chantaje soviético del bloqueo de Berlín Oeste ordenado por Stalin en julio de 1948. Con este gesto, los aliados occidentales trataban de mantener la isla de libertad en la que se había convertido la zona controlada por los EE. UU., Gran Bretaña y Francia en el corazón de la Alemania ocupada por la Unión Soviética.

Un poco antes, Winston Churchill había denunciado que un Telón de Acero había separado abruptamente Europa desde el Báltico al Adriático. Convertida en el epicentro de un seísmo mundial en el que pugnaban la sociedad abierta y la sociedad cerrada descritas por Popper, Berlín se transformó así en una leyenda: una grieta física por la que deslizaba el fino hilo de esperanza al que se agarraron cientos de miles de europeos del este que intentaron librarse a través de él de la cárcel en la que se había convertido media Europa por la fuerza de la Utopía que imponían las divisiones de Stalin.

Pero pasemos las páginas de nuestro álbum. Volvemos a toparnos con la imagen del Berlín desgarrado de la Guerra Fría. De 1950 a 1960, la República Democrática Alemana perdió más de dos millones de personas que huyeron a la Alemania libre a través de Berlín Oeste. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 comenzó la construcción del Muro de la Vergüenza por orden de Kruschkov.

Las fotos que tenemos delante nos hablan de aquel momento. La primera de ellas nos descubre la pesadilla sobre la que se construía la revolución comunista y la esperanza de quienes deseaban huir de ella.

La tragedia berlinesa está delante de sus ojos. Cuatro policías del Muro –los famosos «Vopos»– transportan el cadáver de un fugitivo –Peter Fechter– al que se había dejado agonizar en las alambradas. Uno de los vopos mira al caído con una mueca en la que se entrevé una sonrisa. Otro de ellos se vuelve hacia el fotógrafo con rostro turbado por la desesperación. La siguiente foto, quizá, nos revela su conciencia. Se ve a un policía que salta la alambrada con impulso atlético. A su espalda se ve a un grupo de berlineses orientales difuminados por el primer plano que ocupa el improvisado gimnasta en busca de la libertad.

Poco a poco el álbum nos revela la arqueología política y moral que encierra nuestra celebración. La instantánea que se ofrece ahora está tomada un año después. La protagoniza un político que fue capaz de revitalizar la oposición de Occidente a la amenaza que desde Moscú crecía en medio del oleaje de la década de los sesenta agitada por una hábil estrategia soviética que combinaba la fuerza con la propaganda.

Desde un Berlín Oeste oscurecido por la humedad del dolor colectivo de una ciudad sitiada, vemos a J.F. Kennedy unos meses antes de su asesinato explicando qué se estaba jugando el mundo en el tablero de ajedrez berlinés. Con gesto relajado, pronuncia un discurso en el que dice solemnemente:

«Me siento orgulloso de haber venido a vuestra ciudad... Hace dos mil años, el mayor acto de orgullo era afirmar 'civis romanus sum'. Hoy, en el mundo libre, uno no sabría jactarse de otra cosa que decir: 'Ich bin ein berliner' (Yo soy berlinés).

No faltan en el mundo gentes que ciertamente no comprenden, o que pretenden no comprender qué es lo que está en juego entre el comunismo y el mundo libre. Que vengan a Berlín.

Hay otros que afirman que el futuro está en el comunismo. No tienen nada más que venir a Berlín. Algunos, en fin... declaran que se puede colaborar con los comunistas. A éstos también les invitamos a que vengan a Berlín. Y, así mismo, hay unos cuantos que, aun reconociendo los defectos del comunismo, estiman que les permite, sin embargo, hacer progresos económicos. Sólo tienen que venir a Berlín».

Pues bien, a Berlín se trasladó la mirada del mundo hace quince años. Entonces los berlineses demostraron qué era el comunismo. Con su rechazo a éste gritaron a la humanidad que la libertad es un todo innegociable que se acepta o rechaza, sin más: porque la libertad es capaz de desplegar prodigios inesperados, entre los cuales destaca uno: ser la única experiencia que por sí sola devuelve al hombre su indeclinable anhelo de dignidad.

Hace quince años la segunda embestida del totalitarismo fue derrotada en Berlín. Primero fue el fascismo. Después el comunismo. Añadamos otra foto, ésta por fin en color. Se ve a cientos de berlineses encaramados sobre el Muro. Sonríen, festejan su victoria y brindan alegres porque su resistencia interior frente a la tiranía ha sido coronada con el éxito de recuperar la libertad perdida.

Con esta instantánea se certificó lo que unas semanas antes había empezado a ser una realidad: que el totalitarismo comunista mordía el polvo de su derrota desde que la Hungría satelizada por la URSS había renunciado a seguir impidiendo el cruce por su frontera de aquellos que querían huir a Austria y la Europa libre.

De este modo, una serie de sacudidas sísmicas comenzaron a resquebrajar la todopoderosa fachada del Telón de Acero hasta que, poco después, la hazaña berlinesa evidenció que el Imperio Soviético se hundía por su base. Apenas un año después, los efectos de aquel seísmo revolucionario se llevaron por delante el solar y al artífice de la Utopía soviética: la URSS y el Partido Comunista sufrieron su particular derrumbe, emergiendo de sus cenizas la vieja Rusia guiada por la mano de Yeltsin.

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría fue el producto de una lenta gestación. Bastó que el mundo libre cambiase de estrategia para que la todopoderosa tiranía soviética tuviera que dar la vuelta de tuerca que acabó con ella.

3. UN EJERCICIO DE RETROSPECTIVA

Pero antes de seguir nuestra andadura fotográfica echemos la vista hacia atrás. Los años ochenta fueron decisivos. Como en un relato de

Joseph Conrad, cuando la tormenta parecía cernirse con mayor nitidez sobre la superficie de un Occidente atemorizado por unas nubes que ennegrecían su futuro, tres golpes de timón hicieron posible el milagro de disolver la tempestad.

Veamos el panorama de aquellos años brevemente. Sustituyamos las fotografías por la cámara rápida. Las imágenes que se proyectan rápidamente nos muestran cómo era el mundo entonces.

Los EE.UU. vivían sumidos en el síndrome post-Vietnam; la revolución islámica en Irán extendía sus sombras sobre un planeta en recesión por la crisis del petróleo de 73; Suramérica se debatía fracturada por golpes de estado y por la acción de guerrillas procomunistas; África estaba en pie de guerra por la descolonización; y el Tercer Mundo pasaba factura a una Europa acomplejada y marchita por el postimperialismo y la pusilanimidad de una derecha y una izquierda que, además de intervencionistas, se adherían sin paliativos a la teoría de la distensión.

Pero, sobre todo, si dirigimos la mirada hacia el horizonte de entonces, vemos a una URSS pletórica, que afianzaba su poder a base de estadísticas que hablaban de su imparable progreso económico y militar; con un pie en Centroamérica; otro en Afganistán; y con la mano apretando férreamente la garganta de Europa gracias a los misiles SS-20 y 21.

No había duda. El mañana era cosa del comunismo. La estrategia leninista de abordar la revolución mundial desde la plataforma rusa empezaba a dar sus frutos, contribuyendo a ello una «intelligentsia» europea y norteamericana que desde el control de los resortes de la cultura, la universidad y el periodismo minaba la resistencia de un Occidente en caída libre.

Sin embargo, como se decía antes, tres golpes de timón, tres decisiones aparentemente insignificantes cambiaron las cosas. La elección de Juan Pablo II para el solio pontificio y la victoria electoral de Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los desencadenantes de una cadena de acontecimientos que desembocó en el 9 de noviembre de 1989.

El primero, supuso la agitación en la ciénaga de la tranquilidad que habían sido los países satélites, especialmente Polonia. Antes se ha-

bían producido intentos de liberación en la misma Polonia, en Hungría y Checoslovaquia, pero fueron duramente frustrados. Sin embargo, el movimiento liderado por Lech Walesa y el sindicato Solidaridad –aunque abortado finalmente–, dejó accionada una bomba de relojería en el punto de conexión entre la vanguardia y la retaguardia del Pacto de Varsovia.

Además, la elección de un Papa polaco supuso una revitalización moral de una Iglesia que hasta entonces había sido refractaria a intervenir en los asuntos del mundo. Desde Solidaridad la injusticia ya no sólo fue algo material sino también político, y el «gulag» fue puesto en la mirilla pastoral de los Obispos.

El segundo golpe de timón fue de calado político y práctico. Surgió en el mundo libre un discurso ideológico que, de la mano del cambio programático que impuso el torismo de Margaret Thatcher, trataba de recuperar el dinamismo de la sociedad civil subvencionada por el Estado del Bienestar. Para ello se recuperó el legado del liberalismo clásico y sus instituciones: la libertad, el mercado, la seguridad jurídica y la propiedad.

Y si esto sucedía de puertas adentro de los países libres, de puertas afuera, el tercer golpe de timón lo protagonizaron los EE.UU. El enfrentamiento de Ronald Reagan con el expansionismo soviético, recuperó la estrategia de la contención dando batalla en todos los frentes abiertos por la Guerra Fría. De este modo, el giro decisionista liberal que Raymond Aron entreveía en *Los últimos años del siglo* se hizo realidad con un Occidente dispuesto, primero, a no ceder ni un solo palmo de terreno y, segundo, a poner difícil al enemigo la viabilidad de su estrategia expansionista socavando su retaguardia.

4. UN ANÁLISIS DE IDA Y VUELTA

Es difícil aventurar qué hubiera sido del mundo si las nubes que empezaron a propagarse en los años setenta hubieran seguido adensándose en los ochenta. A lo mejor, la tormenta se hubiera disuelto por sí misma, pero no sabemos a qué precio.

Hoy, conocemos que la URSS estaba al límite de su fuerza. La Utopía no daba más. La planificación sembraba la desolación mate-

rial. Elevaba los costes económicos, ecológicos y humanos de una revolución que avanzaba hacia el abismo llevada por un totalitarismo que se hacía centrífugo en sus márgenes y volátil en su interior; mientras que el sistema evolucionaba hacia su colapso, debido, por un lado, a la ingestión de dosis pantagruélicas de ineficiencia y, de otro, al pago de una hipoteca armamentista que fiaba su liquidación a una victoria futura sobre el mundo libre.

La utopía se salía de sus goznes y la criatura estaba a punto de devorarse a sí misma, como se vio en Chernobil. «La Perestroika» y la «Glasnost» gorbachovianas fueron la primera señal de que el gigante tenía los pies de barro.

Si en vez de a una fotografía, ahora recurriésemos a una radiografía del Muro de Berlín, tendríamos que admitir mediante un análisis rápido que su derribo fue, en realidad, el producto de una combinación implosiva y explosiva.

Quizá la literatura nos ayude a comprender qué es lo que sucedió. Acudamos a la reflexión de Thomas Mann contenida en *La montaña mágica*. Como al protagonista de la novela, la subida a las alturas y el cambio de presión de los Alpes aceleró la manifestación de la tuberculosis que incubaba al borde del mar del Norte. En contacto con un nuevo escenario físico la fisiología del enfermo se trastornó radicalmente y la aparente salud se transformó definitivamente en enfermedad. Y así, como al Hans Castorp de Mann, el cambio de presión de los años 80 provocado por la llamada Revolución Conservadora y la Guerra de las Galaxias impulsadas por la Administración Reagan, forzó a la enferma constitución de la URSS a subir a sus particulares alturas históricas.

En este escenario, la enfermedad se agudizó inesperadamente porque el Imperio Soviético tuvo que hacer la Guerra Fría en los elevados riscos del espacio y no en la pantanosa superficie de las décadas anteriores. Esta circunstancia y, sobre todo, la experiencia de su particular Vietnam en los desfiladeros afganos, aceleró la enfermedad que arrastraba consigo el aparentemente vigoroso cuerpo del Leviatán soviético, e hizo que fuese incapaz de recuperarse del impacto que produjo en su fisiología totalitaria la efervescencia de una sintomatología que venía arrastrando desde los primeros años de la revolución. El desenlace es que hoy podemos celebrar su derrota hace quince años.

5. DE NUEVO EL ÁLBUM

Sí, quince años ya del derribo del Muro. Quince años que, sin embargo, nos tienen que hacer pensar sobre lo que significó realmente aquel acontecimiento. Por eso, nuestro álbum de fotos está incompleto. No podemos cerrarlo todavía. Desde 1989 hasta ahora podríamos añadir un sinfín de nuevas instantáneas. La memoria es flaca bajo el dominio de la imagen que caracteriza las sociedades post-industriales. Sobre todo a la vista de aquellos felices años 90 que algunos quisieron ver, precipitadamente, como un «fin de la Historia».

Durante una década Occidente se fue de vacaciones con las obras de Hegel debajo del brazo. Sin embargo, el regreso al pupitre de la Historia fue demasiado brusco y desazonante. Tan brusco y desazonante que el mundo giró sobre sí mismo y mudó la expresión de su rostro en unos pocos minutos. De hecho, desde entonces la educación sentimental de las generaciones que asistieron a la efervescente ilusión que trajeron los noventa se trocó en una percepción ilusoria y escéptica ante las posibilidades del futuro.

Con aire pesimista, Occidente desenterró a Hobbes y volvió a releer a Vico debido a una imagen que alteró la conciencia de la humanidad autosatisfecha que emergió en 1989. Quizá sea la foto más impactante nunca vista. Se la presento porque creo que lejos de desalentarnos debe estimularnos a seguir luchando por la libertad y la civilización que la sustenta: la sociedad abierta.

La empresa de ser libres exige que sepamos a qué atenernos. Los liberales no creemos en las ilusiones falsas ni en los espejismos de los grandes conceptos. Sabemos que la libertad hay que ganársela día a día. Es la consecuencia de una decisión que la reiteramos cada mañana. Es la decisión que distingue al hombre libre del esclavo. Exige responsabilidad y sacrificio, coraje y dosis de convicción. Sobre todo en el seno de una sociedad que ha hecho de la libertad algo cotidiano, tan cotidiano que hemos relajado confiadamente su defensa más íntima a las instituciones.

Precisamente aquí reside la amenaza: que hemos olvidado que hay que seguir palpando sobre nuestra piel el estado y la fortaleza íntima de nuestra libertad si queremos que ésta siga fortaleciéndose y no debilitándose por una creciente adición de tejido adiposo.

De ahí la importancia de la foto que presento ahora. Abre un nuevo escenario de confrontación planetaria entre la sociedad abierta y la sociedad cerrada. Ya saben a qué foto me estoy refiriendo: el impacto de los Boeing secuestrados por Al Qaida sobre las Torres Gemelas ha oscurecido la luminosa irrupción de esperanza protagonizada por aquellos berlineses que veíamos en nuestra imaginación más arriba, encaramados sobre el Muro de la Vergüenza vencido por el aliento de libertad.

Ahora sabemos, sentimos todos, que el 9 de noviembre de 1989 es cosa del pasado. Tanto que nuestra memoria hace vencer sobre aquel recuerdo berlinés la nitidez del colorido flamígero de las explosiones producidas sobre la superficie de los rascacielos que minutos después se desmoronaban atrapando a miles de víctimas entre sus cenizas.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN, TAMBIÉN FOTOGRÁFICA

Cuando Tocqueville decía que habría «amado la libertad en cualquier época, pero en los tiempos que corren estoy inclinado a adorarla», emitía un principio nuclear del credo liberal. De hecho, desde el 11-S ya no somos españoles, ni europeos, ni norteamericanos. Somos occidentales que amamos por encima de todo una libertad que está amenazada.

Por eso mismo, nos emocionó en 1989 el derribo del Muro berlinés y nos sobrecogió, también, la acción terrorista de Al Qaida cuando dirigió sus aviones contra las Gemelas y el Pentágono tratando de localizar sus esfuerzos destructivos sobre los presuntos iconos que a sus ojos fanáticos identifican a Occidente.

Sin embargo, al elegir esos blancos los terroristas desvelaron el fondo de su alma. Con ello nos mostraron su debilidad. Nos ofrecieron una foto, es cierto, pero también su radiografía más íntima. Erraron de plano. Evidenciaron con su resentimiento que no nos entienden, porque nuestra fuerza no está en el capitalismo de las Gemelas ni el poder militar y tecnológico que representa el Pentágono.

Pasaron muy cerca, es cierto, pero se equivocaron porque el mundo libre está encarnado en otro icono. Se levanta a la entrada de la ba-

hía de Nueva York. Es mucho más pequeño físicamente que los gigantes que derribaron con su ataque. Curiosamente fue un regalo que la vieja Europa hizo a los pujantes EE.UU. que nacieron del empeño utópico del milenario continente.

En la Estatua de la Libertad está nuestra esperanza, el David que será capaz de estimular nuestra fortaleza en estos momentos de zozobra colectiva. Su traza clásica nos habla de nuestro pasado, de nuestra tradición de libertad. Su antorcha nos revela que su luz ilumina nuestro mañana. Y hoy, cuando celebramos el derribo del Muro de la Vergüenza, podemos decir orgullosos que somos berlineses pero, también, desde el 11-S neoyorquinos.

Y es que ambas riberas del Atlántico están hermanadas por ese hilo de Ariadna misterioso y mágico que fluye indestructible a pesar de las dificultades y sinsabores. Un hilo fino pero que porta consigo la vigorosa nervadura de la libertad. Un nuevo milenio comenzó en 2001. Con él comenzó también un nuevo enfrentamiento entre el mundo libre y la tiranía, esta vez revestida con el atuendo beduino del totalitarismo islamista.

Pero con este nuevo milenio se ha puesto en marcha, también, nuestra voluntad firme y decidida de defender la libertad amenazada. Y aunque esta voluntad se encuentra lastrada por el desánimo, la apatía e, incluso, la hostilidad de muchos en el seno mismo de nuestras sociedades abiertas, con todo, los liberales debemos decirnos aquello que mantenía Abraham Lincoln al señalar: «Todos pueden estar engañados algún tiempo; algunos todo el tiempo, pero nunca todos durante todo el tiempo».

Demostrar este engaño es la tarea cultural y política que tenemos los liberales de todo el mundo por delante. El giro, ese golpe de timón que anuncie los nuevos tiempos de esperanza que vendrán, está ahí, al alcance de nuestra mano: tenemos la responsabilidad histórica de hacer de nuevo ilusionante la gesta de defender orgullosos nuestra libertad. Si la merecemos lo haremos así.

REVISTA HISPANO CUBANA HC

Solidaridad con Cuba:
la disidencia y la ayuda exterior

V. Roca, O. Payá, M.B. Roque, J.C. Delgado
R. Hernández, R. Gómez, C. González
A. Gainza, O. Gutiérrez-Boronat, L. Carro

César Leante, escritor

Felipe Lázaro y Antonio Benítez Rojo

Dos tísicas fotogénicas:
María Viván y la economía cubana

Félix Bonne

El referente chino en la
estrategia antiembargo

Armando Añel

Derechos Humanos, Documentos,
Cultura y Arte

Número 20

© 2004



Director

Javier Martínez-Corbalán

Consejo editorial

Cristina Álvarez Barthe

Luis Arranz

María Elena Cruz Varela

Jorge Dávila

Manuel Díaz Martínez

Alina Fernández

María Victoria Fernández-Ávila

Carlos Franqui

José Luis González Quirós

Mario Guillot

Guillermo Gortázar

Jesús Huerta de Soto

Felipe Lázaro

Jacobo Machover

José María Marco

Juan Morán

Eusebio Mujal-León

Fabio Murrieta

Mario Parajón

José Luis Prieto Benavent

Tania Quintero

Alberto Recarte

Raúl Rivero

Ángel Rodríguez Abad

José Antonio San Gil

José Sanmartín

Pío Serrano

Daniel Silva

Rafael Solano

Álvaro Vargas Llosa

Alejo Vidal-Quadras

Redacción

Celia Ferrero Romero

Orlando Fondevila

Begoña Martínez

www.revistahc.com

PÍDALA EN SU QUIOSCO HABITUAL

Información y pedidos:

REVISTA HISPANO CUBANA HC

C/ Orfila, 8, 1º A. 28010 Madrid

Teléfonos: 91 319 63 13 - 91 319 70 48 Fax: 91 319 70 08

e-mail: revistah@revistahc.com - Internet: <http://www.revistahc.com>

LA CIUTAT DEL BÉ. UN BALANÇ DEL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA 2004

La ciutat de Barcelona sempre ha fet una passa endavant a cop d'esdeveniment. Si les exposicions universals de 1888 i 1929 van servir per a que Barcelona urbanitzés la Ciutadella i Montjuïc, les Olimpíades de 1992 van recuperar una part de la façana marítima de la ciutat i construir un nou barri –la Vila Olímpica– i una infraestructura viària –les rondes– del tot necessària per descongestionar el tràfic interior. I és aquesta idea de l'esdeveniment puntual com a motor del desenvolupament de la ciutat, la que recupera Pasqual Maragall a meitat de la dècada dels 90 del passat segle.

Què fer? Aquesta és la seva proposta: l'Exposició Universal. ¿Amb quin objectiu? Recuperar una altra part de la façana marítima –el Camp de la Bota–, fer arribar la Diagonal al mar, reorganitzar els barris d'El Poble Nou i La Mina, i regenerar el riu Besòs. Però, hi ha un problema: les seus de les exposicions universals que s'han de celebrar a finals del segle XX i principis del XXI ja estan concedides. Els pensadors municipals –l'Ajuntament de Barcelona sempre ha estat farcit de pensadors municipals– i la UNESCO brinden la idea: un gran encontre internacional sobre les cultures del món. I així sorgeix el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 on la ideologia i l'urbanisme es donen la mà.

Una volta acabat el Fòrum, s'imposa de fer el balanç. Un balanç que ha de ser alhora ideològic, urbanístic, econòmic i polític. Anem a pams i comencem per la ideologia. Sense embuts: el Fòrum ha estat l'expressió més acabada del pensament únic realment existent. El Fòrum ha estat el paradigma de l'imperialisme del bé –del *bonisme*, com a vegades es diu– ecologista, multiculturalista i pacifista que avui imposa els seu discurs arreu. En d'altres termes, el Fòrum o la dictadura del bé. Barcelona o la ciutat del bé. L'assumpte mereix de ser explicitat i valorat.

Contràriament al que es diu, el pensament únic realment existent no és el liberalcapitalista, sinó l'anomenat progressista o alternatiu. Un pensament que té el mal costum de saber on es troba la raó del mal i quina cosa cal fer per assolir el bé. I un pensament que també té el mal costum de ridiculitzar i desqualificar qualsevol dissidència que gosi de criticar la veritat progressista i alternativa establertes. Doncs bé, el contingut del Fòrum resumeix a la perfecció els eixos d'aquest pensament vaporós avui dominant a Occident: sostenibilitat, diversitat i pau. En principi, ningú no nega el valor de l'ecologia, la diversitat i la pau. Però, aquestes paraules no deixen de ser abstraccions que s'han de dotar de contingut. I és justament aquí on el «bonisme» pot arribar a ocasionar estralls. Concretament. El «bonisme», que té el mal costum de confondre ecologia amb ecologisme, atorga a la protecció de la biosfera l'estatut de valor absolut al que qualsevol altre valor s'ha de subordinar per definició. I com –segons s'adverteix– està en joc la pròpia existència del planeta i l'espècie humana, l'exclusivisme emergeix: l'ecologisme es considera a si mateix com l'únic sistema global d'interpretació del món capaç de crear un contramodel social que –afirmant-se científic– pot organitzar les relacions entre societat, biologia, economia, cultura i política. L'exclusivisme es pot percebre en un altre dels eixos *bonistes* del Fòrum: la diversitat cultural. En efecte, sota pretext d'impulsar la diversitat cultural sovint s'atorga carta blanca al relativisme extrem, cosa que es tradueix en la legalització de facto d'una ciutadania diferenciada que reclama uns privilegis i drets especials –del vel a quotes de representació– que són contraris a l'esperit democràtic i, amb freqüència, als drets humans. Finalment, la pau brinda un altre exemple de l'exclusivisme *bonista*. Segons s'afirma, la pau és un valor absolut o un universal empíric del gènere humà. Fals. La pau no té sentit sense especificar les seves condicions i els seus límits. I és que sota l'abstracció de la pau –sí, la pau no deixa de

ser una abstracció– pot amagar-se l'ètica de l'esclau pròpia de la submissió pacifista, o l'oportunisme i el cinisme de aquells que volen treure profit del cessament de la violència.

A l'hora de fer balanç, l'imperialisme del bé que s'ha citat a Barcelona durant els 141 dies que han durat el Diàlegs del Fòrum és mereix dues crítiques. D'una banda, ha estat incapaç d'entendre i acceptar la complexitat del present. D'altra banda, ha estat incapaç d'assumir la pluralitat ideològica realment existent a la nostra societat. El que vull dir –primera crítica– és que la reflexió del Fòrum ha santificat la sostenibilitat, la diversitat i la pau sense tenir en compte els seus inconvenients i els seus efectes perversos. S'ha parlat molt de sostenibilitat –de no esgotar els recursos naturals per tal que les generacions futures puguin satisfer les seves necessitats–, però ningú no s'ha molestat a pensar quina és la realitat de l'estat actual de les reserves del planeta, quines poden ser les necessitats de les generacions futures, per quantes generacions ens hem de sacrificar, i fins a quin punt és o no lícit que ens sacrifiquem per una generacions que no sabem com pensaran ni què voldran. S'ha parlat molt de la diversitat –per entendre'ns, dels drets de les minories–, però ha faltat coratge i han sobrat complexos a l'hora d'exigir deures a les minories i criticar el relativisme cultural avui dominant a Occident. S'ha parlat molt de la pau i la resolució pacífica dels conflictes, però ningú no s'ha atrevit a dir que la pau no és un valor absolut, que la llibertat i la vida digna no es poden subordinar a la pau. I aquests «peròs» a la sostenibilitat, la diversitat i la pau, em condueixen a la segona crítica: el Fòrum ha estat incapaç d'assumir la pluralitat ideològica realment existent a la nostra societat. La prova del nou: el pensament dissident no ha estat convidat al Fòrum. I la dissidència –externa, sense possibilitat d'expressar-se en un Fòrum que, paradoxalment, predicava el diàleg– ha estat desqualificada o, simplement, ignorada. En aquest sentit, els Diàlegs del Fòrum s'han reduït a una reunió d'amics en què tots pensaven el mateix i estaven d'allò més satisfets per haver apostat pel bé en un món on predomina el mal.

Estirant del fil, convé de demanar-se per què l'imperialisme del bé –el *bonisme*– s'ha instal·lat precisament a Barcelona. Aquesta és la meua hipòtesi: això passa, perquè el progressisme barceloní i l'esquerra barcelonina –un progressisme i una esquerra, d'altra banda, perfecta-

ment instal·lats i integrats en el que anomenen Sistema; així, amb lletres majúscules– ha elevat l'estereotip a categoria de pensament. I ja se sap que l'estereotip, com deia Roland Barthes, fascina. En concret, fascina la infal·libilitat d'allò comunament acceptat per una determinada societat o per un determinat grup o classe de ciutadans. ¿On rau el secret de la fascinació? L'estereotip no pregunta ni respon, sols es limita a persuadir. En aquest sentit, el Fòrum –ecologisme, diversitat, pau– persuadeix, perquè té la virtut d'instal·lar el ciutadà en l'autosatisfacció, un ciutadà content de saber-se part de les forces del bé. Però, el cas és que el Fòrum ha persuadit poca gent. No ha persuadit, per exemple, a una ciutadania que no ha participat com s'esperava en el Diàlegs. Ciutadania que, quan ha entrat al recinte, ho ha fet com aquell que va a un parc d'atraccions: volia divertir-se amb els concerts programats i els espectacles representats. I el Fòrum tampoc no ha persuadit el món. La seva repercussió internacional ha estat escassa. ¿Per què creuen vostès que Jacques Delors, Helmut Kohl, Bill Clinton o Kofi Annan van plantar els organitzadors? Això sí, Gorbatxev –l'ex líder soviètic sempre va allà on el reclamen i el paguen– va assistir-hi un parell de vegades. En una d'elles, per cert, va esbrincar l'alcalde Joan Clos per negar-se a contestar una pregunta del públic. El detall, la pregunta se li va formular en el curs d'un Diàleg (?). Si la repercussió internacional ha estat escassa –la nacional, també– els resultats dels Diàlegs han estat un *déjà vu*. Res de nou sota el Sol del Fòrum. Ideològicament parlant –la qüestió de les idees, si es vol–, el Fòrum ha estat un fracàs. El món, sí, té problemes; però, no compta amb Barcelona per intentar de resoldre'ls. I d'altra banda, el Fòrum no ha suposat cap plus –cosa que sí va succeir amb les Olimpíades de 1992– en la promoció de la ciutat.

Del balanç ideològic a l'urbanístic. Aquí és on el Fòrum –amb tots els matisos que es vulgui– ha assolit l'èxit. Anotin: s'ha recuperat una part important de la façana marítima; s'ha fet arribar la Diagonal i el tramvia al mar; s'ha construït un centre de convencions multiusos d'una certa envergadura; s'han edificat nous hotels que eren necessaris –a pesar de que l'intervencionisme del tripartit que governa el municipi vulgui ara limitar la construcció de nous hotels: ideixin que sigui la iniciativa privada la que digui si sobren o falten hotels!–; s'ha dignificat el Poble Nou, s'ha regenerat fins a cert punt un barri tan problemàtic i conflictiu com és La Mina; s'ha amagat la planta depu-

radora d'aigües residuals sota la plaça del Fòrum; i s'han convertit els marges del riu Besòs en un autèntic parc públic. I tot això –que ningú no faci demagògia progressista– s'ha fet en un espai que majoritàriament continua sent públic. El que vull dir és que l'Ajuntament s'ha limitat a especular el que era necessari per tal de finançar una part del que ha estat construït. Per cert, parlant d'especulació no pot passar desapercebut un fet: els veïns del Poble Nou han vist com el seu habitatge –gràcies a l'especulació– augmentava de preu. En aquest sentit –sisplau, no pensin que es tracta d'una *boutade*– els ciutadans del Poble Nou han pogut gaudir també dels beneficis d'una especulació immobiliària que sempre havia passat de llarg. Però, aquesta operació urbanística que ha estat el Fòrum té el seu revers: l'Ajuntament no ha complert la promesa de construir habitatge públic i un parc aquàtic.

Econòmicament parlant, el balanç del Fòrum és a hores d'ara una autèntica incògnita. Tot són preguntes. ¿Quin és el dèficit real del Fòrum? ¿Trenta milions d'euros? Al dèficit, ¿caldrà sumar les despeses de seguretat i neteja que, segons la oposició municipal, s'han afegit als comptes regulars de l'Ajuntament? ¿Quins ingressos s'obtidran amb la subhasta de material i el lloguer de les exposicions temporals? Els nous impostos anunciats per l'Ajuntament durant el mes d'octubre, ¿són una manera de tapar el forat econòmic deixat pel Fòrum? Insisteixo, tot són incògnites i preguntes. I les incògnites i preguntes planen també a l'hora de fer el balanç polític del Fòrum. El que queda clar és que el fracàs ideològic i el dèficit econòmic del Fòrum han danyat molt seriosament la imatge d'un alcalde socialista –Joan Clos– del qual es critica la política d'aparador que, en última instància, ha estat el Fòrum. I, ¡compte!, la crítica no prové únicament del ciutadà i de l'oposició municipal, sinó del partit del senyor Clos –el Partit dels Socialistes de Catalunya, la teòrica marca del PSOE a Catalunya–, que entén que l'Alcalde ha fet una política i una gestió «poc socials». Sorgeix el dubte: si la popularitat de Joan Clos continua baixant, ¿qui serà el candidat socialista a les properes eleccions municipals? De moment, el partit dóna el seu suport a Joan Clos. ¿El Fòrum i Pasqual Maragall? El President de la Generalitat –al cap i a la fi ell és el pare de la cosa– està sortint indemne d'un fiasco que, hàbilment, ha carregat sobre les espatlles del seu successor en l'alcaldia, Joan Clos.

A l'hora de fer balanç del Fòrum, formulo la següent hipòtesi de caràcter general: l'esdeveniment ha suposat el retorn de l'anomenat

l'intel·lectual crític estil anys 60. Aquell intel·lectual llauna que, com Jeremies, només sap lamentar-se i maleir; aquella desgraciada figura de la consciència que té la pretensió de parlar en nom de la raó universal, d'interpretar l'esperit dels temps, i de saber què és el que convé als ciutadans. En el cas del Fòrum, aquest intel·lectual crític ha retornat amb dos trets distintius: el caràcter institucional i la dimensió col·lectiva. Contràriament al que va succeir durant els anys 60 del segle passat, l'intel·lectual crític model Fòrum –així com el seu discurs– ha estat impulsat/construït des del poder amb la intenció d'aconseguir que la ciutadania esdevingués també crítica amb el Sistema. No deixa de ser una paradoxa que el Sistema –l'Ajuntament de Barcelona que organitza el Fòrum forma part del Sistema– impulsi la seva crítica. Però, en el cas del Fòrum, la paradoxa es desactiva ràpidament quan l'Alcalde –en l'episodi citat més amunt– es nega a contestar una crítica. I quan els organitzadors sols conviden a la correcció ecològica, multiculturalista i pacifista.

L'intel·lectual model Fòrum, com a reencarnació que és de l'intel·lectual model anys 60, ha engendrat un discurs que es mou entre el pol de la revelació i el de la redempció. La revelació prové d'unes divinitats laiques –ecologia, diversitat, pau– que assenyalen els perills que ens aguaiten: la degradació del medi ambient, el rebuig de l'altre, la guerra. En definitiva, la destrucció. El següent pas és la promesa de redempció, és a dir, el recte camí a seguir per protegir-nos del mal i evitar la destrucció. ¿Quin camí? Alguns exemples: l'oposició –per definició– a l'energia nuclear, a les quotes migratòries, o a l'ús de la força. I aquell que gosi de criticar aquest discurs i aquestes propostes és titllat de biocida, genocida o feixista. Allò que més molesta d'aquest intel·lectual anomenat crític, és la seva prepotència i displicència envers qui no combrega amb les seves creences. Aquest intel·lectual model Fòrum, en efecte, és creu en possessió de l'alternativa, considera que és l'expressió de la nostra consciència crítica, i es presenta com a model de conducta ètica i faedor dels gustos estètics del ciutadà consumidor de cultura. En aquest sentit –l'estètic– resulta certament curiosa la indiferència o el desdeny amb què van ser rebudes les crítiques al mal gust d'algun edifici del recinte del Fòrum. I el que també resulta curiós és que l'intel·lectual crític, malalt com està de principis i veritats inqüestionables, mai no s'està, en el seu afany de dur-nos al millor dels móns, de vigilar la ciutat i de renyar, avergonyir

o excomunicar a aquells ciutadans que o bé pensen d'una manera diferent o bé intenten d'instal·lar-se el més còmodament possible en la realitat que els ha tocat de viure. El més pintoresc de tot plegat és que el discurs del bé destil·lat pel Fòrum, en estat de promesa permanent i irrefutable per definició –el discurs s'autoverifica i autolegitima: dins d'ell, tot val; fora d'ell, res no val–, no ofereix altra cosa que una utopia negativa, un discurs del «no» que està farcit de propostes que es conjuguen amb el verb prohibir.

Ben mirat, el *bonisme* que durant cinc mesos es va instal·lar al Fòrum no ha estat altra cosa que una ideologia substitutòria que volia ocupar el buit deixat per les velles concepcions totalitàries del món que volien redimir (i) el ser humà. El perillós no és el *revival* en si, sinó que es pretengués inculcar a la ciutadania uns valors i actituds que responien a uns interessos ideològics particulars disfressats de generals. En aquest sentit, l'intel·lectual model Fòrum no és sinó un impostor. Un impostor perillós, perquè la seva pretensió de reduir la complexitat del real a la senzillesa de les seves consignes ideològiques ha estat una de les causes de la per moltes circumstàncies lamentable història del segle XX. Sortosament, el ciutadà prefereix Carlinhos Brown i Loquillo a José Saramago o Noam Chomsky.

REVISTA DE libros

DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID



III edición

Suscríbese a Revista de libros y consiga de regalo
una suscripción para un amigo

Además recibirá gratis el III CD-rom y las tapas para encuadernar la revista

Suscríbese en nuestra página web: www.revistadelibros.com

o en el teléfono 91 319 48 33

Precio de la suscripción (11 números)

España: 30 €

Europa: 45,92 €

Otros países: 58,90 €

Si no conoce Revista de libros, envíenos sus datos (nombre, apellidos, dirección, ciudad, código postal, provincia, teléfono) por correo a Departamento de Promoción. C/ Rafael Calvo, 42
2º esc. izda. 28010 Madrid, o por correo electrónico a: promocion@revistadelibros.com

y le remitiremos un ejemplar de promoción

1934: COMIENZA LA GUERRA CIVIL

En torno al libro de Pío Moa

La reciente politización de los temas relacionados con la Guerra Civil no tiene nada de novedoso. No aporta ningún descubrimiento significativo y se trata más bien de la repetición y exageración de los tópicos establecidos. Un aspecto que llama poderosamente la atención acerca de esta reciente politización es la negativa rotunda a asimilar cualquier dato fruto de la investigación especializada, sobre todo la de mayor impacto: la de Pío Moa.

El interés que ha vuelto a suscitar la Guerra Civil española desde hace unos años sigue de máxima actualidad. De hecho, en ningún momento ha disminuido el interés por este episodio de la historia, que ha permanecido en la memoria de España (y en menor medida en otros países) a lo largo del pasado siglo XX. El creciente interés que ha despertado este tema se debe principalmente a varios factores. Uno de ellos reside en la importancia intrínseca del tema; otro, en la llegada a la madurez de los «nietos» de la generación de la Guerra Civil, a los que este asunto resulta más distante. Un tercer factor ha sido la politización de la Guerra Civil por parte de los socialistas y de la izquierda en general, que dio comienzo en medio de la desesperada campaña electoral emprendida por Felipe González en 1993 y que se ha intensificado mucho más a lo largo del último año.

Esta reciente politización de los temas relacionados con la Guerra Civil no tiene nada de novedoso. No aporta ningún descubrimiento significativo y se trata más bien de la repetición y exagera-

Stanley G. Payne es Catedrático de Historia Hilldale-Jaume Vicens Vives en la Universidad de Wisconsin-Madison.

ción de los tópicos establecidos. Un aspecto que llama poderosamente la atención acerca de esta reciente politización es, más bien, el contrario –la negativa rotunda a asimilar cualquier dato fruto de la investigación especializada, y la tendencia a exagerar los repetitivos temas propagandísticos. Parece como si el reloj se hubiera detenido en abril de 1939.

Sin lugar a dudas, el fenómeno más espectacular que ha surgido en estos últimos años, marcados por el resurgir de este interés y por la politización, ha sido la obra de Pío Moa. Comenzando por la publicación en 1999 de *Los orígenes de la Guerra Civil española* y siguiendo con una serie de cinco estudios (el último de ellos es el objeto de este artículo), el autor ha presentado una serie de novedosas interpretaciones basadas en las últimas investigaciones y en la cuidadosa lectura de las principales fuentes, que plantan cara a las nociones políticamente correctas y ofrecen un estimulante contraste a las ideas preconcebidas que abundan en los medios de comunicación y en las universidades. El trabajo de Moa goza de una prosa excelente, gráfica, en ocasiones dotada de expresiones elocuentes, y sus conclusiones, que se sostienen por su propio peso, no están libres de polémica. Ha sabido llegar al gran público y su obra *Los mitos de la Guerra Civil* (2003) ha vendido cerca 150.000 ejemplares, una cifra realmente extraordinaria.

La obra se ha convertido en el azote de la izquierda política e historiográfica, que ha tratado por todos los medios de excluir su trabajo de los medios de comunicación, con el fin de evitar cualquier tipo de debate. Por otro lado, Moa ha tenido la oportunidad de recorrer España para dar una serie de conferencias dirigidas al público general; y la respuesta de este público ha sido tan positiva como negativas han sido las reacciones de algunas figuras académicas y mediáticas. Por ejemplo, en Badajoz cerca de 8.000 personas asistieron a una conferencia de Moa, celebrada en octubre de 2004.

A Moa le han llovido infinidad de críticas por parte de la izquierda, que le reprocha lo siguiente: 1) que se limita a retomar los prejuicios del régimen franquista; 2) que sus libros apenas se basan en la investigación en archivos originales; y 3) que su trabajo no merece la pena porque él no es un catedrático de universidad.

La primera imputación no es más que una patraña. La postura del régimen de Franco era que la democracia era tan indeseable como

imposible en España, que la Guerra Civil se debió a una Conspiración Comunista y que la Alemania nazi y la Italia fascista representaban el futuro. Moa no comparte ni una sola de estas posturas. Por el contrario, analiza cuidadosamente las políticas de los distintos movimientos políticos durante la República y en qué medida apoyaron a la democracia, la legalidad o la violencia revolucionaria. Más que rechazar la democracia, Moa ha insistido en repetidas ocasiones que «el problema fue la democracia». La República sólo hubiera podido sobrevivir basándose en el constitucionalismo y en una verdadera democracia; sin embargo, la izquierda despreció esos principios reiteradamente, tal y como el autor demuestra detalladamente en su libro. Pero claro, esto contradice el mito establecido de lo políticamente correcto, y esta es la verdadera razón por la que la izquierda detesta a Moa.

En lo que respecta a sus fuentes, Moa ha utilizado todas las obras de referencia y ha consultado un buen número de archivos importantes. Sin embargo, la importancia de su estudio reside principalmente en su análisis, meticuloso y original, más que en una nueva investigación de los archivos. Este trabajo no debería ser objeto de censura, ya que por todos es conocido que los trabajos que componen la historiografía seria pueden dividirse en dos grupos: por un lado los que recogen una cantidad importante de datos nuevos y por otro los que ofrecen nuevos puntos de vista en cuanto al análisis y la interpretación. Probablemente, las obras históricas más estimulantes se incluyen dentro de esta última categoría.

El tercer reproche –que Moa no es catedrático– es completamente absurdo y refleja con claridad el corporativismo cerril y la endogamia que reinan en la universidad española. Cualquiera que visite una gran librería de Londres o Nueva York podrá comprobar que buena parte de los libros de historia más interesantes publicados en el Reino Unido y Estados Unidos no son obra de profesores universitarios.

El último libro de Moa vuelve a hacer hincapié en la gigantesca polarización izquierda/derecha que se produce en España, que se inició con la insurrección revolucionaria de octubre de 1934 y que en menos de dos años provocó la Guerra Civil. A diferencia de sus primeros trabajos, esta obra se centra principalmente en los acontecimientos acaecidos en 1934. La fecha de su publicación coincidió con el setenta aniversario de la insurrección.

Otra característica que diferencia a este libro de sus anteriores trabajos es que la obra va acompañada de un apéndice documental de 155 páginas, donde se presentan publicaciones y fotocopias de declaraciones socialistas clave fechadas en esos meses, junto con otros datos de interés.

Moa no se jacta de ser el primer historiador que incide en el papel decisivo que jugó esta insurrección en la guerra, ya que tiempo atrás fue cuestionada por diversas figuras de la talla de Gerald Brenan, Salvador de Madariaga, Sir Raymond Carr, Gabriel Jackson y Carlos Seco Serrano. Una de las preguntas cruciales es la siguiente: ¿Qué llevó a los socialistas, que habían desempeñado un papel de liderazgo en las primeras coaliciones del gobierno republicano entre 1931 y 1933, a iniciar una sangrienta insurrección apenas un año después? En *Historia del socialismo español*, publicado por Tuñón de Lara, Santos Juliá sopesó las distintas explicaciones de políticos e historiadores y llegó a la conclusión de que el factor desencadenante fue simplemente, la pérdida de las elecciones en 1933. A esto se suma el hecho de que el partido político católico, la CEDA, se había consolidado como la única fuerza mayoritaria del parlamento. Cuando tres de las figuras más moderadas de este último partido entraron a formar parte –como minoría– del nuevo gobierno de coalición, liderado por el político de centro-liberal Alejandro Lerroux (jefe del Partido Republicano Radical), los socialistas iniciaron la revuelta. La participación socialista en los gobiernos de 1931 a 1933 estaba totalmente asumida, ya que se suponía que la República iba a estar siempre gobernada por una izquierda que conduciría al país de una forma relativamente pacífica hacia el socialismo. En cuanto se interrumpió dicho proceso, las tácticas socialistas dieron un giro radical.

Se elaboró un programa para la insurrección donde se diseñaba la formación de un nuevo gobierno republicano que pretendía nacionalizar la tierra (algo que llegaba más lejos que el programa presentado por Lenin en Rusia en el año 1917), disolver por decreto el ejército, la Guardia Civil y todas las órdenes religiosas.

En un principio, la industria no iba a nacionalizarse. La revuelta fracasó en todos los rincones de España excepto en Asturias, donde una violenta contienda se prolongó durante más de dos semanas, que estuvieron marcadas por las ejecuciones políticas –todo un adelanto de la Guerra Civil.

También es completamente cierto que la CEDA pretendió reformar la República y encauzarla hacia un corporativismo católico, de la misma manera que los socialistas intentaron encauzarla hacia el socialismo. Según Lerroux, uno de los pocos defensores leales de los procedimientos democráticos y del constitucionalismo, no existía el menor riesgo de dictadura, como de hecho reconocieron los propios socialistas. Mucho antes de la revuelta, los grandes líderes socialistas, como Prieto y Largo Caballero, decidieron no asumir responsabilidades personales en relación a dicha insurrección con el fin de evitar un castigo personal en caso de que la revuelta fracasara, un clásico ejemplo de cómo «nadar y guardar la ropa». Ellos mismos reconocieron tácitamente que las libertades civiles no corrían ningún peligro bajo las órdenes del temido gobierno cedorrado.

La revolución de 1934 abrió un abismo de polarización que nunca se llegó a superar y que finalmente desencadenó la Guerra Civil. A ello le siguió una guerra propagandística sobre las atrocidades –atrocidades que llevaron a cabo los revolucionarios y atrocidades provocadas por la represión– que ganaron los revolucionarios y sus aliados republicanos de izquierda, que supieron dar la vuelta a la derrota militar de la insurrección y convertirla en una victoria moral y política. Tanto la derecha como la izquierda hicieron de las elecciones de febrero de 1936 un plebiscito de la revuelta, a cuya legitimidad la izquierda no estaba dispuesta a renunciar.

No obstante, aunque en *El Socialista* con fecha del 29 de noviembre de 1933 se declaró que «la democracia... conduzca hoy al fascismo,» como Hitler después de su fallido «Bierhallputsch», la izquierda tuvo que aceptar que les iba resultar imposible acceder al poder mediante una insurrección violenta y que tendría que volver a las tácticas electorales. De hecho, la coalición electoral del Frente Popular siguió una estrategia bastante más «fascista» que «comunista» para acceder al poder, valiéndose de la legitimidad de unas elecciones y creando instituciones que les permitieran realizar una política revolucionaria. Se revocaron los resultados electorales en un buen número de provincias, y las posteriores elecciones en Cuenca y Granada se realizaron en unas condiciones de coacción extrema. A medida que pasaba el tiempo se ignoraba cada vez más a la Constitución, y en varias provincias los activistas revolucionarios se afiliaron tempo-

ralmente a la policía como *delegados*, en un proceso que guarda importantes similitudes con el nombramiento de los activistas nazis en la *Hilfspolizei*, durante las primeras semanas del régimen de Hitler. Mientras tanto, los socialistas se negaron a volver a la coalición de gobierno, utilizando las tácticas de desgaste pre-revolucionario en la economía y la sociedad.

El nuevo libro de Pío Moa trata por encima los acontecimientos de 1936, pero ofrece un análisis claro y conciso de la revolución de 1934 y su importancia en la historia de España. Esta obra recuerda al lector que, tal y como Ortega y Gasset incluyó en las últimas ediciones de *La rebelión de las masas*, si hay algo que debe comprenderse sobre la Guerra Civil son sus orígenes.

GRITOS TRAS LAS REJAS. AMOR PUNTO FINAL

Selección y nota preliminar de Luis Alberto de Cuenca

La sociedad ha levantado gruesas paredes, altas torres inaccesibles, tristes y oscuras cárceles para encerrar el cuerpo, pero no ha conseguido todavía hacer lo mismo con el espíritu. El Quijote, sin ir más lejos, fue engendrado en prisión, como el propio Cervantes nos recuerda en los preliminares de su novela. En prisión compuso Boecio De consolatione philosophiae. Y es que la historia de la literatura es pródiga en ejemplos de obras maestras escritas en la cárcel. Platón hubiera dicho que toda obra de arte se concibe en cautividad, puesto que el alma vive encarcelada en la prisión del cuerpo desde el momento de nacer, y sólo la muerte rompe las cadenas de semejante encierro. Pero desde Aristóteles no es tan fácil distinguir dónde termina el cuerpo y dónde empieza el espíritu, de modo que los presos sensu stricto son «cuerpos animados» a los que la autoridad establecida ha encerrado en la cárcel por quebrantar alguna norma o, simplemente, por disidir de la común doctrina, creencia o conducta, que eso basta para conocer la prisión.

Por otra parte, la cárcel es una metáfora muy antigua para designar el amor. En nuestra narrativa sentimental de la segunda mitad del siglo XV se da de una forma muy clara esa identificación: desde la Cárcel de amor de Diego de San Pedro al Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón. El amor es, pues, una cárcel, pero también, como quiso André Breton, la posibilidad de olvidarse del cautiverio y mitigar las asperezas de la prisión; en ese sentido hay que entender al autor de Nadja cuando nos habla de los ojos de su amada como agua para beber en la cárcel («tes yeux d'eau pour boire en prison»).

Otras veces, la prisión física y real adquiere un sentido metafísico, como ocurre con las soberbias Carceri del grabador dieciochesco Giovanni

Raúl Rivero es poeta y periodista independiente cubano.

Battista Piranesi. Metafísico es también el enigmático poema de Garcí Sánchez de Badajoz sobre las dos prisiones que atenazan su espíritu, aquel que termina: «Ya no espero, triste, no, / verme libre cual nací, / que aunque me suelten a mí / no puedo soltarme yo». Pues de la cárcel interior, de la que cada hombre se fabrica con su cadena predilecta, no es posible salir. Pero eso es otra historia.

El artista –el poeta– es libre por naturaleza. Y lo es, también, su canto, pese a la cárcel que lo circunda. De alguna forma el mundo es una cárcel. Y el escritor tiene la llave que abre la puerta de la celda: la llave del arte, la llave de la libertad del espíritu.

A continuación ofrezco algunas muestras de esa libertad, compuestas en la cárcel por Raúl Rivero, uno de los mejores poetas cubanos actuales. Rivero hizo llegar a través de su esposa una colección de veinticinco poemas a José María Aznar. Los poemas habían sido compuestos entre el verano de 2003 y la primavera de 2004, como el propio Raúl anota al pie de cada pieza (por más que dos de ellas no aparezcan fechadas). He elegido, siguiendo el único criterio del gusto personal, doce poemas de esos veinticinco, cerrando mi antología con una de las piezas sin referencia temporal, cuyo verso final resulta muy ilustrativo de los padecimientos de Rivero.

LUIS ALBERTO DE CUENCA

REMEDIO

La noche es una mancha casi eterna.

Yo distribuyo toda
la soledad del mundo.

Me salvo
porque hago un cisne de sombra en la pared
y le cuento la vida de Rubén Darío.
En seguida el poeta nos regala
un alba de oro.

Verano 2003

PAÑUELO PARA NADIE

Llora tú, que aprendiste a tocar el clavicordio
y descubriste el mal del que voy a vivir.
Sufre esta otra grávida soledad:
quedarte sin el único hombre
que pensaba en ti todos los días.

Llora, llora hoy esa viudez de hielo,
porque ya no volverás
joven, con olor a colonia,
a vivir en la provincia que fundé
para administrar tu recuerdo.

Llora en privado,
como si no supieras por qué lloras
hasta que recibas
este pañuelo blanco.

Verano 2003

¿NADA?

Donde moraba yo,
otoñal y en harapos,
y digo que moraba
porque sentí que vivía
como nunca allá adentro.

Donde yo residía,
tembloroso y sutil,
y era reconocido
por las articulaciones
y las venas,
y por el aire
que viajaba de ida y vuelta
a tus pulmones.

Allí, en tu circulación,
y allá, en tus pensamientos
que ahora alojan
otro huésped,
¿no queda ni un dolor
ni unas cenizas?

Verano 2003

AUTÓGRAFO PARA BLANQUI

Cuando sueñes con él,
no me lo cuentes.
Déjame en la inocencia
de creerme el niño
que recibía tus cartas.

Abandóname en la música
y en el tintero
de la boda municipal
que cambió tu fragancia
y me hizo un forastero
para la fantasía
y el cáliz
y los escorpiones.

Cuando alguien aparezca
en tus sueños como un príncipe,
ponle mi cara.
¡Niégalo!
Favoréceme con la historia
como si fuera mía.

El amor no dirige los sueños
—ellos son nuestra locura diaria—,
pero necesita restauraciones,
teatralidad, renunciadas,
para que la vigilia no pierda
el sacramento de la neblina.

Verano 2003

MEMORIAS DE MI ESTATUA

Nereyda Santos no me conoce.
En la misma avenida
donde juró hace años
que ella era mi amor deliberado,
me deja con la mano en el aire,
revisa el botín de su cartera,
se pone lentes negros
y pasa junto al hombre invisible,
roza la estatua mía
de arena y desconcierto
y sigue su camino.

Nery no me conoce,
no se da cuenta
de que soy yo quien le tiende la mano,
y siento su airecillo perfumado,
y miro el pequeño bosque claro
de su pelo.
No me identifica,
no se acuerda del que lloró con ella
cuatro muertes y cuarenta y dos reconciliaciones.

No me asocia
con el sonámbulo
que le llevaba sus pastillas a la almohada
y le mostraba las semillas de la sed.

No se acuerda de mí,
que organicé tres viajes secretos
para que ella pagara sus promesas
a la Virgen del Cobre.
A mí, fotógrafo exclusivo
de la Nery Corporation Flash,
autor de su famosa foto
dormida en el fogón de una herrería.

Cómo he cambiado,
qué marcas me ha dejado la vida,
o qué amnesia la de Nery Santos,
que le hace dejar
hecho una estatua
(la mano extendida hacia la nada)
a alguien que la quiso tanto
no hace mucho,
alguna vez.

Septiembre 2003

AMOR PUNTO FINAL

Para este poema no había lápices,
ritmos ni hojas blancas.

Es una especie rara que ya nadie esperaba.

Éstos son peligrosos,
porque bajo la mansedumbre
que los levanta
trabajan los presagios,
se esconde la sabiduría
que tiene un sitio para las joyas
y una liturgia para los escorpiones.

¡Ah, poema con minas
en todos tus acentos!

Versos que yo no esperaba,
pero estaban ahí,
a la espera de las fragilidades
y el laberinto de la línea recta.

El nevado poema castellano
que pudo ser un madrigal
y se abre como una madriguera
donde vengo a enterrar el amor.

10 Noviembre 2003

CARTA NÚMERO TRES

Recíbeme tú,
que nada quieres y nada necesitas,
tú, el extraviado
polvo de amor
sin aposento.

Recíbeme tú,
ignorado y sin flores,
sombra que no tiene
una plegaria que justifique su inocencia.

Tú, recíbeme tú, Padre mío
que estás en mi alma.

23 Noviembre 2003

VIDA DE PERRO

Yo fui un perro feliz
que amaba como un perro
a una adivina.

Le fui fiel, le llevaba
las cartas a la mesa
y le escondía la lámpara
donde veía el futuro.

Me echaba a dormir
sobre sus pies,
lamía sus manos blancas,
que tenían
sabor a santidad
y a magia negra.

Le regalé una casa
pequeña, pero propia;
le curé las heridas
que le hizo un borracho
cuando ella le predijo
el porvenir.

Le compré blusas,
sedas, redecillas,
un turbante violeta
hecho por un hermafrodita
de Bombay.

Le cedí mi cama finlandesa,
y yo dormía en un saco
de harina nacional.

Así es, yo la quería,
aullaba de amor
y no ladraba.

Ella debió ver algo
terrible en mi futuro,
porque en noviembre
me quitó el collar
donde colgaba
(junto a la foto de ella)
la llave de la casa,
y me espantó.

Desde ese día
soy este vagabundo
sucio, desamparado,
que gruñe cuando pasa
una mujer.

Aunque de noche duerma
en una alcantarilla,
soñando que dormito
silencioso a sus pies.

Febrero 2004

CARTA (A) BLANCA

Quiero saber si la distancia puede
empañar el relieve cristalino
de esta labrada sustancia del amor
que yo siento por todas las que has sido.

No es el vidrio lo que le da altura,
ni la cumbre siquiera: es el tumulto
de sombras y de vidas, huracanes
que, desde un limbo, descubrimos juntos.

Quiero saber si, cuando dudo, muere
o si se eclipsan sus incandescencias.
Saber si se nos quiebra o se mutila,
si con el paso de este tiempo tiembla.

¿Que es mortal? Está bien, ya lo sabía:
lo ha fundado un mortal. Sólo hace falta
que permanezca dúctil, invencible,
mientras que uno de nosotros viva.

*Prisión de Canaleta
Febrero 2004*

MALA MENTE

Amé a mujeres buenas, cariñosas,
mujeres esenciales y accesibles,
espíritus y almas transparentes,
manos y vidas limpias, sin abismos.

Bellas señoras graves que pasaron,
y yo pasé por ellas, como un río.

Pero a ti te amé más porque eres mala,
y la maldad produce emoción pura
que permanece, canta, duele y quema.

Marzo-Abril 2004

POEMA PARA LOCALIZARME

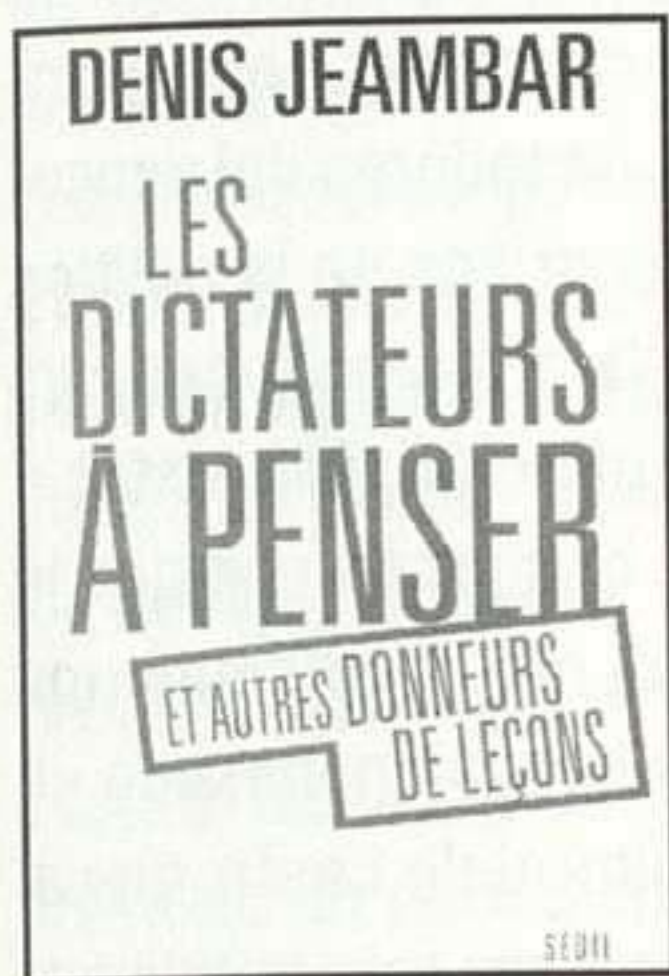
Escríbeme una nota que me hable
del azar, de tu cara, y de las venas,
una nota de duelo, de regreso
desde las catedrales de las penas.

Que diga confusión y firmamento,
indemne, encadenada y presunción.

Un manuscrito que he esperado siempre,
una escaleta de arrepentimiento,
un dolor que me toque y que me asalte.
Un llanto relativo que me empañe
los ojos tristes y los espejuelos.

Una reseña del amor perdido,
la crónica letal de esos que fuimos,
las palabras finales con el mapa
(la cruz de tinta que señala el sitio)
donde abriste la tumba en la que vivo.

Los dictadores del pensamiento



DENIS JEAMBAR
Les dictateurs à penser
Éditions du Seuil, París, 2004.

«Esto no le va a gustar a todo el mundo». Así reza la frase que llama inmediatamente la atención del lector desde la contraportada del libro. Y, cuando uno comienza la lectura y ve que la frase no exageraba, se alegra. El lector se alegra porque ya estaba aburrido de leer siempre banalidades políticamente correctas, ocurrencias vacuas y comentarios de clase de párvulos. El lector de verdad está harto de oír siempre la misma cantilena, diseñada para adormecer las conciencias bajo diversos disfraces. Por eso es una alegría tener entre las manos un libro como éste. Un libro provocador en el mejor sentido de la palabra. Un libro que nos hace replantearnos las aparentes evidencias del mundo actual. Un libro que hace pensar.

Denis Jeambar nos abre una nueva ruta, apartada del marasmo propagandístico que nos rodea, y nos muestra el verdadero rostro de la situación política actual. Y lo hace amparándose en dos pilares fundamentales: la lucidez y la

sinceridad. Lucidez para no dejarse llevar por las opiniones generalizadas, que toman su fuerza de la repetición irreflexiva, y para poder analizar serenamente la realidad. Sinceridad para huir del chauvinismo y afrontar unos hechos que llevan a una autocrítica tan dolorosa como necesaria para que Francia pueda salir del atolladero en que se encuentra.

Desde su propio título, *Les dictateurs à penser* critica las enfermedades de la política francesa actual. Entre ellas destaca el hecho de que la clase política —ya muy profesionalizada, y sólo preocupada por mantener su posición— ha dejado las riendas de su actuación en manos de los falsos expertos, los politólogos a la violeta y los comunicadores endiosados. Así, se ha llegado a una democracia de la emoción, en la que no cuenta la verdad sino la apariencia. La estadística prevalece sobre la razón, el gregarismo sobre las ideas, y el impacto mediático sobre la valoración

real de los hechos. Las grandes palabras esconden mezquinos intereses particulares, y los votantes se dejan embaucar por charlatanes que adulan su oído. Todos –políticos, intelectuales, periodistas– se entregan a un juego vacío, a un carrusel sin sentido en el que sólo importa el movimiento constante: un movimiento que sólo lleva al inmovilismo más acentuado y a que cada uno de los actores conserve sus prebendas y su parcela de poder.

Frente a este tiovivo asentado en la demagogia más absoluta, Denis Jeambar opone su memoria y su sentido común. Una memoria que le permite recordar situaciones previas y denunciar las incoherencias de los nuevos gurús del pensamiento. Un sentido común que no se deja arrastrar por las falacias del verdadero «pensamiento único» que recorre Europa: el de un progresismo trasnochado e incongruente, un pseudoprogresismo endogámico que sólo engendra hijos autistas.

¿Cómo no va a levantar ampollas este libro dentro de la autosuficiente Francia, si ataca a todos los mandarines del poder y de la información, si tira una piedra que agita las plácidas aguas de la demagogia? Denis Jeambar se granjeará muchos enemigos con esta obra. Pero es un precio pequeño si consigue que la gente reaccione y haga algo por salir del punto muerto en que se encuentra la Francia del siglo XXI. Una Francia anclada aún en la *grandeur* previa a la descolonización y la Segunda Guerra Mundial, y que se sigue contemplando, como la madrastra de Blancanieves, en su complaciente espejo de

guardiana universal de la Cultura, la Ilustración y los Derechos Humanos. Jeambar hace un profundo y sutil repaso a los problemas y las carencias que se esconden en Francia detrás de la grandilocuencia de los dictadores del pensamiento, de los maestrillos de la política que engatusan a la audiencia con sus trucos de prestidigitación. Así, vistos a la luz de la razón, comprobamos que la excepción cultural no es más que una búsqueda de la subvención, basada en un inmovilismo cultural de casta; que el *affaire Battisti* es un resabio antidemocrático de la izquierda para la cual el fin justifica los medios; que el antiamericanismo francés en la Guerra de Irak es parte del doble juego de una potencia venida a menos que intenta por todos los medios recuperar su antiguo estatus internacional; que el linchamiento de Aznar proviene del odio y la envidia ante un político que ha sabido hacer bien las cosas por su país mientras la casta política francesa lleva a Francia a la deriva hace treinta años. Y vemos, también, que no habrá arreglo en Francia mientras la situación siga en manos del círculo vicioso formado por politólogos, comunicadores y realizadores de sondeos.

¿Y sólo en Francia ocurre esto? Jeambar habla de lo que conoce, de su propio país. Pero su lúcido análisis se puede extender fácilmente a nuestra realidad española. Los males que él señala en Francia –demagogia, manipulación de los medios, apatía y mollicie generales, democracia de la emoción basada en la dictadura de lo efímero...– también se encuentran en España. Cada día vemos más señales de que aquí, como en el

país vecino, los políticos se preocupan sólo de mantener su puesto. El esfuerzo se centra en conseguir el voto *ahora*, y no se piensa en el legado que se va a dejar a las generaciones futuras.

Les dictateurs à penser es un revulsivo frente al pensamiento único de la seudoprogresía, y frente a la inanidad de la corrección política que acapara los debates actuales. Todo un reconstituyente para el pensamiento libre, escrito, además, con la clara y amena prosa de un periodista avezado —Denis Jeambar es jefe de redacción de *L'Express*—, que también tiene en su haber varias novelas. Un libro valiente, que se atreve a ir más allá de la superficie y nos da las claves del juego político actual. Un libro que no hay que perderse.

DIEGO VALVERDE VILLENA

La lección de un inglés

VALENTÍ PUIG

Por un futuro imperfecto. Los retos políticos en el umbral del siglo XXI.

Ed. Destino. Colección Imago Mundi.

No es habitual que un autor confiese haberse quedado a medias en un trabajo, o admita compartir con los demás un conocimiento parcial del mundo. Y menos aún si este autor se ha caracterizado siempre por predicar la excelencia, por situar el esfuerzo y el rigor en

el epicentro de cualquier actividad humana, ya sea manual, ya intelectual. A no ser que lo haga por falsa modestia y cuente, en definitiva, con que el lector sabrá dar la vuelta a sus palabras y entender justo lo contrario de lo que expresan. No es este el caso de Valentí Puig. Cuando en el prólogo a *Por un futuro imperfecto* Puig define su propia obra como «un repaso incompleto de lo que sabemos fragmentariamente sobre el paso del siglo XX al XXI», a nadie engaña. Y no sólo porque en esto consiste, precisamente, el ensayo que Ediciones Destino acaba de publicar, sino, sobre todo, porque no existe en esta materia otra actitud razonable desde un punto de vista epistemológico. La asunción de la imperfección, de la no completación, de la fragmentariedad, se convierte —de forma paradójica, por cuanto se opone a los principios mismos del conocimiento científico— en el único medio de abrirse camino hacia la verdad. Seguramente porque sólo cuando uno tiene asumido que la razón —el rasgo distintivo, al fin y a la postre, de la humanidad— es un territorio limitado, se halla en condiciones de sacar el máximo partido a lo que estos límites encierran.



Toda la obra ensayística de Puig, desde su primer dietario, *Bosc endins* —recuperado hace un par de años, junto a *Matèria obscura*, en *Porta incògnita*—, hasta *L'os de Couvier*, su disección reciente de una cultura catalana huérfana de magisterios y profundamente desnortada, constituye una vasta reflexión sobre la condición humana, una reflexión sujeta en todo momento a una misma divisa: la de no engañarse, ni sobre el mundo en que uno vive ni sobre la presencia de uno en este mundo. Lo que equivale, de paso —y no es poco—, a no engañar al lector. Pero, de este *continuum*, tal vez sea *El hombre del abrigo* la pieza más significativa, porque es allí, a mi juicio, donde mejor se acuerdan la divisa y el punto de mira escogido —el pensamiento de Josep Pla, en este caso—. Para Puig, siguiendo a Pla, este siglo que Zbigniew Brzezinski ha calificado de «siglo de la megamuerte» y cuyo telón cayó con el Muro de Berlín, ha sido sin duda alguna el peor de todos. Basta ver el balance: 175 millones de muertos por razones ideológicas. Estas razones, obviamente, eran en gran parte las utopías que la humanidad había ido alimentando desde los tiempos de la Ilustración y el Romanticismo, y que este siglo maldito, sirviéndose de los avances obtenidos por la ciencia y la técnica en la centuria anterior, había pretendido convertir a sangre y fuego en realidad. De ahí —señalaba Puig en su ensayo— que aquel hombre del abrigo, en las cerca de treinta mil páginas de su obra completa, advirtiera repetidamente a sus lectores de que no hay grandes soluciones a los grandes problemas, de

que el bien y el mal son consustanciales a la especie y a su propia evolución. Y de ahí también que no abrigara otra esperanza con respecto a esta especie que la de su estricta supervivencia. En el mejor de los casos, se entiende.

Este es, pues, el precedente más nítido de *Por un futuro imperfecto*. Con la diferencia de que el propósito de Puig, en este ensayo, ya no es la interpretación del pasado a partir del pensamiento de uno de sus autores de cabecera, sino el análisis del presente y su posible proyección hacia el futuro. Dos hechos marcan este presente: por un lado, la caída del Muro y la liquidación definitiva del espejismo socialista; por otro, el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y la aparición de una nueva modalidad de terrorismo. Entre una y otra fecha median doce años. Un largo tránsito entre siglos, una tierra de nadie durante la cual el mundo se ha ido adaptando a una nueva realidad, caracterizada por la ausencia de bloques y por la libre circulación, a escala global, de bienes y personas. Y, en especial, por el triunfo de lo que el autor denomina, con gran acierto, «la conexión intrínseca entre propiedad y libertad». Ahora, cuando han transcurrido casi tres años desde la segunda de aquellas fechas —Puig da por concluido su ensayo a inicios de junio de 2004—, las principales consecuencias de este tránsito son ya visibles y difícilmente eludibles de cara al futuro.

La obra no establece prelación ninguna entre los factores que van a concurrir en la formación de este futuro. Una vez sentado que no hay otra brújula para

navegar que la asunción de la imperfección como algo consustancial a la especie, el resto de los factores se van entrelazando en la exposición, hasta llegar al último de los capítulos, en que, mediante cien apotegmas, el autor compendia todo su pensamiento. A grandes rasgos, estos son los principales desafíos a los que habrá, según él, que hacer frente. En primer lugar, el reconocimiento de la victoria de Occidente, es decir, de los valores acuñados durante siglos en la vieja Europa y llevados a su máxima expresión por Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso resulta en todo punto necesario reforzar los lazos atlánticos, encarnados por la OTAN –a la que Václav Havel ha definido como una alianza «moral» por lo que supone de defensa de las libertades y preservación de una cultura común–, y luchar contra el tumor del antiamericanismo, muy extendido entre los intelectuales de los países del sur de Europa –España, Francia, Italia–, donde el comunismo tuvo cierta implantación cuando la guerra fría. Por eso, y porque no tiene ningún sentido perder el tiempo inútilmente. Como sostiene Puig, si los factores que permiten calificar a una potencia como global son cuatro –el militar, el económico, el tecnológico y el cultural–, no hay duda de que «Estados Unidos es hoy imbatible». Para bien y para mal. Pero Europa no sólo aparece como sujeto de reflexión en tanto que estadio previo de lo que es hoy Norteamérica. También figura en el libro por sus propios méritos, como una suerte de alma en pena, en busca de identidad. O como

work-in-progress. En este punto el autor es terminante: Europa sólo podrá construirse por sedimentación, como los arrecifes de coral, en la medida en que los pueblos que la forman vayan sintiendo –como ya han empezado a sentir– la necesidad de acercarse unos a otros. Pretender una lenta disolución de las 25 naciones constituyentes en una gran nación –a semejanza de unos Estados Unidos de Europa–, simplemente porque han suscrito una misma Constitución, no deja de ser una quimera. No en vano la cosa comenzó con una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es decir, sobre «bases reales». Y así debería seguir.

Con todo, el factor determinante de este principio de milenio, y cuya concepción y primer desarrollo corresponden precisamente a los doce años de transición entre siglo y siglo, es la revolución tecnológica, lo que muchos han convenido ya en llamar la era digital. Hace más de ochenta años, el periodista Agustí Calvet, *Gaziel*, escuchaba maravillado en un piso del Ensanche barcelonés la transmisión en directo de un concierto que se estaba desarrollando en aquellos mismos momentos en un auditorio de París. Eran los primeros vagidos de la telefonía sin hilos, de lo que luego sería conocido como la radio. Pero aquel asombro inicial del periodista había dado pie en seguida a una honda preocupación. No por la radio en sí; por la ciencia y sus inventos. Porque *Gaziel*, que acababa de vivir a pie de obra la Primera Guerra Mundial, sabía que los avances de la ciencia tanto podían reportar grandes beneficios a la humanidad como

daños irreparables. Y los tiempos no invitaban precisamente al optimismo.

Pues bien, algo parecido podría decirse de los avances científicos actuales tras el atentado de Manhattan. Y, aun así, señala Puig en su ensayo, la revolución tecnológica no sólo es imparable, sino que debe ser bienvenida, por cuanto va a permitir «universalizar la comunicación humana, de forma instantánea, ilimitada y libre», y profundizar hasta cierto punto en la democracia, volviéndola más participativa, en la medida en que «la política del siglo XXI (...) irá desplazándose de la jerarquía a la red, a las redes, a las tecnologías en red». Por supuesto que no todos los efectos —a los que habría que añadir, entre otros, la ampliación de los mercados— son de la misma naturaleza. No todo es positivo, en una palabra: la red también favorece, por ejemplo, la proliferación del terrorismo, su invisibilidad, la opacidad de sus transacciones, la rapidez de sus movimientos, la dificultad de su localización. La globalidad, en suma, tiene siempre dos caras: una buena y una mala. Como la vida. Por lo que no conviene, ciertamente, hacerse demasiadas ilusiones. Pero tampoco tirar la toalla.

Por un futuro imperfecto no sólo es esto, claro. También es el porvenir de la socialdemocracia, el encaje de la inmigración en una Europa envejecida, el descrédito de los intelectuales, las oportunidades del individuo frente al Estado, las añagazas del multiculturalismo. Y son también las enseñanzas de Tocqueville, Orwell, Steiner, Berlin u Ortega; o las de Niebuhr, Michnik, Kaplan o Huntington. Y, aún, como sostén a lo anterior, una multitud

de hechos, de datos, de elementos probatorios. Pero *Por un futuro imperfecto* es sobre todo una lección, una gran lección. Una gran lección de pragmatismo impartida por un liberal que lleva muchos años navegando a contracorriente, es decir, no engañándose ni engañando a los demás. O lo que es lo mismo: pensando como un inglés en un país donde la mayoría de los pensadores ha preferido siempre el bálsamo de la utopía al rigor de la realidad.

XAVIER PERICAY

¿Derecho de autodeterminación?

SANTIAGO ABASCAL CONDE
**¿Derecho de autodeterminación?
Sobre el pretendido derecho de
secesión del Pueblo Vasco.**

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2004.

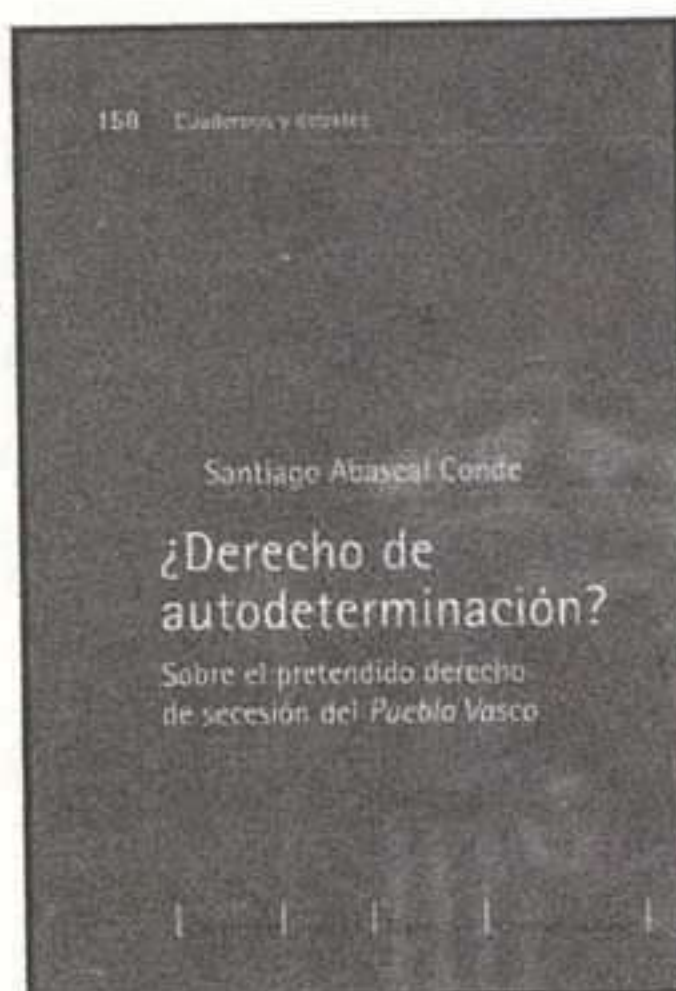
El derecho de autodeterminación es uno de los temas recurrentes en la vida política española desde que a finales del siglo XIX surgieron, como reacción al desastre del 98, los fenómenos separatistas en Cataluña y el País Vasco.

Actualmente asistimos a una revitalización de la polémica por las prisas que mueven a diversos partidos nacionalistas a aprovechar una coyuntura parlamentaria que, en principio, tan favorable

les resulta a causa de la debilidad de un Gobierno socialista en minoría y condicionado por su alianza gubernamental en Cataluña con Esquerra Republicana. En este contexto ha aparecido muy a tiempo este notable estudio del parlamentario vasco Santiago Abascal Conde, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y cuya primera edición está prácticamente agotada.

La lógica perspectiva jurídica adoptada por el autor para afrontar tan actual tema no debe llevar a la sospecha de que nos encontramos ante un árido análisis jurídico sin interés para el lector medio interesado en las grandes cuestiones políticas de la España de nuestros días. Lejos de ello, el presente trabajo comienza con una oportuna introducción histórica que encuadra el problema en el tiempo y en el espacio, dado que el derecho de autodeterminación no surge de la nada sino que se trata del resultado de una evolución histórica muy precisa que pocas veces se explica. Los procesos de unificación decimonónicos, la enunciación del principio de las nacionalidades en la Italia garibaldina, la influencia del pensamiento marxista-leninista, la proclamación de Wilson y la descolonización afroasiática tras la Segunda Guerra Mundial, son pasos históricos que Abascal recorre y explica para ubicar la formulación actual de dicha figura jurídica en su debida perspectiva histórica.

El autor hace igualmente un repaso por los orígenes y los fundamentos ideológicos de los tres nacionalismos más representativos, el catalán, el vasco y el gallego, haciendo hincapié en el actual discurso autodeterminista de sus respec-



tivos programas. Tras ello dedica unas reveladoras páginas a repasar el tratamiento que el derecho de autodeterminación recibió en los debates constituyentes de 1978 y, en general, en los años de la Transición, época en la que la izquierda española en su conjunto, desde el PSOE hasta el PCE, tardó en sacudirse el dogma autodeterminista que había recibido por contagio de los nacionalismos vasco y catalán durante los largos años de exilio.

Entrando ya de lleno en el análisis del derecho de autodeterminación, Abascal señala que los nacionalismos que continúan apelando a tan problemático derecho y lo utilizan como argumento electoral en la España de nuestros días, ocultan sistemáticamente a sus votantes la inaplicabilidad de dicha figura a una realidad como la española, por completo ajena a las situaciones coloniales o discriminatorias de una parte de su población por motivos raciales o religiosos para las que fue pensada. La normativa y la jurisprudencia internacionales así lo han venido reiterando desde el nacimiento de la ONU, dejando clara la imposibilidad de aceptar la secesión de territorios incluidos en Estados constituidos.

El principio de autodeterminación aparece recogido por primera vez en la Carta Fundacional de la ONU (art. 1, párr. 2). Ya en esta fundacional ocasión se aclaró que «*Los pueblos tienen el derecho de administrarse a sí mismos, pero no el derecho de secesión*».

Desde entonces, tanto los textos legales como la práctica de la ONU han confirmado reiteradamente que el derecho de autodeterminación se considera de plena aplicabilidad en los casos de descolonización, y se rechaza, por considerarlo «*incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas*», en los casos que supongan la secesión de un territorio que forme parte de un Estado miembro.

En su contundente contestación a los planteamientos nacionalistas, Abascal toma a menudo como hilo conductor el trabajo del autor nacionalista José A. Obieta Chalbaud, *El derecho humano a la autodeterminación de los pueblos* (Tecnos, 1993), texto utilizado por el departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto y cuyos planteamientos son empleados diariamente por los representantes de los diversos partidos nacionalistas. Junto al habitual concepto nacionalista de *pueblo* —esa entidad tan difícil de definir— como sujeto de derechos, las tesis del mencionado autor sobre quién puede pertenecer al pueblo y ejercer, por lo tanto, el derecho de sufragio, conducen a la aberrante discriminación en la atribución de la ciudadanía dependiendo del grado de identificación de cada ciudadano con los objetivos nacionalistas. De este modo, a los vascos definibles objetivamente,

según el nacionalismo, por sus características personales —apellidos, lengua, cultura— ha de añadirseles el que Obieta denomina elemento subjetivo —ser nacionalistas—, pues, de lo contrario, se convierten en «*tránsfugas culturales*». La consecuencia de dicha traición cultural la explica Obieta con claridad:

«*En consecuencia, tales personas dejan de estar en adelante legítima y moralmente cualificados para hablar en nombre de ese pueblo y para tomar parte en la discusión y determinación de los asuntos públicos que conciernen exclusivamente a él, aunque conserven su derecho a participar en aquellos otros que afectan a la vida pública de todo el Estado*».

El trabajo de Abascal es un oportuno acercamiento a una cuestión de transcendental importancia, generalmente arrinconada en el estrecho ámbito de la literatura jurídica y alejada de la discusión política cotidiana como si se tratase de un asunto de tan ardua comprensión que debiera quedar apartado del conocimiento de la población no versada en leyes. Ello es, precisamente, lo que ha permitido a los nacionalismos aprovecharse de la indudable potencia propagandística de una aspiración política partidista que es presentada a sus votantes como un derecho indiscutible, consiguiendo con ello un plus de legitimidad para sus planteamientos y la paralela deslegitimación de sus oponentes por «oponerse a un derecho». Y, nos recuerda Abascal, de esta oposición a un muy discutible derecho deriva nada menos que el terrorismo nacionalista, que no por casualidad se ejerce en nombre de una libertad nacional que todos

los nacionalistas, sin distinción de partidos, consideran pisoteada por quienes niegan la razonabilidad de este pretendido derecho.

Esta es, pues, la principal virtud de las páginas escritas por el joven parlamentario vasco: haber conseguido acercar al lector medio, de un modo no por ameno menos riguroso, una problemática que seguirá marcando insistente —y trágicamente— la vida política de nuestro país.

JESÚS LAÍN

Los nuevos clérigos

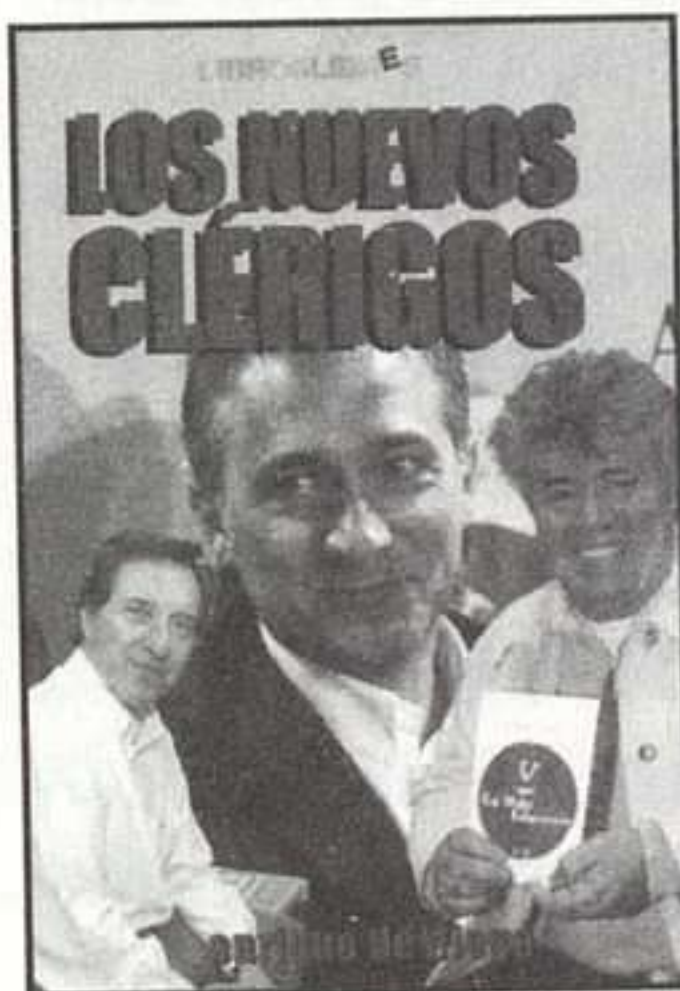
ENRIQUE DE DIEGO

Los nuevos clérigos

Editorial Libros Libres. Madrid, 2004.

Es *Los nuevos clérigos* un libro importante. Enrique de Diego, escritor, periodista, politólogo, subdirector de la revista *Época*, liberal por convicción, ejemplo y obra, acude de nuevo a la batalla de las ideas con un ensayo fundamental para la ciencia política escrita en español. Porque definitivos son muchos de los asertos que su obra sostiene y que podríamos resumir con esta sola frase: «ser hoy anticlerical es un instinto de supervivencia, un imperativo categórico de amor a la libertad». Suena radical, habrá que explicarlo. Para nuestro autor, después del fracaso del socialismo real, la progresía intelec-

tual europea, la española a remolque, busca salvar los restos del naufragio ideológico comunista arribando en playas vírgenes. Como denunciara Revel en *La gran mascarada*, los intelectuales de izquierda prefieren embestir contra la civilización occidental antes que denunciar las millones de muertes provocadas por la barbarie de la dictadura del proletariado. En su ayuda, los nuevos ropajes del ecologismo acientífico y del movimiento antiglobalizador y anticapitalista, sucesores de los raídos andrajos



marxistas-leninistas, bien aderezados no ya por la obsesión antiamericana sino por la destrucción de lo que constituye la base de la civilización occidental, la libertad y la democracia, son las casullas que gustan los «nuevos sacerdotes» —los ha denominado Guy Sorman—, los fatuos intelectuales que describe Paul Johnson. Con ellos, señala De Diego, ya Tocqueville denunciaba el papel político de los «filósofos» en la deriva totalitaria de la Revolución Francesa, fe racional cuyas sombras se alargan todavía en nuestro tiempo.

Los nuevos clérigos, a la manera de las antiguas órdenes mendicantes medie-

RESEÑAS

vales, son los nuevos rectores de esta creencia consagrada a los poderes del Estado sobre el individuo. La comparación pudiera escocer, pues no se atisba semejanza alguna entre este círculo sectario con la doctrina revelada por Jesucristo —«la verdad os hará libres»— en el Evangelio, que es desde hace más de veinte siglos una de las grandes religiones del mundo, raíz indisociable de la historia de Europa pese a la Constitución Europea, que De Diego no defiende. A no ser que con la metáfora religiosa este-mos ante un artificio para poder comprender mejor la imaginería *progre* que busca edulcorar ante la opinión pública los horrores de una ideología fracasada, no muerta, y cuyo primer artículo de su credo es la sumisión del individuo al Estado, la esclavitud.

Esta nueva secta de clérigos seculares estaría hoy compuesta fundamentalmente por docentes, actores y periodistas, grupos de presión mutuamente retroalimentados en sus peticiones y prebendas corporativas. Nuevas órdenes mendicantes que, si bien paganas, habrían dejado de servir a la sociedad para adorar al nuevo tótem, el Estado laico, que a través del presupuesto proporciona protección, seguridad y, paradójicamente, ingresos cuantiosos a sus afectos.

Secta pues, de pretendidos clérigos, intelectuales fariseos de una izquierda fracasada y reconvertida a nuevos modos de bondad ecologista y a nuevas modas antiglobalizadoras, dispuestos a explicarle a la humanidad dónde reside la verdad y con qué métodos alcanzarla. Clerecía en todo caso miope y, en el

fondo, resentida aún por el derrumbe, a final del pasado siglo, de la mitología marxista. Clerecía capaz, sin embargo, de dinamitar desde dentro los cimientos del mismo sistema democrático y capitalista donde plácidamente obtiene refugio, y de proporcionar argumentos arteros a los nuevos enemigos de Occidente, el terrorismo y el fanatismo religioso, aquellos que trágicamente, como se ha comprobado tras el 11-S y el 11-M, están dispuestos a acabar con nuestra civilización, precisamente por representar valores superiores a los suyos. Clerecía feliz, progresía en la inopia, mezcla de buen talante y buen rollito universal aprendido de urgencia en un telediario de la 2, que tiende puentes de plata al enemigo que acecha, cuyos sermones suenan a rendición, imagen que tan lamentablemente transmite nuestro presidente de Gobierno Rodríguez Zapatero cuando proclama contra Huntington y los derechos humanos una imposible «alianza de civilizaciones».

A todo ello, a todos ellos, clérigos millonarios en ocasiones, dedica Enrique de Diego muchos de sus argumentos, reflexiones y juicios. Desde la telebasura, «dudoso logro del periodismo progresista», a la Universidad, donde los docentes defienden la estatalización como «conquista social» y olvidan el esfuerzo del alumno y la calidad de la enseñanza, pasando por los actores de la «excepción cultural», el «hay motivo» o el «no a la guerra». En este apartado denuncia De Diego las contradicciones de los autores apesebrados en gremios y monopolios, verdaderas mafias que imponen cánones a la sociedad civil, persiguen a los inmi-

grantes del «top» manta (¿a éstos no se les pide regularización?) y dictan servidumbres en nombre de los derechos de autor... ¿y no es el mismo caso de defensa intelectual el de las patentes en las industrias farmacéuticas?, aduce De Diego. Y no hace falta contestar, seguramente cada ciudadano, en su fuero interno, ya sabe y ha interiorizado la respuesta proporcionada: lo uno es defensa de la propiedad intelectual, lo otro es una agresión injustificada del capitalismo salvaje contra los países subdesarrollados. La defensa de la propiedad privada sólo cuando conviene, debe ser una de las máximas de estos nuevos religiosos de la estatalidad.

Entramos así en un capítulo destacable, el que señala las trágicas coincidencias entre estos falsos sacerdotes de la modernidad y la fe exaltada de los integristas islámicos en su errada concepción teológica de la existencia humana. El autor rinde admirado tributo a Oriana Fallaci y a su libro *La Rabia y el Orgullo* cuando apunta que la primera y más funesta coincidencia —«Occidente es el mal, Occidente es el enemigo»— resulta esencial para comprender la realidad que hoy nos circunda. Nuestros clérigos, destaca De Diego, son los primeros en transmitir al Tercer Mundo una visión que provoca odio hacia lo occidental y que plantea una pregunta dramática y difícil de responder: si nuestros medios dicen continuamente que el terrorismo es producto de la pobreza y que Occidente es responsable de ella, entonces ¿no están legitimados los terroristas fanáticos para actuar contra nosotros? Osama Bin Laden parece haber enten-

dido el mensaje perfectamente. Zapatero, evidentemente, no.

Ello nos introduce en otra sangrante coincidencia, el odio hacia la libertad, hacia la superioridad moral de una civilización que consagra la igualdad de sexos y la libertad de cultos, asignaturas pendientes para el islam. Y ese odio apunta además directamente hacia los principios, las ideas, los partidos políticos y sus líderes, que en Occidente defienden la vida y la libertad como valores superiores. En este mismo sentido, señala De Diego la nueva coincidencia, «la izquierda odia a Aznar porque en el ejercicio del poder demostró la superioridad ética y la eficiencia superior del liberalismo respecto al socialismo».

Y es que nuestros *progres* de salón —patético el caso del actual ministro del Interior, antes juez, José Antonio Alonso— parece ser que cambian de opinión sobre el terrorismo o sobre cualquier asunto según sople el viento del poder. Y aunque De Diego no llega a recoger la actual polémica sobre la nación española defendida por el ministro Bono, el de las autocondecoraciones y medallas, o la «comunidad nacional», como otorga Maragall y Zapatero calla, sí anticipa muchas de estas claves futuras en los últimos episodios —«No a la Constitución europea», «Carta a un joven anticlerical»— y en los sabrosos apéndices —«Nombres propios del integrismo y guía terminológica islámica», «Diccionario»— de un libro que incorpora por demás un muy útil «Índice Onomástico». Apoyado en la cotidianeidad de quien por profesión es privilegiado testigo de la realidad política, *Los Nuevos Clérigos*

es un libro de esencias y fundamentos, otro más en el ya dilatado empeño del autor por anticipar los movimientos y las ideas que sacuden nuestras conciencias y a veces, desgraciadamente, nuestras sociedades occidentales. Desde sus clásicos *En el umbral del Tercer Milenio*, *Privatizar las mentes*, *Nuevos Tiempos: de la caída del Muro a Maastricht* o *La España posible*, a sus últimos éxitos editoriales, *Pretorianos*, *El último rabino*, *Días de Infamia* o *Corazón Templario*, los ensayos y novelas de Enrique de Diego persiguen una tarea tan noble como a veces incomprendida, la de descifrar las claves del pensamiento humano y combatir las ideologías que esclavizan al hombre e impiden el desarrollo del más preciado de sus valores después de su propia existencia: la libertad.

JOSÉ MANUEL DE TORRES

Terrorismo y democracia

EDURNE URIARTE

Terrorismo y democracia tras el 11-M

Espasa Calpe. Madrid, 2004.

Es normal que después de los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo del año pasado las librerías se llenen de títulos dedicados a ese suceso, a sus causas y a sus consecuencias. Igualmente, es normal que muchas de esas

obras no sean sino trabajos apresurados o emotivas compilaciones. Es improbable, por el contrario, que algunas de ellas sean obras de referencia, que digan algo que se eleve sobre la crónica periodística, y que nos ayuden a entender lo que nos ha pasado y lo que nos puede llegar a pasar, situándose incluso en abierta contradicción de lo que a muchos les parece evidente. Sin embargo, esas rarezas también acaecen, y una de ellas es obra de Edurne Uriarte y lleva por título *Terrorismo y democracia tras el 11-M*.

La redacción de un libro puede realizarse con gran rapidez y sin merma alguna de su rigor y de su profundidad cuando lo que se hace mediante él es exponer ideas y argumentos maduros, pensados y fortalecidos durante mucho tiempo. De hecho, la obra de Edurne Uriarte —redactada durante la primavera de 2004—, podría haber sido publicada igualmente en ausencia de la matanza de Madrid con escasas modificaciones, apenas las que aluden directamente a esa fecha, que es un caso de estudio —especialmente cuidado— de los muchos que se exponen, todos igualmente trágicos, pero muchos ignorados o minusvalorados. Por eso, a diferencia de lo que es frecuente, lo ocurrido en los últimos meses, en España y fuera de España, no sólo no le resta actualidad sino que se la presta.

En realidad, esa parece ser una de las intenciones de Uriarte, hacernos ver que lo que para nosotros constituye una fecha imborrable no es para los terroristas sino un día más, una muesca más que se suma a una ya larguísima serie

que seguramente aún será mucho mayor, y que lo que nos ha ocurrido forma parte de una estrategia global en la que España es —era antes de la Guerra de Irak y sigue siendo hoy— un objetivo prioritario: una guerra que se nos ha declarado y que nos resistimos a dar por cierta. Y también que lo que ocurrió alrededor del día 11, la reacción ciudadana, la de los medios de comunicación y la de muchos de nuestros políticos más destacados, tiene precedentes en nuestra historia reciente, que están ligados a un tiempo oscuro al que desgraciadamente parece que estamos volviendo, ese en el que el asesinato de un policía nacional o de un guardia civil era contemplado como un ajuste de cuentas entre terroristas y «franquistas» —culpables de que hubiera terrorismo, sus causantes, provocadores de esa «reacción desesperada»—, pese a la evidencia de que ETA mataba más a medida que la democracia española se consolidaba y se fortalecía: la búsqueda de las razones del terrorismo —causas comprensibles sobre las que se puede hablar, dialogar— y el ingenuo intento de desactivarlas mediante la negociación o la cesión. En el fondo, la conversión de la excepción (el terrorista) en regla, puesto que la inmensa mayoría de quienes comparten con el terrorista origen y circunstancias (esas que para muchos «explican» lo que ocurre), permanecen al margen del terrorismo.

Edurne Uriarte es «experta» en terrorismo, y aquí esa palabra no es —como en tantas ocasiones— gratuita. Desarrolla una actividad universitaria de primera línea relacionada con él —ahora como

miembro de la Unidad de Documentación y Análisis sobre Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la que ejerce como catedrática de Ciencia Política—, conoce el terrorismo porque lo estudia, y también porque lo padece personalmente. Y esa pericia le permite distinguir en la lejanía lo que otros no ven sino cuando ya es demasiado tarde. En el País Vasco quienes



aman la libertad y la defienden han tenido que erigir fortalezas y atalayas, soportar emboscadas y advertir trampantojos y camuflajes, desarrollar un instinto de supervivencia ante el terrorismo en todas sus formas —que son muchas—, y han aprendido dolorosamente «a verlo venir». Por eso, Uriarte rechaza los «mimos» con los que los políticos y los medios de comunicación adulan a la ciudadanía y exaltan su «firmeza» ante el terrorismo y su «sabiduría» ante las urnas, con frecuencia una versión sublimada del miedo, de la elusión de responsabilidades y del rechazo a la verdad de lo que es el terrorismo islamista. Lo mismo que durante muchos años ocurrió con ETA, y en ambos casos como efecto de la interpretación progresista o izquierdista del

RESEÑAS

terrorismo, y de su rápida adopción por la opinión pública mayoritaria, incapaz de soportar la angustia de pensar que alguien la ha colocado en su punto de mira por ser lo que es y, por lo tanto, sin remedio posible salvo el combate y la victoria. E incapaz de escuchar a quien advierte de ello, que es rechazado como si fuera la causa misma del terror y no su primer remedio.

Uriarte conoce la verdad del compromiso de los españoles con la libertad durante muchos años, y sabe que sólo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco se produjo un movimiento popular, cívico, beligerantemente contrario al terrorismo, genuina y activamente antiterrorista. Y quizás, aun entonces, un movimiento sólo transitorio. Una cosa es una declaración de repulsa y otra el combate diario. Y en éste, los españoles no hemos sido todo lo ejemplares que los casos de ETA y de Al Qaeda exigen. Por eso, desconfía de las iniciativas populares y demanda liderazgo y Estado, es decir políticos capaces de derramar, entre tanta catarata de almíbar, algo de hiel en los oídos de la ciudadanía, y de «hacer» una política antiterrorista fundamentada en el conocimiento preciso de lo que el terrorismo es. Conocimiento que debe llevar a identificar al terrorismo islamista como la mayor amenaza de nuestro tiempo para la seguridad, por su intención, por sus medios, por su implantación actual y potencial y sobre todo, porque, como reveló el 11-M, caer en la cuenta de su existencia supone saberse en estado de guerra «personalmente», «movilizado» para un combate con el que no se

contaba, y eso no es fácil de aceptar. Lo que ralentiza hasta la exasperación la necesaria reacción de la opinión pública y mantiene en primer plano el falso dilema «seguridad o libertad». Por eso los políticos no pueden ir de la mano de los electores, sino por delante de ellos. Hay en la reflexión de Edurne Uriarte un fondo orteguiano, una alusión a la advertencia de José Ortega y Gasset sobre la condición «inerte», pasiva, del hombre moderno, particularmente del europeo, que vive en un mundo que le proporciona un bienestar y una seguridad que cree «naturales» y que, por tanto, «exige». Eso mismo lo lleva a creer que cuando esa seguridad falta es porque alguien en su propio país ha hecho algo que le ha privado de ella, alguien que es, por tanto, culpable de lo que pasa, de lo que no habría acontecido si las cosas hubieran seguido su curso natural. Esta es, exactamente, la interpretación dominante sobre la matanza de Madrid. Por eso —y por las referencias bibliográficas presentes en él: Glucksmann y Kagan, sobre la oposición entre los Estados Unidos y Europa; Zakaria, sobre el valor del elitismo y del liderazgo; Laqueur, Gray y Elorza sobre el islamismo y su vocación pánica y violenta...— *Terrorismo y democracia tras el 11-M* es, en realidad, un libro sobre la vigencia de los principios democráticos, sobre su viabilidad y sobre su vulnerabilidad, una de cuyas expresiones, sin duda la más urgente, es el terrorismo islamista. Esa vulnerabilidad de la democracia es su ocupación prioritaria, y su diagnóstico es que padecemos lo que en alguna ocasión Fernando

Reinares –referencia reiterada en la obra– ha denominado «patologías del antiterrorismo». La primera de ellas, ignorar la amenaza y su letalidad, que es hoy casi inimaginable.

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO

El islamismo contra el islam

GUSTAVO DE ARÍSTEGUI

El islamismo contra el islam. Las claves para entender el terrorismo yihadista.

Ediciones B. Barcelona, 2004.

Con *El islamismo contra el islam* Gustavo de Arístegui ha cuajado una obra que destaca por méritos propios en el panorama editorial dedicado a analizar este tema, cuya importancia no es preciso subrayar.

El título ya es indicativo de la posición de Arístegui en un doble sentido. Por un lado, la necesidad de diferenciar el islamismo como una expresión radical y desviada de lo que significa el islam –una de las tres grandes religiones monoteístas. Por otro, la conveniencia de situar en sus planos reales a los que el islamismo considera sus enemigos, que son, en primer término, los regímenes políticos de los países musulmanes, contra los que el islamismo desata su furia fundamentalista en su guerra por volver «al verdadero islam» frente a la degra-

dación, la corrupción y la complicidad destructiva con Occidente. Según esto, el terrorismo como guerra –«yihad»– global contra Occidente es una estrategia dirigida a privar a los regímenes musulmanes corruptos del apoyo que les permite sobrevivir, y una defensa brutal y fanatizada del futuro del islam para impedir la ambición exterminadora de «judíos y cruzados», en la jerga terrorista de Al-Qaeda, cuyo propósito es la derrota final del mundo musulmán.



Ambas tesis plantean los problemas centrales que debe afrontar el análisis del fenómeno terrorista actual. La relación del terrorismo islámico con su matriz ideológica es una cuestión también ampliamente debatida a propósito del terrorismo de signo nacionalista emparentado ideológicamente con los nacionalismos étnicos, aunque éstos no propugnen el uso de la violencia y adecuen su práctica política a los cauces institucionales. En ese sentido, la diferenciación es necesaria si no se quiere cometer un grueso error de diagnóstico que llevaría a consecuencias sociales y políticas desastrosas. Pero, por los mismos motivos, la negación de toda

RESEÑAS

relación entre islam e islamismo sería un acto estéril y peligroso de voluntarismo intelectual que impediría ver la dimensión real del problema. Arístegui no lo elude. Con una erudición que no aleja al lector sino que da solidez a sus afirmaciones, describe las raíces del islamismo radical en la historia del islam, alerta de cómo la conciencia islámica de amplios sectores del mundo musulmán justifica, disculpa o simpatiza con la que representa Bin Laden, analiza en detalle el «síndrome andalusí» del que participan Al-Qaeda y muchos musulmanes moderados, y nos vuelve a poner en guardia sobre las consecuencias para España de la «apostasía» que hace siglos convirtió a nuestro país en tierra de infieles usurpada al islam. El islamismo se presenta como una rama retorcida pero de una religión en sí misma arborescente, carente de unidad doctrinal y de una autoridad universal. En ella, el islamismo adopta formulaciones abiertamente desviadas, minoritarias y explícitamente condenadas por instancias musulmanas calificadas en cuestiones como el suicidio o la interpretación terrorista de la «yihad» pero, al mismo tiempo, reactiva elementos doctrinales beligerantes y violentos que no son en absoluto exclusivos del islamismo sino que forman parte del tronco común islámico, como es el caso de la legitimación –y aun el deber– de matar a los apóstatas.

El autor, sin merma de su cercanía y sensibilidad hacia el mundo musulmán, no cede a la tentación de describir un islam a la medida de nuestros temores ni

se deja arrastrar hacia el buenismo multicultural. Precisamente el fracaso del multiculturalismo y su frívola deriva hacia la consideración de nuestras sociedades como simples receptáculos desprovistos de valores y principios sustantivos e inderogables, constituye uno de los riesgos más graves que afrontamos. Si a eso se añade la condición de España como país estigmatizado por «apóstata», la agudización del «síndrome andalusí» en el imaginario islámico y la irrupción del terrorismo islamista en nuestro proceso democrático, hay motivos serios para la reflexión.

La paradoja es que, ante el esfuerzo que hay que desarrollar para la modernización, la estabilidad y la cooperación con el mundo musulmán, algunos se revisten de utopía y proponen alianzas de civilizaciones que asumen implícitamente la imposibilidad de que ese mundo evolucione por el camino de la democracia y el respeto a las libertades. Desde ese planteamiento de rancio colonialismo, descalifican el impulso a favor de una transformación real del mundo musulmán –y en particular Oriente Medio– hacia sistemas democráticos en los que las urnas no sean el adorno falaz de dictadores sino materialización del avance en la libertad y la igualdad de derechos –en Afganistán, con o sin «burka» han votado las mujeres– en un marco cultural que no debe ser una condena para sus pueblos ni una amenaza para los demás.

JAVIER ZARZALEJOS



FUNDACION

Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español

La FUNDACIÓN CAJA MADRID, desde su creación en 1991, orientó una parte principal de su actividad y recursos a la conservación del patrimonio histórico. Desde entonces, y hasta el año 2002, se han destinado a este Programa más de 84 millones de euros.

El Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español, creado como tal en 1996, se divide entre las OBRAS PATROCINADAS mediante la aportación de recursos económicos y las OBRAS PROPIAS, en las que la Fundación no se limita a financiar total o parcialmente las restauraciones, sino que además actúa promoviéndolas y gestionándolas en colaboración con otras instituciones. Estas obras tienen como denominador común el rigor metodológico de la actuación y un especial respeto, dentro del panorama de la restauración en España, por los valores históricos y documentales del patrimonio cultural

Plaza San Martín, 1 • 28013 MADRID • ppatrimonio@cajamadrid.es • www.fundacioncajamadrid.es



IMPLANTACIÓN TERRITORIAL (fuera de Madrid) del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español de la Fundación Caja Madrid 1996-2002